



GACETA DEL CONGRESO

SENADO Y CAMARA

(Artículo 36, Ley 5a. de 1992)

IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA

ISSN 0123 - 9066

AÑO XII - Nº 339

Bogotá, D. C., miércoles 23 de julio de 2003

EDICION DE 64 PAGINAS

DIRECTORES:

EMILIO RAMON OTERO DAJUD
SECRETARIO GENERAL DEL SENADO
www.secretariassenado.gov.co

ANGELINO LIZCANO RIVERA
SECRETARIO GENERAL DE LA CAMARA
www.camararep.gov.co

RAMA LEGISLATIVA DEL PODER PUBLICO

CAMARA DE REPRESENTANTES

PROYECTO DE LEY ESTATUTARIA

**PROYECTO DE LEY ESTATUTARIA NUMERO 01 DE 2003
CAMARA**

por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal.

ACTA DE PRESENTACION

En la Secretaría General de la honorable Cámara de Representantes, a los veinte (20) días del mes de julio de dos mil tres (2003), se hizo presente el señor Fiscal General de la Nación, doctor Luis Camilo Osorio Isaza, a fin de hacer entrega del siguiente proyecto de ley estatutaria:

Proyecto de ley estatutaria número 001 del 20 de julio de 2003 Cámara, *por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal.*

El Fiscal General de la Nación,

Luis Camilo Osorio Isaza.

El Secretario General,

Angelino Lizcano Rivera.

Artículo N°	Tema
TITULO PRELIMINAR	
PRINCIPIOS RECTORES Y GARANTIAS PROCESALES	
1.	Dignidad humana
2.	Libertad
3.	Prelación de los tratados internacionales
4.	Igualdad
5.	Imparcialidad
6.	Legalidad
7.	Presunción de inocencia e <i>in dubio pro reo</i>
8.	Defensa
9.	Oralidad
10.	Actuación procesal
11.	Derechos de las víctimas
12.	Lealtad
13.	Gratuidad
14.	Intimidación
15.	Contradicción

Artículo N°	Tema
16.	Inmediación
17.	Concentración
18.	Publicidad
19.	Juez natural
20.	Doble instancia
21.	Cosa juzgada
22.	Restablecimiento del derecho
23.	Cláusula de exclusión
24.	Ámbito de la jurisdicción penal ordinaria
25.	Integración
26.	Prevalencia
27.	Moduladores de la actividad procesal
LIBRO I	
DISPOSICIONES GENERALES	
TITULO I	
JURISDICCION Y COMPETENCIA	
CAPITULO I	
Disposiciones generales	
28.	La jurisdicción ordinaria
29.	Objeto de la jurisdicción ordinaria
30.	Excepciones a la jurisdicción ordinaria
31.	Organos de la jurisdicción
CAPITULO II	
De la competencia	
32.	De la Corte Suprema de Justicia
33.	De los tribunales regionales
34.	De los tribunales superiores de distrito
35.	De los jueces regionales
36.	De los jueces penales del circuito
37.	De los jueces penales municipales
38.	De los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad
39.	De la función de control de garantías

Artículo N°	Tema	Artículo N°	Tema
40.	Competencia para imponer las penas y las medidas de seguridad	77.	Extinción
41.	Competencia para ejecutar	78.	Trámite de la extinción
	CAPITULO III	79.	Archivo de las diligencias
	Competencia territorial	80.	Efectos de la extinción
42.	División territorial para efecto del juzgamiento	81.	Continuación de la persecución penal para los demás imputados
43.	Competencia		CAPITULO II
44.	Competencia excepcional		Comiso
45.	De la Fiscalía General de la Nación	82.	Procedencia
	CAPITULO IV	83.	Medidas cautelares sobre bienes susceptibles de comiso
	Cambio de radicación	84.	Trámite en la incautación u ocupación de bienes de comiso.
46.	Finalidad y procedencia	85.	Suspensión del poder dispositivo
47.	Solicitud de cambio	86.	Administración de los bienes
48.	Trámite	87.	Destrucción del objeto material del delito
49.	Fijación del sitio para continuar el proceso	88.	Devolución de bienes
	CAPITULO V	89.	Bienes o recursos no reclamados
	Competencia por razón de la conexidad y el factor subjetivo	90.	Omisión de pronunciamiento sobre los bienes
50.	Unidad procesal	91.	Suspensión y cancelación de la personería jurídica
51.	Conexidad		TITULO III
52.	Competencia por conexidad		VICTIMAS
53.	Ruptura de la unidad procesal		CAPITULO I
	CAPITULO VI		Derechos de las víctimas
	Definición de competencias	92.	Víctimas
54.	Trámite	93.	Atención y protección inmediata de las víctimas
55.	Prórroga	94.	Medidas judiciales de atención y protección a las víctimas
	CAPITULO VII	95.	Garantía de comunicación a las víctimas
	Impedimentos y recusaciones	96.	Derecho a recibir información
56.	Causales de impedimento	97.	Intervención de las víctimas en la actuación penal
57.	Trámite para el impedimento		CAPITULO II
58.	Impedimento del Fiscal General de la Nación		Medidas cautelares
59.	Impedimento conjunto	98.	Medidas cautelares sobre bienes
60.	Requisitos y formas de recusación	99.	Criterios para decretar medidas cautelares
61.	Improcedencia del impedimento y de la recusación	100.	Proporcionalidad
62.	Suspensión de la actuación procesal	101.	Cumplimiento de las medidas
63.	Impedimentos y recusación de otros funcionarios y empleados	102.	Desembargo
64.	Desaparición de la causal	103.	Modificación de las medidas cautelares
65.	Improcedencia de la impugnación	104.	Prohibición de enajenar
	TITULO II	105.	Autorizaciones especiales
	ACCION PENAL	106.	Medidas patrimoniales a favor de las víctimas
	CAPITULO I	107.	Afectación de bienes en delitos culposos
	Disposiciones Generales	108.	Suspensión y cancelación de registros obtenidos fraudulentamente
66.	Titularidad y obligatoriedad		CAPITULO III
67.	Deber de denunciar		Del ejercicio del incidente de reparación integral
68.	Exoneración del deber de denunciar	109.	Procedencia y ejercicio del incidente de reparación integral
69.	Requisitos de la denuncia, de la querrela o de la petición	110.	Trámite del incidente de reparación integral
70.	Condiciones de procesabilidad	111.	Audiencia de conciliación y prueba
71.	Querellante legítimo	112.	Decisión de reparación integral
72.	Extensión de la querrela	113.	Caducidad
73.	Caducidad de la querrela		TITULO IV
74.	Delitos que requieren querrela		SUJETOS PROCESALES
75.	Delitos que requieren petición especial		CAPITULO I
76.	Desistimiento de la querrela		Fiscalía General de la Nación
		114.	Composición
		115.	Atribuciones

Artículo N°	Tema	Artículo N°	Tema
116.	Principio de objetividad		
117.	Atribuciones especiales del Fiscal General de la Nación		
118.	La Policía Judicial		
	CAPITULO II		CAPITULO II
	Defensa		Publicidad en los procedimientos
119.	Integración y designación	147.	Principio de publicidad
120.	Oportunidad	148.	Restricciones a la publicidad por motivos de orden público, seguridad nacional o moral pública.
121.	Reconocimiento	149.	Restricciones a la publicidad por motivos de seguridad o respeto a las víctimas menores de edad.
122.	Dirección de la defensa	150.	Restricciones a la publicidad por motivos de interés de la justicia.
123.	Incompatibilidad de la defensa	151.	Solicitud especial de restricción de la publicidad de las sesiones de la audiencia pública por parte de la fiscalía.
124.	Sustitución del defensor		CAPITULO III
125.	Derechos y facultades		Términos
126.	Atribuciones especiales	152.	Regla general
	CAPITULO III	153.	Oportunidad
	Ministerio Público	154.	Prórroga y restitución de términos
127.	El ministerio público	155.	Término judicial
128.	De la agencia especial	156.	Término para adoptar decisiones
129.	Funciones del ministerio público		CAPITULO IV
	CAPITULO IV		Providencias judiciales
	Imputado	157.	Clases
130.	Cualificación	158.	Requisitos comunes
131.	Ausencia del imputado	159.	Prohibición de transcripciones
132.	Identificación	160.	Providencias de jueces colegiados o plurales
133.	Registro de personas vinculadas	161.	Expedición de copias
134.	Atribuciones	162.	Comunicación de la sentencia
135.	Renuncia	163.	Información acerca de la ejecución de la sentencia
	TITULO V		CAPITULO V
	DEBERES Y PODERES		Notificación de las providencias; citaciones
	DE LOS INTERVINIENTES		y comunicaciones entre los intervinientes
	EN EL PROCESO PENAL		en el proceso penal
	CAPITULO I	164.	Criterio general
	De los deberes de los servidores judiciales	165.	Formas
136.	Deberes	166.	Registro de la notificación
137.	Deberes específicos de los jueces	167.	Citaciones. Procedencia
	CAPITULO II	168.	Forma
	De los deberes de los sujetos procesales	169.	Contenido
138.	Deberes	170.	Comunicación de las peticiones escritas a los demás sujetos procesales
139.	Temeridad o mala fe		CAPITULO VI
	CAPITULO III		Duración de la Actuación
	Deberes de la Fiscalía General de la Nación	171.	Duración de los procedimientos
140.	Deberes específicos de la Fiscalía General de la Nación		CAPITULO VII
	CAPITULO IV		Recursos
	De los poderes y medidas correccionales	172.	Procedencia de los recursos ordinarios
141.	Poderes y medidas correccionales	173.	Trámite y decisión
	TITULO VI		CAPITULO VIII
	LA ACTUACION		La Casación
	CAPITULO I	174.	Finalidad
	Oralidad en los procedimientos	175.	Procedencia
142.	Idioma	176.	Legitimación
143.	Oralidad en la actuación	177.	Oportunidad
144.	Registro de la actuación	178.	Admisión
145.	Celeridad y oralidad	179.	Decisión
146.	Toga	180.	Acumulación de fallos

Artículo N°	Tema	Artículo N°	Tema
181.	Aplicación extensiva	219.	Acta de la diligencia
182.	Principio de no agravación	220.	Devolución de la orden y cadena de custodia
183.	Suspensión de la prescripción	221.	Procedimiento en caso de flagrancia
184.	De la libertad	222.	Excepciones al requisito de la orden escrita de la Fiscalía General de la Nación para proceder al registro y allanamiento
185.	Fallo anticipado	223.	Interés para reclamar la violación de la expectativa razonable de intimidad en relación con los registros y allanamientos
	CAPITULO IX	224.	Cláusula de exclusión en materia de registros y allanamientos
	Acción de revisión	225.	Registro de buena fe
186.	Procedencia	226.	Retención de correspondencia
187.	Legitimación	227.	Examen y devolución de correspondencia
188.	Instauración	228.	Interceptación de comunicaciones telefónicas y similares
189.	Trámite	229.	Recuperación de información dejada al navegar por internet u otros medios tecnológicos que produzcan efectos similares
190.	Revisión de la sentencia	230.	Audiencia de control de legalidad posterior
191.	Impedimento especial	231.	Inimpugnabilidad de la decisión
192.	Consecuencias del fallo rescindente	232.	Vigilancia de personas
	CAPITULO X	233.	Vigilancia de cosas
	LIBRO II	234.	Seguimiento de personas
	TECNICAS DE INVESTIGACION	235.	Seguimiento de vehículos
	DE LA PRUEBA Y SISTEMA PROBATORIO	236.	Análisis e infiltración de organización criminal
	TITULO I	237.	Actuación de agentes encubiertos
	LA INDAGACION Y LA INVESTIGACION	238.	Entrega vigilada
	CAPITULO I	239.	Búsqueda selectiva en bases de datos
	Organos de indagación e investigación	240.	Exámenes de ADN que involucren al indiciado o al imputado
194.	Organos		CAPITULO III
195.	Organos de policía judicial permanente		Actuaciones que requieren autorización
196.	Organos que ejercen funciones permanentes de policía judicial de manera especial dentro de su competencia		judicial previa para su realización
197.	Organos que ejercen transitoriamente funciones de policía judicial	241.	Regla general
198.	Organo técnico científico	242.	Inspección corporal
199.	Actividad de policía judicial en la indagación e investigación	243.	Registro personal
200.	Entrevista	244.	Obtención de muestras que involucren al imputado
201.	Programa metodológico	245.	Procedimiento en caso de lesionados o de víctimas de agresiones sexuales
202.	Actividad de policía		CAPITULO IV
203.	Grupos de tareas especiales		Métodos de identificación
204.	Rechazo de la indagación	246.	Reconocimiento por medio de fotografías o videos
	CAPITULO II	247.	Reconocimiento en fila de personas
	Actuaciones que no requieren autorización	248.	Retrato hablado y retrato robot
	judicial previa para su realización	249.	Identificación dactilar
205.	Inspección del lugar del hecho	250.	Identificación por sangre
206.	Levantamiento de cadáver	251.	Identificación por semen
207.	Inspecciones en lugares distintos al del hecho	252.	Identificación por la carta dental
208.	Aseguramiento y custodia	253.	Identificación por cabellos y pelos
209.	Exhumación	254.	Identificación por la voz
210.	Aviso de ingreso de presuntas víctimas	255.	Identificación grafotécnica
211.	Procedencia de los registros y allanamientos	256.	Comparación estilística
212.	Fundamentos para la orden de registro y allanamiento	257.	Identificación por <i>modus operandi</i>
213.	Respaldo probatorio para los motivos fundados	258.	Gráficas de pisadas
214.	Alcance de la orden de registro y allanamiento		CAPITULO V
215.	Objetos no susceptibles de registro		Cadena de custodia
216.	Plazo de diligenciamiento de la orden de registro y allanamiento	259.	Embalaje y rotulado
217.	Reglas particulares para el diligenciamiento de la orden de registro y allanamiento	260.	Contenido del rótulo
218.	Allanamientos especiales	261.	Macroelementos materiales probatorios
		262.	Inicio de la cadena de custodia

Artículo N°	Tema	Artículo N°	Tema
263.	Traslado de contenedor	302.	Libertad
264.	Traspaso de contenedor	303.	Oportunidad
265.	Actuación del perito	304.	Pertinencia
266.	Responsabilidad de cada custodio	305.	Admisibilidad
267.	Remanentes	306.	Publicidad
268.	Revisión previa al recibo	307.	Contradicción
269.	Identificación	308.	Criterios de valoración
270.	Los contenedores	309.	Conocimiento para condenar
271.	Los rótulos	310.	Medios de conocimiento
272.	Rechazo		CAPITULO II
273.	Certificación		Determinación de la mejor evidencia
274.	Destino de macroelementos	311.	Criterio general
275.	Formato de cadena de custodia	312.	Excepciones a la regla de la mejor evidencia
276.	Número de formatos por caso		TITULO IV
	CAPITULO VI		Cooperación Internacional en materia probatoria
	Facultades de la defensa en la investigación	313.	Principios generales
277.	Facultades de quien no es imputado	314.	Solicitud de recolección de medios de prueba que deba celebrarse en el exterior
278.	Facultades del imputado	315.	Traslado de testigos y peritos
279.	Contenido de la solicitud	316.	Delitos transnacionales
280.	Actuación del perito	317.	Facultades para evitar dilaciones injustificadas
281.	Facultad de entrevistar	318.	Rechazo de solicitudes
282.	Obtención de declaración jurada		TITULO V
283.	Solicitud de prueba anticipada		REGIMEN DE LA LIBERTAD Y SU RESTRICCIÓN
	TITULO II		CAPITULO I
	MEDIOS COGNOSCITIVOS EN LA INVESTIGACION		Disposiciones comunes
	CAPITULO ÚNICO	319.	Afirmación de la libertad
	Elementos materiales probatorios e información	320.	Finalidad de la restricción de la libertad
284.	Elementos materiales probatorios		CAPITULO II
285.	Legalidad		Captura
286.	Autenticidad	321.	Requisitos generales
287.	Identificación técnico científica	322.	Captura del indiciado o imputado
288.	Criterios de valoración	323.	Orden escrita de captura
289.	Elemento material probatorio recogido por agente encubierto o por agente infiltrado.	324.	Captura sin orden judicial
290.	Elemento material probatorio recogido en desarrollo de entrega vigilada	325.	Flagrancia
291.	Elemento material probatorio remitido del extranjero	326.	Procedimiento en caso de flagrancia
292.	Conocimiento probable para solicitar medida que asegure la comparecencia del imputado al proceso penal	327.	Derechos del capturado
293.	Grado de conocimiento suficiente para elaborar escrito de acusación	328.	Formalización de la reclusión
294.	Declaración jurada	329.	Registro de personas capturadas y detenidas
295.	Interrogatorio a indiciado		CAPITULO III
296.	Aceptación por el imputado		Medidas de Aseguramiento
297.	Informe de investigador de campo	330.	Medidas de aseguramiento
298.	Informe de investigador de laboratorio	331.	Requisitos
299.	Prueba anticipada	332.	Obstrucción de la justicia
300.	Conservación de la prueba anticipada	333.	Peligro para la comunidad
	TITULO III	334.	Peligro para la víctima
	MEDIOS DE PRUEBA EN EL JUICIO	335.	No comparecencia
	CAPITULO I	336.	Procedencia de la detención preventiva
	Disposiciones generales	337.	Sustitución de la detención preventiva
301.	Fines	338.	Medidas de aseguramiento no privativas de la libertad
		339.	Incumplimiento
		340.	Libertad

Artículo N°	Tema	Artículo N°	Tema
341.	De la caución	377.	Trámite
342.	Solicitud de imposición de medida de aseguramiento.	378.	La víctima
343.	Impugnación contra la decisión tomada en audiencia preliminar	379.	Trámite de impedimentos, recusaciones, nulidades e impugnación de incompetencia
344.	Audiencia de reconsideración	380.	Medidas de protección
345.	Solicitud de revocatoria		CAPITULO III
346.	Informe sobre medidas de aseguramiento		Descubrimiento de los elementos materiales probatorios
	TITULO VI	381.	Inicio del descubrimiento
	PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD	382.	Restricciones al descubrimiento de prueba
347.	Principio de oportunidad	383.	Sanciones por el incumplimiento del deber de revelación de información durante el procedimiento de descubrimiento
348.	Casos en que procede la abstención	384.	Procedimiento para exposiciones
349.	Casos en que procede la suspensión	385.	Fecha de la audiencia preparatoria
350.	Suspensión condicional del procedimiento		TITULO II
351.	Requisitos para la suspensión condicional del procedimiento		PREACUERDOS Y NEGOCIACIONES
352.	Casos en que procede la renuncia		ENTRE LA FISCALIA Y EL IMPUTADO
353.	Control judicial en la aplicación del principio de oportunidad		O ACUSADO
354.	Efectos de la aplicación del principio de oportunidad		CAPITULO UNICO
355.	Reglamentación	386.	Finalidades
	TITULO VII	387.	Preacuerdos desde la audiencia de formalización de la imputación
	FORMULACION DE LA IMPUTACION	388.	Modalidades
	CAPITULO I	389.	Preacuerdos posteriores a la presentación de la acusación
	Disposiciones generales	390.	Aceptación total o parcial de los cargos
356.	Concepto	391.	Reglas comunes
357.	Situaciones que determinan la formulación de la imputación		TITULO III
358.	Contenido		AUDIENCIA PREPARATORIA
359.	Formalidades		CAPITULO I
360.	Derecho de defensa		Trámite
361.	Contumacia	392.	Instalación de la audiencia preparatoria
362.	Términos	393.	Desarrollo de la audiencia preparatoria
363.	Sentencia anticipada	394.	Solicitudes probatorias
364.	Vencimiento del término	395.	Exhibición de los elementos materiales de prueba
	CAPITULO II	396.	Exclusión e inadmisibilidad de los medios de prueba
	Audiencia preliminar	397.	Prueba ilegal
365.	Noción		CAPITULO II
366.	Modalidades		Prueba anticipada
367.	Audiencia preliminar de medidas cautelares reales	398.	Procedimiento para la utilización excepcional de la prueba anticipada
368.	Publicidad	399.	Aducción de la prueba anticipada
	TITULO VIII	400.	Decisión sobre el orden de la presentación de la prueba
	DE LA PRECLUSION	401.	Prohibición de pruebas de oficio
369.	Oportunidad		CAPITULO IV
370.	Causales		Conclusión de la audiencia preparatoria
371.	Trámite	402.	Suspensión
372.	Efectos de la decisión de preclusión	403.	Reanudación de la audiencia
373.	Rechazo de la solicitud de preclusión	404.	Fijación de la fecha de inicio del juicio oral
	LIBRO III		TITULO IV
	EL JUICIO		JUICIO ORAL
	TITULO I		CAPITULO I
	DE LA ACUSACION		Instalación
	CAPITULO I	405.	Inicio del juicio oral
	Requisitos formales	406.	Alegación inicial
374.	Presentación de la acusación	407.	Condiciones de validez de la manifestación
375.	Contenido de la acusación y documentos anexos		
	CAPITULO II		
	Audiencia de formulación de acusación		
376.	Citación		

Artículo N°	Tema	Artículo N°	Tema
408.	Manifestaciones de culpabilidad acordada	452.	Apreciación de la prueba pericial
409.	Decisión del juez	453.	Limitación a las opiniones del testigo experto o perito sobre insanidad mental
	CAPITULO II	454.	Testigos expertos
	Presentación del caso	455.	Admisibilidad de publicaciones científicas y de prueba novel
410.	Declaración inicial	456.	Presentación de la prueba demostrativa
	CAPITULO III		Parte IV
	Práctica de la prueba		Prueba documental
	Parte I	457.	Prueba documental
	Principio de Inmediación	458.	Documento auténtico
411.	Inmediación	459.	Métodos de autenticación e identificación
	Parte II	460.	Documentos procedentes del extranjero
	Reglas generales para la prueba testimonial	461.	Traducción de documentos
412.	Obligación de rendir testimonio	462.	Actas de pruebas de otros procesos
413.	Medidas especiales para asegurar la comparencia de testigos	463.	Presentación de documentos
414.	Excepciones constitucionales	464.	Documentos anónimos
415.	Excepciones legales	465.	Empleo de los documentos en el juicio
416.	Impedimento del testigo para concurrir	466.	Apreciación de la prueba documental
417.	Testimonios especiales		Parte V
418.	Testimonio de agente diplomático		Reglas relativas a la inspección
419.	Juramento	467.	Procedencia
420.	Examen de testigos	468.	Criterios para decretarla
421.	Interrogatorio cruzado del testigo		Parte VI
422.	Reglas sobre el interrogatorio		Reglas relativas a la prueba de referencia
423.	Reglas sobre el conainterrogatorio	469.	Noción
424.	El acusado como testigo	470.	Admisión excepcional de la prueba de referencia
425.	Testimonio del coacusado	471.	Prueba de referencia múltiple
426.	Oposiciones durante el interrogatorio	472.	Utilización de la prueba de referencia para fines de impugnación
427.	Examen separado de testigos	473.	Impugnación de la credibilidad de la prueba de referencia
428.	Interrogatorio por el juez		CAPITULO IV
429.	Testigo privado de la libertad		Alegatos de los sujetos procesales
430.	Testimonio de policía judicial	474.	Petición de absolución perentoria
431.	Testigo sordomudo	475.	Turnos para alegar
432.	Testigo de lengua extranjera	476.	Extensión de los alegatos
433.	Conocimiento personal	477.	Clausura del debate
434.	Impugnación de la credibilidad del testigo		CAPITULO V
435.	Apreciación del testimonio		Decisión o sentido del fallo
	Parte III	478.	Contenido
	Prueba pericial	479.	Individualización de la pena y sentencia
436.	Procedencia	480.	Congruencia
437.	Prestación del servicio de peritos	481.	Libertad inmediata
438.	Nombramiento especial de peritos	482.	Acusado no privado de la libertad
439.	Número de peritos	483.	Acusado privado de la libertad
440.	Quiénes pueden ser peritos	484.	Situación de los inimputables
441.	Quiénes no pueden ser nombrados	485.	Requerimiento por otra autoridad
442.	Obligatoriedad del cargo de peritos		TITULO V
443.	Impedimentos y recusaciones		RECURSOS EN EL JUICIO
444.	Comparencia de los peritos a la audiencia	486.	Procedencia
445.	Presentación de informes	487.	Exclusión
446.	Admisibilidad del informe y citación del perito	488.	Recurso de apelación
447.	Base de la opinión pericial	489.	Segunda instancia
448.	Acceso a los elementos materiales		
449.	Instrucciones para interrogar al perito		
450.	Instrucciones para conainterrogar al perito		
451.	Perito impedido para concurrir		

Artículo N°	Tema	Artículo N°	Tema
	TITULO VI SUSPENSIONES DE LA AUDIENCIA DEL JUICIO ORAL	530.	Aplazamiento de la audiencia
490.	Principio de concentración	531.	Celebración de la audiencia
	TITULO VII INEFICACIA DE LOS ACTOS PROCESALES	532.	Interrogatorio al acusado
491.	Nulidad derivada de la prueba ilícita	533.	Práctica de pruebas en audiencia
492.	Nulidad por incompetencia del juez	534.	Sesión privada y cuestionario
493.	Nulidad por violación a garantías fundamentales	535.	Decisión del Senado
494.	Principio de taxatividad	536.	Proyecto de sentencia
	TITULO VIII JUICIOS ESPECIALES ANTE EL CONGRESO	537.	Adopción de la sentencia
	CAPITULO I Actuación ante la Cámara de Representantes	538.	Ejecución de la sentencia
495.	De la función jurisdiccional del Congreso	539.	Intervención del ministerio público
496.	Fiscal	540.	Impedimentos de los senadores
497.	Denuncia	541.	Causales de impedimento
498.	Investigación oficiosa o informes a la Cámara	542.	Recusación de senadores
499.	Reparto y ratificación de la queja	543.	Decisión sobre las recusaciones
500.	Investigación previa	544.	Medidas de aseguramiento y variación de la calificación jurídica
501.	Apertura de la investigación		LIBRO IV EJECUCION DE SENTENCIAS
502.	Reserva		TITULO I EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
503.	Intervención del ministerio público		CAPITULO I Ejecución de penas
504.	Auxiliares en la investigación	545.	Ejecución de penas y medidas de seguridad
505.	Indagatoria	546.	Acumulación jurídica
506.	Defensor	547.	Sustitución de la ejecución de la pena
507.	Principio de libertad del procesado	548.	Aplicación de las penas accesorias
508.	Término para la investigación	549.	Informes
509.	Preclusión de la investigación	550.	Remisión
510.	Cierre de la investigación		CAPITULO II Ejecución de medidas de seguridad
511.	Resolución calificatoria	551.	Entidad competente
512.	Trámite de la resolución calificatoria	552.	Internación de inimputables
513.	Nombramiento del acusador	553.	Libertad vigilada
514.	Recurso de apelación	554.	Suspensión, sustitución o cesación de la medida de seguridad
	CAPITULO II Actuación ante el Senado	555.	Revocatoria de la suspensión condicional
515.	Presentación de la acusación	556.	Medidas de seguridad para indígenas
516.	Comisión de instrucción		CAPITULO III Libertad condicional
517.	Proyecto de inadmisión de la acusación o formación de la causa	557.	Solicitud
518.	Concepto sobre formación de la causa	558.	Decisión
519.	Citación para estudio del informe	559.	Condición para la revocatoria
520.	Lectura, discusión y votación del informe		CAPITULO IV Suspensión condicional de la ejecución de la pena privativa de la libertad
521.	Trámite para discusión y votación	560.	Procedencia
522.	Resolución sobre resultado de la votación	561.	Ejecución de la pena por no reparación de los daños
523.	Inadmisión de la acusación	562.	Extinción de la condena y devolución de la caución
524.	Suspensión de servidores públicos por acusación admitida		CAPITULO V Disposiciones comunes a los dos Capítulos anteriores
525.	Juicio	563.	Negación o revocatoria de los mecanismos sustitutivos de la pena privativa de la libertad
526.	Fecha para la audiencia y pruebas	564.	Decisiones
527.	Citación y expedición de copias	565.	Prórroga para el pago de perjuicios
528.	Conducencia de la prueba		
529.	Declaración de testigos		

Artículo N°	Tema	Artículo N°	Tema
	CAPITULO VI De la rehabilitación	602.	Procedencia
566.	Concesión	603.	Solicitud
567.	Anexos a la solicitud de rehabilitación	604.	Confidencialidad
568.	Comunicaciones	605.	Directrices
569.	Ampliación de pruebas		LIBRO VII REGIMEN DE IMPLEMENTACION CAPITULO I Disposiciones generales
	LIBRO V COOPERACION INTERNACIONAL CAPITULO I La extradición	606.	Proceso de implementación
570.	La extradición	607.	Criterios para la implementación
571.	Concesión u ofrecimiento de la extradición	608.	Selección de distritos judiciales
572.	Extradición facultativa	609.	Unidad técnica ejecutora del proceso de implementación
573.	Requisitos para concederla u ofrecerla		CAPITULO II Régimen de transición
574.	Condiciones para el ofrecimiento o concesión	610.	Proceso de descongestión
575.	Documentos anexos para la solicitud u ofrecimiento		CAPITULO III Disposiciones finales
576.	Concepto del Ministerio de Relaciones Exteriores	611.	Derogatoria y vigencia
577.	Estudio de la documentación		El Congreso de Colombia DECRETA: TITULO PRELIMINAR PRINCIPIOS RECTORES Y GARANTIAS PROCESALES
578.	Perfeccionamiento de la documentación		Artículo 1°. <i>Dignidad humana</i> . Los intervinientes en el proceso penal serán tratados con el respeto debido a la dignidad humana.
579.	Trámite		Artículo 2°. <i>Libertad</i> . Toda persona tiene derecho a que se respete su libertad. Nadie podrá ser molestado en su persona ni privado de su libertad sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, emitido con las formalidades legales y por motivos previamente definidos en la ley.
580.	Fundamentos de la resolución que concede o niega la extradición		El juez de control de garantías, previa solicitud de la Fiscalía General de la Nación, ordenará la restricción de la libertad del imputado cuando resulte necesaria para garantizar su comparecencia o la preservación de la prueba o la protección de la comunidad, en especial, de las víctimas. Igualmente, por petición de cualquier sujeto procesal, en los términos señalados en este código, dispondrá la modificación o revocación de la medida restrictiva si las circunstancias hubieren variado y la convirtiesen en irrazonable o desproporcionada.
581.	Entrega diferida		En las capturas en flagrancia y en aquellas en donde la Fiscalía General de la Nación, existiendo motivos fundados, razonablemente carezca de la oportunidad de solicitar el mandamiento escrito, el capturado deberá ponerse a disposición del juez de control de garantías en el menor tiempo posible sin superar las treinta y seis (36) horas siguientes.
582.	Prelación en la concesión		Artículo 3°. <i>Prelación de los tratados internacionales</i> . En la actuación prevalecerá lo establecido en los tratados y convenios internacionales ratificados por Colombia que traten sobre derechos humanos y que prohíban su limitación durante los estados de excepción, por formar bloque de constitucionalidad.
583.	Entrega del extraditado		Artículo 4°. <i>Igualdad</i> . Es obligación de los servidores judiciales hacer efectiva la igualdad de los intervinientes en el desarrollo de la actuación procesal y proteger, especialmente, a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta.
584.	Entrega de objetos		El sexo, la raza, la condición social, la profesión, el origen nacional o familiar, la lengua, el credo religioso, la opinión política o filosófica, en ningún caso podrán ser utilizados dentro del proceso penal como elementos de discriminación.
585.	Gastos		
586.	Captura		
587.	Derecho de defensa		
588.	Causales de libertad		
589.	Requisitos para solicitarla		
590.	Examen de la documentación		
591.	Gestiones diplomáticas para obtener la extradición		
	CAPITULO II Sentencias extranjeras		
592.	Ejecución en Colombia		
593.	Requisitos		
594.	Trámite		
	LIBRO VI JUSTICIA RESTAURATIVA CAPITULO I Disposiciones generales		
595.	Definiciones		
596.	Reglas generales		
597.	Condiciones para la remisión de casos a los programas de justicia restaurativa		
598.	Mecanismos		
	CAPITULO II Conciliación preprocesal		
599.	La conciliación como requisito de procedibilidad para el ejercicio de la acción penal en los delitos querellables		
600.	Audiencia de conciliación		
	CAPITULO III La mediación		
601.	Mediación		

Artículo 5°. *Imparcialidad*. En ejercicio de las funciones de control de garantías, preclusión y juzgamiento, los jueces se orientarán por el imperativo de establecer con objetividad la verdad y la justicia.

Artículo 6°. *Legalidad*. Nadie podrá ser investigado ni juzgado sino conforme a la ley procesal vigente al tiempo de la actuación procesal, con observancia de las formas propias de cada juicio.

La ley procesal tiene efecto general e inmediato; sin embargo, la de efectos sustanciales permisiva o favorable, aún cuando sea posterior a la actuación, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable.

Las disposiciones de este código se aplicarán única y exclusivamente para la investigación y el juzgamiento de los delitos ocurridos con posterioridad a su vigencia.

Artículo 7°. *Presunción de inocencia e in dubio pro reo*. Toda persona se presume inocente y debe ser tratada como tal, mientras no quede en firme decisión judicial definitiva sobre su responsabilidad penal.

En consecuencia, corresponderá al órgano de persecución penal la carga de la prueba acerca de la responsabilidad penal. La duda razonable que se presente se resolverá a favor del procesado.

En ningún caso podrá invertirse esta carga probatoria.

Para proferir sentencia condenatoria deberá existir convencimiento de la responsabilidad penal del acusado, más allá de toda duda razonable.

Artículo 8°. *Defensa*. En desarrollo de la actuación, una vez formulada la imputación, el imputado tendrá derecho, en plena igualdad respecto del órgano de persecución penal, en lo que aplica a:

a) No ser obligado a declarar en contra de sí mismo ni en contra de su cónyuge, compañero permanente o parientes dentro del cuarto grado;

b) No autoincriminarse ni incriminar a su cónyuge, compañero permanente o parientes dentro del cuarto grado;

c) No se podrá utilizar su silencio en su contra;

d) No utilizar en su contra el contenido de las conversaciones tendientes a lograr un acuerdo para la declaración de responsabilidad en cualquiera de sus formas o de un método alternativo de solución de conflictos, sino llegaren a perfeccionarse;

e) Ser oído, asistido y representado por un abogado de confianza o nombrado por el Estado;

f) Ser asistido gratuitamente por un traductor debidamente acreditado o reconocido por el juez, en el caso de no poder entender o expresarse en el idioma oficial; o de un intérprete en el evento de no poder percibir el idioma por los órganos de los sentidos o hacerse entender oralmente. Lo anterior no obsta para que pueda estar acompañado por uno designado por él;

g) Tener comunicación privada con su defensor antes de comparecer frente a las autoridades;

h) Conocer los cargos que le sean imputados, expresados en términos que sean comprensibles, con indicación expresa de las circunstancias conocidas de modo, tiempo y lugar que los fundamentan;

i) Disponer de tiempo razonable y de medios adecuados para la preparación de la defensa. De manera excepcional podrá solicitar las prórrogas debidamente justificadas y necesarias para la celebración de las audiencias a las que deba comparecer,

j) Solicitar, conocer y controvertir las pruebas;

k) Tener un juicio público, oral, contradictorio, concentrado, imparcial, con intermediación de las pruebas y sin dilaciones injustificadas, en el cual pueda, si así lo desea, por sí mismo o por conducto de su defensor, interrogar en audiencia a los testigos de cargo y a obtener la comparecencia, de ser necesario aun por medios coercitivos, de testigos o peritos que puedan arrojar luz sobre los hechos objeto del debate;

l) Renunciar a los derechos contemplados en los literales (b) y (k) siempre y cuando se trate de una manifestación libre, consciente, voluntaria y debidamente informada. En el evento de los literales (c) y (j) requerirá siempre el asesoramiento de su abogado defensor.

Artículo 9°. *Oralidad*. La actuación procesal será oral y en su realización se utilizarán los medios técnicos disponibles que permitan

imprimirle mayor agilidad y fidelidad, sin perjuicio de conservar registro de lo acontecido. A estos efectos se dejará constancia de la actuación.

Artículo 10. *Actuación procesal*. La actuación procesal se desarrollará teniendo en cuenta el respeto a los derechos fundamentales de las personas que intervienen en ella y la necesidad de lograr la eficacia del ejercicio de la justicia. En ella los funcionarios judiciales harán prevalecer el derecho sustancial.

Para alcanzar esos efectos serán de obligatorio cumplimiento los procedimientos orales, la utilización de los medios técnicos pertinentes que los viabilicen y los términos fijados por la ley o el funcionario para cada actuación.

El juez dispondrá de amplias facultades en la forma prevista en este código para sancionar por desacato a los sujetos procesales, testigos, peritos y demás intervinientes que afecten con su comportamiento el orden y la marcha de los procedimientos.

El juez podrá autorizar los acuerdos o estipulaciones a que lleguen los sujetos procesales y que versen sobre aspectos en los cuales no haya controversia sustantiva, sin que implique renuncia de los derechos constitucionales.

El juez de control de garantías y el de conocimiento estarán en la obligación de corregir los actos irregulares no sancionables con nulidad, respetando siempre los derechos y garantías de los sujetos procesales.

Artículo 11. *Derechos de las víctimas*. El Estado garantizará el acceso de las víctimas a la administración de justicia, en los términos establecidos en este código.

En desarrollo de lo anterior, las víctimas tendrán derecho:

a) A recibir, durante todo el procedimiento, un trato humano y digno;

b) A la protección de su intimidad, a la garantía de su seguridad, y a la de sus familiares y testigos a favor;

c) A una pronta e integral reparación de los daños sufridos, a cargo del autor o partícipe del injusto o de los terceros llamados a responder en los términos de este código;

d) A ser oídas y a que se les facilite el aporte de pruebas;

e) A recibir desde el primer contacto con las autoridades y en los términos establecidos en este código, información pertinente para la protección de sus intereses y a conocer la verdad de los hechos que conforman las circunstancias del injusto del cual han sido víctimas;

f) A que se consideren sus intereses al adoptar una decisión discrecional sobre el ejercicio de la persecución del injusto;

g) A ser informadas sobre la decisión definitiva relativa a la persecución penal; a acudir, en lo pertinente, ante el juez de control de garantías, y a interponer los recursos ante el juez de conocimiento, cuando a ello hubiere lugar;

h) A ser asistidas durante el juicio y el incidente de reparación integral, si el interés de la justicia lo exigiere, por un abogado que podrá ser designado de oficio.

i) A recibir asistencia integral para su recuperación en los términos que señale la ley;

j) A ser asistidas gratuitamente por un traductor o intérprete en el evento de no conocer el idioma oficial, o de no poder percibir el lenguaje por los órganos de los sentidos;

Artículo 12. *Lealtad*. Todos los que intervienen en la actuación, sin excepción alguna, están en el deber de obrar con absoluta lealtad y buena fe.

Artículo 13. *Gratuidad*. La actuación procesal no causará erogación alguna a quienes en ella intervengan, en cuanto al servicio que presta la administración de justicia.

Artículo 14. *Intimidación*. Toda persona tiene derecho al respeto de su intimidad. Nadie podrá ser molestado en su vida privada.

No podrán hacerse registros, allanamientos ni incautaciones en domicilio, residencia, o lugar de trabajo, sino en virtud de orden escrita del Fiscal General de la Nación o su delegado, con arreglo de las

formalidades y motivos previamente definidos en este código. Se entienden excluidas las situaciones de flagrancia y demás contempladas por la ley.

De la misma manera deberá procederse cuando resulte necesaria la búsqueda selectiva en las bases de datos computarizadas, mecánicas o de cualquier otra índole, que no sean de libre acceso, o cuando fuere necesario interceptar comunicaciones.

En estos casos, dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes deberá adelantarse la respectiva audiencia ante el juez de control de garantías, con el fin de determinar la validez de la actuación.

Artículo 15. *Contradicción*. Los sujetos procesales tendrán derecho a conocer y controvertir las pruebas, así como a intervenir en su formación, tanto las que sean producidas o incorporadas en el juicio oral y en el incidente de reparación integral, como las que se practiquen en forma anticipada.

Para garantizar plenamente este derecho, en el caso de formular acusación la Fiscalía General de la Nación deberá, por conducto del juez de conocimiento, suministrar todos los elementos probatorios e informes de que tenga noticia, incluidos los que sean favorables al procesado.

Artículo 16. *Inmediación*. En el juicio únicamente se estimará como prueba la que haya sido producida o incorporada en forma pública, oral, concentrada, y sujeta a confrontación y contradicción ante el juez de conocimiento. En ningún caso podrá comisionarse para la práctica de pruebas. Sin embargo, en las circunstancias excepcionalmente previstas en este código, podrá tenerse como prueba la producida o incorporada de forma anticipada durante la audiencia ante el juez de control de garantías.

Artículo 17. *Concentración*. Durante la actuación procesal la práctica de pruebas y el debate deberán realizarse de manera continua, con preferencia en un mismo día; si ello no fuere posible se hará en días consecutivos, sin perjuicio de que el juez que dirija la audiencia excepcionalmente la suspenda por un término hasta de treinta (30) días, si se presentaren circunstancias especiales que lo justifiquen. En todo caso el juez velará porque no surjan otras audiencias concurrentes, de modo que concentre su atención en un solo asunto.

Artículo 18. *Publicidad*. La actuación procesal será pública. Tendrán acceso a ella, además de los sujetos procesales, los medios de comunicación y la comunidad en general. Se exceptúan los casos en los cuales el juez considere que la publicidad de los procedimientos pone en peligro a las víctimas, jurados, testigos, peritos y demás intervinientes; se afecte la seguridad nacional; se exponga a un daño psicológico a los menores de edad que deban intervenir; se menoscabe el derecho del acusado a un juicio justo; o se comprometa seriamente el éxito de la investigación.

Artículo 19. *Juez natural*. Nadie podrá ser juzgado por juez o tribunal ad-hoc o especial, instituido con posterioridad a la comisión de un delito por fuera de la estructura judicial ordinaria.

Artículo 20. *Doble instancia*. Las sentencias y los autos que se refieran a la libertad del imputado o acusado, que afecten la práctica de las pruebas o que tengan efectos patrimoniales, salvo las excepciones previstas en este código, serán susceptibles del recurso de apelación.

El superior no podrá agravar la situación del apelante único.

Artículo 21. *Cosa juzgada*. La persona cuya situación jurídica haya sido definida por sentencia ejecutoriada o providencia que tenga la misma fuerza vinculante, no será sometida a nueva investigación o juzgamiento por los mismos hechos, salvo que la decisión haya sido obtenida mediante fraude o violencia, como también las absoluciones que se refieran a graves violaciones de derechos humanos o al Derecho Internacional Humanitario, cuando se debieron a la falta de un interés serio del Estado al ejercer la acción penal, según lo hubieren establecido los organismos con jurisdicción internacional cuya competencia haya sido reconocida por Colombia o lo determinen pronunciamientos de la Procuraduría General de la Nación, de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura o de la jurisdicción contencioso administrativa.

Artículo 22. *Restablecimiento del Derecho*. Cuando sea procedente, la Fiscalía General de la Nación y los jueces deberán adoptar las medidas necesarias para hacer cesar los efectos producidos por el delito y las cosas vuelvan al estado anterior, si ello fuere posible, de modo que se restablezcan los derechos quebrantados, independientemente de la responsabilidad penal.

Artículo 23. *Cláusula de exclusión*. Toda prueba obtenida con violación de las garantías fundamentales será nula de pleno derecho, por lo que deberá excluirse de la actuación procesal.

Igual tratamiento recibirán las pruebas que sean consecuencia directa de las pruebas excluidas, o las que sólo puedan explicarse en razón de su existencia, salvo las excepciones previstas en este código.

Artículo 24. *Ambito de la jurisdicción penal*. Las indagaciones, investigaciones, imputaciones, acusaciones y juzgamientos por las conductas previstas en la ley penal como delito, serán adelantadas por los órganos y mediante los procedimientos establecidos en este código y demás disposiciones complementarias.

Artículo 25. *Integración*. En materias que no estén expresamente reguladas en este código o demás disposiciones complementarias, son aplicables las del Código de Procedimiento Civil y las de otros ordenamientos procesales cuando no se opongan a la naturaleza del procedimiento penal.

Artículo 26. *Prevalencia*. Las normas rectoras son obligatorias y prevalecen sobre cualquier otra disposición de este código. Serán utilizadas como fundamento de interpretación.

Artículo 27. *Moduladores de la actividad procesal*. En el desarrollo de la investigación y en el proceso penal los servidores públicos se ceñirán a criterios de necesidad, ponderación, legalidad y corrección en el comportamiento, para evitar excesos contrarios a la función pública, especialmente a la justicia.

LIBRO I

DISPOSICIONES GENERALES

TÍTULO I

JURISDICCION Y COMPETENCIA

CAPÍTULO I

Disposiciones Generales

Artículo 28. *La jurisdicción penal ordinaria*. La jurisdicción penal ordinaria es única y nacional, con independencia de los procedimientos que se establezcan en este Código para la persecución penal.

Artículo 29. *Objeto de la jurisdicción penal ordinaria*. Corresponde a la jurisdicción penal la persecución y el juzgamiento de los delitos cometidos en el territorio nacional, y los cometidos en el extranjero en los casos que determinen los tratados internacionales suscritos y ratificados por Colombia y la legislación interna.

Artículo 30. *Excepciones a la jurisdicción penal ordinaria*. Se exceptúan los delitos cometidos por miembros de la Fuerza Pública en servicio activo y en relación con el mismo servicio, y los asuntos de los cuales conozca la jurisdicción indígena.

Artículo 31. *Organos de la jurisdicción*. La administración de justicia en lo penal está conformada por los siguientes órganos:

1. La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.
2. Los tribunales regionales.
3. Las salas de decisión penal de los tribunales superiores de distrito judicial.
4. Los juzgados penales regionales.
5. Los juzgados penales de circuito.
6. Los juzgados penales municipales.
7. Los juzgados promiscuos cuando resuelven asuntos de carácter penal.
8. Los juzgados de ejecución de penas y medidas de seguridad.
9. Los jurados en las causas criminales, en los términos que determine la ley.

Parágrafo 1°. También ejercerán jurisdicción penal las autoridades judiciales que excepcionalmente cumplen funciones de control de garantías.

Parágrafo 2°. El Congreso de la República y la Fiscalía General de la Nación ejercerán determinadas funciones judiciales.

CAPITULO II

De la competencia

Artículo 32. *De la Corte Suprema de Justicia.* La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia conoce:

1. De la casación.
2. De la acción de revisión cuando la sentencia, la preclusión de la investigación o la cesación de procedimiento ejecutoriadas hayan sido proferidas en única o segunda instancia por esta corporación o por los tribunales.
3. De los recursos de apelación contra los autos y sentencias que profieran en primera instancia los tribunales superiores y regionales.
4. De la definición de competencia cuando se trate de aforados constitucionales y legales, o de tribunales, o de juzgados de diferentes distritos o regiones.
5. Del juzgamiento de los funcionarios a que se refieren los artículos 174 y 235 numeral 2 de la Constitución Política.
6. Del juzgamiento de los funcionarios a que se refiere el artículo 235 numeral 4 de la Constitución Política.
7. De la investigación y juzgamiento de los Senadores y Representantes a la Cámara.
8. De las solicitudes de cambio de radicación de procesos penales de un distrito judicial a otro o de una región a otra durante el juzgamiento.
9. Del juzgamiento del viceprocurador, vicefiscal, magistrados de los consejos seccionales de la judicatura, del Tribunal Superior Militar, del Consejo Nacional Electoral, fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia y tribunales, procuradores delegados, procuradores regionales, procuradores judiciales II, Registrador Nacional del Estado Civil, Director Nacional de Fiscalía y directores seccionales o regionales de fiscalía.
10. Cuando los funcionarios a los que se refieren los literales 6, 7 y 9 anteriores hubieren cesado en el ejercicio de sus cargos, el fuero sólo se mantendrá para los delitos que tengan relación con las funciones desempeñadas.

Artículo 33. *De los tribunales regionales.* Los tribunales regionales conocen:

1. Del recurso de apelación de los autos y sentencias que sean proferidas en primera instancia por los jueces regionales.
2. En primera instancia, de los procesos que se sigan a los jueces regionales y fiscales delegados ante los juzgados regionales por los delitos que cometan en ejercicio de sus funciones o por razón de ellas.
3. De la acción de revisión contra sentencias proferidas por los jueces regionales, y preclusiones proferidas en investigaciones por delitos de su competencia.
4. De las solicitudes de cambio de radicación dentro de la misma región.
5. De la definición de competencia de los jueces de la misma región.
6. Del recurso de apelación interpuesto en contra de la decisión del juez de ejecución de penas cuando se trate de condenados por delitos de competencia de los jueces regionales.

Artículo 34. *De los tribunales superiores de distrito.* Las salas penales de los tribunales superiores de distrito judicial conocen:

1. De los recursos de apelación contra los autos y sentencias que en primera instancia profieran los jueces del circuito y de las sentencias proferidas por los municipales del mismo distrito.
2. En primera instancia, de las actuaciones que se sigan a los jueces del circuito, de ejecución de penas y medidas de seguridad, municipales, de menores, de familia, penales militares, procuradores provinciales,

procuradores grado I, personeros distritales y municipales cuando actúan como agentes del Ministerio Público en la actuación penal, y a los fiscales delegados ante los jueces penales del circuito, municipales o promiscuos, por los delitos que cometan en ejercicio de sus funciones o por razón de ellas.

3. De la acción de revisión contra sentencias proferidas por los jueces de circuito o municipales pertenecientes al mismo distrito, y preclusiones proferidas en investigaciones por delitos de su competencia.

4. De las solicitudes de cambio de radicación dentro del mismo distrito.

5. De la definición de competencia de los jueces del circuito del mismo distrito, o municipales de diferentes circuitos.

6. Del recurso de apelación interpuesto contra de la decisión del juez de ejecución de penas.

Artículo 35. *De los jueces regionales.* Los jueces regionales conocen de:

1. Genocidio.
2. Homicidio agravado según los numerales 8, 9 y 10 del artículo 104 del Código Penal.
3. Lesiones personales agravadas según los numerales 8, 9 y 10 del artículo 104 del Código Penal.
4. Los delitos contra personas y bienes protegidos por el Derecho Internacional Humanitario.
5. Secuestro extorsivo o agravado según los numerales 6, 7, 11 y 16 del artículo 170 del Código Penal.
6. Desaparición forzada.
7. Apoderamiento de aeronaves, naves o medio de transporte colectivo.
8. Tortura.
9. Desplazamiento forzado.
10. Constreñimiento ilegal agravado según el numeral 1 del artículo 183 del Código Penal.
11. Constreñimiento para delinquir agravado según el numeral 1 del artículo 185 del Código Penal.
12. Hurto de hidrocarburos o sus derivados cuando se sustraigan de un oleoducto, gasoducto, naftaducto o poliducto, o que se encuentren almacenados en fuentes inmediatas de abastecimiento o plantas de bombeo.
13. Extorsión en cuantía superior a quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
14. Lavado de activos cuya cuantía sea o exceda de cien (100) salarios mínimos legales mensuales.
15. Testaferato cuya cuantía sea o exceda de cien (100) salarios mínimos legales mensuales.
16. Enriquecimiento ilícito de particulares cuando el incremento patrimonial no justificado se derive en una u otra forma de las actividades delictivas a que se refiere el presente artículo, cuya cuantía sea o exceda de cien (100) salarios mínimos legales mensuales.
17. Concierto para delinquir agravado según el inciso 2 del artículo 340 del Código Penal.
18. Entrenamiento para actividades ilícitas.
19. Terrorismo.
20. Administración de recursos relacionados con actividades terroristas.
21. Instigación a delinquir con fines terroristas para los casos previstos en el inciso 2 del artículo 348 del Código Penal.
22. Empleo o lanzamiento de sustancias u objetos peligrosos con fines terroristas.
23. De los delitos señalados en el artículo 365 del Código Penal, salvo que se trate del porte o conservación de armas de fuego y municiones.
24. De los delitos señalados en el artículo 366 del Código Penal, salvo que se trate del porte o conservación de armas o municiones de uso privativo de las Fuerzas Armadas.

25. Empleo, producción y almacenamiento de minas antipersonales.
26. Ayuda e inducción al empleo, producción y transferencia de minas antipersonales.
27. Corrupción de alimentos, productos médicos o material profiláctico con fines terroristas.
28. Conservación o financiación de plantaciones cuando la cantidad de plantas exceda de 8.000 unidades o la de semillas sobrepasen los 10.000 gramos.
29. Delitos señalados en el artículo 376 del Código Penal, agravados según el numeral 3 del artículo 384 del mismo código.
30. Destinación ilícita de muebles o inmuebles cuando la cantidad de droga elaborada, almacenada o transportada, vendida o usada, sea igual a las cantidades a que se refiere el literal anterior.
31. Delitos señalados en el artículo 382 del Código Penal cuando su cantidad supere los cien (100) kilos o los cien (100) litros en caso de ser líquidos.
32. Existencia, construcción y utilización ilegal de pistas de aterrizaje.
- Artículo 36. *De los jueces penales del circuito.* Los jueces penales de circuito conocen:
1. Del recurso de apelación contra los autos proferidos por los jueces penales municipales cuando ejerzan la función de control de garantías.
 2. De los procesos que no tengan asignación especial de competencia.
 3. De la definición de competencia de los jueces penales o promiscuos municipales del mismo circuito.
- Artículo 37. *De los jueces penales municipales.* Los jueces penales municipales conocen:
1. De los delitos de lesiones personales
 2. De los delitos contra el patrimonio económico en cuantía no superior de ciento cincuenta (150) salarios mínimos mensuales legales vigentes.
 3. De los procesos por delitos que requieren querrela aunque el sujeto pasivo sea un menor de edad e implique investigación oficiosa.
 4. La investigación de oficio no impide aplicar, cuando la decisión se considere necesaria, los efectos propios de la querrela para beneficio y reparación integral de la víctima del injusto.
 5. De la función de control de garantías.
- Artículo 38. *De los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad.* Los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad conocen:
1. De las decisiones necesarias para que las sentencias ejecutoriadas que impongan sanciones penales se cumplan.
 2. De la acumulación jurídica de penas en caso de varias sentencias condenatorias proferidas en procesos distintos contra la misma persona.
 3. Sobre la libertad condicional y su revocatoria.
 4. De lo relacionado con la rebaja de la pena y redención de pena por trabajo, estudio o enseñanza.
 5. De la aprobación previa de las propuestas que formulen las autoridades penitenciarias o de las solicitudes de reconocimiento de beneficios administrativos que supongan una modificación en las condiciones de cumplimiento de la condena o una reducción del tiempo de privación efectiva de libertad.
 6. De la verificación del lugar y condiciones en que se deba cumplir la pena o la medida de seguridad.
 7. De la aplicación del principio de favorabilidad cuando debido a una ley posterior hubiere lugar a reducción, modificación, sustitución, suspensión o extinción de la sanción penal.
 8. De la extinción de la sanción penal.
 9. Del reconocimiento de la ineficacia de la sentencia condenatoria cuando la norma incriminadora haya sido declarada inexecutable o haya perdido su vigencia.

Parágrafo. Cuando se trate de condenados que gocen de fuero constitucional o legal, la competencia para la ejecución de las sanciones

penales corresponderá, en primera instancia, a los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad del lugar donde se encuentre cumpliendo la pena. La segunda instancia corresponderá al respectivo juez de conocimiento.

Artículo 39. *De la función de control de garantías.* La función de control de garantías será ejercida, preferentemente, por un juez penal municipal del lugar en que se cometió el delito.

Si más de un juez penal municipal resultare competente para ejercer la función de control de garantías, esta le corresponderá al que se encuentre disponible de acuerdo con los turnos previamente establecidos, quien quedará impedido para conocer de ese caso en su fondo.

Cuando el acto sobre el cual deba ejercerse la función de control de garantías corresponda a un asunto que por competencia esté asignado a juez penal municipal, o concurra causal de impedimento y sólo exista un funcionario de dicha categoría en el respectivo municipio, la función de control de garantías deberá ejercerla otro juez municipal del mismo lugar sin importar su especialidad o, a falta de este, del municipio más próximo.

Artículo 40. *Competencia para imponer las penas y las medidas de seguridad.* Anunciado el sentido del fallo, salvo las excepciones establecidas en este código, el juez del conocimiento será competente para imponer las penas y las medidas de seguridad, dentro del término señalado en el capítulo correspondiente.

Artículo 41. *Competencia para ejecutar.* Ejecutoriado el fallo, el juez de ejecución de penas y medidas de seguridad será competente para los asuntos relacionados con la ejecución de sanción.

CAPITULO III

Competencia territorial

Artículo 42. *División territorial para efecto del juzgamiento.* El territorio nacional se divide para efectos del juzgamiento en regiones, distritos, circuitos y municipios.

La Corte Suprema de Justicia tiene competencia en todo el territorio nacional.

Los tribunales regionales en la correspondiente región.

Los tribunales superiores de distrito judicial en el correspondiente distrito.

Los jueces regionales en la respectiva región.

Los jueces del circuito en el respectivo circuito, salvo lo dispuesto en norma especial.

Los jueces municipales en el respectivo municipio, salvo lo dispuesto en norma especial.

Los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad en el respectivo distrito.

Artículo 43. *Competencia.* Es competente para conocer del juzgamiento el juez del lugar donde ocurrió el delito.

Cuando no fuere posible determinar el lugar de ocurrencia del hecho, este se hubiere realizado en varios lugares, en uno incierto o en el extranjero, la competencia del juez de conocimiento se fija por el lugar donde se formule acusación por parte de la Fiscalía General de la Nación, lo cual hará donde se encuentren los elementos fundamentales de la acusación.

Los sujetos procesales podrán controvertir la competencia del juez únicamente en audiencia de formulación de acusación.

Para escoger el juez de control de garantías en estos casos se atenderá lo señalado anteriormente. Su escogencia no determinará la del juez de conocimiento.

Artículo 44. *Competencia excepcional.* Cuando en el lugar en que debiera adelantarse la actuación no halla juez, o el juez único o todos los jueces disponibles se hallaren impedidos, las salas administrativas del Consejo Superior de la Judicatura, o los consejos seccionales, según su competencia, podrán a petición de parte, y para preservar los principios de concentración, eficacia, menor costo del servicio de justicia e intermediación, ordenar el traslado temporal del juez o magistrado que

razonablemente se considere el más próximo, así sea de diferente municipio, circuito, región o distrito, para atender esas diligencias o el desarrollo del proceso. La designación deberá recaer en funcionario de igual categoría, cuya competencia se entiende válidamente prorrogada. La sala penal de la Corte, así como los funcionarios interesados en el asunto, deberán ser informados de inmediato de esa decisión.

Artículo 45. *De la Fiscalía General de la Nación.* El Fiscal General de la Nación y sus delegados tienen competencia en todo el territorio nacional.

CAPITULO IV

Cambio de radicación

Artículo 46. *Finalidad y procedencia.* El cambio de radicación podrá disponerse excepcionalmente cuando en el territorio donde se esté adelantando la actuación procesal existan circunstancias que puedan afectar el orden público, la imparcialidad o la independencia de la administración de justicia, las garantías procesales, la publicidad del juzgamiento, la seguridad o integridad personal de los sujetos procesales, en especial de las víctimas, o de los servidores públicos.

Artículo 47. *Solicitud de cambio.* Antes de iniciarse la audiencia del juicio oral, los sujetos procesales o el Gobierno Nacional o departamental, oralmente o por escrito, podrán solicitar el cambio de radicación ante el juez que esté conociendo del proceso, quien informará al superior competente para decidir.

El juez que esté conociendo de la actuación también podrá solicitar el cambio de radicación ante el funcionario competente para resolverla.

Parágrafo. El Gobierno Nacional o departamental solo podrá solicitar el cambio de radicación por razones de orden público, de seguridad o integridad de los sujetos procesales, en especial de las víctimas, o de los servidores públicos.

Artículo 48. *Trámite.* La solicitud debe ser debidamente sustentada y en ella se indicarán los elementos de convicción en que se funda. El superior tendrá tres (3) días para decidir mediante auto contra el cual no procede recurso alguno. El juicio oral no podrá iniciarse hasta tanto el superior no la decida. El juez que conozca de la solicitud rechazará de plano la que no cumpla con los requisitos exigidos en esta disposición.

Artículo 49. *Fijación del sitio para continuar el proceso.* El superior competente para resolver el cambio de radicación señalará el lugar donde deba continuar el proceso, previo informe del Gobierno nacional o departamental sobre los sitios donde no sea conveniente fijar la nueva radicación.

Si el tribunal regional o el tribunal superior de distrito, al conocer del cambio de radicación, estima conveniente que esta se haga en otro distrito, la solicitud pasará a la Corte Suprema de Justicia para que decida. En este caso la Corte podrá, si encuentra procedente el cambio de radicación, señalar otra región o distrito, o escoger el sitio en donde debe continuar el proceso en la misma región o distrito, previo informe del Gobierno Nacional o departamental en el sentido anotado.

CAPITULO V

Competencia por razón de la conexidad y el factor subjetivo

Artículo 50. *Unidad procesal.* Por cada delito se adelantará una sola actuación procesal, cualquiera que sea el número de autores o partícipes, salvo las excepciones constitucionales y legales.

Los delitos conexos se investigarán y juzgarán conjuntamente. La ruptura de la unidad procesal no genera nulidad siempre que no afecte las garantías constitucionales.

Artículo 51. *Conexidad.* Al formular la acusación el fiscal podrá solicitar al juez de conocimiento que se decrete la conexidad cuando:

1. El delito haya sido cometido en coparticipación criminal.
2. Se impute a una persona la comisión de más de un delito con una acción u omisión o varias acciones u omisiones, realizadas con unidad de tiempo y lugar.
3. Se impute a una persona la comisión de varios delitos, cuando unos se han realizado con el fin de facilitar la ejecución o procurar la impunidad de otros; o con ocasión o como consecuencia de otro.

4. Se impute a una o más personas la comisión de uno o varios delitos en las que exista homogeneidad en el modo de actuar de los autores o partícipes, relación razonable de lugar y tiempo, y, la evidencia aportada a una de las investigaciones pueda influir en la otra.

Artículo 52. *Competencia por conexidad.* Cuando deban juzgarse delitos conexos conocerá de ellos el juez de mayor jerarquía de acuerdo con la competencia por razón del fuero legal o la naturaleza del asunto; si corresponden a la misma jerarquía será factor de competencia el territorio, en forma excluyente y preferente, en el siguiente orden: donde se haya cometido el delito más grave; donde se haya realizado el mayor número de delitos; donde se haya producido la primera aprehensión o donde se haya formulado primero la imputación.

Cuando se trate de conexidad entre delitos de competencia del juez regional y cualquier otro funcionario judicial corresponderá el juzgamiento a aquél.

Artículo 53. *Ruptura de la unidad procesal.* Además de lo previsto en otras disposiciones, no se conservará la unidad procesal en los siguientes casos:

1. Cuando en la comisión del delito intervenga una persona para cuyo juzgamiento exista fuero constitucional o legal que implique cambio de competencia o que esté atribuido a una jurisdicción especial.
2. Cuando se decreta nulidad parcial de la actuación procesal que obligue a reponer el trámite con relación a uno de los acusados o de delitos.
3. Cuando no se haya proferido para todos los delitos o para todos los procesados decisión que anticipadamente ponga fin al proceso.
4. Cuando la terminación del proceso sea producto de la aplicación de los mecanismos de justicia restaurativa o del principio de oportunidad y no comprenda a todos los delitos o a todos los acusados.
5. Cuando en el juzgamiento las pruebas determinen la posible existencia de otro delito, o la vinculación de una persona en calidad de autor o partícipe.

Parágrafo. Si la ruptura de la unidad no genera cambio de competencia el funcionario que la ordenó continuará conociendo de las actuaciones.

CAPITULO VI

Definición de competencia

Artículo 54. *Trámite.* Cuando el juez ante el cual se haya presentado la acusación manifieste su incompetencia, así lo hará saber a los sujetos procesales en la misma audiencia y remitirá el asunto inmediatamente al funcionario que deba definirla, quien en el término improrrogable de tres (3) días decidirá de plano. Igual procedimiento se aplicará cuando la incompetencia la proponga la defensa.

Artículo 55. *Prórroga.* Se entiende prorrogada la competencia si no se manifiesta o alega la incompetencia en la oportunidad indicada en el artículo anterior, salvo que ésta devenga del factor subjetivo o esté radicada en funcionario de superior jerarquía.

En estos eventos el juez, de oficio o a solicitud del fiscal o de la defensa, de encontrar la causal de incompetencia sobreviniente en audiencia preparatoria o de juicio oral, remitirá el asunto ante el funcionario que deba definir la competencia, para que este, en el término de tres (3) días, adopte de plano las decisiones a que hubiere lugar.

Parágrafo. Para los efectos indicados en este artículo se entenderá que el juez regional es de superior jerarquía respecto del juez de circuito.

CAPITULO VII

Impedimentos y recusaciones

Artículo 56. *Causales de impedimento.* Son causales de impedimento:

1. Que el funcionario judicial, su cónyuge o compañero o compañera permanente, o algún pariente suyo dentro del cuarto grado tenga interés en la actuación procesal.
2. Que el funcionario judicial sea acreedor o deudor de alguno de los sujetos procesales, del denunciante o del perjudicado, de su cónyuge o compañero permanente o algún pariente dentro del cuarto grado.

3. Que el funcionario judicial, o su cónyuge o compañero o compañera permanente, sea pariente dentro de cuarto grado del apoderado o defensor de alguno de los sujetos procesales.

4. Que el funcionario judicial haya sido apoderado o defensor de alguno de los sujetos procesales, o sea o haya sido contraparte de cualquiera de ellos, o haya dado consejo o manifestado su opinión sobre el asunto materia del proceso.

5. Que exista amistad íntima o enemistad grave entre alguno de los sujetos procesales, denunciante o perjudicado y el funcionario judicial.

6. Que el funcionario haya dictado la providencia de cuya revisión se trata o hubiere participado dentro del proceso o sea cónyuge o compañero o compañera permanente, o pariente dentro del cuarto grado, del funcionario inferior que dictó la providencia a revisar.

7. Que el funcionario judicial haya dejado vencer, sin actuar, los términos que la ley señale al efecto, a menos que la demora sea debidamente justificada.

8. Que el funcionario judicial, su cónyuge o compañero o compañera permanente, o pariente dentro del cuarto grado, sea socio, en sociedad colectiva, de responsabilidad limitada o en comandita simple o de hecho, de alguno de los sujetos procesales, del denunciante o del perjudicado.

9. Que el funcionario judicial sea heredero o legatario de alguno de los sujetos procesales, del denunciante o del perjudicado, o lo sea su cónyuge o compañero o compañera permanente, o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado.

10. Que el funcionario judicial haya estado vinculado legalmente a una investigación penal o disciplinaria en la que le hayan formulado cargos, por denuncia instaurada, antes de iniciarse el proceso, por alguno de los sujetos procesales.

Si la denuncia fuere formulada con posterioridad a la iniciación del proceso, procederá el impedimento cuando se vincule jurídicamente al funcionario judicial.

11. Que el juez haya intervenido como fiscal dentro de la actuación.

12. Que el juez haya ejercido el control de garantías o conocido de la audiencia preliminar de reconsideración, caso en el cual quedará impedido para conocer el juicio en su fondo.

13. Que el juez haya conocido de la solicitud de preclusión formulada por la Fiscalía General de la Nación y la haya negado, caso en el cual quedará impedido para conocer el juicio en su fondo.

Artículo 57. *Trámite para el impedimento.* Cuando el funcionario judicial se encuentre incurso en una de las causales de impedimento deberá manifestarlo a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, al tribunal regional, o a la sala penal del tribunal de distrito, según corresponda, para que sea sustraído del conocimiento del asunto.

Artículo 58. *Impedimento del Fiscal General de la Nación.* Si el Fiscal General de la Nación se declarare impedido o no aceptare la recusación, enviará la actuación a la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, para que resuelva de plano.

Si prosperare el impedimento o la recusación, continuará conociendo de la actuación el Vicefiscal General de la Nación.

Artículo 59. *Impedimento conjunto.* Si la causal de impedimento se extiende a varios integrantes de las salas de decisión de los tribunales, el trámite se hará conjuntamente.

Artículo 60. *Requisitos y formas de recusación.* Si el funcionario en quien se dé una causal de impedimento no la declarare, cualquiera de los sujetos procesales podrá recusarlo.

La recusación se propondrá y decidirá en los términos de este código.

Artículo 61. *Imprudencia del impedimento y de la recusación.* No son recusables los funcionarios judiciales a quienes corresponda decidir el incidente. No habrá lugar a recusación cuando el motivo de impedimento surja del cambio de defensor de uno de los sujetos procesales, a menos que la formule la parte contraria o el Ministerio público.

En ningún caso serán recusables los jueces de control de garantías.

Artículo 62. *Suspensión de la actuación procesal.* Desde cuando se presente la recusación o se manifieste el impedimento del funcionario judicial hasta que se resuelva definitivamente, se suspenderá la actuación.

Cuando la recusación propuesta por el procesado o su defensor se declare infundada, no correrá la prescripción de la acción entre el momento de la petición y la decisión correspondiente.

Artículo 63. *Impedimentos y recusación de otros funcionarios y empleados.* Las causales de impedimento y las sanciones se aplicarán a los fiscales, agentes del Ministerio Público, miembros de los organismos que cumplan funciones permanentes o transitorias de policía judicial, y empleados de los despachos judiciales, quienes las pondrán en conocimiento de su inmediato superior tan pronto como adviertan su existencia, sin perjuicio de que los interesados puedan recusarlos. El superior decidirá de plano y, si hallare fundada la causal de recusación o impedimento, procederá a reemplazarlo.

Cuando se trate de impedimento o recusación de personero municipal, la manifestación se hará ante el procurador provincial de su jurisdicción, quien procederá a reemplazarlo, si hubiere lugar a ello, por un funcionario de su propia dependencia o de la misma personería, o por el personero del municipio más cercano.

En los casos de la Procuraduría General de la Nación, Fiscalía General de la Nación y demás entidades que tengan funciones de policía judicial, se entenderá por superior la persona que indique el jefe de la respectiva entidad, conforme a su estructura.

En estos casos no se suspenderá la actuación.

Artículo 64. *Desaparición de la causal.* En ningún caso se recuperará la competencia por la desaparición de la causal de impedimento.

Artículo 65. *Imprudencia de la impugnación.* Las decisiones que se profieran en el trámite de un impedimento o recusación no tendrán recurso alguno.

TITULO II

ACCION PENAL

CAPITULO I

Disposiciones generales

Artículo 66. *Titularidad y obligatoriedad.* El Estado, por intermedio de la Fiscalía General de la Nación, está obligado a ejercer la acción penal y a realizar la investigación de los hechos que revistan las características de un delito, de oficio o que lleguen a su conocimiento por medio de denuncia, petición especial, querrela o cualquier otro medio, salvo las excepciones contempladas en la Constitución Política y en este código.

No podrá, en consecuencia, suspender, interrumpir ni renunciar a la persecución penal, salvo en los casos que establezca la ley para aplicar el principio de oportunidad regulado dentro del marco de la política criminal del Estado, el cual estará sometido al control de legalidad por parte del juez de control de garantías.

Artículo 67. *Deber de denunciar.* Toda persona debe denunciar a la autoridad los delitos de cuya comisión tenga conocimiento y que deban investigarse de oficio.

El servidor público que conozca de la comisión de un delito que deba investigarse de oficio, iniciará sin tardanza la investigación si tuviere competencia para ello; en caso contrario, pondrá inmediatamente el hecho en conocimiento ante la autoridad competente.

Artículo 68. *Exoneración del deber de denunciar.* Nadie está obligado a formular denuncia contra sí mismo, contra su cónyuge, compañero o compañera permanente o contra sus parientes dentro del cuarto grado, ni a denunciar cuando media el secreto profesional.

Artículo 69. *Requisitos de la denuncia, de la querrela o de la petición.* La denuncia, querrela o petición se hará verbalmente, o por escrito, o por cualquier medio técnico que permita la identificación del autor, dejando constancia del día y hora de su presentación y contendrá una relación detallada de los hechos que conozca el denunciante. Este deberá

manifestar, si le consta, que los mismos hechos ya han sido puestos en conocimiento de otro funcionario. La denuncia falsa implica responsabilidad penal; el funcionario lo advertirá al denunciante. En todo caso se inadmitirán las denuncias sin fundamento.

Los escritos anónimos que no suministren evidencias o datos concretos que permitan encauzar la investigación se archivarán. Si contienen información que señale la probable ocurrencia de un delito serán remitidos a los organismos que desarrollan funciones de policía judicial para que realicen las diligencias necesarias de verificación.

En todo caso el denunciante podrá ampliar la denuncia.

Artículo 70. *Condiciones de procesabilidad.* La querrela y la petición especial son condiciones de procesabilidad de la acción penal.

Cuando el delito requiera petición especial deberá ser presentada por el Procurador General de la Nación.

Artículo 71. *Querellante legítimo.* La querrela únicamente puede ser presentada por el sujeto pasivo del delito. Si éste fuere incapaz o persona jurídica, debe ser formulada por su representante legal. Si el querellante legítimo ha fallecido, podrán presentarla sus herederos.

Cuando el sujeto pasivo estuviere imposibilitado para formular la querrela, o sea incapaz y carezca de representante legal, o éste sea autor o partícipe del delito, puede presentarla el Defensor de Familia, el agente del Ministerio público o los perjudicados directos.

En el delito de inasistencia alimentaria será también querellante legítimo el Defensor de Familia.

El Procurador General de la Nación podrá formular querrela cuando se afecte el interés público o colectivo.

La intervención de un servidor público como representante de un menor incapaz, no impide que pueda conciliar o desistir. El juez tendrá especial cuidado de verificar que la causa de esta actuación o del acuerdo, se produzca en beneficio de la víctima para garantizar la reparación integral o la indemnización económica.

Artículo 72. *Extensión de la querrela.* La querrela se extiende de derecho contra todos los que hubieren participado en el delito.

Artículo 73. *Caducidad de la querrela.* La querrela debe presentarse dentro de los seis (6) meses siguientes a la comisión del delito. No obstante, cuando el querellante legítimo por razones de fuerza mayor o caso fortuito acreditados no hubiere tenido conocimiento de su ocurrencia, el término se contará a partir del momento en que aquellos desaparezcan, sin que en este caso sea superior a seis (6) meses.

Artículo 74. *Delitos que requieren querrela.* Para iniciar la acción penal será necesario querrela en los siguientes delitos, excepto cuando el sujeto pasivo sea un menor de edad:

1. Aquellos que de conformidad con el Código Penal no tienen señalada pena privativa de la libertad.

2. Inducción o ayuda al suicidio (C. P. artículo 107); lesiones personales sin secuelas que produjeran incapacidad para trabajar o enfermedad sin exceder de sesenta (60) días (C. P. artículo 112 incisos 1 y 2); lesiones personales con deformidad física transitoria (C. P. artículo 113 inciso 1); lesiones personales con perturbación funcional transitoria (C. P. artículo 114 inciso 1); parto o aborto preterintencional (C. P. artículo 118); lesiones personales culposas (C. P. artículo 120); omisión de socorro (C. P. artículo 131); violación a la libertad religiosa (C. P. artículo 201); injuria (C. P. artículo 220); calumnia (C. P. artículo 221); injuria y calumnia indirecta (C. P. artículo 222); injuria por vías de hecho (C. P. artículo 226); injurias recíprocas (C. P. artículo 227); violencia intrafamiliar (C. P. artículo 229); maltrato mediante restricción a la libertad física (C. P. artículo 230); inasistencia alimentaria (C. P. artículo 233); malversación y dilapidación de los bienes de familiares (C. P. artículo 236); hurto simple cuya cuantía no exceda de ciento cincuenta (150) salarios mínimos mensuales legales vigentes (C. P. artículo 239 inciso 2); alteración, desfiguración y suplantación de marcas de ganado (C. P. artículo 243); estafa cuya cuantía no exceda de ciento cincuenta (150) salarios mínimos mensuales legales vigentes (C. P. artículo 246 inciso 3); emisión y transferencia ilegal de cheques

(C. P. artículo 248); abuso de confianza (C. P. artículo 249); aprovechamiento de error ajeno o caso fortuito (C. P. artículo 252); alzamiento de bienes (C. P. artículo 253); disposición de bien propio gravado con prenda (C. P. artículo 255); defraudación de fluidos (C. P. artículo 256); acceso ilegal de los servicios de telecomunicaciones (C. P. artículo 257); malversación y dilapidación de bienes (C. P. artículo 259); usurpación de tierras (C. P. artículo 261); usurpación de aguas (C. P. artículo 262); invasión de tierras o edificios (C. P. artículo 263); perturbación de la posesión sobre inmuebles (C. P. artículo 264); daño en bien ajeno (C. P. artículo 265); usura y recargo de ventas a plazo (C. P. artículo 305); falsa autoacusación (C. P. artículo 437); infidelidad a los deberes profesionales (C. P. artículo 445).

Artículo 75. *Delitos que requieren petición especial.* La acción penal se iniciará por petición del Procurador General de la Nación, cuando el delito se cometa en el extranjero, no hubiere sido juzgado, el sujeto activo se encuentre en Colombia y se cumplan los siguientes requisitos:

1. Si se ha cometido por nacional colombiano, cuando la ley colombiana lo reprima con pena privativa de la libertad cuyo mínimo no sea inferior a dos (2) años.

2. Si se ha cometido por extranjero, cuando sea perjudicado el Estado o nacional colombiano y tenga prevista pena privativa de la libertad cuyo mínimo no sea inferior a dos (2) años.

3. Si se ha cometido por extranjero, cuando sea perjudicado otro extranjero, se hubiese señalado pena privativa de la libertad cuyo mínimo sea superior a tres (3) años, no se trate de delito político y no sea concedida la extradición.

4. En los delitos por violación de inmunidad diplomática y ofensa a diplomáticos.

Artículo 76. *Desistimiento de la querrela.* En cualquier momento de la actuación y antes de concluir la audiencia preparatoria, el querellante podrá manifestar verbalmente o por escrito su deseo de no continuar con los procedimientos.

Si al momento de presentarse la solicitud no se hubiese formulado la imputación, le corresponde a la Fiscalía verificar que el desistimiento sea voluntario, libre e informado, antes de proceder a aceptarlo mediante resolución motivada.

Si se hubiere formulado la imputación le corresponderá al juez de conocimiento, luego de escuchar el parecer de la Fiscalía, determinar si acepta el desistimiento.

En cualquier caso el desistimiento se hará extensivo a todos los autores o partícipes del delito investigado, y una vez aceptado no admitirá retractación.

Artículo 77. *Extinción.* La acción penal se extingue por muerte del imputado o acusado, prescripción, aplicación del principio de oportunidad, amnistía, oblación, caducidad de la querrela, desistimiento, y en los demás casos contemplados por la ley.

Artículo 78. *Trámite de la extinción.* La ocurrencia del hecho generador de la extinción de la acción penal deberá ser manifestada por la Fiscalía General de la Nación mediante orden sucintamente motivada. Si la causal se presentare antes de formularse la imputación el fiscal será competente para decretarla y ordenar como consecuencia el archivo de la actuación.

A partir de la formulación de la imputación la fiscalía deberá solicitar al juez de conocimiento la preclusión de la investigación, o la cesación de procedimiento si se hubiere iniciado el juicio oral.

Parágrafo. El imputado o acusado podrá renunciar a la prescripción de la acción penal dentro de los cinco (5) días siguientes a la comunicación del archivo de la investigación o de la cesación de procedimiento, respectivamente. Si se tratare de solicitud de preclusión, el Imputado podrá manifestar su renuncia únicamente durante la audiencia correspondiente.

Artículo 79. *Archivo de las diligencias.* Cuando la Fiscalía tenga conocimiento de un hecho respecto del cual constante que no existen motivos o circunstancias fácticas que permitan su caracterización como

delito, o indiquen su posible existencia como tal, dispondrá el archivo de la actuación.

Artículo 80. *Efectos de la Extinción.* La extinción de la acción penal producirá efectos de cosa juzgada. Sin embargo, no se extenderá a la acción civil derivada del injusto ni a la acción de extinción de dominio.

Artículo 81. *Continuación de la persecución penal para los demás imputados o procesados.* La acción penal deberá continuarse en relación con los imputados o procesados en quienes no concurren las causales de extinción.

CAPITULO II

Comiso

Artículo 82. *Procedencia.* El comiso procederá sobre los bienes y recursos del penalmente responsable que provengan o sean producto directo o indirecto del delito, o sobre aquellos utilizados o destinados a ser utilizados en los delitos dolosos como medio o instrumentos para la ejecución del mismo, sin perjuicio de los derechos que tengan sobre ellos los sujetos pasivos o los terceros de buena fe.

Cuando los bienes o recursos producto directo o indirecto del delito sean mezclados o encubiertos con bienes de lícita procedencia, el comiso procederá hasta el valor estimado del producto ilícito, salvo que con tal conducta se configure otro delito, pues en este último evento procederá sobre la totalidad de los bienes comprometidos en ella.

Sin perjuicio también de los derechos de las víctimas y terceros de buena fe, el comiso procederá sobre los bienes del penalmente responsable cuyo valor corresponda o sea equivalente al de bienes producto directo o indirecto del delito, cuando de éstos no sea posible su localización, identificación o afectación material, o no resulte procedente el comiso en los términos previstos en los incisos precedentes.

Decretado el comiso, los bienes pasarán en forma definitiva a la Fiscalía General de la Nación a través del Fondo Especial para la Administración de Bienes, a menos que la ley disponga su destrucción o destinación diferente.

Parágrafo. Para los efectos del comiso se entenderán por bienes todos los que sean susceptibles de valoración económica o sobre los cuales pueda recaer derecho de dominio, corporales o incorporales, muebles o inmuebles, tangibles o intangibles, así como los documentos o instrumentos que pongan de manifiesto el derecho sobre los mismos.

Artículo 83. *Medidas cautelares sobre bienes susceptibles de comiso.* Se tendrán como medidas materiales con el fin de garantizar el comiso la incautación y ocupación, y como medida jurídica la suspensión del poder dispositivo.

Las anteriores medidas procederán cuando se tengan motivos fundados para inferir que los bienes o recursos son producto directo o indirecto de un delito doloso, que su valor equivale a dicho producto, que han sido utilizados o estén destinados a ser utilizados como medio o instrumento de un delito doloso, o que constituyen el objeto material del mismo, salvo que deban ser devueltos al sujeto pasivo, a las víctimas o a terceros.

Artículo 84. *Trámite en la incautación u ocupación de bienes con fines de comiso.* Dentro de las 36 horas siguientes a la incautación u ocupación de bienes o recursos con fines de comiso, efectuadas por orden del Fiscal General de la Nación o su delegado, o por acción de la Policía Judicial en los eventos señalados en este código, el fiscal comparecerá ante el juez de control de garantías para que realice la audiencia de revisión de la legalidad sobre lo actuado.

Artículo 85. *Suspensión del poder dispositivo.* En la formulación de imputación o en audiencia preliminar el fiscal podrá solicitar la suspensión del poder dispositivo de bienes y recursos con fines de comiso, que se mantendrá hasta tanto se resuelva sobre el mismo con carácter definitivo o se disponga su devolución.

Presentada la solicitud, el juez de control de garantías dispondrá la suspensión del poder dispositivo de los bienes y recursos cuando constate alguna de las circunstancias previstas en el artículo anterior. Si determina que la medida no es procedente, el fiscal examinará si el bien

se encuentra dentro de una causal de extinción de dominio, evento en el cual dispondrá en forma inmediata lo pertinente para que se promueva la acción respectiva.

En todo caso, para solicitar la suspensión del poder dispositivo de bienes y recursos con fines de comiso, el fiscal tendrá en cuenta el interés de la justicia, el valor del bien y la viabilidad económica de su administración.

Artículo 86. *Administración de los bienes.* Los bienes y recursos que sean objeto de medidas con fines de comiso quedarán a disposición del Fondo Especial para la Administración de Bienes de la Fiscalía General de la Nación para su administración de acuerdo con los sistemas que para tal efecto establezca la Ley, y deberán ser relacionados en un Registro Público Nacional de Bienes. Tales medidas deberán inscribirse dentro de los tres (3) días siguientes a su adopción en las oficinas de registro correspondientes cuando la naturaleza del bien lo permita.

Parágrafo. Se exceptúan de la administración del Fondo Especial para la Administración de Bienes de la Fiscalía General de la Nación los bienes que tienen el carácter de elemento material probatorio, que serán objeto de las normas previstas en este código para la cadena de custodia.

Artículo 87. *Destrucción del objeto material del delito.* En las actuaciones por delitos contra la salud pública, los derechos de autor, falsificación de moneda o las conductas descritas en los artículos 300, 306 y 307 del Código Penal, los bienes que constituyen su objeto material una vez cumplidas las previsiones de este código para la cadena de custodia y establecida su ilegitimidad, serán destruidos por las autoridades de policía judicial en presencia del fiscal y del agente del Ministerio Público.

Artículo 88. *Devolución de bienes.* Además de lo previsto en otras disposiciones de este código, antes de formularse la acusación y por orden del fiscal serán devueltos los bienes y recursos incautados u ocupados a quien tenga derecho a recibirlos cuando no sean necesarios para la indagación o investigación, o se determine que no se encuentran en una circunstancia en la cual procede su comiso; sin embargo, en caso de requerirse para promover acción de extinción de dominio dispondrá lo pertinente para dicho fin.

En las mismas circunstancias y a petición del fiscal, el juez que ejerce las funciones de control de garantías dispondrá el levantamiento de la medida de suspensión del poder dispositivo.

Artículo 89. *Bienes o recursos no reclamados.* Ordenada la devolución de bienes o recursos, se comunicará a quien tenga derecho a recibirlos para que los reclame dentro de los quince (15) días siguientes a la decisión que así lo determine. Transcurrido el término anterior sin que los bienes sean reclamados, se dejarán a disposición del Fondo Especial para la Administración de Bienes de la Fiscalía General de la Nación para que adelante el trámite administrativo relativo al abandono de bienes que para tal efecto establecerá la ley sobre administración de bienes.

De la misma forma se procederá si se desconoce al titular, poseedor o tenedor de los bienes que fueron afectados.

Lo dispuesto en este artículo se entiende sin perjuicio de lo establecido en normas especiales.

Artículo 90. *Omisión de pronunciamiento sobre los bienes.* Si en la sentencia o decisión con efectos equivalentes se omite el pronunciamiento definitivo sobre los bienes afectados con fines de comiso, la defensa, el fiscal o el Ministerio Público podrán solicitar en la misma audiencia la adición de la decisión con el fin de obtener el respectivo pronunciamiento.

Artículo 91. *Suspensión y cancelación de la personería jurídica.* En cualquier momento y antes de presentarse la acusación, a petición de la fiscalía, el juez de control de garantías ordenará a la autoridad competente que, previo el cumplimiento de los requisitos legales establecidos para ello, proceda a la suspensión de la personería jurídica o al cierre temporal de los locales o establecimientos abiertos al público, de personas jurídicas o naturales, cuando existan motivos fundados que permitan inferir que se han dedicado total o parcialmente al desarrollo de actividades delictivas.

Las anteriores medidas se dispondrán con carácter definitivo en la sentencia condenatoria cuando exista convencimiento más allá de toda duda razonable sobre las circunstancias que las originaron.

TITULO III
LAS VICTIMAS
CAPITULO I

Derechos de las víctimas

Artículo 92. *Víctimas*. Se entiende por víctimas, para efectos de este código, las personas naturales o jurídicas y demás sujetos de derechos que individual o colectivamente hayan sufrido algún daño directo como consecuencia del injusto.

La condición de víctima se tiene con independencia de que se identifique, aprehenda, enjuicie o condene al autor del injusto e independientemente de la relación familiar entre éste y la víctima.

Artículo 93. *Atención y protección inmediata a las víctimas*. La Fiscalía General de la Nación adoptará las medidas necesarias para la atención de las víctimas, la garantía de su seguridad personal y familiar, y la protección frente a toda publicidad que implique un ataque indebido a su vida privada o dignidad.

Las medidas de atención y protección a las víctimas no podrán redundar en perjuicio de los derechos del imputado o de un juicio justo e imparcial, ni serán incompatibles con estos.

Artículo 94. *Medidas de atención y protección a las víctimas*. Las víctimas, en garantía de su seguridad y el respeto a su intimidad, podrán por conducto del fiscal solicitar al juez de control de garantías las medidas indispensables para su atención y protección.

Igual solicitud podrán formular las víctimas, por sí mismas o por medio de su abogado, durante el juicio oral y el incidente de reparación integral.

Artículo 95. *Garantía de comunicación a las víctimas*. Los derechos reconocidos serán comunicados por el fiscal a la víctima desde el momento mismo en que ésta intervenga.

Igualmente se le informará sobre las facultades y derechos que puede ejercer contra aquellos que deban responder civilmente por los perjuicios causados con el injusto, y de la disponibilidad que tiene de formular una pretensión indemnizatoria en el proceso por conducto del fiscal, o de manera directa en el incidente de reparación integral.

Artículo 96. *Derecho a recibir información*. A quien demuestre sumariamente su calidad de víctima la policía y la Fiscalía General de la Nación, por medio de la oficina de atención a las víctimas, le suministrarán información sobre:

1. Organizaciones a las que puede dirigirse para obtener apoyo.
2. El tipo de apoyo o de servicios que puede recibir.
3. El lugar y el modo de presentar una denuncia o una querrela.
4. Las actuaciones subsiguientes a la denuncia y su papel respecto de aquellas.
5. El modo y las condiciones en que puede pedir protección.
6. Las condiciones en que de modo gratuito puede acceder a asesoría o asistencia jurídicas, asistencia o asesoría psicológicas u otro tipo de asesoría.
7. Los requisitos para acceder a una indemnización.
8. Los mecanismos de defensa que puede utilizar.

La Fiscalía General de la Nación, por medio del fiscal que coordine la investigación o de la Oficina de Atención a las Víctimas, garantizará que cuando así lo solicite la víctima sea informada sobre:

1. El trámite dado a su denuncia o querrela.
2. Los elementos pertinentes que le permitan, en caso de acusación o preclusión, seguir el desarrollo de la actuación.
3. La posibilidad de dar aplicación al principio de oportunidad y a ser escuchada tanto por la Fiscalía como por el juez de control de garantías, cuando haya lugar a ello.
4. La fecha y el lugar del juicio oral.

5. La fecha en que tendrá lugar la audiencia de dosificación de la pena.

6. La sentencia del juez y el derecho que le asiste a promover el incidente de reparación integral.

También adoptará las medidas necesarias para garantizar, en caso de existir un riesgo para las víctimas que participen en la actuación, que se les informe sobre la puesta en libertad de la persona inculpada.

Artículo 97. *Intervención de las víctimas en la actuación penal*. Las víctimas del injusto, en garantía de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación, tienen el derecho de intervenir en todas las fases de la actuación penal, de acuerdo con las siguientes reglas:

1. Las víctimas podrán solicitar al fiscal en cualquier momento de la actuación medidas de protección frente a probables hostigamientos, amenazas o atentados en su contra o de sus familiares.

2. El interrogatorio de las víctimas debe realizarse con respeto de su situación personal, derechos y dignidad;

3. Para el ejercicio de sus derechos no es obligatorio que las víctimas estén representadas por un abogado; sin embargo, a partir de la audiencia preparatoria y para intervenir tendrán que ser asistidas por un profesional del derecho.

4. En caso de existir pluralidad de víctimas, el fiscal, durante la investigación, solicitará que éstas designen hasta dos abogados que las represente. De no llegarse a un acuerdo, el fiscal determinará lo más conveniente y efectivo.

5. Si la víctima no contare con medios suficientes para contratar un abogado a fin de intervenir, previa solicitud y comprobación sumaria de la necesidad, la Oficina de Atención a Víctimas de la Fiscalía General de la Nación le designará uno de oficio.

6. El juez podrá en forma excepcional, y con el fin de proteger a las víctimas, decretar que durante su intervención el juicio se celebre a puerta cerrada.

7. Las víctimas podrán formular ante el juez de conocimiento el incidente de reparación integral, una vez establecida la responsabilidad penal del imputado.

CAPITULO II

Medidas cautelares

Artículo 98. *Medidas cautelares sobre bienes*. El juez de control de garantías, en la audiencia de formulación de la imputación o con posterioridad a ella, a petición del fiscal o de las víctimas directas podrá decretar sobre bienes del imputado o del acusado las medidas cautelares necesarias para proteger el derecho a la indemnización de los perjuicios causados con el delito.

La víctima directa acreditará sumariamente su condición de tal, la naturaleza del daño recibido y la cuantía de su pretensión.

El embargo y secuestro de los bienes se ordenará en cuantía suficiente para garantizar el pago de los perjuicios que se hubieren ocasionado, previa caución que se debe prestar de acuerdo al régimen establecido en el código de procedimiento civil, salvo que la solicitud sea formulada por el fiscal o que exista motivo fundado para eximir de ella al peticionante.

El juez, una vez decretado el embargo y secuestro, designará secuestro y adelantará el trámite posterior conforme a las normas que regulan la materia en el Código de Procedimiento Civil.

Cuando las medidas afecten un bien inmueble que esté ocupado o habitado por el imputado o acusado, se dejará en su poder a título de depósito gratuito, con el compromiso de entregarlo a un secuestro o a quien el funcionario indique si se profiere sentencia condenatoria en su contra.

Parágrafo. En los procesos en los que sean víctimas los menores de edad o los incapaces, el Ministerio Público podrá solicitar el embargo y secuestro de los bienes del imputado en las mismas condiciones señaladas en este artículo, salvo la obligación de prestar caución.

Artículo 99. *Criterios para decretar medidas cautelares.* El juez al decretar embargos y secuestros los limitará a lo necesario, de acuerdo con las reglas establecidas en el Código de Procedimiento Civil.

Artículo 100. *Proporcionalidad.* No se podrán ordenar medidas cautelares sobre bienes del imputado o acusado cuando aparezcan desproporcionadas en relación con la gravedad del daño y la probable sentencia sobre la pretensión de reparación integral o tasación de perjuicios.

Artículo 101. *Cumplimiento de las medidas.* Las medidas cautelares se cumplirán en forma inmediata después de haber sido decretadas, y se notificarán a la parte a quien afectan, una vez cumplidas.

Artículo 102. *Desembargo.* Podrá decretarse el desembargo de bienes, cuando el imputado preste caución en dinero efectivo o mediante póliza de compañía de seguros o garantía bancaria, por el monto que el juez señale para garantizar el pago de los daños y perjuicios que llegaren a establecerse, como de las demás obligaciones de contenido económico a que hubiere lugar.

La caución en dinero efectivo se considerará embargada para todos los efectos legales.

Señalado el monto de la caución, el interesado deberá prestarla dentro de un término no mayor de veinte (20) días contados a partir de la fecha en que se impuso.

Cuando se profiera preclusión de la investigación o sentencia absolutoria, siempre que no sea posible intentar la acción civil, se condenará al peticionario temerario al pago de los perjuicios que con la práctica de las medidas cautelares se hubieren ocasionado al imputado.

Artículo 103. *Modificación de las medidas cautelares.* El juez, a solicitud del imputado, acusado o condenado, deberá examinar la necesidad de las medidas cautelares y, si lo considera pertinente, sustituir las por otras menos gravosas o reducirlas cuando sean excesivas.

Artículo 104. *Prohibición de enajenar.* El imputado dentro del proceso penal no podrá enajenar bienes sujetos a registro durante el año siguiente a la formulación de la imputación. Esta obligación deberá ser impuesta expresamente en la audiencia correspondiente. Cualquier negociación que se haga sobre los bienes sin autorización del juez será nula y así se deberá decretar.

Esta medida regirá hasta el momento en que se garantice la indemnización de perjuicios o haya pronunciamiento de fondo sobre su inocencia.

Para los efectos del presente artículo el juez comunicará la prohibición a la oficina de registro correspondiente.

Lo anterior sin perjuicio de los negocios jurídicos realizados con anterioridad y que deban perfeccionarse en el transcurso del proceso y de los derechos de los terceros de buena fe, quienes podrán hacerlos valer.

Artículo 105. *Autorizaciones especiales.* El juez podrá autorizar que se realicen operaciones mercantiles sobre los bienes descritos en el artículo anterior, cuando aquellas sean necesarias para el pago de los perjuicios. Igual autorización procederá para los bienes entregados en forma provisional. El negocio jurídico deberá ser autorizado por el funcionario, y el importe deberá consignarse directamente a órdenes del despacho judicial.

Cuando la venta sea necesaria en desarrollo del giro ordinario de los negocios del sindicado o esté acreditada la existencia de bienes suficientes para atender una eventual indemnización, se podrá autorizar aquella.

Artículo 106. *Medidas patrimoniales a favor de las víctimas.* El fiscal, a solicitud del interesado, podrá:

1. Ordenar la restitución inmediata a la víctima de los bienes objeto del delito que hubieren sido recuperados.
2. Autorizar a la víctima el uso y disfrute provisional de bienes que, habiendo sido adquiridos de buena fe, hubieran sido objeto de delito.
3. Reconocer las ayudas provisionales con cargo al fondo de compensación para las víctimas.

Artículo 107. *Afectación de bienes en delitos culposos.* En los delitos culposos, los vehículos automotores, naves o aeronaves o cualquier unidad montada sobre ruedas y los demás objetos que tengan libre comercio, una vez cumplidas dentro de los diez (10) días siguientes las previsiones de este código para la cadena de custodia tratándose de macroelementos materiales probatorios, se entregarán provisionalmente al propietario, poseedor o tenedor legítimo, salvo que se haya solicitado y decretado su embargo y secuestro.

Tratándose de vehículos de servicio público colectivo, podrán ser entregados a título de depósito provisional al representante legal de la empresa a la cual se encuentre afiliado con la obligación de rendir cuentas sobre lo producido y la devolución el funcionario judicial así lo disponga. En tal caso, no procederá la entrega hasta tanto no se tome decisión definitiva respecto de ellos.

La entrega será definitiva cuando se garantice el pago de los perjuicios, o se hayan embargado bienes del imputado o acusado en cuantía suficiente para proteger el derecho a la indemnización de los perjuicios causados con el delito.

Artículo 108. *Suspensión y cancelación de registros obtenidos fraudulentamente.* En cualquier momento y antes de presentarse la acusación, a petición de la Fiscalía, el juez de control de garantías dispondrá la suspensión del poder dispositivo de los bienes sujetos a registro cuando existan motivos fundados para inferir que el título de propiedad fue obtenido fraudulentamente.

En la sentencia condenatoria se ordenará la cancelación de los títulos y registros respectivos cuando exista convencimiento más allá de toda duda razonable sobre las circunstancias que originaron la anterior medida.

Lo dispuesto en este artículo también se aplicará respecto de los títulos valores sujetos a esta formalidad y obtenidos fraudulentamente.

Si estuviere acreditado que con base en las calidades jurídicas derivadas de los títulos cancelados se están adelantando procesos ante otras autoridades, se pondrá en conocimiento la decisión de cancelación para que se tomen las medidas correspondientes.

CAPITULO III

Del ejercicio del incidente de reparación integral

Artículo 109. *Procedencia y ejercicio del incidente de reparación integral.* En firme la decisión de primera instancia, o proferida la de segundo grado que declare la responsabilidad penal y, previa solicitud expresa de la víctima, o en su defecto del fiscal o del Ministerio Público, el juez fallador abrirá el incidente de reparación integral de los daños causados con la conducta criminal, y convocará a audiencia pública dentro de los quince (15) días siguientes.

Al iniciarse la audiencia de manera oral el incidentante formulará en contra del condenado su pretensión, con expresión concreta de la forma de reparación integral a la que aspira e indicación de las pruebas que hará valer.

Si la pretensión es únicamente económica, podrá ser formulada por la víctima directa, sus herederos, sucesores o causahabientes y por el Ministerio Público.

Artículo 110. *Trámite del incidente de reparación integral.* Iniciada la audiencia el juez examinará la pretensión y deberá rechazarla si quien la promueve no es víctima o está acreditado el pago efectivo de los perjuicios y éste fuere la única pretensión formulada. Esta decisión podrá ser impugnada en los términos establecidos en el presente código.

Cuando se admita la pretensión el juez la pondrá en conocimiento del condenado para que en la misma audiencia conteste lo que tenga a bien y ofrezca sus propios medios de prueba. Acto seguido el juez convocará a las partes a una audiencia de conciliación y prueba, la cual deberá celebrarse dentro de los quince (15) días siguientes.

Artículo 111. *Audiencia de conciliación y prueba.* El día y hora señalados el juez realizará la audiencia, la cual iniciará con la celebración de un trámite de conciliación. De lograrse el acuerdo, su contenido se incorporará en la decisión. En caso contrario, se procederá a la práctica

de la prueba ofrecida por cada parte y se oirá el fundamento de sus pretensiones.

La ausencia injustificada del solicitante a la audiencia implicará el desistimiento de la pretensión, el archivo de la solicitud y la condena en costas.

Si injustificadamente no compareciere el condenado se recibirá la prueba ofrecida por los presentes y, con base en ella, se resolverá. Quien no comparezca, habiendo sido citado en forma debida, quedará vinculado a los resultados de la sentencia del incidente.

Artículo 112. *Decisión de reparación integral.* En la misma audiencia el juez, mediante fallo que ponga fin al incidente, dictará la decisión definitiva sobre la pretensión de reparación integral, tasación del daño o perjuicio.

En firme esta decisión, a solicitud de parte interesada, el juez procederá a su ejecución.

Artículo 113. *Caducidad.* La solicitud para la reparación integral por medio de este procedimiento especial caduca a los seis (6) meses de haber adquirido el carácter de firme la decisión que declaró la responsabilidad penal.

TITULO IV SUJETOS PROCESALES CAPITULO I

Fiscalía General de la Nación

Artículo 114. *Composición.* La Fiscalía General de la Nación para el ejercicio de la acción penal estará integrada por el Fiscal General de la Nación, el Vicefiscal y los fiscales previstos en el estatuto orgánico de la institución.

Artículo 115. *Atribuciones.* La Fiscalía General de la Nación, para el cumplimiento de sus funciones constitucionales y legales, tiene las siguientes atribuciones:

1. Investigar y acusar a los presuntos responsables de haber cometido un delito.

2. Aplicar el principio de oportunidad en los términos y condiciones definidos por este código.

3. Ordenar registros, allanamientos, incautaciones e interceptaciones de comunicaciones, y poner a disposición del juez de control de garantías los elementos recogidos, para su control de legalidad dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes.

4. Asegurar los elementos materiales probatorios, garantizando su cadena de custodia mientras se ejerce su contradicción.

5. Dirigir y coordinar las funciones de policía judicial que en forma permanente ejerce su cuerpo técnico de investigación, la Policía Nacional y los demás organismos que señale la ley.

6. Velar por la protección de las víctimas, los jurados, los testigos y demás intervinientes en el proceso penal.

7. Ordenar capturas, de manera excepcional y en los casos previstos en este código, y poner a la persona capturada a disposición del juez de control de garantías, a más tardar dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes.

8. Solicitar al juez de control de garantías las medidas necesarias que aseguren la comparecencia de los imputados al proceso penal, la conservación de la prueba y la protección de la comunidad, en especial de las víctimas.

9. Presentar la acusación ante el juez de conocimiento para dar inicio al juicio oral.

10. Solicitar ante el juez del conocimiento la preclusión de las investigaciones, cuando no hubiere mérito para acusar.

11. Intervenir en la etapa del juicio en los términos de este código.

12. Solicitar ante el juez del conocimiento las medidas judiciales necesarias para la asistencia de las víctimas, el restablecimiento del derecho y la reparación integral de los efectos del injusto.

13. Interponer y sustentar los recursos ordinarios y extraordinarios y la acción de revisión en los supuestos establecidos por este código.

14. Solicitar nulidades cuando a ello hubiere lugar.

15. Las demás que le asigne la ley.

Artículo 116. *Principio de objetividad.* La Fiscalía General de la Nación, con el apoyo de los organismos que ejerzan funciones de policía judicial, adecuará su actuación a un criterio objetivo y transparente, ajustado jurídicamente para la correcta aplicación de la Constitución Política y la ley.

Artículo 117. *Atribuciones especiales del Fiscal General de la Nación.* Corresponde al Fiscal General de la Nación en relación con el ejercicio de la acción penal:

1. Investigar y acusar, si hubiere lugar, a los servidores públicos que gocen de fuero constitucional, con las excepciones previstas en la Constitución.

2. Asumir personal y directamente las investigaciones y procesos cuando lo estime necesario, cualquiera que sea el estado en que se encuentren.

3. Asignar y desplazar libremente a los servidores de la Fiscalía General de la Nación.

4. Determinar el criterio y la posición que la Fiscalía General de la Nación deba asumir en virtud de los principios de unidad de gestión y jerarquía, sin perjuicio de la autonomía de los fiscales delegados en los términos y condiciones fijados por la ley.

Artículo 118. *La policía judicial.* Los organismos que cumplan funciones de policía judicial actuarán bajo la dirección y coordinación de la Fiscalía General de la Nación, para lo cual deberán acatar las instrucciones impartidas por el Fiscal General, el vicefiscal, los fiscales en cada caso concreto, a los efectos de la investigación y el juzgamiento.

La omisión en el cumplimiento de las instrucciones mencionadas constituye causal de mala conducta, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa, penal, disciplinaria y civil del infractor. En todo caso, el Fiscal General de la Nación o su delegado, bajo su responsabilidad, deberá separar de forma inmediata de las funciones que se le hayan dado para el desarrollo investigativo, a cualquier servidor público que omita o se extralimite en el cumplimiento de las instrucciones dadas.

CAPITULO II **Defensa**

Artículo 119. *Integración y designación.* La defensa estará a cargo del abogado principal que libremente designe el imputado o, en su defecto, por el que le sea asignado por el Sistema Nacional de Defensoría Pública.

Artículo 120. *Oportunidad.* La designación del defensor del imputado deberá hacerse desde la captura si hubiere lugar a ella, o desde la formulación de la imputación. En todo caso deberá contar con éste desde la primera audiencia a la que fuere citado.

Artículo 121. *Reconocimiento.* Una vez aceptada la designación el defensor podrá actuar sin necesidad de formalidad alguna para su reconocimiento, excepto la tarjeta profesional.

Artículo 122. *Dirección de la Defensa.* El defensor que haya sido designado como principal dirigirá la defensa, pudiendo incluso seleccionar otro abogado que lo acompañe como defensor suplente, previa información al juez. Este defensor suplente actuará bajo la responsabilidad del principal y podrá ser removido libremente durante el proceso.

Artículo 123. *Incompatibilidad de la defensa.* La defensa de varios imputados podrá adelantarla un defensor común, siempre y cuando no medie conflicto de interés ni las defensas resulten incompatibles entre sí.

Si se advirtiera la presencia del conflicto y la defensa no lo resolviera mediante la renuncia del encargo correspondiente, el imputado o cualquier otro sujeto procesal podrá solicitar al juez, el relevo del defensor discernido. En este evento el imputado podrá designar un nuevo defensor. Si no hubiere otro y de encontrarse en imposibilidad para ello, el Sistema Nacional de Defensoría Pública le proveerá uno, de conformidad con las reglas generales.

Artículo 124. *Sustitución del defensor.* Únicamente el defensor principal podrá sustituir la designación en otro abogado, pudiéndose reservar el derecho de reasumir la defensa en la oportunidad que estime conveniente.

Artículo 125. *Derechos y facultades.* La defensa podrá ejercer todos los derechos y facultades que los tratados internacionales relativos a Derechos Humanos que forman parte del bloque de constitucionalidad, la Constitución Política y la ley reconocen en favor del imputado.

Artículo 126. *Atribuciones especiales.* En especial la defensa tendrá las siguientes atribuciones:

1. Asistir personalmente al imputado desde su captura, a partir de la cual deberá garantizársele la oportunidad de mantener comunicación privada con él.

2. Disponer de tiempo y medios razonables para la preparación de la defensa, incluida la posibilidad excepcional de obtener prórrogas justificadas para la celebración del juicio oral.

3. En el evento de una acusación, conocer en su oportunidad todos los elementos probatorios e informaciones de que tenga noticia la Fiscalía General de la Nación, incluidos los que sean favorables al procesado.

4. Controvertir las pruebas, aunque sean practicadas en forma anticipada previamente al juicio oral.

5. Interrogar y contrainterrogar en audiencia pública a los testigos y peritos.

6. Solicitar al juez la comparecencia, aun por medios coercitivos, de los testigos y peritos que puedan arrojar luz sobre los hechos materia de debate en el juicio oral.

7. Interponer y sustentar, si lo estimare conveniente, las nulidades, los recursos ordinarios y extraordinarios y la acción de revisión.

8. No ser obligado a presentar prueba de descargo o contraprueba, ni a intervenir activamente durante el juicio oral.

9. Abstenerse de revelar información relacionada con el proceso y su cliente, conforme a la ley.

CAPITULO III

Ministerio Público

Artículo 127. *El Ministerio Público.* De conformidad con las reglas constitucionales y legales la intervención del Ministerio Público en el proceso penal será contingente. El Procurador General de la Nación directamente o por intermedio del procurador delegado para el Ministerio Público, o a quienes se les haya delegado la función por el primero, constituirán agencias especiales en los procesos penales de significativa y relevante importancia, de acuerdo a los criterios internos diseñados por el supremo director del Ministerio Público, de conformidad con la función constitucional selectiva de intervención.

Los personeros distritales y municipales actuarán como agentes del Ministerio Público en el proceso penal.

Artículo 128. *De la agencia especial.* La constitución de “agente especial” del Ministerio Público tendrá origen oficioso o por petición de cualquiera de las intervinientes en el proceso penal.

Artículo 129. *Funciones del Ministerio Público.* Son funciones del Ministerio Público en la indagación, la investigación y el juzgamiento:

1. Como garante de los derechos humanos y de los derechos fundamentales:

a) Ejercer vigilancia sobre las actuaciones de la policía judicial que puedan afectar garantías fundamentales;

b) Participar en aquellas diligencias o actuaciones realizadas por la Fiscalía General de la Nación y los jueces de la República que impliquen afectación o menoscabo de un derecho fundamental;

c) Procurar que las decisiones judiciales cumplan con los cometidos de lograr la verdad y la justicia;

d) Procurar que las condiciones de privación de la libertad como medida cautelar y como pena o medida de seguridad se cumplan de conformidad con los tratados internacionales, la Carta Política y la ley;

e) Procurar que de manera temprana y definitiva se defina la competencia entre diferentes jurisdicciones en procesos por graves violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario;

f) Procurar el cumplimiento del debido proceso y el derecho de defensa.

2. Como representante de la sociedad:

a) Solicitar condena o absolución de los acusados e intervenir en la audiencia de control judicial de la preclusión de la investigación;

b) Procurar la indemnización de perjuicios, el restablecimiento y la restauración del derecho en los eventos de agravio a los intereses colectivos, solicitar las pruebas que a ello conduzcan y las medidas cautelares que procedan;

c) Velar porque se respeten los derechos de las víctimas, testigos, jurados y demás intervinientes en el proceso, así como verificar su efectiva protección por el Estado;

d) Participar en aquellas diligencias o actuaciones donde proceda la disponibilidad del derecho por parte de la víctima individual o colectiva y en las que exista disponibilidad oficial de la acción penal, procurando que la voluntad otorgada sea real y que no se afecten los derechos de los perjudicados, así como los principios de verdad y justicia, en los eventos de aplicación del principio de oportunidad;

e) Denunciar los fraudes y colusiones procesales.

CAPITULO IV

Imputado

Artículo 130. *Cualificación.* El carácter de sujeto procesal como imputado se adquiere desde su vinculación a la actuación mediante captura, si ésta ocurriere primero, o desde la formulación de la imputación. A partir de la presentación de la acusación adquirirá la condición de acusado.

Artículo 131. *Ausencia del imputado.* Cuando el fiscal no haya podido ubicar el paradero de una persona, y la requiera para formularle imputación o tomar alguna medida de aseguramiento que la afecte, solicitará ante el juez de control de garantías que lo declare persona ausente. El imputado se emplazará mediante edicto que se fijará en un lugar visible de la secretaría por el término de cinco (5) días hábiles y se publicará en un medio radial o de prensa local.

Cumplido lo anterior el juez lo declarará persona ausente, actuación que quedará debidamente registrada, así como el abogado designado por el sistema nacional de defensoría pública que lo asistirá y representará en todas las actuaciones, con el cual se surtirán todos los avisos o notificaciones. Esta declaratoria es válida para toda la actuación.

El juez verificará que se hayan agotado mecanismos de búsqueda y citaciones suficientes y razonables para obtener la comparecencia del procesado.

Artículo 132. *Identificación.* La Fiscalía General de la Nación estará obligada a verificar la correcta individualización del imputado, a fin de prevenir errores judiciales.

Artículo 133. *Registro de personas vinculadas.* La Fiscalía llevará un registro de las personas a las cuales se haya vinculado a una investigación penal. Para el efecto, el funcionario que realice la vinculación lo informará dentro de los cinco (5) días siguientes a la decisión, al sistema que para tal efecto lleve la Fiscalía General de la Nación.

Artículo 134. *Atribuciones.* Además de los derechos reconocidos en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos ratificados por Colombia y que forman parte del bloque de constitucionalidad, de la Constitución Política y de la ley, en especial de los previstos en el artículo 8 de este código, el imputado o procesado, según el caso, dispondrá de las mismas atribuciones asignadas a la defensa que resultan compatibles con su condición. En todo caso, de mediar conflicto entre las peticiones o actuaciones de la defensa con las del imputado o procesado prevalecen las de aquella.

Artículo 135. *Renuncia.* Si el imputado o procesado decidiera hacer uso del derecho que le asiste de renunciar a los derechos de guardar

silencio y del juicio oral, deberá el juez de control de garantías o el juez de conocimiento verificar que se trata de una decisión libre, consciente voluntaria, debidamente informada, asesorada por la defensa, para lo cual será imprescindible el Interrogatorio personal del imputado o procesado.

TITULO V DEBERES Y PODERES

DE LOS INTERVINIENTES EN EL PROCESO PENAL

CAPITULO I

De los deberes de los servidores judiciales

Artículo 136. *Deberes.* Son deberes comunes de todos los servidores públicos, funcionarios judiciales e intervinientes en el proceso penal, en el ámbito de sus respectivas competencias y atribuciones, los siguientes:

1. Resolver los asuntos sometidos a su consideración dentro de los términos previstos en la ley y con sujeción a los principios y garantías que orientan el ejercicio de la función jurisdiccional.

2. Respetar, garantizar y velar por la salvaguarda de los derechos de quienes intervienen en el proceso.

3. Realizar personalmente las tareas que le sean confiadas y responder por el uso de la autoridad que les haya sido otorgada o de la ejecución de las órdenes que pueda impartir, sin que en ningún caso quede exento de la responsabilidad que le incumbe por la que le corresponda a sus subordinados.

4. Guardar reserva sobre los asuntos relacionados con su función, aún después de haber cesado en el ejercicio del cargo.

5. Atender oportuna y debidamente las peticiones dirigidas por los intervinientes dentro del proceso penal.

6. Abstenerse de presentar en público al imputado o acusado como responsable.

7. Los demás establecidos en la ley estatutaria de administración de justicia y en el código Disciplinario Unico que resulten aplicables.

Artículo 137. *Deberes específicos de los jueces.* Sin perjuicio de lo establecido en el artículo anterior, constituyen deberes especiales de los jueces, en relación con el proceso penal, los siguientes:

1. Evitar las maniobras dilatorias y todos aquellos actos que sean manifiestamente inconducentes, impertinentes o superfluos, mediante el rechazo de plano de los mismos.

2. Ejercer los poderes disciplinarios y aplicar las medidas correccionales atribuidos por este Código y demás normas aplicables, con el fin de asegurar la eficiencia y transparencia de la administración de justicia.

3. Corregir los actos irregulares.

4. Motivar breve y adecuadamente las medidas que afecten los derechos fundamentales de imputado y de los demás sujetos procesales.

5. Decidir la controversia suscitada durante las audiencias para lo cual no podrá abstenerse so pretexto de ignorancia, silencio, contradicción, deficiencia, oscuridad o ambigüedad de las normas aplicables.

6. Dejar constancia expresa de haber cumplido con las normas referentes a los derechos y garantías del imputado o acusado y de las víctimas.

CAPITULO II

De los deberes de los sujetos procesales

Artículo 138. *Deberes.* Son deberes de los sujetos procesales:

1. Proceder con lealtad y buena fe en todos sus actos.

2. Obrar sin temeridad en sus pretensiones o en el ejercicio de los derechos procesales, evitando los planteamientos y maniobras dilatorias inconducentes, impertinentes o superfluas.

3. Abstenerse de usar expresiones injuriosas en sus intervenciones.

4. Guardar el respeto debido a los servidores judiciales y a los demás intervinientes en el proceso penal.

5. Comunicar cualquier cambio de domicilio, residencia, lugar o dirección electrónica señalada para recibir las notificaciones o comunicaciones.

6. Comparecer oportunamente a las diligencias y audiencias a las que sean citados.

7. Abstenerse de tener comunicación privada con el juez que participe en la actuación, salvo las excepciones previstas en este código.

8. Guardar silencio durante el trámite de las audiencias, excepto cuando les corresponda intervenir.

9. Entregar a los servidores judiciales correspondientes los objetos y documentos necesarios para la actuación y los que les fueren requeridos, salvo las excepciones legales.

Artículo 139. *Temeridad o mala fe.* Se considera que ha existido temeridad o mala fe, en los siguientes casos:

1. Cuando sea manifiesta la carencia de fundamento legal en la denuncia, recurso, incidente o cualquier otra petición formulada dentro de la actuación procesal.

2. Cuando a sabiendas se aleguen hechos contrarios a la realidad.

3. Cuando se utilice cualquier actuación procesal para fines claramente ilegales, dolosos o fraudulentos.

4. Cuando se obstruya la práctica de pruebas u otra diligencia.

5. Cuando por cualquier otro medio se entorpezca el desarrollo normal de la actuación procesal.

CAPITULO III

Deberes de la Fiscalía General de la Nación

Artículo 140. *Deberes específicos de la Fiscalía General de la Nación.* Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos anteriores, constituyen deberes esenciales de la Fiscalía General de la Nación los siguientes:

1. Proceder con objetividad respetando las directrices del Fiscal General de la Nación.

2. Suministrar, por conducto del juez de conocimiento, todos los elementos probatorios e informaciones de que tenga noticia, incluidos los que le sean favorables al acusado.

3. Asistir de manera ininterrumpida a las audiencias que sean convocadas e intervenir en desarrollo del ejercicio de la acción penal.

4. Informar a la autoridad competente de cualquier irregularidad que observe en el transcurso de la actuación de los funcionarios que ejercen atribuciones de policía judicial.

CAPITULO IV

De los poderes y medidas correccionales

Artículo 141. *Poderes y medidas correccionales.* El juez, de oficio o a solicitud de parte, podrá tomar las siguientes medidas correccionales:

1. A quien formule una recusación o manifieste un impedimento ostensiblemente infundados, lo sancionará con multa de uno (1) hasta diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

2. A quien viole una reserva legalmente establecida lo sancionará con multa de uno (1) a cinco (5) salarios mínimos legales mensuales vigentes. En este caso el funcionario que conozca de la actuación será el competente para imponer la correspondiente sanción.

3. A quien impida, obstaculice o no preste la colaboración para la realización de cualquier diligencia durante la actuación procesal, le impondrá arresto incommutable de uno (1) a treinta (30) días según la gravedad de la obstrucción y tomará las medidas conducentes para lograr la práctica inmediata de la prueba.

4. A quien le falte al debido respeto en el ejercicio de sus funciones o por razón de ellas, o desobedezca órdenes impartidas por él en el ejercicio de sus atribuciones legales lo sancionará con arresto incommutable hasta por cinco (5) días.

5. A quien en las audiencias asuma comportamiento contrario a la solemnidad del acto, a su eficacia o correcto desarrollo, le impondrá como sanción la amonestación, o el desalojo, o la restricción del uso de

la palabra, o multa hasta por diez (10) salarios mínimos legales mensuales o arresto hasta por cinco (5) días, según la gravedad y modalidades de la conducta.

6. A quien solicite pruebas manifiestamente inconducentes o impertinentes, lo sancionará con multa de uno (1) hasta diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

7. A quien en el proceso actúe con temeridad o mala fe, lo sancionará con multa de uno (1) hasta diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

8. Al establecimiento de salud que reciba o dé entrada a persona lesionada sin dar aviso inmediato a la autoridad respectiva, lo sancionará con multa de diez (10) hasta cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

9. Al sujeto procesal que solicite definición de competencia, o cambio de radicación sin fundamento en razones serias y soporte probatorio, lo sancionará con multa de uno (1) hasta diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Parágrafo. En los casos anteriores, si la medida correccional fuere de multa o arresto, su aplicación deberá estar precedida de la oportunidad para que el presunto infractor exprese las razones de su oposición, si las hubiere. Si el funcionario impone la sanción, el infractor podrá solicitar la reconsideración de la medida que, de mantenerse, dará origen a la ejecución inmediata de la sanción, sin que contra ella proceda recurso alguno.

TITULO VI LA ACTUACION CAPITULO I

Oralidad en los procedimientos

Artículo 142. *Idioma.* El idioma oficial en la actuación será el castellano.

El imputado, el acusado o la víctima serán asistidos por un traductor debidamente acreditado o reconocido por el juez en caso de no poder entender o expresarse en el idioma oficial; o por un intérprete en caso de no poder percibir el idioma por los órganos de los sentidos o hacerse entender oralmente.

Artículo 143. *Oralidad en la actuación.* Todos los procedimientos de la actuación, tanto preprocesales como procesales, serán orales.

Artículo 144. *Registro de la actuación.* Se dispondrá el empleo de los medios técnicos idóneos para el registro y reproducción fidedignos de lo actuado, de conformidad con las siguientes reglas, y se prohíben las reproducciones escritas, salvo los actos y providencias que este código expresamente autorice:

1. En las actuaciones de la Fiscalía General de la Nación o de la Policía judicial que requieran declaración juramentada, conservación de la escena de hechos delictivos, registro y allanamiento, interceptación de comunicaciones o cualquier otro acto investigativo que pueda ser necesario en los procedimientos formales, será registrado y reproducido mediante cualquier medio técnico que garantice su fidelidad, genuinidad u originalidad.

2. En las audiencias ante el juez que ejerce la función de control de garantías se utilizará el medio técnico que garantice la fidelidad, genuinidad u originalidad de su registro y su eventual reproducción escrita para efecto de los recursos. Al finalizar la diligencia se elaborará un acta en la que conste únicamente la fecha, lugar, nombre de los intervinientes, la duración de la misma y la decisión adoptada.

3. En las audiencias ante el juez de conocimiento, además de lo anterior, deberá realizarse una reproducción de seguridad con el medio técnico más idóneo posible, la cual sólo se incorporará a la actuación para el trámite de los recursos consagrados en este código.

4. El juicio oral deberá registrarse íntegramente, por cualquier medio de audio-video, o en su defecto audio, que asegure fidelidad.

El registro del juicio servirá únicamente para probar lo ocurrido en el juicio oral, para efectos del recurso de apelación.

Una vez anunciado el sentido del fallo, el secretario elaborará un acta del juicio donde constará la individualización del acusado, la tipificación dada a los hechos por la fiscalía, la autoridad que profirió la decisión y el sentido del fallo.

Igualmente, el secretario será responsable de la inalterabilidad del registro oral del juicio.

5. Cuando este código exija la presencia del imputado ante el juez para efectos de llevar a cabo la audiencia preparatoria o cualquier audiencia anterior al juicio oral, a discreción del juez dicha audiencia podrá realizarse a través de comunicación de audio-video, caso en el cual no será necesaria la presencia física del imputado ante el juez.

El dispositivo de audio-video deberá permitirle al juez observar y conversar simultáneamente con el imputado y su defensor, o con cualquier testigo. El dispositivo de comunicación por audio-video deberá permitir que el imputado pueda sostener conversaciones en privado con su defensor.

La señal del dispositivo de comunicación por audio-video se transmitirá en vivo y en directo, y deberá ser protegida contra cualquier tipo de interceptación.

En las audiencias que deban ser públicas, se situarán monitores en la sala y en el lugar de encarcelamiento, para asegurarle al público, al juez y al imputado una vista clara de la audiencia.

Cualquier documento utilizado durante la audiencia que se realice a través de dispositivo de audio-video, debe poder transmitirse por medios electrónicos. Todas las firmas que consten en documentos transmitidos electrónicamente serán entendidas como firmas originales.

Parágrafo. La conservación y archivo de los registros será responsabilidad de la Fiscalía General de la Nación durante la actuación previa a la formulación de la imputación, y a partir de ella del secretario de las audiencias, en ambos eventos con sujeción a la cadena de custodia. En todo caso, los sujetos procesales tendrán derecho a la expedición de copias de los registros.

Artículo 145. *Celeridad y oralidad.* En las audiencias que tengan lugar con ocasión de la persecución penal, las cuestiones que se debatan serán resueltas en la misma audiencia. Las personas allí presentes se considerarán notificadas por el solo proferimiento oral de una decisión o providencia.

Artículo 146. *Toga.* Sin excepción, durante el desarrollo de las audiencias los jueces deberán usar la toga, según reglamento.

CAPITULO II

Publicidad de los procedimientos

Artículo 147. *Principio de publicidad.* Todas las audiencias que se desarrollen durante la etapa de juzgamiento serán públicas y no se podrá denegar el acceso a nadie, sin decisión judicial previa. Aun cuando se limite la publicidad al máximo, no podrá excluirse a la fiscalía, el acusado, la defensa, el Ministerio Público, la víctima y su representación legal.

El juez podrá limitar la publicidad de todos los procedimientos o parte de ellos, previa audiencia privada con los intervinientes, de conformidad con los artículos siguientes y sin limitar el principio de contradicción.

Estas medidas deberán sujetarse al principio de necesidad y si desaparecieren las causas que dieron origen a esa restricción, el juez la levantará de oficio o a petición de parte.

El juez y la prensa no podrán, en ningún caso, presentar al acusado como culpable. Tampoco se podrá, antes de pronunciarse la sentencia, dar declaraciones sobre el caso a los medios de comunicación.

Artículo 148. *Restricciones a la publicidad por motivos de orden público, seguridad nacional o moral pública.* Cuando el orden público o la seguridad nacional se vean amenazados por la publicidad de un proceso en particular, o se comprometa la preservación de la moral pública, el juez, mediante auto motivado, podrá imponer una o varias de las siguientes medidas:

1. Limitación total o parcial del acceso al público o a la prensa.
2. Imposición a los presentes del deber de guardar reserva sobre lo que ven, oyen o perciben.

Artículo 149. *Restricciones a la publicidad por motivos de seguridad o respeto a las víctimas menores de edad.* En caso de que fuere llamada a declarar una víctima menor de edad, el juez podrá limitar total o parcial el acceso al público o a la prensa.

Artículo 150. *Restricciones a la publicidad por motivos de interés de la justicia.* Cuando los intereses de la justicia se vean perjudicados o amenazados por la publicidad del juicio, en especial cuando la imparcialidad del juez pueda afectarse, el juez, mediante auto motivado, podrá imponer a los presentes el deber de guardar reserva sobre lo que ven, oyen o perciben, o limitar total o parcial el acceso del público o de la prensa.

Artículo 151. *Solicitud especial de restricción de la publicidad de las sesiones de la audiencia pública por parte de la fiscalía.* La fiscalía podrá solicitar al juez la imposición de restricciones a la publicidad total o parcial del juicio, por causas no previstas en los artículos anteriores. El juez, de acuerdo con el principio de necesidad y la integridad del juicio, tomará en consideración la imposición de medidas proporcionales a las causas expuestas.

CAPITULO III

Términos

Artículo 152. *Regla general.* Las actuaciones se desarrollarán con estricto cumplimiento de los términos procesales. Su inobservancia podrá ser sancionada.

Artículo 153. *Oportunidad.* La persecución penal y las indagaciones pertinentes podrán adelantarse en cualquier momento, mientras la acción penal no haya prescrito. En consecuencia, todos los días y horas son hábiles para ese efecto.

Las actuaciones que se desarrollen ante los jueces que cumplan la función de control de garantías serán concentradas. Todos los días y horas son hábiles para el ejercicio de esta función.

Las actuaciones que se surtan ante el juez de conocimiento se adelantarán en días y horas hábiles, de acuerdo con el horario judicial establecido oficialmente.

Sin embargo, cuando las circunstancias particulares de un caso lo ameriten, previa decisión motivada del juez competente, podrán habilitarse otros días con el fin de asegurar el derecho a un juicio sin dilaciones injustificadas.

Artículo 154. *Prórroga y restitución de términos.* Los términos previstos por la ley, o en su defecto fijados por el juez, no son prorrogables. Sin embargo, de manera excepcional y con la debida justificación, cuando el fiscal, el acusado o su defensor lo soliciten para lograr una mejor preparación del caso, el juez podrá acceder a la petición siempre que no exceda el doble del término prorrogado.

Artículo 155. *Término judicial.* El funcionario judicial señalará el término en los casos en que la ley no lo haya previsto, sin que pueda exceder de cinco (5) días.

Artículo 156. *Término para adoptar decisiones.* Salvo disposición en contrario, las decisiones deberán adoptarse en el acto mismo de la audiencia. Para este efecto el juez podrá ordenar un receso en los términos de este código.

CAPITULO IV

Providencias judiciales

Artículo 157. *Clases.* Las providencias judiciales son:

1. Sentencias, si deciden sobre el objeto del proceso, bien en única, primera o segunda instancia, o en virtud de la casación o de la acción de revisión.
2. Autos interlocutorios, si resuelven algún incidente o aspecto sustancial.
3. Ordenes de sustanciación, si se limitan a disponer cualquier otro trámite de los que la ley establece para dar curso a la actuación o evitar

el entorpecimiento de la misma. Serán verbales, de cumplimiento inmediato y de ellas se dejará un registro.

Parágrafo. Las decisiones que en su competencia tome la Fiscalía General de la Nación también se llamarán órdenes y, salvo lo relacionado con audiencia, oralidad y recursos, deberán reunir los requisitos previstos en el artículo siguiente en cuanto le sean predicables.

Artículo 158. *Requisitos comunes.* Las sentencias y autos interlocutorios se adoptarán en audiencia y serán expuestos oralmente, de manera directa por el juez o por conducto de su secretario, y deberán cumplir con los siguientes requisitos:

1. Mención de la autoridad judicial que los profiere.
2. Lugar, día y hora.
3. Identificación del número de radicación de la actuación.
4. Síntesis de la fundamentación fáctica, probatoria y jurídica.
5. Decisión adoptada
6. Si hubiere división de criterios la expresión de los fundamentos del disenso.
7. Señalamiento del recurso que procede contra la decisión y la oportunidad para interponerlo.

Parágrafo. Las sentencias contendrán la determinación de los hechos probados que son objeto de la decisión.

Artículo 159. *Prohibición de transcripciones.* En desarrollo de los principios de oralidad y celeridad las providencias judiciales en ningún caso se podrán transcribir, reproducir o verter a texto escrito apartes de la actuación, excepto las citas o referencias apropiadas para la debida fundamentación de la decisión.

Artículo 160. *Providencias de jueces colegiados o plurales.* La exposición de la decisión estará a cargo del juez que presida la audiencia o el que ellos designen.

Artículo 161. *Expedición de copias.* Las providencias judiciales sólo serán reproducidas a efectos del trámite de los recursos.

Podrán expedirse certificaciones por parte de la secretaría correspondiente donde conste un resumen de lo decidido, previa petición de quien acredite un interés para ello.

Artículo 162. *Comunicación de la sentencia.* Ejecutoriada la sentencia que imponga una pena o medida de seguridad, el funcionario judicial informará de dicha decisión a la Dirección General de prisiones, la Registraduría Nacional del Estado Civil, la Procuraduría General de la Nación y demás organismos que tengan funciones de policía judicial y archivos sistematizados, en el entendido que sólo en estos casos se considerará que la persona tiene antecedentes judiciales.

De igual manera se informarán las sentencias absolutorias en firme a la Fiscalía General de la Nación, con el fin de realizar la actualización de los registros existentes en las bases de datos que se lleven, respecto de las personas vinculadas en los procesos penales.

Artículo 163. *Información acerca de la ejecución de la sentencia.* Los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad, informarán a la Fiscalía General de la Nación acerca de las decisiones adoptadas por su despacho, que afecten la vigencia de la condena o redosifique la pena impuesta, con el fin de realizar las respectivas actualizaciones en las bases de datos que se lleven.

CAPITULO V

Notificación de las providencias, citaciones, y comunicaciones entre los intervinientes en el proceso penal

Artículo 164. *Criterio general.* Se notificarán las sentencias y los autos interlocutorios.

Artículo 165. *Formas.* Por regla general las providencias se notificarán a los sujetos procesales en estrados.

En caso de no comparecer a la audiencia a pesar de haberse hecho la citación oportunamente, se entenderá surtida la notificación salvo que la ausencia se justifique por fuerza mayor o caso fortuito. En este evento la notificación se entenderá realizada al momento de aceptarse la justificación.

De manera excepcional procederá la notificación mediante comunicación escrita dirigida por telegrama, correo certificado, facsímil, correo electrónico o cualquier otro medio idóneo que haya sido suministrado por los sujetos procesales.

Si el imputado o acusado se encontrare privado de la libertad, las providencias notificadas en audiencia le serán comunicadas en el establecimiento de reclusión, de lo cual se dejará la respectiva constancia.

Las decisiones adoptadas con posterioridad al vencimiento del término legal deberán ser notificadas personalmente a los sujetos procesales que tuvieren vocación de impugnación.

Artículo 166. *Registro de la notificación.* El secretario deberá llevar un registro de las notificaciones realizadas tanto en audiencia como fuera de ella, para lo cual podrá utilizar los medios técnicos idóneos.

Artículo 167. *Citaciones. Procedencia.* Cuando se convoque a la celebración de una audiencia o deba adelantarse un trámite especial, deberá citarse a los sujetos procesales, testigos, peritos y demás personas que deban intervenir en la actuación.

La citación para que los intervinientes comparezcan a la audiencia preliminar deberá ser ordenada por el juez de control de garantías.

Artículo 168. *Forma.* Las citaciones se harán por orden del juez en la providencia que así lo disponga, y serán tramitadas por secretaría. A este efecto podrán utilizarse los medios técnicos más expeditos posibles y se guardará especial cuidado de que los intervinientes sean oportuna y verazmente informados de la existencia de la citación.

El juez podrá disponer el empleo de servidores de la administración de justicia y, de ser necesario, de miembros de la fuerza pública o de la policía judicial para el cumplimiento de las citaciones.

Artículo 169. *Contenido.* La citación debe indicar la clase de diligencia para la cual se le requiere y si debe asistir acompañado de abogado. De ser factible se determinará la clase de delito, fecha de la comisión y la víctima del mismo.

Artículo 170. *Comunicación de las peticiones escritas a los demás sujetos procesales.* La petición escrita de parte de alguno de los sujetos procesales dirigida al juez que conoce de la actuación, para ser admitida en secretaría para su trámite, deberá acompañarse de las copias necesarias para la información de los demás intervinientes.

CAPITULO VI

Duración de la Actuación

Artículo 171. *Duración de los procedimientos.* El término de que dispone la fiscalía para formular la acusación, solicitar la preclusión o aplicar el principio de oportunidad, no podrá exceder de treinta (30) días contados desde el día siguiente a la formulación de la imputación.

La audiencia preparatoria deberá realizarse por el juez de conocimiento a más tardar dentro de los treinta (30) días siguientes a la audiencia de formulación de acusación.

La audiencia del juicio oral tendrá lugar dentro de los quince (15) días siguientes a la conclusión de la audiencia preparatoria.

CAPITULO VII

Recursos

Artículo 172. *Procedencia de los recursos ordinarios.* Son recursos ordinarios la reposición y la apelación. La reposición procede para todas las decisiones y se sustenta y resuelve de manera oral e inmediata en la respectiva audiencia.

El recurso de apelación procede contra las decisiones indicadas en este código. Por regla general se concederá en el efecto suspensivo, en cuyo caso la competencia del inferior se suspenderá desde cuando se profiera la decisión que lo conceda, hasta cuando regrese del superior.

En el efecto devolutivo se conceden las apelaciones expresamente señaladas, evento en el cual no se suspende el cumplimiento de la decisión apelada ni el curso de la actuación procesal.

La apelación se interpone y concede de manera oral e inmediata, pero se sustenta por escrito ante el superior, en un plazo de tres (3) días.

Artículo 173. *Trámite y decisión.* Por regla general, salvo los casos expresamente previstos en este código, el superior deberá resolver la apelación en el término máximo de diez (10) días. Durante el trámite del recurso no se podrá practicar pruebas.

CAPITULO VIII

La Casación

Artículo 174. *Finalidad.* El recurso pretende la unificación de la jurisprudencia; la efectividad del derecho material y de las garantías de los sujetos procesales; y la reparación de los agravios inferidos a aquellos.

Artículo 175. *Procedencia.* El recurso como control constitucional y legal procede contra las sentencias absolutorias y condenatorias proferidas en segunda instancia en los procesos adelantados por delitos, cuando afectan derechos o garantías fundamentales por:

1. Falta de aplicación, interpretación errónea, o aplicación indebida de una norma del bloque de constitucionalidad, constitucional o legal, llamada a regular el caso.

2. Desconocimiento sustancial de la estructura del debido proceso por afectación trascendente de su estructura o de la garantía debida a cualquiera de las partes.

3. El manifiesto desconocimiento de las reglas de producción y apreciación de la prueba sobre la cual se ha fundado la sentencia.

Artículo 176. *Legitimación.* Están legitimados para recurrir en casación los sujetos procesales que tengan interés, quienes podrán hacerlo directamente si fueren abogados titulados y estuvieren autorizados legalmente para ejercer la profesión.

Artículo 177. *Oportunidad.* El recurso se interpondrá ante el tribunal dentro de un término común de sesenta (60) días siguientes a la última notificación de la sentencia, mediante demanda que de manera precisa y concisa señale las causales invocadas y sus fundamentos.

Artículo 178. *Admisión.* Vencido el término para interponer el recurso, la demanda se remitirá junto con los antecedentes necesarios a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia para que decida dentro de los treinta (30) días siguientes sobre la admisión de la demanda.

En principio, la Corte no podrá tener en cuenta causales diferentes de las alegadas por el demandante. Sin embargo, atendiendo a los fines de la casación, fundamentación de los mismos, posición del impugnante dentro del proceso e índole de la controversia planteada, podrá superar los defectos de la demanda para decidir de fondo.

En caso contrario, se fijará fecha para la audiencia de sustentación que se celebrará dentro de los treinta (30) días siguientes, a la que podrán concurrir los no recurrentes para ejercer su derecho de contradicción dentro de los límites de la demanda.

Artículo 179. *Decisión.* Cuando la Corte aceptare como demostrada alguna de las causales propuestas, dictará el fallo dentro de los sesenta (60) días siguientes a la audiencia de sustentación, contra el cual no procede ningún recurso ni acción, salvo la de revisión.

La Corte está facultada para señalar en qué estado queda el proceso en el caso de determinar que este pueda recuperar alguna vigencia. En caso contrario procederá a dictar el fallo que corresponda.

Cuando la Corte adopte el fallo, dentro del mismo lapso o a más tardar dentro de los cinco (5) días siguientes, citará a audiencia para lectura del mismo.

Artículo 180. *Acumulación de fallos.* A juicio de la Sala, por razones de unificación de la jurisprudencia, podrán acumularse para ser decididas en un mismo fallo, varias demandas presentadas contra diversas sentencias.

Artículo 181. *Aplicación extensiva.* La decisión del recurso de casación se extenderá a los no recurrentes en cuanto les sea favorable.

Artículo 182. *Principio de no agravación.* Cuando se trate de sentencia condenatoria no se podrá agravar la pena impuesta, salvo que el fiscal, el Ministerio Público, la víctima o su representante, cuando tuviere interés, la hubieren demandado.

Artículo 183. *Suspensión de la prescripción.* Proferida la sentencia de segunda instancia se suspenderá el término de prescripción.

Artículo 184. *De la libertad.* Durante el trámite del recurso extraordinario de casación lo referente a la libertad y demás asuntos que no estén vinculados con la impugnación, serán de la exclusiva competencia del juez de primera instancia.

Artículo 185. *Fallo anticipado.* Por razones de interés general la Corte, en decisión mayoritaria de la Sala, podrá anticipar los turnos para convocar a la audiencia de sustentación y decisión.

CAPITULO IX

Acción de revisión

Artículo 186. *Procedencia.* La acción de revisión procede contra sentencias ejecutoriadas, en los siguientes casos:

1. Cuando se haya condenado a dos o más personas por una misma conducta punible que no hubiese podido ser cometida sino por una o por un número menor de las sentenciadas.

2. Cuando se hubiere dictado sentencia condenatoria en proceso que no podía iniciarse o proseguirse por prescripción de la acción, por falta de querrela o petición válidamente formulada, o por cualquier otra causal de extinción de la acción penal.

3. Cuando después de la sentencia condenatoria aparezcan hechos nuevos o surjan pruebas no conocidas al tiempo de los debates, que establezcan la inocencia del condenado, o su inimputabilidad.

4. Cuando después del fallo absolutorio en procesos por violaciones de derechos humanos o infracciones graves al derecho internacional humanitario, se establezca mediante decisión de autoridad competente interna o de una instancia internacional de supervisión y control de derechos humanos, respecto de la cual el Estado colombiano ha aceptado formalmente la competencia, un incumplimiento protuberante de las obligaciones del Estado de investigar seria e imparcialmente tales violaciones. En este caso no será necesario acreditar existencia de hecho nuevo o prueba no conocida al tiempo de los debates.

5. Cuando con posterioridad a la sentencia se demuestre, mediante decisión en firme, que el fallo fue determinado por un delito del juez o de un tercero.

6. Cuando se demuestre que el fallo objeto de pedimento de revisión se fundamentó, en todo o en parte, en prueba falsa relevante para sus conclusiones.

7. Cuando mediante pronunciamiento judicial, la Corte haya cambiado favorablemente el criterio jurídico que sirvió para sustentar la sentencia condenatoria, tanto respecto de la responsabilidad como de la punibilidad.

Parágrafo. Lo dispuesto en los numerales 5 y 6 se aplicará también en los casos de preclusión de la investigación, cesación de procedimiento y sentencia absolutoria.

Artículo 187. *Legitimación.* La acción de revisión podrá ser promovida por el Fiscal, el Ministerio Público, el Defensor y los demás sujetos procesales, siempre que ostenten interés jurídico y hayan sido legalmente reconocidos dentro de la actuación procesal. Estos últimos podrán hacerlo directamente si fueren abogados titulados y autorizados legalmente para ejercer la profesión.

Artículo 188. *Instauración.* La acción de revisión se promoverá por medio de escrito dirigido al funcionario competente y deberá contener:

1. La determinación de la actuación procesal cuya revisión se demanda con la identificación del despacho que produjo el fallo.

2. La conducta o conductas punibles que motivaron la actuación procesal y la decisión.

3. La causal que se invoca y los fundamentos de hecho y de derecho en que se apoya la solicitud.

4. La relación de las evidencias que fundamentan la petición.

Se acompañará copia o fotocopia de la decisión de primera y segunda instancias y constancias de su ejecutoria, según el caso, proferidas en la actuación cuya revisión se demanda.

Artículo 189. *Trámite.* Repartida la demanda, el magistrado ponente examinará si reúne los requisitos exigidos en el artículo anterior; en caso afirmativo la admitirá dentro de los cinco (5) días siguientes, mediante auto de sustanciación que se notificará, en el cual también dispondrá solicitar el proceso objeto de la revisión. Este auto será notificado personalmente a los no demandantes; de no ser posible, se les notificará por estado.

Si se tratare del absuelto, o a cuyo favor se ordenó cesación de procedimiento o preclusión de la investigación, se le notificará personalmente. En caso de contumacia, se le designará defensor público con quien se surtirá la actuación.

Si la demanda fuere inadmitida, la decisión se tomará mediante auto interlocutorio de la sala.

Si de las evidencias aportadas aparece manifiestamente improcedente la acción, la demanda se inadmitirá de plano.

Recibida la actuación, se abrirá a prueba por el término de quince (15) días para que las partes soliciten las que estimen conducentes.

Decretadas las pruebas, se practicarán en audiencia que tendrá lugar dentro de los treinta (30) días siguientes.

Concluida la práctica de pruebas, las partes alegarán siendo obligatorio para el demandante hacerlo.

Surtidos los alegatos, se dispondrá un receso hasta de dos (2) horas para adoptar el fallo, cuyo texto se redactará dentro de los treinta (30) días siguientes.

Vencido el término para alegar el magistrado ponente tendrá diez (10) días para registrar el proyecto y se decidirá dentro de los veinte (20) días siguientes.

Artículo 190. *Revisión de la sentencia.* Si la Sala encuentra fundada la causal invocada, procederá de la siguiente forma:

1. Declarará sin valor la sentencia motivo de la acción, dictará la providencia que corresponda, cuando se trate de la prescripción de la acción penal, ilegitimidad del querellante, caducidad de la querrela, o cualquier otra causal de extinción de la acción penal, en el evento que la causal aludida sea el cambio favorable del criterio jurídico de sentencia emanada de la Corte.

En los demás casos, la actuación será devuelta a un despacho judicial de la misma categoría, diferente de aquél que profirió la decisión, a fin de que se trámite nuevamente a partir del momento procesal que se indique.

2. Decretará la libertad provisional y caucionada del procesado. No se impondrá caución cuando la acción de revisión se refiere a una causal de extinción de la acción penal.

Artículo 191. *Impedimento especial.* No podrá intervenir en el trámite y decisión de esta acción ningún magistrado que haya suscrito la decisión objeto de la misma.

Artículo 192. *Consecuencias del fallo rescindente.* Salvo que se trate de las causales de revisión previstas en los numerales 4 y 5 del artículo 186, los efectos del fallo rescindente se extenderán a los no accionantes.

CAPITULO X

Disposición común a la casación y la acción de revisión

Artículo 193. *Desistimiento.* Podrá desistirse del recurso de casación y de la acción de revisión antes de que la Sala las decida.

LIBRO II

TECNICAS DE INDAGACION E INVESTIGACION DE LA PRUEBA Y SISTEMA PROBATORIO

TITULO I

LA INDAGACION Y LA INVESTIGACION

CAPITULO I

Organos de indagación e investigación

Artículo 194. *Organos.* Corresponde a la Fiscalía General de la Nación realizar la indagación e investigación de los hechos que revistan características de un delito que lleguen a su conocimiento por medio de denuncia, querrela, petición especial o por cualquier otro medio idóneo.

En desarrollo de la función prevista en el inciso anterior a la Fiscalía General de la Nación, por conducto del fiscal director de la investigación, le corresponde la coordinación, control jurídico y verificación técnico científica de las actividades que desarrolle la policía judicial, en los términos previstos en este código.

Artículo 195. *Organos de policía judicial permanente.* La Policía Nacional, por intermedio de sus dependencias especializadas, ejerce permanentemente las funciones de policía judicial. También la ejercen de modo permanente los servidores investidos de esa función, pertenecientes al Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación y al Departamento Administrativo de Seguridad.

Parágrafo. En los lugares del territorio nacional donde no hubiere miembros de policía judicial de la Policía Nacional, estas funciones las podrá ejercer la Policía Nacional.

Artículo 196. *Organos que ejercen funciones permanentes de policía judicial de manera especial dentro de su competencia.* Ejercen permanentemente funciones especializadas de Policía judicial dentro del proceso penal y en el ámbito de su competencia, los siguientes organismos :

1. La Procuraduría General de la Nación.
2. La Contraloría General de la República.
3. Las autoridades de tránsito.
4. Las entidades públicas que ejerzan funciones de vigilancia y control.
5. Los directores nacional y regional del INPEC, los directores de los establecimientos de reclusión y el personal de custodia y vigilancia, conforme con lo señalado en el Código Penitenciario y Carcelario.

Artículo 197. *Organos que ejercen transitoriamente funciones de policía judicial.* Ejercen funciones de policía judicial, de manera transitoria, los entes públicos que, por resolución del Fiscal General de la Nación, hayan sido autorizados para ello. Estos deberán actuar conforme con las autorizaciones otorgadas y en los asuntos que hayan sido señalados en la respectiva resolución.

Artículo 198. *Organo técnico científico.* El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, de conformidad con la ley y lo establecido en el estatuto orgánico de la Fiscalía General de la Nación, prestará auxilio y apoyo técnico científico en las investigaciones desarrolladas por la Fiscalía General de la Nación y los organismos con funciones de policía judicial.

La Fiscalía General de la Nación, el imputado o su defensor se apoyarán, cuando fuere necesario, en laboratorios privados nacionales o extranjeros o en los de universidades públicas o privadas, nacionales o extranjeras. El imputado o su defensor también podrán acudir al Instituto de Medicina legal y Ciencias Forenses.

También prestarán apoyo técnico científico los laboratorios forenses de los organismos de policía judicial.

Artículo 199. *Actividad de policía judicial en la indagación e investigación.* Los servidores públicos que, en ejercicio de sus funciones de policía judicial, reciban denuncias, querellas o informes de otra clase, de los cuales se infiera la posible comisión de un delito, realizarán de inmediato todos los actos urgentes, tales como inspección en el lugar del hecho, levantamiento de cadáver, entrevistas e interrogatorios. Además, identificarán, recogerán, embalarán técnicamente los elementos materiales probatorios y registrarán por escrito, grabación magnetofónica o fonóptica, las entrevistas e interrogatorios, y se someterán a cadena de custodia.

Cuando deba practicarse examen médico legal a la víctima, en lo posible, la acompañará al centro médico respectivo. Si se trata de un cadáver, este será trasladado a la respectiva dependencia del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses o, en su defecto, a un centro médico oficial para que se realice la necropsia médico legal.

Del inicio de la indagación se presentará un informe ejecutivo al fiscal competente.

Artículo 200. *Entrevista.* Cuando la policía judicial, en desarrollo de su actividad, considere fundadamente que una persona fue víctima o

testigo presencial de un delito o que tiene alguna información útil para la indagación o investigación que adelanta, realizará entrevista con ella.

La entrevista se efectuará observando las reglas técnicas pertinentes y se emplearán los medios idóneos para registrar los resultados del acto investigativo.

Sin perjuicio de lo anterior, el investigador deberá al menos dejar constancia de sus observaciones en el cuaderno de notas, en relación con el resultado de la entrevista.

Artículo 201. *Programa metodológico.* Recibido el informe de que trata el artículo 199, el fiscal encargado de coordinar la investigación dispondrá, si fuere el caso, la ratificación de los actos de investigación y la realización de reunión de trabajo con los miembros de la policía judicial. Si la complejidad del asunto lo amerita, el fiscal dispondrá, previa autorización del jefe de la unidad a que se encuentre adscrito la ampliación del equipo investigativo.

Durante la sesión de trabajo, el fiscal, con el apoyo de los integrantes de la policía judicial, se trazará un programa metodológico de la investigación, el cual deberá contener la determinación de los objetivos en relación con la naturaleza de la hipótesis delictiva; los criterios para evaluar la información; la delimitación funcional de las tareas que se deban adelantar en procura de los objetivos trazados; los procedimientos de control en el desarrollo de las labores y los recursos de mejoramiento de los resultados obtenidos.

En desarrollo del programa metodológico de la investigación, el fiscal ordenará la realización de todas las actividades que no impliquen restricción a los derechos fundamentales y que sean conducentes al esclarecimiento de los hechos, al descubrimiento de los elementos materiales probatorios, a la individualización de los autores y partícipes del delito, a la evaluación y cuantificación de los daños causados y a la asistencia y protección de las víctimas.

Los actos de investigación de campo y de estudio y análisis de laboratorio serán ejercidos directamente por la policía judicial.

Artículo 202. *Actividad de policía.* Cuando en ejercicio de la actividad de policía, los servidores de la Policía Nacional descubrieren elementos materiales probatorios como los mencionados en este código, en desarrollo de registro personal, inspección corporal, registro de vehículos y otras diligencias similares, los identificarán, recogerán y embalarán técnicamente. Sin demora alguna, comunicarán el hallazgo a la policía judicial, telefónicamente o por cualquier otro medio eficaz, la cual sin dilación se trasladará al lugar y recogerá los elementos y el informe. Cuando esto no fuere posible, quien los hubiere embalado los hará llegar, con las seguridades del caso, a la policía judicial.

Artículo 203. *Grupos de tareas especiales.* Cuando por la particular complejidad de la investigación sea necesario conformar un grupo de tareas especiales, el fiscal jefe de la unidad respectiva solicitará la autorización al Fiscal General de la Nación, Director Nacional o Seccional de Fiscalía o su delegado.

El grupo de tareas especiales se integrará con los fiscales y miembros de policía judicial que se requieran, según el caso, y quienes trabajarán con dedicación exclusiva en el desarrollo del programa metodológico correspondiente.

En estos eventos, el fiscal, a partir de los hallazgos reportados por la policía judicial, deberá rendir informes semanales de avance al Fiscal General de la Nación, Director Nacional o Seccional de Fiscalía o su delegado, con el fin de evaluar los progresos del grupo de tareas especiales.

Según los resultados, el Fiscal General de la Nación, Director Nacional o Seccional de Fiscalía o su delegado podrá reorganizar o disolver el grupo de tareas especiales.

Artículo 204. *Rechazo de la indagación.* Examinado el informe de inicio de las labores realizadas por la policía judicial y analizados los primeros hallazgos, si resultare que han sido diligenciadas con desconocimiento de los principios rectores y garantías procesales, el fiscal ordenará el rechazo de la indagación e informará de las irregularidades advertidas a los funcionarios competentes en los ámbitos disciplinario y penal.

En todo caso, dispondrá lo pertinente a los fines de la investigación.

CAPITULO II

Actuaciones que no requieren autorización judicial previa para su realización

Artículo 205. *Inspección del lugar del hecho.* Inmediatamente se tenga conocimiento de la comisión de un hecho que pueda constituir un delito, y en los casos en que ello sea procedente, el servidor de Policía Judicial se trasladará al lugar de los hechos y lo examinará minuciosamente, completa y metódicamente, con el fin de descubrir, identificar, recoger y embalar, de acuerdo con los procedimientos técnicos, todos los elementos materiales probatorios que tiendan a demostrar la realidad del hecho y a señalar al autor y partícipes del mismo.

El lugar de la inspección y cada elemento material probatorio descubierto, antes de ser recogido, se fijarán mediante fotografía, video o cualquier otro medio técnico y se levantará el respectivo plano.

La Fiscalía dispondrá de protocolos, previamente elaborados, que serán de riguroso cumplimiento, en el desarrollo de la actividad investigativa regulada en esta sección.

Artículo 206. *Levantamiento de cadáver.* En caso de homicidio o de hecho que se presuma tal, la Policía judicial inspeccionará técnicamente el cadáver. Este se identificará por cualquiera de los métodos previstos en este código. Después se trasladará al centro médico legal con la orden de que se practique la necropsia.

Cuando en el lugar de la inspección se hallaren partes de un cuerpo humano, restos óseos o de otra índole pertenecientes a ser humano, se recogerán en el estado en que se encuentren y se embalarán técnicamente. Después se trasladarán a la dependencia del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, o centro médico idóneo, para los exámenes que correspondan.

Artículo 207. *Inspecciones en lugares distintos al del hecho.* La inspección de cualquier otro lugar, diferente al del hecho, para descubrir elementos materiales probatorios útiles para la investigación, se realizará conforme con las reglas señaladas en este capítulo.

Artículo 208. *Aseguramiento y custodia.* Cada elemento material probatorio recogido en alguna de las inspecciones reguladas en los artículos anteriores, será asegurado, embalado y custodiado para evitar la suplantación o la alteración del mismo. Ello se hará observando las reglas de cadena de custodia.

Artículo 209. *Exhumación.* Cuando fuere necesario exhumar un cadáver o sus restos, para fines de la investigación, el fiscal así lo dispondrá. La policía judicial establecerá y revisará las condiciones del sitio preciso donde se encuentran los despojos a que se refiere la inspección. Técnicamente hará la exhumación y trasladará el cadáver o los restos al centro de Medicina Legal en donde será identificado técnico científicamente, y se harán las investigaciones y análisis para descubrir lo que motivó la exhumación.

Artículo 210. *Aviso de ingreso de presuntas víctimas.* Quien en hospital, puesto de salud, clínica, consultorio médico u otro establecimiento similar, público o particular, reciba o dé entrada a persona a la cual se le hubiese ocasionado daño en el cuerpo o en la salud, dará aviso inmediatamente a la dependencia de policía judicial que le sea más próxima.

Artículo 211. *Procedencia de los registros y allanamientos.* El fiscal encargado de la dirección de la investigación, según lo establecido en los artículos siguientes y con el fin de obtener elementos materiales probatorios o realizar la captura del indiciado o imputado, podrá ordenar el registro y allanamiento de un inmueble, nave o aeronave o vehículo automotor, el cual será realizado por la policía judicial. Si el registro y allanamiento tiene como finalidad única la captura del indiciado o imputado, sólo podrá ordenarse en relación con delitos susceptibles de medida de aseguramiento de detención preventiva.

Artículo 212. *Fundamento para la orden de registro y allanamiento.* Sólo podrá expedirse una orden de registro y allanamiento cuando existan motivos razonablemente fundados, de acuerdo con los medios cognoscitivos previstos en este código, para concluir que la ocurrencia del delito investigado tiene como probable autor o partícipe al propietario,

al simple tenedor del bien por registrar, al que transitoriamente se encontrare en él; o que en su interior se hallan los instrumentos con los que se ha cometido la infracción, o los objetos producto del ilícito.

Artículo 213. *Respaldo probatorio para los motivos fundados.* Los motivos fundados de que trata el artículo anterior deberán ser respaldados, al menos, en informe de policía judicial, declaración jurada de testigo o informante, o en elementos materiales probatorios que establezcan con verosimilitud la vinculación del bien por registrar con el delito investigado.

Cuando se trate de declaración jurada de testigo, el fiscal deberá estar presente con miras a un eventual interrogatorio que le permita apreciar mejor su credibilidad. Si se trata de un informante, la policía judicial deberá precisar al fiscal su identificación y explicar por qué razón le resulta confiable. De todas maneras, los datos del informante serán reservados, inclusive para los efectos de la audiencia ante el juez de control de garantías.

Cuando los motivos fundados surjan de la presencia de elementos materiales probatorios, tales como evidencia física, videos o fotografías fruto de seguimientos pasivos, el fiscal, además de verificar la cadena de custodia, deberá exigir el diligenciamiento de un oficio proforma en donde bajo juramento el funcionario de la policía judicial certifique que ha corroborado la corrección de los procedimientos de recolección, embalaje y conservación de dichos elementos.

Artículo 214. *Alcance de la orden de registro y allanamiento.* La orden expedida por el fiscal deberá determinar con precisión los lugares que se van a registrar. Si se trata de edificaciones, naves o aeronaves que dispongan de varias habitaciones o compartimentos, se indicará expresamente cuáles se encuentran comprendidos en la diligencia.

De no ser posible la descripción exacta del lugar o lugares por registrar, el fiscal deberá indicar en la orden los argumentos para que, a pesar de ello, deba procederse al operativo. En ninguna circunstancia podrá autorizarse por la Fiscalía General de la Nación el diligenciamiento de órdenes de registro y allanamiento indiscriminados, o en donde de manera global se señale el bien por registrar.

Artículo 215. *Objetos no susceptibles de registro.* No serán susceptibles de registro los siguientes objetos:

1. Las comunicaciones escritas entre el indiciado o imputado con sus abogados, siempre que esta relación se establezca.
2. Las comunicaciones escritas entre el indiciado o imputado con las personas que por razón legal están excluidas del deber de testificar.
3. Los archivos de las personas indicadas en los numerales precedentes, que contengan información confidencial relativa al indiciado o imputado. Este apartado cubre también los documentos digitales, videos, grabaciones, ilustraciones y cualquier otra imagen que sea relevante a los fines de la restricción.

Parágrafo. Estas restricciones no son aplicables cuando el privilegio desaparece, ya sea por su renuncia o por tratarse de personas vinculadas como auxiliares, partícipes o coautoras del delito investigado o de uno conexo o que se encuentre en curso, o se trate de situaciones que constituyan una obstrucción a la justicia.

Artículo 216. *Plazo de diligenciamiento de la orden de registro y allanamiento.* La orden de registro y allanamiento deberá ser diligenciada en un término máximo de treinta (30) días, si se trata de la indagación y de quince (15) días, si se trata de una que tenga lugar después de la formulación de la imputación. En el evento de mediar razones que justifiquen una demora, el fiscal podrá, por una sola vez, prorrogarla hasta por el mismo tiempo.

Artículo 217. *Reglas particulares para el diligenciamiento de la orden de registro y allanamiento.* Durante la diligencia de registro y allanamiento la policía judicial deberá:

1. Realizar el procedimiento entre las 6:00 A.M. y las 6:00 P.M., salvo que por circunstancias particulares del caso, resulte razonable suponer que la única manera de evitar la fuga del indiciado o imputado o la destrucción de los elementos materiales probatorios, sea actuar durante la noche.

2. El registro se adelantará exclusivamente en los lugares autorizados y, en el evento de encontrar nuevas evidencias de la comisión de los delitos investigados, podrá extenderse a otros lugares, incluidos los que puedan encuadrarse en las situaciones de flagrancia.

3. Se procurará la menor restricción posible de los derechos de las personas afectadas con el registro y allanamiento, por lo que los bienes incautados se limitarán a los señalados en la orden, salvo que medien circunstancias de flagrancia o que aparezcan elementos materiales probatorios relacionados con otro delito.

4. Se levantará un acta que resuma la diligencia en la que se hará indicación expresa de los lugares registrados, de los objetos ocupados o incautados y de las personas capturadas. Además, se deberá señalar si hubo oposición por parte de los afectados y, en el evento de existir medidas preventivas policivas, se hará mención detallada de la naturaleza de la reacción y las consecuencias de ella.

5. El acta será leída a las personas que aleguen haber sido afectadas por el registro y allanamiento y se les solicitará que firmen si están de acuerdo con su contenido. En caso de existir discrepancias con lo anotado, deberán dejarse todas las precisiones solicitadas por los interesados y, si después de esto, se negaren a firmar, el funcionario de la policía judicial responsable del operativo, bajo juramento, dejará expresa constancia de ello.

Artículo 218. *Allanamientos especiales.* Para el allanamiento y registro de bienes inmuebles, naves, aeronaves o vehículos automotores que, conforme con derecho internacional gocen de inmunidad diplomática o consular, el fiscal solicitará venia al respectivo agente diplomático o consular, mediante oficio en el que se requerirá su contestación dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes y será remitido por conducto del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Artículo 219. *Acta de la diligencia.* En el acta de la diligencia de allanamiento y registro deben identificarse y describirse todas las cosas que hayan sido examinadas o incautadas, el lugar donde fueron encontradas y se dejarán las constancias que soliciten las personas que en ella intervengan. Los propietarios, poseedores o tenedores tendrán derecho a que se les expida copia del acta, si la solicitan.

Artículo 220. *Devolución de la orden y cadena de custodia.* Terminada la diligencia de registro y allanamiento, dentro del término de la distancia, sin sobrepasar las treinta y seis (36) horas siguientes, la policía judicial informará al fiscal que expidió la orden los pormenores del operativo y, en caso de haber ocupado o incautado objetos, en el mismo término le remitirá el inventario correspondiente pero será de aquella la custodia de los bienes incautados u ocupados.

En caso de haber realizado capturas durante el registro y allanamiento, concluida la diligencia, la policía judicial pondrá inmediatamente al capturado a órdenes del fiscal, junto con el respectivo informe.

Artículo 221. *Procedimiento en caso de flagrancia.* En las situaciones de flagrancia, la policía judicial podrá proceder al registro y allanamiento del inmueble, nave o aeronave del indiciado. En caso de refugiarse en un bien inmueble ajeno, no abierto al público, se solicitará el consentimiento del propietario o tenedor o en su defecto se obtendrá la orden correspondiente de la Fiscalía General de la Nación, salvo que por voces de auxilio resulte necesaria la intervención inmediata o se establezca coacción del indiciado en contra del propietario o tenedor.

Artículo 222. *Excepciones al requisito de la orden escrita de la Fiscalía General de la Nación para proceder al registro y allanamiento.* Excepcionalmente podrá omitirse la obtención de la orden escrita de la Fiscalía General de la Nación para que la Policía judicial pueda adelantar un registro y allanamiento, en los siguientes casos:

1. Cuando medie consentimiento expreso del propietario o simple tenedor del bien objeto del registro, o de quien tenga interés por ser afectado durante el procedimiento. En esta eventualidad, no se considerará como suficiente la mera ausencia de objeciones por parte del interesado, sino que deberá acreditarse la libertad del afectado al manifestar la autorización para el registro.

2. Cuando no exista una expectativa razonable de intimidad que justifique el requisito de la orden. En esta eventualidad, se considera que no existe dicha expectativa cuando el objeto se encuentra en campo abierto, a plena vista, o cuando se encuentra abandonado.

3. Cuando se trate de situaciones de emergencia tales como incendio, explosión, inundación u otra clase de estragos que pongan en peligro la vida o la propiedad.

4. Cuando se lleve a cabo un registro con ocasión de la captura del indiciado, imputado o acusado.

Parágrafo. Se considera también aplicable la excepción a la expectativa razonable de intimidad prevista en el numeral 2, cuando el objeto se encuentre a plena vista merced al auxilio de medios técnicos que permitan visualizarlo más allá del alcance normal de los sentidos.

Artículo 223. *Interés para reclamar la violación de la expectativa razonable de intimidad en relación con los registros y allanamientos.* Únicamente podrá alegar la violación del debido proceso ante el juez de control de garantías o ante el juez de conocimiento, según sea el caso, con el fin de la exclusión de la evidencia ilegalmente obtenida durante el procedimiento de registro y allanamiento, quien haya sido considerado como indiciado o imputado o sea titular de un derecho de dominio, posesión o mera tenencia del bien objeto de la diligencia. Por excepción, se extenderá esta legitimación cuando se trate de un visitante que en su calidad de huésped pueda acreditar, como requisito de umbral, que tenía una expectativa razonable de intimidad al momento de la realización del registro.

Artículo 224. *Cláusula de exclusión en materia de registros y allanamientos.* La expedición de una orden de registro y allanamiento por parte del fiscal, que se encuentre viciada por carencia de alguno de los requisitos esenciales previstos en este código, generará la invalidez de la diligencia, por lo que los elementos materiales probatorios que dependan directa y exclusivamente del registro carecerán de valor, serán excluidos de la actuación y sólo podrán ser utilizados para fines de impugnación.

Artículo 225. *Registro de buena fe.* Se exceptúan de la exclusión anterior aquellos registros en donde la policía judicial actuó de buena fe, derivada del convencimiento, objetiva y razonablemente fundado, de que la orden fue correctamente expedida por la Fiscalía General de la Nación.

Artículo 226. *Retención de correspondencia.* El Fiscal General o su delegado podrá ordenar a la policía judicial la retención de correspondencia privada, postal, telegráfica o de mensajería especializada o similar que reciba o remita el indiciado o imputado, cuando tenga motivos razonablemente fundados, de acuerdo con los medios cognoscitivos previstos en este código, para inferir que existe información útil para la investigación.

En estos casos se aplicarán analógicamente, según la naturaleza del acto, los criterios establecidos para los registros y allanamientos.

Así mismo, podrá solicitarse a las oficinas correspondientes copia de los mensajes transmitidos o recibidos por el indiciado o imputado.

Similar procedimiento podrá autorizarse para que las empresas de mensajería especializada suministren la relación de envíos hechos por solicitud del indiciado o imputado o dirigidos a él.

Las medidas adoptadas en desarrollo de las atribuciones contempladas en este artículo no podrán extenderse por un período superior a un (1) año.

Artículo 227. *Examen y devolución de la correspondencia.* La policía judicial examinará la correspondencia retenida y si encuentra elementos materiales probatorios que resulten relevantes a los fines de la investigación, en un plazo máximo de doce (12) horas, informará de ello al fiscal que expidió la orden.

Si se tratare de escritura en clave o en otro idioma, inmediatamente ordenará el desciframiento por peritos en criptografía, o su traducción.

Si por este examen se descubriere información sobre otro delito, iniciará la indagación correspondiente o bajo custodia la enviará a quien la adelanta.

Una vez formulada la imputación, o vencido el término fijado en el artículo anterior, la policía judicial devolverá la correspondencia retenida que no resulte de interés para los fines de la investigación.

Lo anterior no será obstáculo para que pueda ser devuelta con anticipación la correspondencia examinada, cuya apariencia no se hubiera alterado, con el objeto de no suscitar la atención del indiciado o imputado.

Artículo 228. *Interceptación de comunicaciones telefónicas y similares.* El fiscal podrá ordenar, con el único objeto de buscar elementos materiales probatorios, que se intercepten mediante grabación magnetofónica o similares las comunicaciones telefónicas, radiotelefónicas y similares que utilicen el espectro electromagnético, cuya información tengan interés para los fines de la actuación. En este sentido, las entidades encargadas de la operación técnica de la respectiva interceptación, tienen la obligación de realizarla inmediatamente después de la notificación de la orden.

En todo caso, deberá fundamentarse por escrito. Las personas que participen en estas diligencias se obligan a guardar la debida reserva.

Por ningún motivo se podrán interceptar las comunicaciones del defensor.

La orden tendrá una vigencia máxima de tres (3) meses, pero podrá prorrogarse hasta por otro tanto si, a juicio del fiscal, subsisten los motivos fundados que la originaron.

Artículo 229. *Recuperación de información dejada al navegar por internet u otros medios tecnológicos que produzcan efectos equivalentes.* Cuando el fiscal tenga motivos razonablemente fundados, de acuerdo con los medios cognoscitivos previstos en este código, para inferir que el indiciado o el imputado ha estado transmitiendo información útil para la investigación que se adelanta, durante su navegación por internet u otros medios tecnológicos que produzcan efectos equivalentes, ordenará la aprehensión del computador, computadores y servidores que pueda haber utilizado, disquetes y demás medios de almacenamiento físico, para que expertos en informática forense descubran, recojan, analicen y custodien la información que recuperen.

En estos casos serán aplicables analógicamente, según la naturaleza de este acto, los criterios establecidos para los registros y allanamientos.

La aprehensión de que trata este artículo, se limitará exclusivamente al tiempo necesario para la captura de la información en él contenida. Inmediatamente se devolverán los equipos incautados.

Artículo 230. *Audiencia de control de legalidad posterior.* Dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes al diligenciamiento de las órdenes de registro y allanamiento, retención de correspondencia, interceptación de comunicaciones o recuperación de información dejada al navegar por internet u otros medios similares, el fiscal comparecerá ante el juez de control de garantías, para que realice la audiencia de revisión de legalidad sobre lo actuado.

Durante el trámite de la audiencia solo podrán asistir, además del fiscal, los funcionarios de la policía judicial y los testigos o peritos que prestaron declaraciones juradas con el fin de obtener la orden respectiva o que intervinieron en la diligencia.

El juez podrá, si lo estima conveniente, interrogar directamente a los comparecientes y, después de escuchar los argumentos del fiscal, decidirá de plano sobre la validez del procedimiento.

Parágrafo. Si el diligenciamiento de la orden ocurrió luego de formulada la imputación, se deberá citar a la audiencia de control de legalidad al imputado y a su defensor para que, si lo desean, puedan realizar el contradictorio. En este último evento, se aplicarán, analógicamente de acuerdo con la naturaleza del acto las reglas previstas para la audiencia preliminar.

Artículo 231. *Inimpugnabilidad de la decisión.* La decisión del juez de control de garantías no será susceptible de impugnación por ninguno de los que participaron en ella. No obstante, si la defensa se abstuvo de intervenir, podrá en la audiencia preliminar o durante la audiencia preparatoria solicitar la exclusión de las evidencias obtenidas.

Artículo 232. *Vigilancia de personas.* Sin perjuicio de los procedimientos preventivos que adelanta la fuerza pública, en cumplimiento de su deber constitucional, el Fiscal General o su delegado que tuviere motivos razonablemente fundados, de acuerdo con los medios cognoscitivos previstos en este código, para inferir que el indiciado o el imputado, pudiere conducirlo a conseguir información útil para la investigación que se adelanta, podrá disponer que se someta a seguimiento pasivo, por tiempo determinado, por parte de la Policía judicial. Si en el lapso de un año no se obtuviere resultado alguno, se cancelará la orden de vigilancia, sin perjuicio de que vuelva a expedirse, si surgieren nuevos motivos.

En la ejecución de la vigilancia, se empleará cualquier medio que la técnica aconseje. En consecuencia, se podrán tomar fotografías, filmar videos y, en general, realizar todas las actividades relacionadas que permitan recaudar información relevante a fin de identificar o individualizar los autores o partícipes, las personas que lo frecuentan, los lugares adonde asiste y aspectos similares, siempre y cuando no se afecte la expectativa razonable de la intimidad del indiciado o imputado o de terceros.

En todo caso se surtirá la autorización del juez de control de garantías para la determinación de su validez, dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes a la expedición de la orden por parte de la Fiscalía General.

Artículo 233. *Vigilancia de cosas.* El fiscal que dirija la investigación, que tuviere motivos razonablemente fundados, de acuerdo con los medios cognoscitivos previstos en este código, para inferir que un inmueble, nave, aeronave o cualquier otro vehículo o mueble se usa para almacenar droga que produzca dependencia, elemento que sirva para el procesamiento de dicha droga, o para ocultar explosivos, armas, munición, sustancias para producir explosivos y, en general, los instrumentos de comisión de un delito o los bienes y efectos provenientes de su ejecución; ordenará que la policía judicial vigile esos lugares y esas cosas, con el fin de conseguir información útil para la investigación que se adelanta. Si en el lapso máximo de un (1) año no se obtuviere resultado alguno, se cancelará la orden de vigilancia, sin perjuicio de que vuelva a expedirse, si surgieren nuevos motivos.

En la ejecución de la vigilancia se empleará cualquier medio idóneo, siempre y cuando no se afecte la expectativa razonable de intimidad del indiciado, del imputado o de terceros.

En este último caso se aplicará lo dispuesto en el artículo siguiente sobre la vigilancia electrónica.

En todo caso se surtirá la autorización del juez de control de garantías para la determinación de su validez, dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes a la expedición de la orden por parte de la Fiscalía General.

Artículo 234. *Seguimiento de personas.* Sin perjuicio de los procedimientos preventivos que adelanta la fuerza pública, en cumplimiento de su deber constitucional, el Fiscal General o su delegado que tuviere motivos razonablemente fundados, de acuerdo con los medios cognoscitivos previstos en este código, para inferir que el imputado, o algún relacionado suyo, pudiere conducirlo a conseguir información útil para la investigación que se adelanta, podrá ordenar, por tiempo determinado, que se someta al indiciado o al imputado a seguimiento especial por parte de la Policía judicial mediante la utilización de medios técnicos electrónicos, tales como transmisores radiogoniométricos, alarmas, detectores de movimientos, visores nocturnos y de fuentes infrarrojas, empleo de micrófonos para la grabación de conversaciones privadas y otras similares.

El fiscal deberá expedir una orden en donde se especifiquen los procedimientos a seguir, su intensidad y duración. En el desarrollo de estas actividades se aplicará analógicamente, según la naturaleza de los casos, las reglas previstas para los registros y allanamientos.

En todo caso, se surtirá la autorización del juez de control de garantías para la determinación de su validez, dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes a la expedición de la orden por parte de la Fiscalía General.

Artículo 235. *Seguimiento de vehículos.* Sin perjuicio de los procedimientos preventivos que adelanta la fuerza pública, en

cumplimiento de su deber constitucional, el fiscal que dirija la investigación, que tuviere motivos razonablemente fundados, de acuerdo con los medios cognoscitivos previstos en este código, para inferir que un determinado vehículo se usa por el indiciado o el imputado, para transportar a la persona secuestrada o la tomada como rehén, o los instrumentos de comisión del delito que investiga, o los bienes y otros efectos provenientes de su ejecución, podrá ordenar que, por la policía judicial, se desarrolle seguimiento del vehículo o vehículos indicados. Si en el lapso máximo de un (1) año no se obtuviere resultado alguno, se cancelará la orden de seguimiento, sin perjuicio de que vuelva a expedirse, si surgieren nuevos motivos.

En la ejecución del seguimiento se empleará cualquier medio idóneo, siempre y cuando no se afecte la expectativa razonable de intimidad del indiciado, imputado o de terceros.

En este último caso se aplicará analógicamente lo dispuesto en el artículo referente a registros y allanamientos.

Artículo 236. Análisis e infiltración de organización criminal. Cuando el fiscal tuviere motivos razonablemente fundados, de acuerdo con los medios cognoscitivos previstos en este código, para inferir que el indiciado o el imputado, en la indagación o investigación que se adelanta, pertenece o está relacionado con alguna organización criminal, ordenará a la policía judicial la realización del análisis de aquella con el fin de conocer su estructura organizativa, la agresividad de sus integrantes y los puntos débiles de la misma. Después, ordenará la planificación, preparación y manejo de una operación, para que agente o agentes encubiertos la infiltren con el fin de obtener información útil a la investigación que se adelanta, de conformidad con lo establecido en el artículo siguiente.

Artículo 237. Actuación de agentes encubiertos. Cuando el fiscal, previa autorización del Director Nacional o seccional de Fiscalías o tuviere motivos razonablemente fundados, de acuerdo con los medios cognoscitivos previstos en este código, para inferir que el indiciado o el imputado en la investigación que se adelanta, continúa desarrollando una actividad criminal, podrá ordenar la utilización de agentes encubiertos, siempre que resulte indispensable para el éxito de las tareas investigativas. En desarrollo de esta facultad especial podrá disponerse que uno o varios funcionarios de la policía judicial o, incluso particulares, puedan actuar en esta condición y realizar actos extrapenales con trascendencia jurídica. En consecuencia, dichos agentes estarán facultados para intervenir en el tráfico comercial, asumir obligaciones, ingresar y participar en reuniones en el lugar de trabajo o domicilio del indiciado o imputado y, si fuere necesario, adelantar transacciones con él. Igualmente, si el agente encubierto encuentra que en los lugares donde ha actuado existe información útil para los fines de la investigación, lo hará saber al fiscal para que éste disponga el desarrollo de una operación especial, por parte de la policía judicial, con miras a que se recoja la información y los elementos materiales probatorios hallados.

Así mismo, podrá disponerse que actúe como agente encubierto el particular que, sin modificar su identidad, sea de la confianza del indiciado o imputado o la adquiera para los efectos de la búsqueda y obtención de información relevante y de elementos materiales probatorios.

Durante la realización de los procedimientos encubiertos podrán utilizarse los medios técnicos de ayuda previstos en el artículo anterior.

En cumplimiento de lo dispuesto en este artículo, se deberá adelantar la revisión de legalidad del procedimiento ante el juez de control de garantías dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes a la terminación de la operación encubierta, como requisito de validez de la actuación, para lo cual se aplicarán, en lo que sea pertinente, las reglas previstas para los registros y allanamientos.

En todo caso, el uso de agentes encubiertos no podrá extenderse por un período superior a tres (3) años. Si vencido el plazo señalado no se hubiere obtenido ningún resultado, ésta se cancelará, sin perjuicio de la realización del control de legalidad correspondiente.

Artículo 238. Entrega vigilada. El fiscal que tuviere motivos razonablemente fundados, de acuerdo con los medios cognoscitivos

previstos en este código, para creer que el indiciado o el imputado dirige, o de cualquier forma interviene en el transporte de armas, explosivos, municiones, moneda falsificada, drogas que producen dependencia o también cuando sea informado por agente encubierto o de confianza de la existencia de una actividad criminal continua, previa autorización del Director Nacional o Seccional de Fiscalías, podrá ordenar la realización de entregas vigiladas de objetos cuya posesión, transporte, enajenación, compra, alquiler o simple tenencia se encuentre prohibida. A estos efectos se entiende como entrega vigilada el dejar que la mercancía se transporte en el territorio nacional o salga de él, bajo la vigilancia de una red de agentes de policía judicial especialmente entrenados y adiestrados.

En estos eventos, está prohibido al agente encubierto sembrar la idea de la comisión del delito en el indiciado o imputado. Así, sólo está facultado para entregar por sí, o por interpuesta persona, o facilitar la entrega del objeto de la transacción ilegal, a instancia o por iniciativa del indiciado o imputado.

De la misma forma, el fiscal facultará a la policía judicial para la realización de vigilancia especial, cuando se trate de operaciones cuyo origen provenga del exterior y en desarrollo de lo dispuesto en el capítulo relativo a la cooperación judicial internacional.

Durante el procedimiento de entrega vigilada se utilizará, si fuere posible, los medios técnicos idóneos que permitan establecer la intervención del indiciado o del imputado.

En todo caso, una vez concluida la entrega vigilada, los resultados de la misma y, en especial, los elementos materiales probatorios, deberán ser objeto de revisión por parte del juez de control de garantías, lo cual cumplirá dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes con el fin de establecer su validez.

Artículo 239. Búsqueda selectiva en bases de datos. La policía judicial, en desarrollo de su actividad investigativa, podrá realizar las comparaciones de datos registradas en bases mecánicas, magnéticas u otras similares, siempre y cuando se trate del simple cotejo de informaciones de acceso público.

Cuando se requiera adelantar búsqueda selectiva en las bases de datos, que implique el acceso a información confidencial, referida al indiciado o imputado o, inclusive a la obtención de datos derivados del análisis cruzado de las mismas, deberá mediar autorización previa del fiscal que dirija la investigación y se aplicarán, en lo pertinente, las disposiciones relativas a los registros y allanamientos.

En estos casos, la revisión de la legalidad se realizará ante el juez de control de garantías, dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes a la culminación de la búsqueda selectiva de la información.

Artículo 240. Exámenes de ADN que involucren al indiciado o al imputado. Cuando la policía judicial requiera la realización de exámenes de ADN, en virtud de la presencia de fluidos corporales, cabellos, vello público, semen, sangre u otro vestigio que permita determinar datos como la raza, el tipo de sangre y, en especial, la huella dactilar genética, se requerirá de orden expresa del fiscal que dirige la investigación.

Si se requiere cotejo de los exámenes de ADN con la información genética del indiciado o imputado, mediante el acceso a bancos de esperma y de sangre, muestras de laboratorios clínicos, consultorios médicos u odontológicos, entre otros, deberá adelantarse la revisión de legalidad, ante el juez de control de garantías, dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes a la terminación del examen respectivo, con el fin de establecer su validez.

CAPITULO III

Actuaciones que requieren autorización judicial previa para su realización

Artículo 241. Regla general. Las actividades que adelante la policía judicial, en desarrollo del programa metodológico de la investigación, diferentes a las previstas en el capítulo anterior y que impliquen afectación de derechos y garantías fundamentales, únicamente se podrán realizar con autorización previa proferida por el juez de control de garantías, a petición del fiscal correspondiente. La policía judicial podrá requerir la autorización previa directamente al juez, cuando se

presenten circunstancias excepcionales que ameriten extrema urgencia, en cuyo caso el fiscal deberá ser informado de ello inmediatamente.

Artículo 242. *Inspección corporal.* Cuando el Fiscal General, o el fiscal tenga motivos razonablemente fundados, de acuerdo con los medios cognoscitivos previstos en este código, para creer que, en el cuerpo del imputado existen elementos materiales probatorios necesarios para la investigación, podrá ordenar la inspección corporal de dicha persona. En esta diligencia deberá estar presente el defensor y se observará toda clase de consideraciones compatibles con la dignidad humana.

Terminada la diligencia solicitará al juez de control de garantías que actúe con respecto al acto investigativo, en el término de treinta y seis (36) horas. Para ese fin le presentará la información pertinente.

Artículo 243. *Registro personal.* Sin perjuicio de los procedimientos preventivos que adelanta la fuerza pública, en cumplimiento de su deber constitucional, el Fiscal General o su delegado, que tenga motivos razonablemente fundados, de acuerdo con medios cognoscitivos previstos en este código, para inferir que alguna persona relacionada con la investigación que adelanta, está en posesión de elementos materiales probatorios, podrá ordenar el registro de esa persona.

Para practicar este registro se designará a persona del mismo sexo de la que habrá de registrarse, y se guardarán con ella toda clase de consideraciones compatibles con la dignidad humana. Si se tratare del imputado deberá estar asistido por su defensor.

Terminada la diligencia solicitará al juez de control de garantías que actúe con respecto al acto investigativo, en el término de treinta y seis (36) horas. Para ese fin le presentará la información pertinente.

Artículo 244. *Obtención de muestras que involucren al imputado.* Cuando a juicio del fiscal resulte necesario a los fines de la misma, y previa la realización de audiencia de revisión de legalidad ante el juez de control de garantías, en el evento de no existir consentimiento del afectado, podrá ordenar a la policía judicial la obtención de muestras para examen grafotécnico, cotejo de fluidos corporales, identificación de voz, impresión dental y de pisadas, de conformidad con las reglas siguientes:

1. Para la obtención de muestras para examen grafotécnico, se procederá de la siguiente manera:

a) Le pedirá al imputado que escriba, con instrumento similar al utilizado en el documento cuestionado, textos similares a los que se dicen falsificados y que escriba la firma que se dice falsa. Esto lo hará siguiendo las reglas sugeridas por los expertos del laboratorio de policía judicial;

b) Le pedirá al imputado que, en la máquina que dice se elaboró el documento supuestamente falso o en que se alteró, o en otra similar, escriba textos como los contenidos en el mencionado documento. Esto lo hará siguiendo las reglas sugeridas por los expertos del laboratorio de policía judicial;

c) Obtenidas las muestras y bajo rigurosa custodia, las trasladará o enviará, según el caso, junto con el documento redargüido de falso, al centro de peritaje para que hagan los exámenes correspondientes. Terminados éstos, se devolverá con el informe pericial al funcionario que ordenó los exámenes;

d) Para la obtención de muestras de fluidos corporales, cabellos, vello púbico, pelos, voz, impresión dental y pisadas, se seguirán las reglas previstas para los métodos de identificación técnica.

En todo caso, se requerirá siempre la presencia del defensor del imputado.

Parágrafo. De la misma manera procederá la policía judicial al realizar inspección en la escena del hecho, cuando se presenten las circunstancias del artículo 241.

Artículo 245. *Procedimiento en caso de lesionados o de víctimas de agresiones sexuales.* Cuando se trate de investigaciones relacionadas con la libertad sexual, la integridad corporal o cualquier otro delito en donde resulte necesaria la práctica de reconocimiento y exámenes

físicos de las víctimas, tales como extracciones de sangre, toma de muestras de fluidos corporales, semen u otros análogos, y no hubiera peligro de menoscabo para su salud, la Policía judicial requerirá el auxilio del perito forense a fin de realizar el reconocimiento o examen respectivos.

En todo caso, deberá obtenerse el consentimiento escrito de la víctima o de su representante legal cuando fuere menor o incapaz y si éstos no lo prestare, se les explicarán la importancia que tiene para la investigación y las consecuencias probables que se derivarían de la imposibilidad de practicarlos. De perseverar en su negativa así se atenderá y se dejará constancia de ello. En el evento de prestar su consentimiento, el reconocimiento o examen se realizará en un lugar adecuado, preferiblemente en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses o, en su defecto, en un establecimiento de salud.

CAPITULO IV

Métodos de identificación

Artículo 246. *Reconocimiento por medio de fotografías o videos.* Cuando no exista un indiciado relacionado con el delito, o existiendo no estuviere disponible para la realización de reconocimiento en fila de personas, o se negare a participar en él, la policía judicial, para proceder a la respectiva identificación, podrá utilizar cualquier medio técnico disponible que permita mostrar imágenes reales, en fotografías, imágenes digitales o videos. Para realizar esta actuación se requiere la autorización previa del fiscal que dirige la investigación.

Este procedimiento se realizará exhibiendo al testigo un número no inferior a siete (7) imágenes de diferentes personas, incluida la del indiciado, si la hubiere. En este último evento, las imágenes deberán corresponder a personas que posean rasgos similares a los del indiciado.

En ningún momento podrá sugerirse o señalarse la imagen que deba ser seleccionada por el testigo, ni estar presente simultáneamente varios testigos durante el procedimiento de identificación.

Cuando se pretenda precisar la percepción del reconocedor con respecto a los rasgos físicos de un eventual indiciado, se le exhibirá el banco de imágenes, fotografías o videos de que disponga la policía judicial, para que realice la identificación respectiva.

Cualquiera que fuere el resultado del reconocimiento se dejará constancia resumida en acta a la que se anexarán las imágenes utilizadas, lo cual quedará sometido a cadena de custodia.

Este tipo de reconocimiento no exonera al reconocedor de la obligación de identificar en fila de personas, en caso de aprehensión o presentación voluntaria del imputado.

Artículo 247. *Reconocimiento en fila de personas.* En los casos en que se impute la comisión de un delito a una persona cuyo nombre se ignore, fuere común a varias o resulte necesaria la verificación de su identidad, la policía judicial, previa autorización del fiscal que dirija la investigación, efectuará el reconocimiento en fila de personas, de conformidad con las siguientes reglas:

1. El reconocimiento se efectuará mediante la conformación de una fila de personas, en número no inferior a siete (7), incluido el indiciado.

2. No podrá estar presente en una fila de personas más que un indiciado.

3. Las personas que formen parte de la fila deberán tener características morfológicas similares; estar vestidas de manera semejante y ofrecer modalidades análogas, cuando sea el caso por las circunstancias en que lo percibió quien hace el reconocimiento.

4. La policía judicial o cualquier otro interviniente, durante el reconocimiento, no podrá hacer señales o formular sugerencias para la identificación.

5. Tampoco podrá el testigo observar al indiciado, ni a los demás integrantes de la fila de personas, antes de que se inicie el procedimiento.

6. En caso de ser positiva la identificación, deberá expresarse, por parte del testigo, el número o posición de la persona que aparece en la fila y, además, manifestará si lo ha visto con anterioridad o con posterioridad a los hechos que se investigan, indicando en qué circunstancias.

7. De todo lo actuado se dejará registro mediante el empleo del medio técnico idóneo y se elaborará un acta que lo resuma, cualquiera que fuere su resultado.

Lo previsto en este artículo tendrá aplicación, en lo que corresponda, a los reconocimientos que tengan lugar después de formulada la imputación. En este evento se requerirá la presencia del defensor del imputado.

Artículo 248. *Retrato hablado y retrato robot.* Cuando no sea posible la identificación por medio del reconocimiento en fila de personas o por medio de reconocimiento de fotografías, imágenes o video, en situaciones de urgencia, podrá la policía judicial, con la ayuda de los informantes o de los testigos, elaborar retratos hablados del indiciado. En este caso, el perito observará el procedimiento de descripción sistemática que comprenda la posición del sujeto, la frente, la nariz, la oreja, la boca y la barbilla o mentón, o cualquier otro procedimiento, que incorpore técnicas avanzadas, utilizado por los servicios de identificación o en los laboratorios forenses.

Con base en esa descripción, el perito elaborará el retrato robot por cualquier procedimiento aceptado por los servicios de identificación o los laboratorios forenses.

El retrato hablado y el retrato robot son elementos materiales probatorios y quedarán sometidos a cadena de custodia.

Artículo 249. *Identificación dactilar.* Tan pronto sea aprehendido el imputado o cuando compareciere voluntariamente ante las autoridades, la policía judicial procederá a tomarle las respectivas huellas dactilares. Tales huellas se clasificarán inmediatamente y, si apareciere ya reseñado, de esa ficha se tomarán los datos pertinentes para su identificación.

Cuando el imputado no presente documento de identidad, la policía judicial deberá tomar su registro decadactilar y enviarlo a la Registraduría Nacional del Estado Civil, entidad que dispondrá de diez (10) días para expedir fotocopia de la fotocédula y, en caso de no aparecer en sus archivos, lo inscribirá con el nombre que aquél utilizó inicialmente y le asignará un cupo numérico.

Artículo 250. *Identificación por sangre.* La víctima, el indiciado o el imputado podrán ser identificados mediante la caracterización de su sangre por métodos diferentes al análisis de ADN; o por medio del análisis de ADN en sangre. El informe técnico científico se someterá a cadena de custodia.

Artículo 251. *Identificación por semen.* El indiciado o el imputado podrán ser identificados mediante la caracterización de su semen por métodos diferentes al análisis de ADN; o mediante el análisis de ADN. El informe técnico científico se someterá a cadena de custodia.

Artículo 252. *Identificación por la carta dental.* La víctima, el indiciado o el imputado podrán ser identificados por su carta dental, conforme con las previsiones de la Ley 38 de 1993, y normas que la sustituyan, adicionen o reformen. Las muestras dentarias y el informe técnico científico se someterán a cadena de custodia.

Artículo 253. *Identificación por cabellos y pelos.* La víctima, el indiciado o el imputado podrán ser identificados por las características morfológicas y métricas de sus cabellos y pelos; o mediante el análisis multielemental de la composición de tales cabellos y pelos. Podrá utilizarse cualquier otra técnica científicamente aceptada. El informe técnico científico y el cabello o pelo sobrante, se someterán a cadena de custodia.

Artículo 254. *Identificación por la voz.* El indiciado o el imputado podrá ser identificado mediante la caracterización de su voz por el método espectrográfico, o por algún otro método técnico aceptado científicamente. Cuando su voz es conocida de la víctima o de algún testigo, éstos podrán reconocerla.

Artículo 255. *Identificación grafotécnica.* El indiciado o el imputado podrá ser identificado mediante la comparación sistemática de su escritura manual con los grafismos cuestionados en un documento. El establecimiento de la uniprocedencia permite la identificación en ese caso concreto. Los grafismos cuestionados y los indudablemente procedentes del imputado, junto con el informe pericial, serán sometidos a cadena de custodia.

Artículo 256. *Comparación estilística.* Mediante peritación se podrán identificar las características de redacción y estilo de un documento y su atribución a persona determinada.

Artículo 257. *Identificación por modus operandi.* El indiciado o el imputado puede ser identificado por su manera de actuar criminal, en comparación con un patrón de conducta delincriminal registrado en los archivos de la policía judicial.

Artículo 258. *Gráficas de pisadas.* La víctima, el indiciado o el imputado, podrán ser identificados por el conjunto de huellas dejadas al caminar o correr, teniendo en cuenta la línea direccional, la línea de los pasos y la línea de cada pisada.

CAPITULO V

Cadena de custodia

Artículo 259. *Embalaje y rotulado.* Los elementos materiales probatorios recogidos por la policía judicial, en ejecución de actuaciones de indagación o investigación, serán técnicamente embalados y rotulados.

Artículo 260. *Contenido del rótulo.* Todo elemento material probatorio será embalado en empaques según su peso, forma y volumen. Para estos fines se usarán las bolsas, frascos, cajas, guacales y otros contenedores elegidos por la Fiscalía General de la Nación, de acuerdo con las necesidades. El embalaje podrá ser algún otro medio de protección del objeto para la preservación de la huella, el rastro, el residuo, el número serial y similares. Este contenedor, caja o empaque, llevará en su parte exterior un rótulo de material resistente a la humedad y al manejo de paquetes, el cual deberá tener la siguiente información mínima: nombre completo del funcionario que realiza el embalaje y rotulado; descripción del contenido, actuaciones de indagación o investigación de que se trata; lugar de recolección; fecha y hora del traslado, hecho hipotéticamente delictivo y número de registro de la indagación o investigación.

Artículo 261. *Macroelementos materiales probatorios.* Los objetos de gran tamaño, como naves, aeronaves, vehículos automotores, máquinas, grúas y otros similares, después de ser examinados por peritos, para recoger elementos materiales probatorios que se hallen en ellos, se grabarán en videocinta o se fotografiarán su totalidad y, especialmente, se registrarán del mismo modo los sitios en donde se hallaron huellas, rastros, microrrastros o semejantes, marihuana, cocaína, armas, explosivos o similares que puedan ser objeto o producto de delito. Estas fotografías y videos sustituirán al elemento físico, serán utilizados en su lugar, durante el juicio oral y público o en cualquier otro momento del procedimiento; y se embalarán, rotularán y conservarán en la forma prevista en el artículo anterior.

El fiscal, en su defecto los funcionarios de policía judicial, deberán ordenar la destrucción de los materiales explosivos en el lugar del hallazgo, cuando las condiciones de seguridad lo permitan.

Artículo 262. *Inicio de la cadena de custodia.* El servidor público que, en actuación de indagación o investigación policial, hubiere embalado y rotulado el elemento material probatorio, lo custodiará.

Artículo 263. *Traslado de contenedor.* El funcionario de policía judicial o el servidor público que hubiere recogido, embalado y rotulado el elemento material probatorio, lo trasladará al laboratorio correspondiente, donde lo entregará en la oficina de correspondencia o la que haga sus veces, bajo el recibo que figura en el formato de cadena de custodia.

Artículo 264. *Traspaso de contenedor.* El servidor público de la oficina de correspondencia o la que haga sus veces, sin pérdida de tiempo, bajo el recibo que figura en el formato de cadena de custodia, entregará el contenedor al perito que corresponda según la especialidad.

Artículo 265. *Actuación del perito.* El perito que reciba el contenedor dejará constancia del estado en que se encuentra y procederá a las investigaciones y análisis del elemento material probatorio, a la menor brevedad posible, de modo que su informe pericial pueda ser oportunamente remitido al fiscal correspondiente.

Artículo 266. *Responsabilidad de cada custodia.* Cada servidor público de los mencionados en los artículos anteriores, será responsable de la custodia del contenedor y del elemento material durante el tiempo

que esté en su poder, de modo que no pueda ser destruido, suplantado, alterado o deteriorado.

Artículo 267. *Remanentes.* Los remanentes del elemento material analizado, serán guardados en el almacén que en el laboratorio está destinado para ese fin. Al almacenarlo será previamente identificado de tal forma que, en cualquier otro momento, pueda ser recuperado para nuevas investigaciones o análisis o para su destrucción, cuando así lo disponga la autoridad judicial competente.

Cuando se tratare de otra clase de elementos como, moneda, documentos manuscritos mecanografiados o de cualquier otra clase; o partes donde constan números seriales y otras semejantes, elaborado el informe pericial, continuarán bajo custodia.

Artículo 268. *Examen previo al recibo.* Toda persona que deba recibir un elemento material probatorio, antes de hacerlo, revisará el recipiente que lo contiene y dejará constancia del estado en que se encuentre.

Artículo 269. *Identificación.* Toda persona que aparezca como embalador y rotulador, o que entrega o recibe el contenedor de elemento material probatorio, deberá identificarse con su nombre completo y apellidos, el número de su cédula su ciudadanía y el cargo que desempeña. Así constará en el formato de cadena de custodia.

Artículo 270. *Los contenedores.* La Fiscalía General de la Nación diseñará los recipientes en los que se habrán de embalar los elementos materiales probatorios; los clasificará según los elementos que deban contener y ordenará su producción en número suficiente para abastecer a todos los funcionarios que habrán de usarlos. En ningún momento podrán faltar tales contenedores.

Artículo 271. *Los rótulos.* La Fiscalía General de la Nación seleccionará el material de los rótulos previstos en este capítulo y las seguridades necesarias que los identifiquen como auténticos. Además, ordenará la producción suficiente para marcar los contenedores. Estos y aquellos, serán cuidadosamente administrados, de modo que únicamente lleguen a las personas autorizadas.

Artículo 272. *Rechazo.* Ningún servidor público admitirá elemento material que no esté embalado en contenedores y con rótulos oficiales.

Artículo 273. *Certificación.* La policía judicial y los peritos certificarán la cadena de custodia.

La certificación es la afirmación de que el elemento hallado en el lugar, fecha y hora indicados en el rótulo, es el que fue recogido por la policía judicial y que ha llegado al laboratorio y ha sido examinado por el perito o peritos. Además, que en todo momento ha estado custodiado.

Artículo 274. *Destino de macroelementos.* Salvo lo previsto en este código en relación con las medidas cautelares sobre bienes susceptibles de comiso, los macroelementos materiales probatorios, mencionados en este capítulo, después de que sean examinados, fotografiados, grabados o filmados, serán devueltos al propietario, poseedor o al tenedor legítimo según el caso, previa demostración de la calidad invocada, siempre y cuando no hayan sido medios eficaces para la comisión del delito.

Artículo 275. *Formato de cadena de custodia.* La Fiscalía General de la Nación diseñará el formato de cadena de custodia. El diseño consultará lo dispuesto en este capítulo y se adoptarán las seguridades necesarias que lo identifiquen como auténtico. Se ordenará la producción del formato en cantidades suficientes para satisfacer las necesidades de las investigaciones. Este material se administrará celosamente de modo que únicamente llegue a las personas autorizadas.

Artículo 276. *Número de formatos por caso.* Por cada elemento material embalado y rotulado, se empleará un formato de cadena de custodia.

Si el diseño de formato es para múltiples y variados elementos, en el mismo formato podrán firmar el recibo del elemento tantas personas como elementos sean, o una sola persona que recibe varios elementos.

CAPITULO VI

Facultades de la defensa en la investigación

Artículo 277. *Facultades de quien no es imputado.* Quien advierta que la Fiscalía adelanta investigación en su contra, podrá asesorarse de

abogado, aquél o este, podrán buscar, identificar empíricamente, recoger y embalar los elementos materiales probatorios, y hacerlos examinar por peritos particulares a su costa. Tales elementos y el informe sobre ellos pueden ser utilizados en su defensa ante las autoridades judiciales.

También podrán entrevistar personas con el fin de descubrir información útil que pueda ser empleada en su defensa ante las autoridades judiciales siempre que se garantice la cadena de custodia.

Artículo 278. *Facultades del imputado.* El imputado o su defensor, durante la investigación, podrán buscar, identificar empíricamente, recoger y embalar los elementos materiales probatorios. Con la solicitud para que sean examinados y la constancia de la Fiscalía de que es imputado o defensor de este, los trasladarán al respectivo laboratorio del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, donde los entregarán bajo recibo.

Artículo 279. *Contenido de la solicitud.* La solicitud deberá contener en forma separada, con claridad y precisión, las preguntas que en relación con el elemento material probatorio entregado, se requiere que responda el perito o peritos, previa la investigación y análisis que corresponda.

Artículo 280. *Actuación del perito.* Recibida la solicitud y los elementos mencionados en los artículos anteriores, el perito los examinará. Si encontrare que el contenedor, tiene señales de haber sido o intentado ser abierto, o que la solicitud no reúne las mencionadas condiciones lo devolverá al solicitante. Lo mismo hará en caso de que encontrare alterado el elemento por examinar. Si todo lo hallare aceptable, procederá a la investigación y análisis que corresponda y a la elaboración del informe pericial.

El perito o los peritos emplearán las mismas técnicas e instrumentos que utilizan en los exámenes solicitados por la Fiscalía.

El informe pericial se entregará bajo recibo al solicitante y se conservará un ejemplar de aquel y de este en el Instituto.

Artículo 281. *Facultad de entrevistar.* El imputado o su defensor, podrán entrevistar a personas con el fin de encontrar información útil para la defensa. En esta entrevista se emplearán las técnicas aconsejadas por la criminalística.

La entrevista se podrá recoger y conservar por escrito, en grabación magnetofónica, en video o en cualquier otro medio técnico idóneo.

Artículo 282. *Obtención de declaración jurada.* El imputado o su defensor podrán solicitar a un alcalde municipal, inspector de policía o notario público, que le reciba declaración jurada a la persona, cuya declaración pueda resultar de especial utilidad para la investigación. Esta podrá recogerse por escrito, grabación magnetofónica, en video o en cualquier otro medio técnico idóneo.

Artículo 283. *Solicitud de prueba anticipada.* El imputado o su defensor, podrán solicitar al juez de control de garantías, la práctica anticipada de cualquier medio de prueba, en casos de extrema necesidad y urgencia, para evitar la pérdida o alteración del medio probatorio. Se efectuará una audiencia, previa citación al fiscal correspondiente para garantizar el contradictorio.

Se aplicarán las mismas reglas previstas para la práctica de la prueba anticipada y cadena de custodia.

TITULO II

MEDIOS COGNOSCITIVOS EN LA INDAGACION E INVESTIGACION CAPITULO UNICO

Elementos materiales probatorios e información

Artículo 284. *Elementos materiales probatorios.* Para efectos de este código se entiende por elementos materiales probatorios, los siguientes:

- a) Huellas, rastros, manchas, residuos, vestigios y similares, dejados por la ejecución de la actividad delictiva;
- b) Armas, instrumentos, objetos y cualquier otro medio utilizado para la ejecución de la actividad delictiva;

c) Dinero, bienes y otros efectos provenientes de la ejecución de la actividad delictiva;

d) Los elementos materiales descubiertos, recogidos y asegurados en desarrollo de diligencia investigativa de registro y allanamiento, inspección corporal y registro personal;

e) Los documentos de toda índole hallados en diligencia investigativa de inspección o que han sido entregados voluntariamente por quien los tenía en su poder o que han sido abandonados allí;

f) Los elementos materiales obtenidos mediante grabación, filmación, fotografía, video o cualquier otro medio avanzado, utilizados como cámaras de vigilancia, en recinto cerrado o en espacio público.

g) El mensaje de datos, como el intercambio electrónico de datos, Internet, correo electrónico, telegrama, télex, telefax o similar, regulados por la Ley 527 de 1999 o las normas que la sustituyan, adicionen o reformen;

h) Los demás elementos materiales similares a los anteriores y que son descubiertos, recogidos y custodiados por el Fiscal General o por el fiscal directamente o por conducto de servidores de policía judicial o de peritos del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, o de laboratorios aceptados oficialmente.

Artículo 285. *Legalidad.* La legalidad del elemento material probatorio depende de que en la diligencia en la cual se recoge o se obtiene, se haya observado lo prescrito en la Constitución Política, en los tratados internacionales sobre derechos humanos vigentes en Colombia y en las leyes.

Artículo 286. *Autenticidad.* Los elementos materiales probatorios son auténticos cuando han sido detectados, fijados, recogidos y embalados técnicamente, y sometidos a las reglas de cadena de custodia.

Artículo 287. *Identificación técnico científica.* La identificación técnico científica consiste en la determinación de la naturaleza y características del elemento material probatorio, hecha por expertos en ciencia, técnica o arte. Dicha determinación se expondrá en el informe pericial.

Artículo 288. *Criterios de valoración.* La valoración de los elementos materiales probatorios se hará teniendo en cuenta su legalidad, autenticidad, sometimiento a cadena de custodia y grado actual de aceptación científica, técnica o artística de los principios en que se funda el informe.

Artículo 289. *Elemento material probatorio recogido por agente encubierto o por agente infiltrado.* El elemento material probatorio, recogido por agente encubierto o agente infiltrado, en desarrollo de operación legalmente programada, solo podrá ser utilizado como fuente de actividad investigativa. Pero establecida su autenticidad y sometido a cadena de custodia, tiene el valor de cualquier otro elemento material probatorio.

Artículo 290. *Elemento material probatorio recogido en desarrollo de entrega vigilada.* El elemento material probatorio, recogido por servidor público judicial colombiano, en desarrollo de la técnica de entrega vigilada, debidamente programada, solo podrá ser utilizado como fuente de actividad investigativa. Pero establecida su autenticidad y sometido a cadena de custodia, tiene el valor de cualquier otro elemento material probatorio.

Artículo 291. *Elemento material probatorio remitido del extranjero.* El elemento material probatorio remitido por autoridad extranjera, en desarrollo de petición de autoridad penal colombiana, basada en convenio bilateral o multilateral de cooperación judicial penal recíproca, será sometido a cadena de custodia y tendrá el mismo valor que se le otorga a cualquier otro elemento material probatorio.

Artículo 292. *Conocimiento probable para solicitar medida que asegure la comparecencia del imputado al proceso penal.* Para dictar medida que asegure la comparecencia del imputado al proceso penal es suficiente que, de los elementos materiales probatorios o de la información legalmente obtenida, se pueda inferir razonablemente que el imputado es autor o partícipe de la conducta delictiva que se investiga.

Artículo 293. *Grado de conocimiento suficiente para elaborar escrito de acusación.* Para elaborar el escrito de acusación es suficiente que, de los elementos materiales probatorios o de la información legalmente obtenida, se pueda afirmar, con probabilidad de verdad, que la conducta delictiva existió y que el imputado es su autor o partícipe.

Artículo 294. *Declaración jurada.* Al testigo de especial utilidad, descubierto en la entrevista o de cualquier otro medio lícito, se le recibirá declaración jurada sobre los hechos, la cual se recogerá por escrito, en cinta magnetofónica o en video, con las siguientes finalidades:

a) Que sirva como medio de recordar en el momento en que deba rendir testimonio ante el juez;

b) Lograr que el testigo tenga mayor cuidado al recordar y relatar los hechos;

c) Refrescar la memoria del testigo en el juicio posterior;

d) Darle al fiscal una noción de la calidad y grado de la información con la que cuenta.

Artículo 295. *Interrogatorio a indiciado.* El fiscal o el servidor de policía judicial, según el caso, que tuviere motivos fundados de acuerdo con los medios cognoscitivos previstos en este código, para inferir que una persona es autora o partícipe de la conducta que se investiga, sin hacerle imputación alguna, podrá interrogarlo acerca de sus datos personales. Si el interrogado aceptare espontáneamente ser autor o partícipe, de inmediato le hará saber que no está obligado a declarar contra sí mismo y que tiene derecho a designar un defensor. Antes de proseguir el interrogatorio, el indiciado deberá estar asistido por su defensor.

Artículo 296. *Aceptación por el imputado.* La aceptación por el imputado es el reconocimiento libre, consciente y espontáneo de haber participado en alguna forma o grado en la ejecución de la conducta delictiva que se investiga.

Artículo 297. *Informe de investigador de campo.* El informe del investigador de campo tendrá las siguientes características:

a) Descripción clara y precisa de la forma, técnica e instrumentos utilizados en la actividad investigativa a que se refiere el informe;

b) Descripción clara y precisa de los resultados de la actividad investigativa antes mencionada;

c) Relación clara y precisa de los elementos materiales probatorios descubiertos, así como de su recolección, embalaje y sometimiento a cadena de custodia;

d) Acompañará el informe con el registro de las entrevistas e interrogatorios que hubiese realizado.

Artículo 298. *Informe de investigador de laboratorio.* El informe del investigador de laboratorio tendrá las siguientes características:

a) La descripción clara y precisa del elemento material probatorio examinado;

b) La descripción clara y precisa de los procedimientos técnicos empleados en la realización del examen y, además, informe sobre el grado de aceptación de dichos procedimientos por la comunidad técnico científica;

c) Relación de los instrumentos empleados e información sobre su estado de mantenimiento al momento del examen;

d) Explicación del principio o principios técnicos y científicos aplicados e informe sobre el grado de aceptación por la comunidad científica;

e) Descripción clara y precisa de los procedimientos de su actividad técnico científica;

f) Interpretación de esos resultados.

Artículo 299. *Prueba anticipada.* Durante la investigación se podrá practicar anticipadamente cualquier medio de prueba pertinente, con el cumplimiento de los siguientes requisitos:

1. Que sea practicada ante el juez que cumpla funciones de control de garantías.

2. Que sea solicitada por el Fiscal General o el fiscal delegado, o por la defensa.

3. Que sea citada la parte no solicitante.

4. Que sea por motivos de extrema necesidad y para evitar la pérdida o alteración del medio probatorio.

5. Que se practique en audiencia pública y con observancia de las reglas previstas para la práctica de pruebas en el juicio.

Parágrafo. La defensa solo podrá pedir la práctica de prueba anticipada, a partir de la formulación de la imputación y, en caso de que el fiscal no lo haya hecho, también puede solicitarla en el mismo acto.

Artículo 300. *Conservación de la prueba anticipada.* Toda prueba anticipada deberá conservarse, por el fiscal, de acuerdo con medidas dispuestas por el juez de control de garantías.

TITULO III

MEDIOS DE PRUEBA EN EL JUICIO

CAPITULO I

Disposiciones generales

Artículo 301. *Fines.* Son fines de las pruebas judiciales penales, hacer conocidos para el juez, más allá de duda razonable, los hechos y circunstancias materia del juicio y los de la responsabilidad penal del acusado como autor o partícipe.

Artículo 302. *Libertad.* Los hechos y circunstancias de interés para la solución correcta del caso, se podrán probar por cualquiera de los medios establecidos en este código o por cualquier otro medio técnico o científico, que no viole los derechos humanos.

Artículo 303. *Oportunidad.* Toda prueba deberá ser solicitada o presentada en la audiencia preparatoria. Se practicará en el momento correspondiente del juicio oral y público, pero en el caso de que el testigo o el perito, por razones justificadas, no pueda comparecer a la audiencia, la prueba se realizará en el sitio determinado por el juez.

Artículo 304. *Pertinencia.* El elemento material probatorio y el medio de prueba deberán referirse, directa o indirectamente, a los hechos o circunstancias relativos a la comisión de la conducta delictiva y sus consecuencias, así como a la identidad o a la responsabilidad penal del acusado. También es pertinente cuando solo sirve para hacer más probable o menos probable uno de los hechos o circunstancias mencionados, o se refiere a la credibilidad de un testigo o de un perito.

Artículo 305. *Admisibilidad.* Toda prueba pertinente es admisible, salvo en alguno de los siguientes casos:

- a) Que exista peligro de causar grave perjuicio indebido;
- b) Probabilidad de que genere confusión en lugar de mayor claridad al asunto, o exhiba escaso valor probatorio, y
- c) Que sea injustamente dilatoria del procedimiento.

Artículo 306. *Publicidad.* Todo medio probatorio se practicará en presencia del juez, con asistencia de las partes y del público presente en la audiencia del juicio oral y público. La misma publicidad tendrá la presentación de cualquier elemento material probatorio y de la prueba anticipada realizada durante la investigación.

Artículo 307. *Contradicción.* Las partes tienen la facultad de controvertir, tanto los medios de prueba como los elementos materiales probatorios presentados en el juicio, o aquellos que se practiquen por fuera de la audiencia pública.

Artículo 308. *Criterios de valoración.* Los medios de prueba y los elementos materiales probatorios, se apreciarán en conjunto. Los criterios para apreciar cada uno de ellos serán señalados en el respectivo capítulo.

Artículo 309. *Conocimiento para condenar.* Para condenar se requiere el conocimiento cierto, más allá de duda razonable, acerca del delito y de la responsabilidad penal del acusado, fundado en las pruebas debatidas en el juicio. La sentencia condenatoria no podrá fundamentarse exclusivamente en pruebas de referencia.

Artículo 310. *Medios de conocimiento.* Son medios de conocimiento en el juicio oral y público, la prueba testimonial, la prueba pericial, la prueba documental, la prueba de inspección, los elementos materiales

probatorios, o, cualquier otro medio técnico o científico, que no viole el ordenamiento jurídico.

CAPITULO II

Determinación de la mejor evidencia

Artículo 311. *Criterio general.* Cuando se exhiba un documento con el propósito de ser valorado como prueba y resulte admisible, conforme con lo previsto en capítulo anterior deberá presentarse el original del mismo como mejor evidencia de su contenido.

Artículo 312. *Excepciones a la regla de la mejor evidencia.* Se exceptúa de lo anterior los documentos públicos, o los duplicados auténticos, o aquellos cuyo original se hubiere extraviado o que se encuentran en poder de uno cualquiera de los sujetos procesales, o se trata de documentos voluminosos y solo se requiere de una parte o fracción del mismo, o, finalmente, se estipule la innecesidad de la presentación del original.

Parágrafo. Lo anterior no es óbice para que resulte indispensable la presentación del original del documento, cuando se requiera para la realización de estudios técnicos tales como los de grafología y documentología, o forme parte de la cadena de custodia.

TITULO IV

COOPERACION INTERNACIONAL EN MATERIA PROBATORIA

Artículo 313. *Principios generales.* Las autoridades investigativas y judiciales se aprestarán a cumplir los requerimientos de cooperación internacional que les sean solicitados de conformidad con la Constitución Política y los tratados internacionales que regulen la materia, en especial en desarrollo de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional.

Igualmente, las mencionadas autoridades efectuarán las solicitudes de cooperación que correspondan.

Las solicitudes de asistencia y cooperación que reciba el Estado colombiano se tramitarán por medio del Ministerio de Relaciones Exteriores, el que las remitirá a la autoridad competente. Se formularán y recibirán en inglés o cualquiera de los idiomas de la ONU, salvo que se tratare de un país iberoamericano, en cuyo caso se formularán y recibirán en español.

Artículo 314. *Solicitud de recolección de medios de prueba que deba celebrarse en el exterior.* El Estado colombiano podrá solicitar a otro Estado u Organismo Internacional la entrega de documentos o información, que sean relevantes y necesarios para un caso que esté siendo investigado o juzgado en Colombia, en cuyo caso la prueba se practicará en el juicio oral, con sujeción a las regulaciones probatorias previstas en este código.

Artículo 315. *Traslado de testigos y peritos.* El Estado colombiano solicitará la colaboración de los testigos o peritos que sean relevantes y necesarios para investigación y el juzgamiento, mediante ruego de su traslado por la vía consular, pero la parte interesada correrá con los gastos. Los testigos y peritos declararán en el juicio oral, con sujeción a las disposiciones de este código.

Si no fuere posible la colaboración por razones jurídicas, se estará a ellas. Si no lo fuere por razones prácticas, el juez colombiano se desplazará al lugar donde se encontrare el testigo o perito, y practicará la prueba. Si ello no fuere tampoco posible, se solicitará por vía consular la práctica de la prueba en el país donde se encontrare el testigo o perito, y esta será incorporada con sujeción a la regulación de la aducción de la prueba de referencia.

Artículo 316. *Delitos transnacionales.* Cuando se trate de delitos que revistan una dimensión internacional, como el terrorismo, la trata de personas o el crimen organizado internacional, la Fiscalía General de la Nación podrá constituir una comisión internacional e interinstitucional destinada a la colaboración en la indagación o investigación.

Artículo 317. *Facultades para evitar dilaciones injustificadas.* Las solicitudes internacionales probatorias no deben dilatar el curso de los procedimientos. Con este fin, los jueces tendrán amplias facultades para evitar estas dilaciones, tomando las decisiones que sean necesarias.

Artículo 318. *Rechazo de solicitudes.* El Estado colombiano se negará a dar curso a las solicitudes probatorias, cuando se trate de una persona que por el mismo delito está siendo o ha sido investigada en Colombia, salvo lo dispuesto en el Estatuto de la Corte Penal Internacional u otros tratados internacionales.

TITULO V

REGIMEN DE LA LIBERTAD Y SU RESTRICCIÓN

CAPITULO I

Disposiciones Comunes

Artículo 319. *Afirmación de la libertad.* Las disposiciones de este código que autorizan preventivamente la privación o restricción de la libertad del imputado tienen carácter excepcional; solo podrán ser interpretadas restrictivamente y su aplicación debe ser necesaria, adecuada, proporcional y razonable frente a los contenidos constitucionales.

Artículo 320. *Finalidad de la restricción de la libertad.* La libertad personal podrá ser afectada dentro de la actuación cuando sea indispensable para evitar la obstrucción de la justicia, o para asegurar la comparecencia del imputado al proceso, la protección de la comunidad, en especial de las víctimas, o el cumplimiento de la pena.

CAPITULO II

Captura

Artículo 321. *Requisitos generales.* Para la captura se requerirá orden escrita proferida por el juez competente con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley. La orden deberá ser solicitada por la Fiscalía General de la Nación si la actuación se encuentra en la etapa de investigación, y será expedida por el juez de control de garantías.

Si la actuación se encuentra en etapa de juzgamiento o en la de ejecución de la sentencia, la orden será expedida por el juez competente, a solicitud del fiscal o del Ministerio Público.

Capturada la persona será puesta a disposición de un juez de control de garantías en el plazo máximo de treinta y seis (36) horas.

Artículo 322. *Captura del indiciado o imputado.* Salvo los casos de captura en flagrancia, o de la captura excepcional dispuesta por la Fiscalía General de la Nación, con arreglo a lo establecido en este código, el indiciado o imputado no podrá ser privado de su libertad ni restringido en ella, sin previa orden emanada del juez de control de garantías.

En estos eventos, el fiscal que dirija la investigación, solicitará oralmente, en audiencia de control de legalidad, la autorización al juez correspondiente, acompañado de la policía judicial que presentará los elementos materiales probatorios, o la información pertinente, en la cual se fundamentará la medida. El juez de control de garantías, podrá interrogar directamente a los testigos, peritos y funcionarios de la policía judicial y, luego de escuchar los argumentos del fiscal, decidirá de plano.

Excepcionalmente, la policía judicial, en situaciones de urgencia, no susceptibles de intervención inmediata de la Fiscalía General de la Nación, podrá solicitar directamente al juez de control de garantías, la expedición de la orden de captura.

El mandamiento escrito expedido por el juez correspondiente indicará de forma clara y sucinta los motivos de la captura, el nombre y los datos que permitan individualizar al indiciado o imputado, cuya captura se ordena, el número de radicación de la investigación adelantada por la policía judicial y el fiscal que dirige la investigación.

La orden de captura tendrá una vigencia máxima de un año, pero podrá prorrogarse tantas veces como resulte necesario, a petición motivada y sustentada oralmente por el fiscal correspondiente.

Artículo 323. *Orden escrita de captura.* La orden de captura deberá contener los datos personales del imputado, acusado o condenado que sirvan para su correcta identificación, la mención del hecho que la motiva, y la determinación de la autoridad que dispuso su captura.

Proferida la orden de captura, el funcionario judicial enviará copia a la Fiscalía General de la Nación para ser registrada en el sistema de información que se lleve para el efecto, a más tardar dentro de los cinco (5) días siguientes a su expedición. También enviará copia a los organismos de policía judicial encargados de realizar la aprehensión física. De igual forma deberá comunicarse cuando por cualquier motivo pierda su vigencia, para descargarla de los archivos de cada organismo, indicando el motivo de tal determinación.

Artículo 324. *Captura sin orden judicial.* En los eventos en que proceda la detención preventiva, el Fiscal General de la Nación o su delegado podrá proferir excepcionalmente órdenes de captura cuando en desarrollo de la investigación tenga motivos fundados para inferir que determinada persona ha participado en la conducta investigada, no sea posible obtener inmediatamente orden judicial, y concurra al menos una de las siguientes causales:

1. Cuando exista riesgo de que la persona evada la acción de la justicia.
2. Cuando represente peligro para la comunidad u obstruya la investigación.

En estos casos el capturado será puesto a disposición del juez de control de garantías inmediatamente a más tardar dentro de las treinta y seis (36) horas, para que en audiencia resuelva lo pertinente.

Artículo 325. *Flagrancia.* Se entiende que hay flagrancia cuando:

1. La persona es sorprendida y aprehendida al momento de cometer el delito.
2. La persona es sorprendida o individualizada al momento de cometer el delito y aprehendida inmediatamente después por persecución o voces de auxilio de quien presencie el hecho.
3. La persona es sorprendida y capturada con objetos, instrumentos o huellas, de los cuales aparezca fundadamente que momentos antes ha cometido un delito o participado en él.

Artículo 326. *Procedimiento en caso de flagrancia.* Cualquier persona podrá capturar a quien sea sorprendido en flagrancia.

Cuando sea una autoridad la que realice la captura deberá conducir al aprehendido inmediatamente o a más tardar en el término de la distancia, ante la Fiscalía General de la Nación.

Cuando sea un particular quien realiza la aprehensión deberá conducir al aprehendido en el término de la distancia ante cualquier autoridad de policía. Esta identificará al aprehendido, recibirá un informe detallado de las circunstancias en que se produjo la captura, y pondrá al capturado dentro del mismo plazo a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

Si de la información suministrada o recogida aparece que el supuesto delito no comporta detención preventiva, el aprehendido o capturado será liberado por la fiscalía, imponiéndosele bajo palabra un compromiso de comparecencia cuando sea necesario. De la misma forma se procederá si la captura fuere ilegal.

La Fiscalía General de la Nación, con fundamento en el informe recibido de la autoridad policiva o del particular que realizó la aprehensión, o con base en los elementos materiales probatorios aportados, dentro del término máximo de treinta y seis (36) horas presentará al aprehendido ante el juez de control de garantías para que este se pronuncie en audiencia preliminar sobre la legalidad de la aprehensión y las solicitudes de la fiscalía, de la defensa y del Ministerio Público.

Artículo 327. *Derechos del capturado.* Al capturado se le informará de manera inmediata lo siguiente:

1. Del hecho que se le atribuye y motivó su captura y el funcionario que la ordenó.
2. Del derecho a indicar la persona a quien se deba comunicar su aprehensión.
3. Del derecho que tiene a guardar silencio y que las manifestaciones que haga podrán ser usadas en su contra.

4. Del derecho que tiene a designar un abogado de confianza. De no poder hacerlo, el sistema nacional de defensoría pública proveerá su defensa.

5. Del derecho a entrevistarse con su abogado en el menor término posible.

Artículo 328. *Formalización de la reclusión.* Cuando el capturado deba ser recluido el funcionario judicial a cuyas órdenes se encuentre lo remitirá inmediatamente a la autoridad del establecimiento de reclusión pertinente, para que se le mantenga privado de la libertad. La remisión expresará el motivo y la fecha de la captura.

En caso de que el capturado haya sido conducido a un establecimiento carcelario sin la orden correspondiente, el director la solicitará al funcionario competente. Si transcurridas treinta y seis (36) horas desde el ingreso del aprehendido no se ha satisfecho este requisito, será puesto inmediatamente en libertad.

Artículo 329. *Registro de personas capturadas y detenidas.* Los organismos con atribuciones de policía judicial, llevarán un registro actualizado de las capturas de todo tipo que realicen, con los siguientes datos: identificación del capturado, lugar, fecha y hora en la que se llevó a cabo su captura, razones que la motivaron, funcionario que realizó o formalizó la captura y la autoridad ante la cual fue puesto a disposición.

Para tal efecto, cada entidad deberá remitir el registro previsto en el inciso anterior a la Fiscalía General de la Nación, para que la dependencia a su cargo consolide y actualice dicho registro con la información sobre las capturas realizadas por cada organismo.

CAPITULO III

Medidas de Aseguramiento

Artículo 330. *Medidas de aseguramiento.* Son medidas de aseguramiento:

A. Privativas de la libertad

1. Detención preventiva.
2. Detención preventiva domiciliaria.

B. No privativas de la libertad

1. La obligación de someterse a un mecanismo de vigilancia electrónica.
2. La obligación de someterse a la vigilancia de una persona o institución determinada.
3. La obligación de presentarse periódicamente o cuando sea requerido por el juez ante sí mismo o ante la autoridad que él designe.
4. La obligación de observar buena conducta individual, familiar y social, con especificación de la misma y su relación con el hecho.
5. La prohibición de salir del país, del lugar en el cual reside o del ámbito territorial que fije el juez.
6. La prohibición de concurrir a determinadas reuniones o lugares.
7. La prohibición de comunicarse con determinadas personas o con las víctimas, siempre que no se afecte el derecho a la defensa.
8. La prestación de una caución real adecuada, por el propio imputado o por otra persona, mediante depósito de dinero, valores, constitución de prenda o hipoteca, entrega de bienes o la fianza de una o más personas idóneas.
9. La prohibición de salir del lugar de habitación entre las 6:00 p.m. y las 6:00 a.m.

Artículo 331. *Requisitos.* El juez de control de garantías, a petición del Fiscal General de la Nación o de su delegado, decretará la medida de aseguramiento siempre que se cumplan los siguientes requisitos:

1. Que de los elementos materiales probatorios recogidos y asegurados legalmente o de la información obtenida, se pueda inferir razonablemente que el imputado es autor o partícipe de la conducta delictiva que se investiga;
2. Que la medida de aseguramiento se muestre como necesaria para evitar que el imputado obstruya el debido ejercicio de la justicia;
3. Que el imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad o de la víctima;

4. Que resulte probable que el imputado no comparecerá al proceso o que no cumplirá la sentencia.

Artículo 332. *Obstrucción de la justicia.* Se entenderá que la imposición de la medida de aseguramiento es indispensable para evitar la obstrucción de la justicia, cuando existan motivos graves y fundados que permitan inferir que el imputado podrá destruir, modificar, dirigir, impedir, ocultar o falsificar elementos de prueba; o se considere que inducirá a coimputados, testigos, peritos o terceros para que informen falsamente o se comporten de manera desleal o reticente; o cuando impida o dificulte la realización de las diligencias o la labor de los funcionarios y demás intervinientes en la actuación.

Artículo 333. *Peligro para la comunidad.* Para estimar si la libertad del imputado resulta peligrosa para la seguridad de la comunidad o de las víctimas, además de la gravedad del hecho y la pena imponible, deberá tenerse en cuenta las siguientes circunstancias:

1. La continuación de la actividad delictiva o su probable vinculación con organizaciones criminales.
2. El número de delitos que se le imputan y la naturaleza de los mismos.
3. El hecho de estar acusado, o de encontrarse sujeto a alguna medida de aseguramiento, o de estar disfrutando un mecanismo sustitutivo de la pena privativa de la libertad, por delito doloso o preterintencional.
4. La existencia de sentencias condenatorias vigentes por delito doloso o preterintencional.

Artículo 334. *Peligro para la víctima.* Se entenderá que la seguridad de la víctima se encuentra en peligro por la libertad del imputado, cuando existan motivos fundados que permitan inferir que podrá atentar contra ella, su familia o sus bienes.

Artículo 335. *No comparecencia.* Para decidir acerca de la eventual no comparecencia del imputado, además de la modalidad y gravedad del hecho y de la pena imponible se tendrá en cuenta:

1. La falta de arraigo en la comunidad, determinado por el domicilio, asiento de la familia, de sus negocios o trabajo y las facilidades que tenga para abandonar definitivamente el país o permanecer oculto.
2. La gravedad del daño causado y la actitud que el imputado asuma frente a este.
3. El comportamiento del imputado durante el procedimiento o en otro anterior, del que se pueda inferir razonablemente su falta de voluntad para sujetarse a la investigación, a la persecución penal y al cumplimiento de la pena.

Artículo 336. *Procedencia de la detención preventiva.* Satisfechos los requisitos señalados en el artículo 331, procederá la detención preventiva en los siguientes casos:

1. En los delitos de competencia de los jueces regionales;
2. En los delitos investigables de oficio, cuando el mínimo de la pena prevista por la ley exceda de cuatro (4) años.

Artículo 337. *Sustitución de la detención preventiva.* La detención preventiva podrá sustituirse por domiciliaria en los siguientes eventos:

1. Cuando para el cumplimiento de los fines previstos para la medida de aseguramiento sea suficiente la reclusión en el domicilio, aspecto que será evaluado por el juez al momento de decidir sobre su imposición.
2. Cuando el imputado o acusado fuere mayor de sesenta y cinco (65) años, siempre que su personalidad, la naturaleza y modalidad del delito hagan aconsejable su reclusión domiciliaria.
3. Cuando a la imputada le falte dos (2) meses para el parto, o hasta seis (6) meses desde la fecha del nacimiento.
4. Cuando el imputado o acusado estuviere en estado grave por enfermedad, previo dictamen de médicos oficiales.

El juez determinará si el imputado debe permanecer en su domicilio, en clínica u hospital.

5. Si es padre o madre cabeza de familia de hijo menor de doce (12) años o si alguno de ellos sufre incapacidad mental permanente.

La detención domiciliaria comporta los permisos necesarios para los controles médicos de rigor, la ocurrencia del parto, y para trabajar en la hipótesis del numeral 5.

En todos los eventos el beneficiario suscribirá un acta en la cual se compromete a permanecer en el lugar o lugares indicados, a no cambiar de domicilio sin previa autorización, a concurrir ante las autoridades cuando fuere requerido, y a someterse a los mecanismos de control y vigilancia electrónica o de una persona o institución determinada, según lo disponga el juez.

Tratándose de delitos de competencia de los jueces regionales no podrá sustituirse la detención preventiva por domiciliaria.

Artículo 338. *Medidas de aseguramiento no privativas de la libertad.* Cuando se proceda por delitos cuya pena principal no sea privativa de la libertad, o por delitos querellables, o cuando el mínimo de la pena señalada en la ley no exceda de cuatro (4) años, satisfechos los requisitos del artículo 331, se podrá imponer una o varias de las medidas señaladas en el artículo 330 literal B, siempre que sean razonables y proporcionadas para el cumplimiento de las finalidades previstas.

Artículo 339. *Incumplimiento.* Si el imputado o acusado incumpliere alguna de las obligaciones impuestas al concederle la detención domiciliaria, o las inherentes a la medida de aseguramiento no privativa de la libertad a que estuviere sometido, a petición de la fiscalía o del Ministerio Público, el juez podrá, según el caso, ordenar su reclusión en establecimiento carcelario, disponer la reclusión domiciliaria, o imponer otra medida no privativa de la libertad, dependiendo de la gravedad del incumplimiento o de la reincidencia.

Artículo 340. *Libertad.* Las medidas de aseguramiento indicadas en los anteriores artículos tendrán vigencia durante toda la actuación y su revocatoria sólo procederá en los siguientes casos:

1. Cuando los requisitos señalados en el artículo 331 hayan desaparecido;

2. Cuando se haya cumplido la pena según la determinación anticipada que para este efecto se haga, se haya precluido la investigación, o se haya absuelto al acusado.

En los delitos señalados en el artículo 336, numeral 1, la libertad se hará efectiva cuando haya sentencia en firme de preclusión o absolución. En todos los demás eventos la libertad se cumplirá de inmediato.

3. Como consecuencia de la aplicación del principio de oportunidad o preacuerdos.

4. Cuando transcurridos treinta (30) días contados a partir de la fecha de la formulación de imputación no se hubiere formulado la acusación.

5. Cuando transcurridos cincuenta (50) días contados a partir de la fecha en que la Fiscalía General de la Nación presente la acusación, no se haya dado inicio a la audiencia de juzgamiento.

Artículo 341. *De la caución.* Fijada por el juez una caución, el obligado con la misma, si carece de recursos suficientes para prestarla, deberá demostrar suficientemente esa incapacidad así como la cuantía que podría atender.

En el evento en que se demuestre la incapacidad del imputado para prestar caución prendaria, esta podrá ser sustituida por cualquiera de las medidas de aseguramiento previstas en el literal B del artículo 330, de acuerdo con los criterios de razonabilidad, proporcionalidad y necesidad.

Esta decisión no admite recurso.

Artículo 342. *Solicitud de imposición de medida de aseguramiento.* El fiscal solicitará al juez de control de garantías imponer medida de aseguramiento, indicando la persona, el delito, los medios cognoscitivos que pretende hacer valer y la urgencia de la misma, los cuales se evaluarán en audiencia permitiendo a la defensa la controversia pertinente.

La fiscalía solo aducirá los medios cognoscitivos necesarios para sustentar la imposición de la medida. La defensa no podrá solicitar el descubrimiento de elementos materiales probatorios adicionales, ni la práctica de pruebas para controvertir la petición.

Escuchados los argumentos del fiscal, Ministerio Público y defensa, el juez emitirá su decisión.

La presencia del defensor constituye requisito de validez de la respectiva audiencia.

Artículo 343. *Impugnación contra la decisión tomada en audiencia preliminar.* Contra la decisión que imponga o niegue la medida de aseguramiento sobre el imputado o sus bienes, procede el recurso de apelación en el efecto devolutivo ante el superior de aquel que la tomó.

Artículo 344. *Audiencia de reconsideración.* Negada la imposición de medida de aseguramiento, el fiscal, con nuevos medios cognoscitivos, podrá acudir ante el mismo juez, o ante otro juez de control de garantías, para que imponga, si fuere procedente, la medida solicitada. Esta decisión podrá ser apelada para ante el respectivo superior.

Con esta nueva pretensión termina la posibilidad de impugnación.

Artículo 345. *Solicitud de revocatoria.* Cualquiera de los sujetos procesales podrá solicitar la revocatoria de la medida de aseguramiento, por una sola vez y ante el mismo juez que la impuso, presentando los elementos materiales probatorios o la información legalmente obtenidos que permitan inferir razonablemente que han desaparecido los requisitos del artículo 331. Contra esta decisión no procede recurso alguno.

De igual manera se procederá cuando sea necesario sustituir la medida de aseguramiento inicialmente impuesta.

Artículo 346. *Informe sobre medidas de aseguramiento.* El juez que profiera, modifique o revoque una medida de aseguramiento deberá informarlo a la Fiscalía General de la Nación y al Departamento Administrativo de Seguridad DAS, a más tardar dentro de los cinco (5) días siguientes a la decisión. Tales datos serán registrados y almacenados en el sistema de información que para el efecto llevará la Fiscalía General de la Nación.

TITULO VI

PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD

Artículo 347. *Principio de Oportunidad:* El principio de oportunidad es la facultad que tiene la Fiscalía General de la Nación para abstenerse de ejercer la persecución penal, suspenderla o renunciar a ella, en los casos establecidos en este código.

Su aplicación solo será posible antes de presentarse la acusación.

Artículo 348. *Casos en que procede la abstención.* La Fiscalía General de la Nación podrá abstenerse de ejercer la persecución penal:

A. Cuando se presenten las siguientes causales sustanciales:

1. Cuando la antijuridicidad material, en los delitos cuyo injusto sea susceptible de graduación, pierda entidad jurídica dadas las condiciones del titular del bien jurídicamente tutelado, muy a pesar de haberse descartado la insignificancia.

2. Cuando no sea posible reconocer la relevancia excusante de una causal de atipicidad por verificarse un exceso en su ejercicio, pero ante un juicio global de normalidad social de la situación, la misma no amerita una reacción penal.

3. Cuando la creencia de la atipicidad pueda explicarse de manera atendible como una apreciación del imputado en el sentido de haber descartado razonablemente la reacción penal de la comunidad.

4. Cuando los condicionamientos fácticos o síquicos de la conducta permitan considerar el exceso en la justificante como representativo de menor valor jurídico o social por explicarse el mismo en la culpa.

5. Cuando en atentado contra bienes jurídicos de la administración pública o recta impartición de justicia, la afectación al bien jurídico funcional resulte poco significativo y la infracción al deber funcional tenga o haya tenido como respuesta adecuada el reproche y la sanción disciplinarios.

6. Cuando la imputación subjetiva proceda por culpa y la imprudencia resulte insignificante, siempre y cuando no se trate de profesiones, oficios o actividades que requieran especial cuidado y atención, y no causen daño social de mayor relevancia.

7. Cuando el juicio de reproche de culpabilidad sea tan mínimo que haga de la sanción penal algo manifiestamente innecesario y sin utilidad social.

8. Cuando se presente un error no suficiente para excluir la responsabilidad penal en aquellos delitos cuyos tipos penales sean abiertos o en blanco y el juicio de reproche de culpabilidad tenga como soporte la conciencia actualizable de lo injusto, originada en una situación cuya probabilidad de repetirse resulte despreciable.

9. Cuando se afecten bienes colectivos y se presente una reparación integral, siempre y cuando resulte previsible que la situación que origina el delito no volverá a presentarse.

B. En los eventos procesales en los cuales:

1. El imputado colabore eficazmente para evitar que continúe el delito por el cual está siendo perseguido, o aporte información eficaz para desarticular la organización criminal que lo ha cometido y a la cual pertenece, o para evitar que esta organización cometa otros delitos, o sirva como testigo de cargo contra los demás intervinientes.

2. El imputado colabore eficazmente en el descubrimiento de otro delito de mayor entidad en el cual no intervino, así como de sus autores y partícipes, suministrando los medios cognoscitivos o de información, o sirviendo como testigo de cargo.

3. El imputado haya sufrido en el delito cometido por comportamiento culposo un daño físico o moral tan grave que haga desproporcionada o inhumana la aplicación de la sanción correspondiente.

4. La realización del procedimiento implique riesgo o amenaza graves a la seguridad exterior del Estado.

5. El imputado haya sido entregado en extradición a un gobierno extranjero, a causa del mismo delito, en el cual se haya proferido sentencia condenatoria con efectos de cosa juzgada.

6. El imputado haya sido entregado en extradición a un gobierno extranjero por otro delito, y la sanción a la que pudiera llevar la persecución en Colombia se muestre como de escasa significación frente a la sanción que esté cumpliendo en virtud de sentencia condenatoria proferida en el exterior.

Artículo 349. *Casos en que procede la suspensión.* La Fiscalía General de la Nación podrá suspender la persecución penal:

A. Cuando se presenten las siguientes causales sustanciales:

1. Cuando a pesar de ser ajeno a la figura delictiva el consentimiento, este por razón del contexto social y las especiales relaciones entre acusado y víctima, pueda apreciarse como causa de la conducta punible.

2. Cuando el bien jurídico se encuentre en tal alto grado de deterioro respecto de su titular que, la genérica protección brindada por la ley, haga más costosa su persecución penal y comportan un reducido y aleatorio beneficio.

3. Cuando se trate de delito en cuya comisión hayan intervenido múltiples personas y su judicialización cause más daño que provecho al orden jurídico, a la administración de justicia y a las relaciones sociales involucradas en el conflicto, siempre y cuando exista y se produzca una solución alternativa adecuada a los intereses de las víctimas.

4. Cuando la persecución penal de un delito masa comporte problemas sociales más significativos, siempre y cuando exista y se produzca una solución alternativa adecuada a los intereses de las víctimas.

B. En los eventos procesales en los cuales:

1. La persecución penal dificulte, obstaculice o impida al titular de la acción, orientar sus esfuerzos de investigación hacia hechos de mayor relevancia o trascendencia para el beneficio de la sociedad.

2. La pena que pudiere imponerse al imputado, en el evento de dictarse sentencia condenatoria, no excediere de dos (2) años de prisión, siempre y cuando reconozca su responsabilidad.

3. La sanción que se pueda imponer en caso de sentencia condenatoria se muestre como de escasa significación frente a la sanción que esté cumpliendo en virtud de sentencia que haya hecho tránsito a cosa juzgada.

Artículo 350. *Suspensión condicional del procedimiento.* El fiscal por iniciativa propia, o a petición del imputado por una sola vez, dentro de los términos previstos en este código, podrá activar la suspensión

condicional del procedimiento. A este fin oirá conjuntamente al imputado y a la víctima para acordar los posibles términos de una reparación integral, y procurará un entendimiento entre los mismos. En este caso, si no prosperare la suspensión condicional del procedimiento, las manifestaciones del imputado no se podrán utilizar como prueba de culpabilidad.

Artículo 351. *Requisitos para la suspensión condicional del procedimiento.* El fiscal fijará un período de prueba, que podrá tener una duración de tres (3) a cinco (5) años, y determinará las condiciones que deberá cumplir el imputado, relacionadas con el delito u orientadas al mejoramiento de su condición personal, tales como:

1. Residir o no residir en un lugar determinado e informar al fiscal del conocimiento de cualquier cambio del mismo.

2. Abstenerse de frecuentar determinados lugares o personas.

3. Participar en programas especiales de tratamiento con el fin de superar problemas de dependencia a drogas o bebidas alcohólicas, o asistir a algún programa educacional o de capacitación.

4. Prestar servicios en instituciones que se dediquen al trabajo social en beneficio de la comunidad.

5. Someterse a un tratamiento médico o psicológico.

6. No poseer o portar armas.

7. No conducir vehículos de cualquier clase.

8. La reparación integral a las víctimas, de conformidad con los mecanismos establecidos en la ley.

9. La realización de actividades en favor de la recuperación de las víctimas.

10. La colaboración activa y efectiva en el tratamiento psicológico para la recuperación de las víctimas, siempre y cuando medie su consentimiento.

11. La manifestación pública de arrepentimiento por el hecho que se le imputa.

12. La obligación de observar buena conducta individual, familiar y social.

Durante el período de prueba el imputado deberá someterse a la vigilancia que el fiscal determine. De considerarse necesario podrá exigirse, para garantizar el cumplimiento de estas obligaciones, el otorgamiento de la caución en los términos previstos en el numeral 8 del artículo 330.

La suspensión condicional del procedimiento no impedirá de modo alguno el derecho a perseguir por la vía civil las responsabilidades pecuniarias derivadas del mismo hecho.

Vencido el período de prueba y verificado el cumplimiento de las condiciones, se extinguirá la acción penal y el fiscal ordenará el archivo definitivo de la actuación.

Artículo 352. *Casos en que procede la renuncia.* Cuando el fiscal advierta, antes de la formulación de la imputación, la existencia de alguna causal de preclusión, podrá renunciar a la persecución penal mediante la aplicación de este principio.

Artículo 353. *Control judicial en la aplicación del principio de oportunidad.* A petición de la víctima o del Ministerio Público, el juez de control de garantías deberá efectuar el control de legalidad respectivo, dentro de los cinco (5) días siguientes a la determinación de la fiscalía de dar aplicación al principio de oportunidad.

La decisión que tome el juez obliga a todos los intervinientes y no es susceptible de recurso.

Artículo 354. *Efectos de la aplicación del principio de oportunidad.* La decisión de abstenerse de ejercer la persecución penal extingue la misma respecto del interviniente en cuyo favor se decide. La decisión que suspenda la persecución penal una vez vencido el periodo de prueba y verificado el cumplimiento de las condiciones impuestas extinguirá la acción penal. En caso contrario dará origen a la reanudación inmediata del procedimiento.

El principio de oportunidad podrá cobijar a uno o a todos los imputados y no podrá aplicarse más de dos veces a la misma persona en un período de diez años.

En todo caso, previamente a la decisión el fiscal deberá informar a la víctima lo pertinente para la protección de sus intereses, los que deberán ser tenidos en cuenta al momento de decidir sobre el ejercicio de la persecución del injusto.

Artículo 355. *Reglamentación.* El Fiscal General de la Nación deberá expedir un reglamento en el que se determine de manera general el procedimiento interno de la entidad para asegurar que la aplicación del principio de oportunidad cumpla con sus finalidades y se ajuste a la Constitución y la ley.

El reglamento expedido por la Fiscalía General de la Nación deberá desarrollar el plan de política criminal del Estado.

TITULO VII FORMULACION DE LA IMPUTACION CAPITULO I

Disposiciones generales

Artículo 356. *Concepto.* La formulación de la imputación es el acto a través del cual la Fiscalía General de la Nación comunica a una persona su calidad de imputado, en audiencia que se lleva a cabo ante el juez de control de garantías.

Artículo 357. *Situaciones que determinan la formulación de la imputación.* El fiscal hará la imputación fáctica cuando de los elementos materiales probatorios o de la información legalmente obtenida, llegue a la convicción de que el imputado es autor o partícipe del delito que se investiga. De ser procedente, en los términos de este código, el fiscal podrá solicitar ante el juez de control de garantías la imposición de la medida de aseguramiento que corresponda.

Artículo 358. *Contenido.* Para la formulación de la imputación, el fiscal deberá expresar oralmente:

1. Individualización concreta del imputado, incluyendo su nombre, los datos que sirvan para identificarlo y el domicilio de citaciones.

2. Relación clara y sucinta de los hechos jurídicamente relevantes, en lenguaje comprensible, lo cual no implicará el descubrimiento de los elementos materiales probatorios ni de la información en poder de la fiscalía, sin perjuicio de lo requerido para solicitar la imposición de medida de aseguramiento.

3. Posibilidad del investigado de allanarse a la imputación y a obtener rebaja de pena de conformidad con el artículo 388.

Artículo 359. *Formalidades.* La formulación de la imputación se cumplirá con la presencia del imputado o su defensor, ya sea de confianza o, a falta de este, el que fuere designado por el sistema nacional de defensoría pública.

Artículo 360. *Derecho de defensa.* Con la formulación de la imputación la defensa podrá preparar de modo eficaz su actividad procesal, sin que ello implique la solicitud de práctica de pruebas, salvo las excepciones reconocidas en este código.

Artículo 361. *Contumacia.* Si el imputado, habiendo sido citado en los términos ordenados por este código, no compareciere a la audiencia, esta se realizará con el defensor que haya designado para su representación. Si este último tampoco concurriere a la audiencia, el juez procederá a designarle defensor en el mismo acto, en cuya presencia se formulará la imputación.

Artículo 362. *Términos.* A partir de la formulación de la imputación empieza a correr el término para acusar y se interrumpe el de prescripción de la acción penal.

Artículo 363. *Sentencia anticipada.* Si el imputado, por iniciativa propia o por acuerdo con la fiscalía acepta la imputación, se entenderá que lo actuado es suficiente como acusación y para que el juez del conocimiento convoque a audiencia para individualización de la pena.

Aceptado el acuerdo, no es posible la retractación de ninguno de los intervinientes.

Artículo 364. *Vencimiento del término.* Vencido el término previsto para la solicitud de preclusión o presentación de la acusación y, requerido el cumplimiento de la actuación procesal omitida, por la defensa o por el Ministerio Público, esta se realizará dentro de los tres (3) días siguientes. De mantenerse la situación, el funcionario incurrirá en causal de mala conducta y el imputado recobrará de manera inmediata la libertad.

CAPITULO II

Audiencia preliminar

Artículo 365. *Noción.* Las actuaciones, peticiones y decisiones que no deban ordenarse, resolverse o adoptarse en audiencia de formulación de acusación, preparatoria o del juicio oral, se adelantarán, resolverán o decidirán en audiencia preliminar:

Artículo 366. *Modalidades.* Se tramitará en audiencia preliminar:

1. El acto de poner a disposición del juez de control de garantías los elementos recogidos en registros, allanamientos e interceptación de comunicaciones ordenadas por la fiscalía, para su control de legalidad dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes.

2. La práctica de una prueba anticipada

3. La que ordena la adopción de medidas necesarias para la protección de víctimas y testigos.

4. La que resuelve sobre la petición de medida de aseguramiento.

5. La que resuelve sobre la petición de medidas cautelares reales.

6. La formulación de la imputación.

Artículo 367. *Audiencia preliminar de medidas cautelares reales.* En la audiencia de formulación de imputación, o con posterioridad a ella, la fiscalía podrá solicitar al juez de control de garantías la imposición de medidas cautelares reales necesarias para garantizar la ejecución del incidente de reparación integral.

La decisión del juez en este sentido será susceptible del recurso de apelación.

Esta solicitud podrá intentarse cuantas veces sea necesario para garantizar el cumplimiento de la finalidad propuesta.

Artículo 368. *Publicidad.* Las audiencias preliminares deben realizarse con la presencia del imputado o de su defensor. La asistencia del Ministerio Público no es obligatoria.

Serán de carácter reservado únicamente las audiencias de control de legalidad sobre allanamientos, registros, interceptación de comunicaciones, así como la que decreta una medida cautelar sobre los bienes del imputado y a ellas asistirá únicamente el fiscal.

TITULO VIII DE LA PRECLUSION

Artículo 369. *Oportunidad.* En cualquier momento, a partir de la formulación de la imputación el fiscal solicitará al juez de conocimiento la preclusión de la investigación, si no existiere mérito para acusar.

Artículo 370. *Causales.* El fiscal solicitará la preclusión en los siguientes casos:

1. Imposibilidad de iniciar o continuar el ejercicio de la acción penal.

2. Existencia de una causal que excluya la responsabilidad, de acuerdo con el Código Penal.

3. Inexistencia del hecho investigado.

4. Atipicidad del hecho investigado.

5. Ausencia de intervención del imputado en el hecho investigado.

6. Imposibilidad de desvirtuar la presunción de inocencia.

Parágrafo. Durante el juzgamiento, de sobrevenir cualquiera de las causales contempladas en los numerales 1 y 3, el fiscal, el Ministerio Público o la defensa, podrán solicitar al juez de conocimiento la cesación de procedimiento. Contra esta decisión procede el recurso de apelación en el efecto suspensivo.

Artículo 371. *Trámite.* Previa solicitud del fiscal el juez citará a audiencia, dentro de los cinco (5) días siguientes, en la que se estudiará la petición de preclusión.

Instalada la audiencia, se concederá el uso de la palabra al fiscal para que exponga su solicitud con indicación de los elementos materiales probatorios que sustentaron la imputación, y fundamentación de la causal incoada.

Acto seguido se conferirá el uso de la palabra a la víctima, al agente del Ministerio Público y al defensor del imputado, en el evento en que quisieren oponerse a la petición del fiscal.

En ningún caso habrá lugar a solicitud ni práctica de pruebas.

Agotado el debate el juez podrá decretar un receso hasta por una (1) hora para preparar la decisión que motivará oralmente.

Artículo 372. *Efectos de la decisión de preclusión.* En firme la sentencia que decreta la preclusión de la investigación, cesará con efectos de cosa juzgada la persecución penal en contra del imputado por esos hechos, quien no podrá ser investigado formalmente por los mismos. Igualmente, se revocarán todas las medidas cautelares que se le hayan impuesto.

Artículo 373. *Rechazo de la solicitud de preclusión.* En firme el auto que rechaza la preclusión las diligencias volverán a la fiscalía, restituyéndose el término que duró el trámite de la preclusión.

El auto que rechaza la preclusión será apelable en el efecto suspensivo.

El juez que conozca de la preclusión quedará impedido para conocer del juicio.

LIBRO III
EL JUICIO
TITULO I
DE LA ACUSACION
CAPITULO I
Requisitos Formales

Artículo 374. *Presentación de la acusación.* El fiscal presentará la acusación ante el juez competente para adelantar el juicio, la cual se concentrará en formato escrito.

Artículo 375. *Contenido de la acusación y documentos anexos.* El formato de acusación deberá contener:

1. La individualización concreta de quienes son acusados, incluyendo su nombre, los datos que sirvan para identificarlo y el domicilio de citaciones.

2. Una relación clara y sucinta de los hechos jurídicamente relevantes, en un lenguaje comprensible.

3. La información de si el acusado tiene o no defensor de confianza, si ella existe.

4. La relación de los bienes y recursos afectados con fines de comiso.

5. El descubrimiento de las pruebas, en documento anexo al formato escrito previsto en el artículo anterior, deberá contener:

a) Los hechos que no requieren prueba;

b) La transcripción de las pruebas anticipadas que se quieran aducir al juicio, siempre y cuando su práctica no pueda repetirse en el mismo;

c) El nombre, dirección y datos personales de los testigos o peritos cuya declaración se solicite en el juicio;

d) Los documentos, objetos u otros elementos que quieran aducirse, junto con los respectivos testigos de acreditación;

e) La indicación de los testigos o peritos de descargo indicando su nombre, dirección y datos personales;

f) Los demás elementos favorables al acusado en poder de la fiscalía.

La fiscalía solamente entregará copia del formato escrito de acusación con destino al acusado, al Ministerio Público y a las víctimas, con fines únicos de información.

CAPITULO II
Audiencia de formulación de acusación

Artículo 376. *Citación.* Dentro de los tres (3) días siguientes al recibo del formato de acusación, el juez señalará fecha, hora y lugar para la celebración de la audiencia de formulación de acusación. A falta de sala, el juez podrá habilitar cualquier recinto público o privado idóneo.

Artículo 377. *Trámite.* Abierta por el juez la audiencia, concederá la palabra a la fiscalía y la defensa para que expresen oralmente las causales de incompetencia, impedimentos, recusaciones, nulidades, si las hubiere, y las observaciones sobre el formato de acusación, si no reúne los requisitos establecidos en el artículo 375, para que el fiscal lo aclare, adicione o corrija de inmediato.

Resuelto lo anterior concederá la palabra al fiscal para que formule la correspondiente acusación.

El juez deberá presidir toda la audiencia y se requerirá para su validez la presencia del fiscal y del abogado defensor.

También podrán concurrir el acusado y los demás intervinientes sin que su ausencia afecte la validez.

Artículo 378. *La víctima.* En esta audiencia se determinará la calidad de víctima, de conformidad con el artículo 92 de este código. Se reconocerá su representación legal en caso de que se constituya. De existir un número plural de víctimas, el juez podrá determinar, proporcional y razonablemente, los representantes que podrán intervenir en el transcurso del juicio oral.

Artículo 379. *Trámite de impedimentos, recusaciones, nulidades e impugnación de incompetencia.* De los impedimentos, recusaciones, nulidades o impugnaciones de competencia conocerá el superior jerárquico del juez, quien deberá resolver de plano lo pertinente dentro de los tres (3) días siguientes al recibo de lo actuado.

En el evento de prosperar el impedimento, la recusación o la impugnación de competencia, el superior deberá remitir la actuación al funcionario competente. Esta decisión no admite recurso alguno.

Artículo 380. *Medidas de protección.* Una vez formulada la acusación el juez podrá, a solicitud de la fiscalía, cuando se considere necesario para la protección integral de las víctimas o testigos, ordenar:

1. Que en las diligencias solo conste su nombre y huella dactilar. Los datos documentados de su identidad, domicilio, lugar de trabajo, residencia o demás indispensables para su plena identificación, se anotarán en registro secreto.

2. Que se fije como domicilio para los efectos de las citaciones y notificaciones, la sede de la fiscalía, quien las hará llegar reservadamente al destinatario.

3. Que se adopten las medidas necesarias tendientes a ofrecer eficaz protección a víctimas y testigos para conjurar posibles reacciones contra ellos o su familia, originadas en el cumplimiento de su deber testifical.

CAPITULO III

Descubrimiento de los elementos materiales probatorios

Artículo 381. *Inicio del descubrimiento.* Dentro de la audiencia de lectura de acusación se cumplirá lo relacionado con el descubrimiento de la prueba. A este respecto la defensa podrá solicitar al juez de conocimiento que ordene a la fiscalía, o a quien corresponda, el descubrimiento de un elemento material probatorio específico de que tenga conocimiento, y el juez ordenará, si es pertinente, descubrir, exhibir o entregar copia según se solicite, con un plazo máximo de tres (3) días para su cumplimiento.

La fiscalía, a su vez, podrá pedir al juez que ordene a la defensa entregarle copia de los elementos materiales de convicción, de las declaraciones juradas y de los exámenes periciales que hubieren sido practicados al acusado, cuando la defensa piense hacer uso de la inimputabilidad en cualquiera de sus variantes.

El juez velará porque el descubrimiento sea lo más completo posible durante la audiencia de lectura de la acusación.

Sin embargo, si durante el juicio alguna de las partes encuentra un elemento material probatorio muy significativo que debería ser descubierto, lo pondrá en conocimiento del juez quien, oídas las partes y considerado el perjuicio que podría producirse al derecho de defensa y la integridad del juicio, decidirá si es excepcionalmente admisible o si debe excluirse esa prueba.

Artículo 382. *Restricciones al descubrimiento de prueba.* Las partes no podrán ser obligadas a descubrir:

1. Información sobre la cual alguna norma disponga su secreto, como las conversaciones del imputado con su abogado, entre otras.

2. Información sobre hechos ajenos a la acusación, y, en particular, información relativa a hechos que por disposición legal o constitucional no pueden ser objeto de prueba.

3. Apuntes personales, archivos o documentos que obren en poder de la fiscalía o de la defensa y que formen parte de su trabajo preparatorio del caso, y cuando no se refieran a la manera como se condujo una entrevista o se realizó una deposición.

4. Información cuyo descubrimiento genere un perjuicio notable para investigaciones en curso o posteriores.

5. Información cuyo descubrimiento afecte la seguridad del Estado.

6. Las órdenes impartidas por la fiscalía durante la investigación.

Parágrafo. En los casos contemplados en los numerales 4 y 5 del presente artículo, el juez pondrá un límite de tiempo a esta reserva que, en todo caso, deberá levantarse antes de que culmine la etapa probatoria del juicio.

Artículo 383. *Sanciones por el incumplimiento del deber de revelación de información durante el procedimiento de descubrimiento.* Los elementos que en los términos de los artículos anteriores deban descubrirse y no sean descubiertos, ya sea con o sin orden específica del juez, no podrán ser aducidos al proceso ni convertirse en prueba del mismo, ni practicarse durante el juicio. El juez estará obligado a rechazarlos, salvo que se acredite que su descubrimiento se haya omitido por causas no imputables a la parte afectada.

Artículo 384. *Procedimiento para exposiciones.* Cualquiera de los sujetos procesales podrá aducir al proceso exposiciones, es decir declaraciones juradas de cualquiera de los testigos llamados a juicio, a efectos de impugnar su credibilidad.

La Fiscalía General de la Nación podrá tomar exposiciones de los potenciales testigos que hubiere entrevistado la policía judicial, con el mismo valor anotado en el inciso anterior, si a juicio del fiscal que adelanta la investigación resultare conveniente para la preparación del juicio oral.

Las afirmaciones hechas en las exposiciones, para hacerse valer en el juicio como impugnación, deben ser leídas durante el contrainterrogatorio. No obstante, la información contenida en ellas no puede tomarse como una prueba por no haber sido practicada con sujeción al contrainterrogatorio de las partes.

Artículo 385. *Fecha de la audiencia preparatoria.* Antes de finalizar la audiencia de lectura de la acusación el juez tomará las siguientes decisiones:

1. Incorporará las correcciones a la acusación leída.

2. Aprobará o improbará los acuerdos a que hayan llegado las partes.

3. Suspenderá condicionalmente el procedimiento, cuando corresponda;

Concluida la audiencia de lectura de la acusación, el juez fijará fecha, hora y sala para la celebración de la audiencia preparatoria, la cual deberá realizarse en un término no inferior a quince (15) días ni superior a los treinta (30) días siguientes a su señalamiento. A falta de sala, el juez podrá habilitar cualquier otro recinto público o privado para el efecto.

TITULO II

PREACUERDOS Y NEGOCIACIONES ENTRE LA FISCALIA Y EL IMPUTADO O ACUSADO

CAPITULO UNICO

Artículo 386. *Finalidades.* Con el fin de humanizar la actuación procesal y la pena; obtener pronta y cumplida justicia; activar la solución de los conflictos sociales que genera el delito; propiciar la reparación integral de los perjuicios ocasionados con el injusto y lograr la participación del imputado en la definición de su caso, la fiscalía y el imputado o acusado podrán llegar a preacuerdos que impliquen la terminación del proceso.

El funcionario, al celebrar los preacuerdos, debe observar las directivas de la Fiscalía General de la Nación y las pautas trazadas como política

criminal, a fin de prestigiar la administración de justicia y evitar su cuestionamiento.

Artículo 387. *Preacuerdos desde la audiencia de formulación de imputación.* Desde la audiencia de formulación de imputación y hasta antes de ser presentado el escrito de acusación, la fiscalía y el imputado podrán llegar a un preacuerdo sobre los términos de la imputación. Obtenido este preacuerdo, el fiscal lo presentará ante el juez de conocimiento como escrito de acusación.

El fiscal y el imputado, a través de su defensor, podrán adelantar conversaciones para llegar a un acuerdo, en el cual el imputado se declarará culpable del delito imputado, o de uno relacionado de pena menor, a cambio de que el fiscal:

1. Elimine de su acusación alguna causal de agravación punitiva, o algún cargo específico,

2. Tipifique la conducta, dentro de su alegación conclusiva, de una forma específica con miras a disminuir la pena.

Artículo 388. *Modalidades.* La aceptación de los cargos determinados en la audiencia de formulación de la imputación, comporta una rebaja de la mitad de la pena imponible, acuerdo que se consignará en el formato escrito de acusación.

También podrán el fiscal y el imputado llegar a un preacuerdo sobre los hechos imputados y sus consecuencias. Si hubiere un cambio favorable para el imputado con relación a la pena por imponer, esto constituirá la única rebaja compensatoria por el acuerdo. Para efectos de la acusación se procederá en la forma prevista en el inciso anterior.

En el evento que la fiscalía, por causa de nuevos elementos cognoscitivos, proyecte formular cargos distintos y más gravosos a los consignados en la formulación de la imputación, los preacuerdos deben referirse a esta nueva y posible imputación.

Los preacuerdos celebrados entre fiscalía y acusado obligan al juez de conocimiento, salvo que ellos desconozcan o quebranten las garantías fundamentales.

Aprobados los preacuerdos por el juez, procederá a convocar la audiencia para dictar la sentencia correspondiente.

Las reparaciones efectivas a la víctima que puedan resultar de los preacuerdos entre fiscales e imputado o acusado, pueden aceptarse por la víctima. En caso de rehusarlos, esta podrá acudir a las vías judiciales pertinentes.

Artículo 389. *Preacuerdos posteriores a la presentación de la acusación.* Presentada la acusación y hasta el momento en que sea interrogado el acusado al inicio del juicio oral sobre la aceptación de su responsabilidad, el fiscal y el acusado podrán realizar preacuerdos en los términos previstos en el artículo anterior.

Cuando los preacuerdos se realizaren en este ámbito procesal, la pena imponible se reducirá en una tercera parte.

Artículo 390. *Aceptación total o parcial de los cargos.* El imputado o acusado podrá aceptar parcialmente los cargos. En estos eventos los beneficios de punibilidad solo serán extensivos para efectos de lo aceptado.

Artículo 391. *Reglas comunes.* Son inexistentes los acuerdos realizados sin la asistencia del defensor. En caso de discrepancia entre este y el imputado o acusado, prevalecerá lo que aquél decida.

Si la índole de los acuerdos permite la rápida adopción de la sentencia, se citará a audiencia para su proferimiento en la cual brevemente la fiscalía y el imputado podrán hacer las manifestaciones que crean conveniente, de acuerdo con lo regulado en este código.

TITULO III

AUDIENCIA PREPARATORIA

CAPITULO I

Trámite

Artículo 392. *Instalación de la audiencia preparatoria.* Abierta la audiencia con la presencia del fiscal, el defensor, el acusado si estuviere privado de la libertad, el Ministerio Público y la representación de las víctimas, si la hubiere, el juez la presidirá en su totalidad.

Para la validez de esta audiencia también será indispensable la presencia del fiscal y del defensor.

Artículo 393. *Desarrollo de la audiencia preparatoria.* En desarrollo de la audiencia el juez dispondrá:

1. Que las partes manifiesten sus observaciones pertinentes al procedimiento de descubrimiento de elementos probatorios, en especial, si ha quedado completo el que debiera haberse efectuado por fuera de la sede de la audiencia de lectura de la acusación. Si estuviere incompleto, el juez rechazará la admisibilidad de la prueba no descubierta, salvo que se acredite causa no imputable a la parte afectada.

2. Que la defensa descubra sus elementos materiales probatorios.

3. Que la fiscalía y la defensa enuncien la totalidad de las pruebas que harán valer en la audiencia del juicio oral y público.

4. Que las partes manifiesten si tienen interés en hacer estipulaciones probatorias. En este caso decretará un receso por el término de una (1) hora, al cabo de la cual se reanudará la audiencia para que la fiscalía y la defensa se manifiesten al respecto.

5. Se entiende por estipulaciones probatorias los acuerdos a que puedan llegar el fiscal y la defensa sobre alguno de los hechos o sus circunstancias que se aceptan como probados y sobre los cuales se excluye toda controversia probatoria. Lo decidido por las partes es obligatorio para el juez.

6. Que el acusado manifieste si acepta o no los cargos. En el primer caso se procederá a dictar sentencia reduciendo en una tercera parte la pena a imponer, conforme lo previsto en el artículo 388. En el segundo caso se continuará con el trámite ordinario.

Artículo 394. *Solicitudes probatorias.* Durante la audiencia el juez dará la palabra a la fiscalía y luego a la defensa para que soliciten las pruebas que requieran para sustentar su pretensión.

El juez decretará la práctica de las pruebas solicitadas cuando ellas se refieran a los hechos de la acusación que requieran prueba, de acuerdo con las reglas de pertinencia y admisibilidad previstas en este código.

Las partes pueden probar sus pretensiones a través de los medios lícitos que libremente decidan para que sean debidamente aducidos al proceso.

Artículo 395. *Exhibición de los elementos materiales de prueba.* A solicitud de las partes, los elementos materiales probatorios podrán ser exhibidos durante la audiencia con el único fin de ser conocidos y estudiados.

Artículo 396. *Exclusión e inadmisibilidad de los medios de prueba.* Las partes pueden solicitar al juez que excluya los medios de prueba que, de conformidad con las reglas establecidas en este código, resulten inadmisibles.

El juez rechazará los medios de prueba que resulten impertinentes, inútiles, repetitivos, en especial los que se encaminen a probar hechos notorios o que por otro motivo no requieran prueba.

Cuando el juez inadmita una prueba deberá motivar oralmente su decisión. Contra esta procederá el recurso de apelación en el efecto suspensivo.

Artículo 397. *Prueba ilegal.* El juez excluirá la práctica o aducción de medios de prueba ilegales, incluyendo los que se han practicado, aducido o conseguido con violación de los requisitos formales previstos en este código.

El juez rechazará la admisibilidad de pruebas que se refieran a las conversaciones que haya tenido la fiscalía con el imputado o su defensor en desarrollo de manifestaciones preacordadas, suspensiones condicionales y aplicación del principio de oportunidad, a menos que el imputado o su defensor consientan en ello.

CAPITULO II

Prueba anticipada

Artículo 398. *Procedimiento para la utilización excepcional de la prueba anticipada.* Si la parte que solicita la prueba tiene motivos fundados para suponer que sobrevendrá la muerte del testigo, o su ausencia prolongada y difícilmente evitable, su incapacidad u otra

amenaza semejante a la integridad del juicio, en la audiencia de formulación de acusación o en la audiencia preparatoria, podrá solicitar al juez la práctica anticipada de la prueba.

El juez decidirá sobre la solicitud teniendo en cuenta la relevancia de la prueba y la imposibilidad de sustituirla por otra que evite el obstáculo que la motiva.

Si la admitiere, citará a audiencia a todos aquellos con derecho a asistir al juicio oral y les concederá todas las facultades que en el juicio se les otorgaría. Si esta citación conlleva un peligro para los elementos materiales probatorios o los testigos, el juez tomará las medidas proporcionadas al efecto de resguardar estos elementos. Sin embargo, no podrá suprimir la contradicción de las partes ni sacrificar totalmente la publicidad de la audiencia anticipada de prueba. Esta prueba no constituye prueba de referencia.

Si el juez negare la solicitud, procederán los recursos ordinarios. La apelación se sustentará de manera oral y será decidida en la misma audiencia que no podrá suspenderse.

Artículo 399. *Aducción de la prueba anticipada.* La prueba practicada de manera anticipada solamente podrá aducirse al proceso a través de reproducción por los medios técnicos más idóneos o, si no fuere posible, mediante su lectura.

Artículo 400. *Decisión sobre el orden de la presentación de la prueba.* El juez decidirá el orden en que debe presentarse la prueba. En todo caso, la prueba de la fiscalía tendrá lugar antes que la de la defensa, sin perjuicio de la presentación de las respectivas pruebas de refutación en cuyo caso serán primero las ofrecidas por la defensa y luego las de la fiscalía.

Artículo 401. *Prohibición de pruebas de oficio.* En ningún caso el juez podrá decretar la práctica de pruebas de oficio.

CAPITULO III

Conclusión de la audiencia preparatoria

Artículo 402. *Suspensión.* La audiencia preparatoria, además de lo previsto en este código, según proceda, solamente podrá suspenderse:

1. Por el trámite de la apelación de las decisiones relativas a las pruebas, la audiencia se suspenderá hasta que el superior jerárquico profiera su decisión.

2. Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito debidamente acreditadas, siempre que no puedan remediarse sin suspender la audiencia.

Artículo 403. *Reanudación de la audiencia.* El juez señalará el día, hora y sala para la reanudación de la audiencia suspendida en los casos del artículo anterior.

El juez podrá decretar recesos, máximo por dos (2) horas, cuando sean indispensables para el buen entendimiento de la audiencia, o cuando no comparezca un testigo y deba hacersele comparecer coactivamente.

Artículo 404. *Fijación de la fecha de inicio del juicio oral.* Concluida la audiencia preparatoria, el juez fijará fecha, hora y sala para el inicio del juicio que deberá realizarse dentro de los quince (15) días siguientes a la terminación de la audiencia preparatoria.

TITULO IV

JUICIO ORAL

CAPITULO I

Instalación

Artículo 405. *Inicio del juicio oral.* El día y hora señalados en la audiencia preparatoria, el juez instalará el juicio oral, previa verificación de la presencia de los sujetos procesales. Durante el transcurso del juicio, el juez velará porque las personas presentes en el mismo guarden silencio, si no tienen la palabra, y observen decoro y respeto. Igualmente, concederá turnos breves para las intervenciones de los sujetos procesales. El juez podrá ordenar el retiro del público asistente que perturbe el desarrollo de la audiencia.

Artículo 406. *Alegación inicial.* Una vez instalado el juicio oral, el juez advertirá al acusado, si está presente, que le asiste el derecho a

guardar silencio, a no autoincriminarse ni a declarar en contra de su cónyuge, compañero o compañera permanente o parientes dentro del cuarto grado.

El juez concederá el uso de la palabra al acusado para que manifieste, sin apremio ni juramento, si se declara inocente o culpable. La declaración podrá ser mixta, o sea, de culpabilidad para alguno de los cargos y de inocencia para los otros.

De declararse culpable, tendrá derecho a una rebaja de una sexta parte de la pena imponible respecto de los cargos aceptados. En este caso, si el acuerdo o declaración de culpabilidad permiten dictar sentencia inmediata así lo hará el juez, previo un receso hasta de una (1) hora.

Si el acusado no hiciera manifestación, se entenderá que es de inocencia. Igual consideración se hará en los casos de contumacia.

Si el acusado se declara inocente se procederá a la presentación del caso.

Artículo 407. *Condiciones de validez de la manifestación.* De reconocer el acusado su culpabilidad, el juez deberá verificar que actúa de manera libre, voluntaria, debidamente informado de las consecuencias de su decisión y asesorado por su defensor. Igualmente, preguntará al acusado o a su defensor si su aceptación de los cargos corresponde a un acuerdo celebrado con la fiscalía.

De advertir el juez algún desconocimiento o quebrantamiento de garantías fundamentales, rechazará la alegación de culpabilidad y adelantará el procedimiento como si hubiese habido una alegación de no culpabilidad.

Artículo 408. *Manifestaciones de culpabilidad acordada.* Si se hubieren realizado manifestaciones de culpabilidad preacordadas entre la defensa y la acusación en los términos previstos en este código, la fiscalía deberá indicar al juez los términos de la misma, expresando la pretensión punitiva que tuviere.

Si la manifestación fuere aceptada por el juez, se incorporará en la sentencia. Si la rechazare, adelantará el juicio como si hubiese habido una manifestación inicial de inocencia. En este caso, no podrá mencionarse ni será objeto de prueba en el juicio el contenido de las conversaciones entre el fiscal y el defensor, tendientes a las manifestaciones preacordadas. Esta información tampoco podrá ser utilizada en ningún tipo de proceso judicial en contra del acusado.

Artículo 409. *Decisión del juez.* Si el juez aceptare las manifestaciones preacordadas, no podrá imponer una pena superior a la que le ha solicitado la Fiscalía.

CAPITULO II

Presentación del caso

Artículo 410. *Declaración inicial.* Antes de proceder a la presentación y práctica de las pruebas, la fiscalía deberá presentar la teoría del caso. La defensa, si lo desea, podrá hacer lo propio.

CAPITULO III

Práctica de la prueba

PARTE I

Principio de inmediación

Artículo 411. *Inmediación.* El juez deberá tener en cuenta como pruebas únicamente las que hayan sido practicadas y controvertidas en su presencia. La admisibilidad de la prueba de referencia es excepcional.

PARTE II

Reglas generales para la prueba testimonial

Artículo 412. *Obligación de rendir testimonio.* Toda persona está obligada a rendir, bajo juramento, el testimonio que se le solicite en el juicio oral y público o en la investigación como prueba anticipada, salvo las excepciones constitucionales y legales.

Al testigo menor de doce (12) años no se le recibirá juramento y en la diligencia deberá estar asistido, en lo posible, por su representante legal o por un pariente mayor de edad. El juez, con fundamento en motivos razonables, podrá practicar el testimonio del menor fuera de la

sala de audiencia, pero siempre en presencia de las partes, quienes harán el interrogatorio como si fuera en juicio público.

Artículo 413. *Medidas especiales para asegurar la comparencia de testigos.* Sin perjuicio de su posible procesamiento, si el testigo debidamente citado se negare a comparecer, el juez expedirá a la Policía Nacional o cualquier otro órgano con funciones de policía judicial, orden para su aprehensión y conducción a la sede de la audiencia. Su renuencia a declarar se castigará con arresto hasta por veinticuatro (24) horas, al cabo de las cuales, si persiste su negativa, se le procesará.

Las autoridades indicadas están obligadas a auxiliar oportuna y diligentemente al juez para garantizar la comparencia compulsiva de los testigos, so pena de falta grave.

Artículo 414. *Excepciones constitucionales.* Nadie podrá ser obligado a declarar contra sí mismo o contra su cónyuge, compañera o compañero permanente o parientes dentro del cuarto grado.

El servidor público informará sobre estas excepciones a cualquier persona que vaya a rendir testimonio, quien podrá renunciar a ese derecho.

Artículo 415. *Excepciones legales.* No están obligados a declarar sobre aquello que se les ha confiado o ha llegado a su conocimiento por razón de su ministerio, profesión u oficio:

- a) Los ministros de cualquier culto admitido en la República;
- b) Los abogados;
- c) Cualquier otra persona que por disposición legal pueda o deba guardar secreto.

Artículo 416. *Impedimento del testigo para concurrir.* Si el testigo estuviere físicamente impedido para concurrir a la audiencia pública donde se practicará la prueba, ésta se realizará en el lugar en que se encuentre, pero siempre en presencia del juez y de las partes que harán el interrogatorio.

El testigo que no permaneciere en el lugar antes mencionado, injustificadamente, incurrirá en arresto hasta por quince (15) días, previo trámite sucinto y oral, o en multa entre diez (10) y cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Artículo 417. *Testimonios especiales.* Cuando se requiera el testimonio del Presidente de la República o del Vicepresidente de la República, se informará previamente al declarante sobre la fecha y hora, para que permanezca en su despacho, a donde se trasladarán el juez, las partes y el personal de secretaría necesario para la práctica del medio de prueba. Se observarán en ello las reglas previstas en este capítulo.

Artículo 418. *Testimonio de agente diplomático.* Cuando se requiera testimonio de un ministro o agente diplomático de nación extranjera acreditado en Colombia o de una persona de su comitiva o familia se le remitirá al embajador o agente respectivo, por conducto del Ministerio de Relaciones Exteriores, nota suplicatoria para que si lo tiene a bien concorra a declarar o permita que la persona solicitada lo haga.

Artículo 419. *Juramento.* Toda autoridad a quien corresponda tomar juramento, amonestará previamente a quien debe prestarlo acerca de la importancia moral y legal del acto y las sanciones penales establecidas contra los que declaren falsamente o incumplan lo prometido, para lo cual se leerán las respectivas disposiciones. Acto seguido se tomará el juramento por medio del cual el testigo se compromete a decir toda la verdad de lo que conoce.

Artículo 420. *Examen de los testigos.* Los testigos serán interrogados uno después del otro, en el orden establecido por la parte que los haya solicitado. Primero serán interrogados los testigos de la acusación y luego los de la defensa. Antes de iniciar el interrogatorio a un testigo, el juez le informará de los derechos previstos en la Constitución y la ley, y le exigirá el juramento en la forma señalada en el artículo anterior. Después pedirá que se identifique con sus nombres y apellidos y demás generales de ley.

Artículo 421. *Interrogatorio cruzado del testigo.* Todo declarante, luego de las formalidades indicadas en el artículo anterior, en primer término será interrogado por el sujeto procesal que hubiere ofrecido su testimonio como prueba. Este interrogatorio, denominado directo, se

limitará a los aspectos principales de la controversia, se referirá a los hechos objeto del juicio o relativos a la credibilidad de otro declarante. No se podrán formular preguntas sugestivas ni se insinuará el sentido de las respuestas, salvo que se tratare de un testigo hostil.

En segundo lugar, si lo desea, el sujeto procesal distinto a quien solicitó el testimonio, podrá formular preguntas al declarante en forma de conainterrogatorio que se limitará a los temas abordados en el interrogatorio directo. Sin embargo, le estará permitido hacer preguntas sugestivas.

Quien hubiere intervenido en el interrogatorio directo podrá agotar un turno de preguntas dirigidas a la aclaración de los puntos debatidos en el conainterrogatorio, el cual se denomina redirecto. En estos eventos deberán seguirse las mismas reglas del directo.

Finalmente, el declarante podrá ser nuevamente preguntado por el otro sujeto procesal, si considera necesario hacer claridad sobre las respuestas dadas en el redirecto y sujeto a las pautas del conainterrogatorio.

Artículo 422. *Reglas sobre el interrogatorio.* El interrogatorio se hará observando las siguientes instrucciones:

- a) Toda pregunta versará sobre hechos específicos;
- b) El juez prohibirá toda pregunta que tienda a sugerir la respuesta;
- c) El juez prohibirá toda pregunta que tienda a ofender al testigo;
- d) El juez podrá autorizar al testigo para consultar documentos necesarios que ayuden a su memoria. En este caso, durante el interrogatorio, se permitirá a los demás sujetos procesales el examen de los mismos;
- e) El juez excluirá toda pregunta que no sea pertinente;
- f) El juez intervendrá con el fin de que el interrogatorio sea leal y que las respuestas sean claras y precisas.

Artículo 423. *Reglas sobre el conainterrogatorio.* El conainterrogatorio se hará observando las siguientes instrucciones:

- a) La finalidad del conainterrogatorio es refutar, en todo o en parte, lo que el testigo ha contestado;
- b) Para conainterrogar se puede utilizar cualquier declaración que hubiese hecho el testigo sobre los hechos en entrevista, en declaración jurada durante la investigación o en la propia audiencia del juicio oral.

El testigo debe permanecer a disposición del juez durante el término que éste determine, el cual no podrá exceder la duración de la práctica de las pruebas. Excepcionalmente puede ser requerido para una aclaración o adición de su testimonio, caso en el cual será interrogado nuevamente por los sujetos procesales, de acuerdo con las reglas anteriores.

Artículo 424. *El acusado como testigo.* Si el acusado ofreciere declarar en su propio juicio comparecerá como testigo y bajo la gravedad del juramento será interrogado, de acuerdo con las reglas previstas en este código.

Artículo 425. *Testimonio del coacusado.* El coacusado que quisiere declarar lo hará como testigo y quedará sometido a las reglas previstas en este capítulo.

Artículo 426. *Oposiciones durante el interrogatorio.* La parte que no está interrogando, podrá oponerse a pregunta del interrogador cuando viole alguna de las reglas anteriores o incurra en alguna de las prohibiciones. El juez decidirá inmediatamente si la oposición es fundada o infundada.

Artículo 427. *Examen separado de testigos.* Los testigos serán interrogados separadamente, de tal manera que no puedan escuchar las declaraciones de quienes les preceden.

Se exceptúa de lo anterior, además de la víctima y el acusado cuando decide declarar, aquellos testigos o peritos que debido al rol desempeñado en la preparación de la investigación se requiera de su presencia ininterrumpida en la sala de audiencias, bien sea apoyando a la fiscalía o a la defensa.

Artículo 428. *Interrogatorio por el juez.* Excepcionalmente, el juez podrá intervenir en el interrogatorio o conainterrogatorio, para conseguir que el testigo responda la pregunta que le han formulado o que lo haga

de manera clara y precisa. Una vez terminados los interrogatorios de las partes, el juez podrá hacer preguntas complementarias para el cabal entendimiento del caso.

El Ministerio Público podrá intervenir para formular preguntas a los testigos a través del juez.

Artículo 429. *Testigo privado de libertad.* La persona privada de libertad, que fuere citada como testigo a la audiencia del juicio oral y público, será trasladada con la debida antelación y las medidas de seguridad y protección al lugar del juicio. Terminado el interrogatorio y conainterrogatorio, será devuelto en la forma antes indicada, sin dilación alguna, al sitio de reclusión.

Artículo 430. *Testimonio de policía judicial.* El servidor público de policía judicial podrá ser citado al juicio oral y público a rendir testimonio con relación al caso. El juez podrá autorizarlo para consultar su informe y notas relativas al mismo, como recurso para recordar.

Artículo 431. *Testigo sordomudo.* Cuando el testigo fuere sordomudo, el juez nombrará intérprete oficial. Si no lo hubiere, el nombramiento recaerá en persona reputada como conocedora del mencionado sistema.

El testigo y el intérprete prestarán juramento.

Artículo 432. *Testigo de lengua extranjera.* Cuando el testigo de lengua extranjera no comprendiere el idioma castellano, el juez nombrará traductor oficial. Si no lo hubiere, el nombramiento recaerá en persona reputada como idónea para hacer la traducción.

El testigo y el traductor prestarán juramento.

Artículo 433. *Conocimiento personal.* El testigo únicamente podrá declarar sobre aspectos que en forma directa y personal hubiese tenido la ocasión de observar o percibir. En caso de mediar controversia sobre el fundamento del conocimiento personal podrá objetarse la declaración mediante el procedimiento de impugnación de la credibilidad del testigo.

Artículo 434. *Impugnación de la credibilidad del testigo.* La impugnación tiene como única finalidad cuestionar ante el juez la credibilidad del testimonio, con relación a los siguientes aspectos:

1. Naturaleza inverosímil o increíble del testimonio.
2. Capacidad del testigo para percibir, recordar o comunicar cualquier asunto sobre la declaración.
3. Existencia de cualquier tipo de prejuicio, interés u otro motivo de parcialidad por parte del testigo.
4. Manifestaciones anteriores del testigo, incluidas aquellas hechas a terceros, o en entrevistas, exposiciones, declaraciones juradas o interrogatorios en audiencias ante el juez de control de garantías.
5. Carácter o patrón de conducta del testigo en cuanto a la mendacidad.
6. Contradicciones en el contenido de la declaración.

Artículo 435. *Apreciación del testimonio.* Para apreciar el testimonio, el juez tendrá en cuenta los principios técnico-científicos sobre la percepción y la memoria y, especialmente, lo relativo a la naturaleza del objeto percibido, al estado de sanidad del sentido o sentidos por los cuales se tuvo la percepción, las circunstancias de lugar, tiempo y modo en que se percibió, los procesos de rememoración, el comportamiento del testigo durante el interrogatorio y el conainterrogatorio, la forma de sus respuestas y su personalidad del testigo.

PARTE III

Prueba pericial

Artículo 436. *Procedencia.* La prueba pericial es procedente cuando sea necesario realizar indagaciones, recaudar datos o efectuar valoraciones que requieran conocimientos científicos, técnicos o artísticos.

Al peritaje le serán aplicables, en lo que corresponda, las reglas del testimonio.

Artículo 437. *Prestación del servicio de peritos.* El servicio de peritos se prestará por los expertos de la policía judicial y del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Las investigaciones o los análisis se realizarán por el perito o los peritos, según el caso. El informe será firmado por quienes hubieren intervenido.

Artículo 438. *Nombramiento especial de peritos.* Cuando no sea posible utilizar el servicio de peritos, previsto en el artículo anterior, se recurrirá a expertos de otras entidades públicas o particulares.

Artículo 439. *Número de peritos.* A menos que se trate de prueba impertinente, irrelevante o superflua, el juez no podrá limitar el número de testigos expertos o peritos que sean llamados a declarar en la audiencia pública por los sujetos procesales.

Artículo 440. *Quiénes pueden ser peritos.* Podrán ser peritos, conforme con el artículo anterior, los siguientes:

1. Las personas con título legalmente reconocido en la respectiva ciencia, técnica o arte.

2. En circunstancias diferentes, podrán ser nombradas las personas de reconocido entendimiento en la respectiva ciencia, técnica o arte, aunque se carezca de título.

A los efectos de la cualificación podrán utilizarse todos los medios de prueba admisibles, incluido el propio testimonio del declarante que se presenta como testigo experto o perito.

Artículo 441. *Quiénes no pueden ser nombrados.* No pueden ser nombrados, en ningún caso:

1. Los menores de dieciocho (18) años, los interdictos y los enfermos mentales.

2. Quienes hayan sido suspendidos en el ejercicio de la respectiva ciencia, técnica o arte, mientras dure la suspensión.

3. Los que hayan sido condenados por algún delito, a menos que se encuentren rehabilitados.

Artículo 442. *Obligatoriedad del cargo de perito.* El nombramiento de perito, conforme con los artículos anteriores, es de forzosa aceptación y ejercicio cuando la designación recae en un servidor público.

El nombrado sólo podrá excusarse por enfermedad que lo imposibilite para ejercerlo, por carencia de medios adecuados para cumplir el encargo, o por grave perjuicio a sus intereses.

El perito que, injustificadamente, se negare a cumplir con su deber será sancionado con multa de diez (10) a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes, equivalente en moneda legal colombiana.

Artículo 443. *Impedimentos y recusaciones.* Respecto de los peritos serán aplicables las mismas causales de impedimento y recusación señaladas para el juez. El perito cuyo impedimento o recusación haya sido aceptada, será excluido por el juez, en la audiencia preparatoria o, excepcionalmente, en la audiencia del juicio oral y público.

Artículo 444. *Comparencia de los peritos a la audiencia.* Las partes solicitarán al juez que haga comparecer a los peritos al juicio oral y público, para ser interrogados y contrainterrogados en relación con los informes periciales que hubiesen rendido, o para que los rindan en la audiencia.

Artículo 445. *Presentación de informes.* Las partes podrán presentar informes de peritos de su confianza y solicitar que éstos sean citados a interrogatorio en el juicio oral y público, acompañando certificación que acredite la idoneidad del perito.

Artículo 446. *Admisibilidad del informe y citación del perito.* Si el juez admite el informe presentado por la parte, en la audiencia preparatoria del juicio oral y público, inmediatamente ordenará citar al perito o peritos que lo suscriben, para que concurran a la audiencia con el fin de ser interrogados y contrainterrogados.

Artículo 447. *Base de la opinión pericial.* Toda declaración de testigo experto o perito deberá estar precedida de un informe resumido en donde se exprese la base de la opinión pedida por el sujeto procesal que propuso la práctica de la prueba. Dicho informe deberá ser puesto en conocimiento de los demás sujetos procesales al menos con cinco (5) días de anticipación a la celebración de la audiencia pública en donde se recepcionará el testimonio experto o peritación, sin perjuicio de lo establecido en este código sobre el descubrimiento de la prueba.

En ningún caso, el informe de que trata este artículo será admisible como evidencia, si el testigo o perito no declara oralmente en el juicio.

Artículo 448. *Acceso a los elementos materiales.* Los peritos, tanto los que hayan rendido informe, como los que sólo serán interrogados y contrainterrogados en la audiencia del juicio oral y público, tendrán acceso a los elementos materiales probatorios a que se refiere el informe pericial o a los que se hará referencia en el interrogatorio.

Artículo 449. *Instrucciones para interrogar al perito.* El perito deberá ser interrogado en relación con los siguientes aspectos:

1. Sobre los antecedentes que acrediten su conocimiento teórico sobre la ciencia, técnica o arte en que es experto.

2. Sobre los antecedentes que acrediten su conocimiento en el uso de instrumentos o medios en los cuales es experto.

3. Sobre los antecedentes que acrediten su conocimiento práctico en la ciencia, técnica o arte aplicables.

4. Sobre los principios científicos, técnicos o artísticos en los que fundamenta sus verificaciones o análisis y grado de aceptación.

5. Sobre los métodos empleados en las investigaciones y análisis relativos al caso.

6. Sobre si en sus exámenes o verificaciones utilizó técnicas de orientación, de probabilidad o de certeza.

7. La corroboración o ratificación de la opinión pericial por otros expertos que declaran también en el mismo juicio, y

8. Sobre temas similares a los anteriores.

El perito responderá de forma clara y precisa las preguntas que le formulen las partes.

El perito tiene, en todo caso, derecho de consultar documentos, notas escritas y publicaciones con la finalidad de fundamentar y aclarar su respuesta.

Artículo 450. *Instrucciones para contrainterrogar al perito.* El contrainterrogatorio del perito se cumplirá observando las siguientes instrucciones:

1. La finalidad del contrainterrogatorio es refutar, en todo o en parte, lo que el perito ha informado.

2. En el contrainterrogatorio se podrá utilizar cualquier argumento sustentado en principios, técnicas, métodos o recursos acreditados en divulgaciones técnico científicas calificadas, referentes a la materia de controversia.

Artículo 451. *Perito impedido para concurrir.* Si el perito estuviera físicamente impedido para concurrir a la audiencia pública donde se practicará la prueba, ésta se cumplirá en el lugar en que se encuentre, en presencia del juez y de las partes que habrán de interrogarlo.

Artículo 452. *Apreciación de la prueba pericial.* Para apreciar la prueba pericial, en el juicio oral y público, se tendrá en cuenta la idoneidad técnico-científica y moral del perito, la claridad y exactitud de sus respuestas, su comportamiento al responder, el grado de aceptación de los principios científicos, técnicos o artísticos en que se apoya el perito, los instrumentos utilizados y la consistencia del conjunto de respuestas.

Artículo 453. *Limitación a las opiniones del testigo experto o perito sobre insanidad mental.* Las declaraciones de los testigos expertos o peritos no podrán referirse a la inimputabilidad del acusado. En consecuencia, no se admitirán preguntas para establecer si, a juicio del testigo experto, el acusado es imputable o inimputable.

Artículo 454. *Testigos expertos.* Se admitirán como testigos expertos quienes se encuentren acreditados y calificados como tales. Podrán ser presentados por la fiscalía o por la defensa.

Artículo 455. *Admisibilidad de publicaciones científicas y de prueba novel.* Para que una opinión pericial referida a aspectos noveles del conocimiento sea admisible en el juicio, se exigirá como requisito que la base científica o técnica satisfaga al menos uno de los siguientes criterios:

1. Que la teoría o técnica subyacente haya sido o pueda llegar a ser verificada.

2. Que la teoría o técnica subyacente haya sido publicada y haya recibido la crítica de la comunidad académica;

3. Que se haya acreditado el nivel de confiabilidad de la técnica científica utilizada en la base de la opinión pericial;

4. Que goce de aceptabilidad en la comunidad académica.

Artículo 456. *Presentación de la prueba demostrativa.* Será admisible la presentación de evidencias demostrativas siempre que resulte pertinentes y relevantes para los hechos debatidos en el juicio, sean debidamente autenticadas y, en el caso de los elementos materiales probatorios, se establezca la cadena de custodia en los términos señalados en este código.

PARTE IV

Prueba documental

Artículo 457. *Prueba documental.* Para los efectos de este código se entiende por documentos, los siguientes:

1. Los textos manuscritos, mecanografiados o impresos.
2. Las grabaciones magnetofónicas.
3. Discos de todas las especies que contengan grabaciones.
4. Grabaciones fonópticas o videos.
5. Películas cinematográficas.
6. Grabaciones computacionales.
7. Mensajes de datos.
8. El télex, telefax y similares.
9. Fotografías.
10. Radiografías.
11. Ecografías.
12. Tomografías.
13. Electroencefalogramas.
14. Electrocardiogramas.
15. Similares a los anteriores.

Artículo 458. *Documento auténtico.* Es auténtico el documento cuando se tiene conocimiento cierto sobre la persona que lo ha elaborado, manuscrito, mecanografiado, impreso, firmado o producido por algún otro procedimiento.

La autenticidad deberá probarse en el juicio oral y público, cuando alguna de las partes lo solicite. En este caso, la probará quien haya aducido el documento.

Se presumen auténticos, salvo prueba en contrario, la moneda de curso legal, los sellos y efectos oficiales, los títulos valores, los documentos notarial o judicialmente reconocidos, los documentos o instrumentos públicos, aquellos provenientes del extranjero debidamente apostillados, los de origen privado sometidos al trámite de presentación personal o de simple autenticación, las copias de los certificados de registros públicos, las publicaciones oficiales, las publicaciones periódicas de prensa o revistas especializadas, las etiquetas comerciales, y, finalmente, todo documento de aceptación general en la comunidad.

Artículo 459. *Métodos de autenticación e identificación.* La autenticidad e identificación del documento se probará por métodos como los siguientes:

1. Reconocimiento de la persona que lo ha elaborado, manuscrito, mecanografiado, impreso, firmado o producido.
2. Reconocimiento de la parte contra la cual se aduce.
3. Mediante certificación expedida por la entidad certificadora de firmas digitales de personas naturales o jurídicas.
4. Mediante informe de experto en la respectiva disciplina sugerida en el artículo 457.

Artículo 460. *Documentos procedentes del extranjero.* Los documentos remitidos por autoridad extranjera, en cumplimiento de petición de autoridad penal colombiana, basada en convenio bilateral o multilateral de cooperación judicial recíproca, son auténticos, a menos que se demuestre lo contrario.

Artículo 461. *Traducción de documentos.* El documento manuscrito, mecanografiado, impreso o producido en idioma distinto del castellano, será traducido por orden del juez y por traductores oficiales. El texto original y el de la traducción constituirán el medio de prueba.

Artículo 462. *Actas de pruebas de otros procesos.* Las actas que dan cuenta de pruebas practicadas en otros procesos penales nacionales, podrán admitirse en el juicio oral y público, cuando se han practicado con la presencia del juez y las partes y éstas las han controvertido. También se admitirán las actas de pruebas practicadas en procesos penales extranjeros, cuando reúnan las características mencionadas.

Artículo 463. *Presentación de documentos.* El documento podrá presentarse en original, o en copia autenticada, cuando lo primero no fuese posible o causare grave perjuicio a su poseedor.

Artículo 464. *Documentos anónimos.* Los documentos, cuya autenticación o identificación no sea posible establecer por alguno de los procedimientos previstos en este capítulo, se considerarán anónimos y no podrán admitirse como medio probatorio.

Artículo 465. *Emprego de los documentos en el juicio.* Los documentos escritos serán leídos y exhibidos de modo que todos los intervinientes en la audiencia del juicio oral y público puedan conocer su forma y contenido.

Los demás documentos serán exhibidos y proyectados por cualquier medio, para que sean conocidos por los intervinientes mencionados. Cuando se requiera, el experto respectivo lo explicará. Éste podrá ser interrogado y contrainterrogado como un perito.

Artículo 466. *Apreciación de la prueba documental.* El juez apreciará el documento teniendo en cuenta los siguientes criterios:

1. Que no haya sido alterado en su forma ni en su contenido.
2. Que permita obtener un conocimiento claro y preciso del hecho, declaración o atestación de verdad, que constituye su contenido.
3. Que dicho contenido sea conforme con lo que ordinariamente ocurre.

PARTE V

Reglas relativas a la inspección

Artículo 467. *Procedencia.* El juez, excepcionalmente, podrá ordenar la realización de una inspección judicial fuera del recinto de audiencia cuando, previa solicitud de la fiscalía o la defensa, estime necesaria su práctica dada la imposibilidad de exhibir y autenticar en la audiencia los elementos materiales probatorios, o cualquier otra evidencia demostrativa de la manera como ocurrieron los hechos objeto de juzgamiento.

En ningún caso el juez podrá utilizar su conocimiento privado para la adopción de la sentencia a que hubiere lugar.

Artículo 468. *Criterios para decretarla.* La inspección judicial únicamente podrá ser decretada, atendidos los siguientes criterios:

1. Que sea imposible realizar la exhibición de autenticación de la evidencia en audiencia.
2. Que resulte de vital importancia para la fundamentación de la sentencia.
3. Que no sea viable lograr el cometido mediante otros medios técnicos.
4. Que sea más económica y práctica la realización de la inspección que la utilización del medio técnico.
5. Que las condiciones del lugar a inspeccionar no hayan variado de manera significativa.
6. Que no se ponga en grave riesgo la seguridad de los intervinientes durante la práctica de la prueba.

Durante la inspección judicial, el juez dispondrá de amplias facultades para su práctica, podrá recibir declaraciones de testigos y peritos para aclarar las dudas que pudiesen surgir.

PARTE VI

Reglas relativas a la prueba de referencia

Artículo 469. *Noción.* Se considera como prueba de referencia toda declaración realizada fuera del juicio oral y que es utilizada para probar

o excluir uno o varios elementos del delito, el grado de intervención en el mismo, las circunstancias de atenuación o de agravación punitivas, la naturaleza y extensión del daño irrogado, y cualquier otro aspecto sustancial objeto del debate, cuando no sea posible practicarla en el juicio.

Artículo 470. *Admisión excepcional de la prueba de referencia.* Únicamente es admisible la prueba de referencia en los siguientes casos:

1. No disponibilidad del declarante como testigo:

a) Rehúsa rendir testimonio a pesar de ser compelido para ello por el juez;

b) Se encuentra eximida de prestar la declaración en razón de un privilegio, salvo el secreto profesional;

c) Manifiesta bajo juramento que ha perdido la memoria sobre los hechos y es corroborada pericialmente dicha afirmación;

d) Se encuentra en un lugar desconocido, inaccesible, o en el exterior;

e) Es víctima de un delito de secuestro, desaparición forzada o evento similar;

f) Padece de una grave enfermedad que le impide declarar;

g) Ha fallecido;

h) Si la declaración se hizo en condiciones tales que habría de suponer que se encontraba en peligro inminente de muerte, ya sea por enfermedad, accidente, intento de suicidio, o por actos del acusado;

i) Si la declaración se hizo en manifiesta oposición al interés de naturaleza económica, familiar, social, legal, o penal de su autor.

2. Disponibilidad del declarante como testigo:

a) Las admisiones del acusado cuando son hechas en desarrollo de la actividad delictiva y se presentan en su contra por el coautor o partícipe;

b) Las declaraciones efectuadas por quien realiza un reconocimiento en fila de personas o por medio de fotografías, imágenes digitales o videos;

c) Las declaraciones juradas rendidas por testigos fuera de audiencia ante el juez de control de garantías;

d) Las declaraciones contenidas en la denuncia o querrela formuladas ante la policía judicial, la Fiscalía General de la Nación o cualquier otra autoridad competente.

3. En virtud de la existencia de garantías circunstanciales de confiabilidad, serán admisibles además las declaraciones siguientes:

a) Las realizadas en estados de intensa emoción producto de un episodio o acontecimiento extraordinario, siempre y cuando dicha declaración sea contemporánea al evento traumático o generador de la excitación;

b) Las declaraciones del acusado que se refieran a su estado emocional o de salud, siempre que hayan sido efectuadas a un psicólogo, médico o terapeuta y que no se hallen cobijadas por un privilegio;

c) Las declaraciones que se hallen registradas en escritos de pasada memoria o archivos históricos;

d) Las declaraciones contenidas en documentos que regularmente recogen o registran informaciones confiables tales como archivos públicos, datos de estadística vital, archivos de organizaciones religiosas o sociales, registros o álbumes de familia, asientos contables y demás libros de o papeles mercantiles;

e) Las declaraciones contenidas en bases de datos de cualquier índole;

f) Las declaraciones contenidas en tratados, manuales, ensayos o trabajos y cualquiera otra que aparezca en una publicación de carácter académico;

g) Las declaraciones referidas a la reputación tenida entre los miembros de la familia, o en la comunidad;

h) Las declaraciones que aparezcan en los antecedentes penales, disciplinarios o de policía;

i) Las declaraciones que hayan sido conocidas por cualquier otro medio lícito, que sean de indiscutible valor sustancial para el asunto en

debate y que por la forma como se obtuvo posea suficiente garantía circunstancial de confiabilidad.

Artículo 471. *Prueba de referencia múltiple.* Cuando una declaración contenga apartes que constituya prueba de referencia admisible y no admisible, deberán suprimirse aquellos no cobijados por las excepciones previstas en los artículos anteriores, salvo que de proceder de esa manera la declaración se torne en ininteligible, en cuyo caso se excluirá la declaración en su integridad.

Artículo 472. *Utilización de la prueba de referencia para fines de impugnación.* Podrán utilizarse, con fines de impugnación de la credibilidad del testigo o perito, las declaraciones que no constituyan prueba de referencia inadmisibles, de acuerdo con las causales previstas en el artículo 470.

Artículo 473. *Impugnación de la credibilidad de la prueba de referencia.* Podrá cuestionarse la credibilidad de la prueba de referencia por cualquier medio probatorio, en los mismos términos que la prueba testimonial.

Lo anterior no obsta para que la prueba de referencia, en lo pertinente, se regule en su admisibilidad y apreciación por las reglas generales de la prueba y en especial por las relacionadas con el testimonio y lo documental.

CAPITULO IV

Alegatos de los sujetos procesales

Artículo 474. *Petición de absolución perentoria.* Terminada la práctica de las pruebas, el defensor podrá solicitar al juez la absolución perentoria cuando resulten manifiestamente atípicos los hechos en que se fundamentó la acusación. En este caso, si procediere la absolución perentoria, el juez resolverá sin escuchar alegatos de los sujetos procesales.

Artículo 475. *Turnos para alegar.* El fiscal expondrá oralmente los argumentos relativos al análisis de la prueba, tipificando de manera circunstanciada la conducta por la cual ha presentado la acusación.

A continuación se dará el uso de la palabra al representante legal de las víctimas y al Ministerio Público, en este orden, quienes podrán presentar sus alegatos atinentes a la responsabilidad del acusado.

Finalmente, la defensa, si lo considera pertinente, expondrá sus argumentos los cuales podrán ser controvertidos exclusivamente por la fiscalía. Si esto ocurriere la defensa tendrá derecho de réplica y, en todo caso, dispondrá del último turno de intervención argumentativa. Las réplicas se limitarán a los temas abordados.

Artículo 476. *Extensión de los alegatos.* El juez delimitará en cada caso la extensión máxima de los argumentos de conclusión, en atención al volumen de la prueba vista en la audiencia pública y la complejidad de los cargos resultantes de los hechos contenidos en la acusación.

Artículo 477. *Clausura del debate.* Una vez presentados los alegatos, el juez declarará que el debate ha terminado y, de ser necesario, podrá decretar un receso hasta por una hora para anunciar el sentido del fallo.

CAPITULO V

Decisión o sentido del fallo

Artículo 478. *Contenido.* La decisión será individualizada frente a cada uno de los enjuiciados y cargos contenidos en la acusación, y deberá referirse a las solicitudes hechas en los alegatos finales. El sentido del fallo se dará a conocer de manera oral y pública inmediatamente después del receso previsto en el artículo anterior, y deberá contener el delito por el cual se halla a la persona culpable o inocente.

Artículo 479. *Individualización de la pena y sentencia.* Si el fallo fuere condenatorio el juez concederá brevemente y por una sola vez la palabra al fiscal y luego a la defensa para que se refieran a las condiciones individuales, familiares, sociales, modo de vivir y antecedentes de todo orden del culpable. Si lo consideraren conveniente, podrán referirse a la probable determinación de pena aplicable y la concesión de algún subrogado.

Si el juez para individualizar la pena por imponer, estimare necesario ampliar la información a que se refiere el inciso anterior, podrá solicitar a cualquier institución, pública o privada, la designación de un experto para que éste, en el término improrrogable de diez (10) días hábiles, responda su petición.

Escuchados los intervinientes, el juez señalará el lugar, fecha y hora de la audiencia para proferir sentencia, en un término que no podrá exceder de quince (15) días calendario contados a partir de la terminación del juicio oral.

Artículo 480. *Congruencia.* El acusado no podrá ser declarado culpable por hechos que no consten en la acusación, ni por delitos por los cuales no se ha solicitado condena.

Artículo 481. *Libertad inmediata.* De ser absuelto de la totalidad de los cargos consignados en la acusación el juez dispondrá la inmediata libertad del acusado, si estuviere privado de ella, levantará todas las medidas cautelares impuestas y librará sin dilación las órdenes correspondientes.

Tratándose de delitos de competencia de los jueces regionales, la libertad se hará efectiva en firme la sentencia.

Artículo 482. *Acusado no privado de la libertad.* Si al momento de anunciar el sentido del fallo el acusado declarado culpable no se hallare detenido, el juez podrá disponer que continúe en libertad hasta el momento de dictar sentencia.

Si la detención es necesaria, de conformidad con las normas de este código, el juez la ordenará y librará inmediatamente la orden de encarcelamiento.

Artículo 483. *Acusado privado de la libertad.* El juez podrá ordenar su excarcelación siempre y cuando los cargos por los cuales fue encontrado culpable fueren susceptibles, al momento de dictar sentencia, del otorgamiento de un subrogado penal.

Artículo 484. *Situación de los inimputables.* Si la razón de la decisión fuera la inimputabilidad, el juez dispondrá provisionalmente la medida de seguridad apropiada mientras se profiere el fallo respectivo.

Artículo 485. *Requerimiento por otra autoridad.* En caso de que el acusado fuere requerido por otra autoridad judicial, emitido el fallo absolutorio, será puesto a disposición de quien corresponda.

Si el fallo fuere condenatorio, se dará cuenta de esta decisión a la autoridad que lo haya requerido.

TITULO V RECURSOS EN EL JUICIO

Artículo 486. *Procedencia.* Contra las decisiones tomadas durante el desarrollo de la audiencia pública del juicio oral, sólo procede el recurso ordinario de reposición cuya sustentación y resolución será oral e inmediata.

Artículo 487. *Exclusión.* No serán objeto de recurso las decisiones que se refieran a la manera como se conducen los interrogatorios y contrainterrogatorios, ni a la presentación de la prueba en general, salvo que se refiera a aspectos sustanciales de los derechos fundamentales.

Artículo 488. *Recurso de apelación.* Contra la sentencia absolutoria o condenatoria, procederá el recurso ordinario de apelación que deberá interponerse oralmente, por cualquiera de los sujetos procesales, en la misma audiencia en la que se profiera la sentencia.

Artículo 489. *Segunda instancia.* La segunda instancia, en lo que no esté expresamente regulado, se tramitará del siguiente modo:

Recibido el expediente por el superior éste fijará, dentro de los diez (10) días siguientes, fecha, hora y sala en las que oralmente deberá hacerse la sustentación, así como el orden en que deben intervenir recurrentes y no recurrentes.

Esta audiencia, en lo pertinente, se celebrará siguiendo las indicaciones generales establecidas en este código y particularmente la de los artículos 407 y siguientes referentes a las audiencias en la etapa de juzgamiento.

En esta actuación no habrá lugar a práctica de pruebas.

La decisión se emitirá en audiencia que se celebrará dentro de los diez (10) días siguientes.

TITULO VI

SUSPENSIONES DE LA AUDIENCIA DEL JUICIO ORAL

Artículo 490. *Principio de concentración.* La audiencia del juicio oral deberá ser continua salvo que se trate de situaciones sobrevinientes de manifiesta gravedad, y sin existir otra alternativa viable, en cuyo caso podrá suspenderse por el tiempo que dure el fenómeno que ha motivado la suspensión.

TITULO VII

INEFICACIA DE LOS ACTOS PROCESALES

Artículo 491. *Nulidad derivada de la prueba ilícita.* La nulidad de pleno derecho señalada en el artículo 23 debe considerar, al respecto, los criterios introducidos por la doctrina y la jurisprudencia, tales como el vínculo atenuado, la fuente independiente, el descubrimiento inevitable, la buena fe, el balance de intereses, legitimidad en la invocación de la exclusión y el fundamento disuasivo de la violación.

Artículo 492. *Nulidad por incompetencia del juez.* Será motivo de nulidad el que la actuación se hubiere adelantado ante juez incompetente por razón del fuero, o porque su conocimiento esté asignado a los jueces regionales.

Artículo 493. *Nulidad por violación a garantías fundamentales.* Es causal de nulidad la violación del derecho de defensa o del debido proceso en aspectos sustanciales.

Los recursos pendientes de definición al momento de iniciarse el juicio público oral, salvo lo relacionado con la negativa o admisión de pruebas, no invalidan el procedimiento.

Artículo 494. *Principio de taxatividad.* No podrá decretarse ninguna nulidad por causal diferente a las señaladas en este título.

TITULO VIII

JUICIOS ESPECIALES ANTE EL CONGRESO CAPITULO I

Actuación ante la Cámara de Representantes

Artículo 495. *De la función jurisdiccional del Congreso.* La investigación y el juzgamiento de conductas punibles cometidas en el desempeño de sus cargos por el Presidente de la República o quien haga sus veces, magistrados de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado, de la Corte Constitucional, del Consejo Superior de la Judicatura y el Fiscal General de la Nación, aunque hubieren cesado en el ejercicio de los mismos, corresponde al Congreso de la República.

La investigación se adelantará de oficio, por denuncia o informe de autoridad.

Artículo 496. *Fiscal.* La Cámara de Representantes ejercerá funciones como fiscal dentro de las actuaciones que le correspondan.

Artículo 497. *Denuncia.* Se presentará en forma personal y por escrito, entendiéndose realizada bajo la gravedad del juramento en el momento de su recepción por la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, la que contendrá una relación detallada de los hechos que conozca el denunciante, allegará las pruebas que la respaldan y la relación de las que deban practicarse.

Podrá la Comisión de Acusación en pleno, rechazar la denuncia cuando determine que es manifiestamente temeraria o infundada.

Artículo 498. *Investigación oficiosa o informes a la Cámara.* La Cámara de Representantes, en ejercicio de la función acusadora podrá investigar por sí o por medio de una comisión de su seno, los delitos y la conducta oficial de los servidores públicos amparados por fuero constitucional.

Si como consecuencia de una actuación judicial se evidencia la participación de alguno de esos servidores, la autoridad respectiva deberá disponer la ruptura de la unidad procesal y enviar el informe a la Cámara para que inicie el trámite respectivo.

Artículo 499. *Reparto y ratificación de la queja.* El presidente de la comisión de investigación y acusación, dentro de los dos (2) días siguientes, repartirá la denuncia entre los representantes que integran la

comisión, pudiendo designar hasta tres (3) representantes investigadores para un asunto determinado. En tal caso designará a uno de ellos como coordinador. A quien se le reparta se le denominará representante-investigador, este, dentro de los dos (2) días siguientes, citará al denunciante para que se ratifique bajo la gravedad del juramento.

Si no se ratificare y no hubiere mérito para investigar oficiosamente, se archivará el asunto y el representante-investigador informará de ello al presidente de la comisión.

Artículo 500. *Investigación previa.* Si surgiere alguna duda sobre la procedencia de la apertura de la investigación, se ordenará abrir diligencias previas por el término máximo de seis (6) meses, con el objeto de establecer si hay lugar o no al ejercicio de la acción penal.

Parágrafo. Una vez vencido el término anterior el representante investigador, dictará auto inhibitorio o de apertura de investigación. El auto inhibitorio será discutido y aprobado por la Cámara de Representantes en pleno.

Artículo 501. *Apertura de la investigación.* Si se reunieren los requisitos, se proferirá auto de sustanciación, ordenando abrir la correspondiente investigación, practicando las pruebas conducentes con el fin de esclarecer los hechos, las circunstancias en que ocurrieron y descubrir a sus autores y partícipes, conforme a lo señalado en este código.

Artículo 502. *Reserva.* La investigación que se adelante ante la Cámara de Representantes será reservada. Cuando se refiera al Presidente de la República o quien haga sus veces, el expediente será público, así como las deliberaciones de la comisión de investigación y acusaciones, y la plenaria de la Cámara.

Artículo 503. *Intervención del Ministerio Público.* En todas las investigaciones que se adelanten ante la Cámara de Representantes, es obligatoria la presencia del Ministerio Público.

Artículo 504. *Auxiliares en la investigación.* La Cámara de Representantes en ejercicio de su función investigadora podrá solicitar la cooperación de las autoridades que ejerzan funciones de policía judicial.

También podrá comisionar a magistrados de las salas penales de los tribunales superiores de distrito judicial y a los jueces para la práctica de pruebas, cuando lo estime conveniente, así como a los investigadores de la Fiscalía General de la Nación.

Artículo 505. *Indagatoria.* Cuando se reúnan los requisitos para la vinculación del investigado como autor o partícipe de la conducta, se le citará para que dentro de los dos (2) días siguientes comparezca a rendir indagatoria. Si fuere capturado en flagrancia, se le dejará en libertad y citará en la forma antes dicha. Si no compareciere se le emplazará por edicto que permanecerá fijado por el término de cinco (5) días en la secretaría de la Cámara de Representantes, se le declarará persona ausente, designará defensor de oficio y se continuará la actuación.

Artículo 506. *Defensor.* El sindicado tendrá derecho a nombrar defensor a partir del auto de apertura de la investigación de no hacerlo se le nombrará defensor de oficio.

Artículo 507. *Principio de libertad del procesado.* Durante el trámite judicial ante las Cámaras rige el principio de libertad del procesado. Por eso no hay lugar a proferir medida de aseguramiento alguna contra él.

Artículo 508. *Término para la investigación.* El término para la realización de la investigación es de treinta (30) días. Pero, cuando se trate de delitos conexos o sean dos (2) o más los procesados, el término será de sesenta (60) días.

Artículo 509. *Preclusión de la investigación.* En cualquier momento de la investigación podrá proferirse preclusión de la misma, en los términos y causales de este código.

Artículo 510. *Cierre de la investigación.* Agotada la investigación o vencido el término legal para realizarla, se dictará auto declarándola cerrada. En este mismo auto, contra el que no procede recurso alguno, se ordenará dar traslado por el término de diez (10) días a los sujetos procesales para que presenten sus puntos de vista sobre el mérito de la investigación.

Artículo 511. *Resolución calificatoria.* Vencido el término del traslado, dentro de los diez (10) días siguientes se presentará a la Cámara de Representantes o a la comisión, el proyecto de resolución de acusación o de preclusión de la investigación.

Los requisitos sustanciales y formales de estas dos formas de calificación, serán los exigidos por este código.

Artículo 512. *Trámite de la resolución calificatoria.* Recibido el proyecto de resolución calificatoria, la comisión de investigación y acusación se reunirá dentro de los cinco (5) días siguientes y estudiará y decidirá si aprueba o no el proyecto presentado. Si fuere rechazado, designará a un nuevo representante para que elabore la resolución de acuerdo con lo aceptado por la comisión.

Al día siguiente de la aprobación del proyecto de resolución, el Presidente de la Comisión, enviará el asunto al Presidente de la Cámara, a fin de que la plenaria de esta corporación, avoque el conocimiento en forma inmediata. La Cámara se reunirá en pleno dentro de los cinco (5) días siguientes para estudiar, modificar y decidir en el término de quince (15) días sobre el proyecto aprobado por la comisión.

Si la Cámara de Representantes aprueba la resolución de preclusión de investigación, se archivará el expediente. Si la improbare, designará una comisión de su seno para que elabore, en el término de cinco (5) días, el proyecto de resolución de acusación.

Artículo 513. *Nombramiento del acusador.* Cuando la Cámara de Representantes resuelva hacer uso de la facultad de acusar a algún servidor público, elegirá por mayoría absoluta de votos a uno de sus miembros para que, en calidad de acusador, formule y sostenga la acusación ante el Senado. El Presidente de la Cámara de Representantes comunicará al Senado la decisión de acusación y el nombramiento del acusador.

Artículo 514. *Recurso de apelación.* El auto por el cual se niega al procesado o a su defensor la práctica de alguna prueba durante la investigación, podrá ser apelado ante la Comisión de Acusación en pleno. En sesión plenaria de la Cámara ésta decidirá sobre el recurso dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo del expediente. La decisión se adoptará por una mayoría simple.

CAPITULO II

Actuación ante el Senado

Artículo 515. *Presentación de la acusación.* Recibida la acusación de la Cámara de Representantes, el Senado señalará según lo establecido en su reglamento interno, el día que deba oírse la acusación, la cual presentará personalmente el acusador en sesión oral, y hará entrega al presidente del Senado con los documentos que conforman la actuación y que le sirvan de fundamento.

Artículo 516. *Comisión de instrucción.* Recibida la acusación de la Cámara, el Presidente del Senado, dentro de los dos (2) días siguientes, enviará el expediente al Presidente de la Comisión de Instrucción. Este, dentro de los dos (2) días siguientes repartirá el asunto, por sorteo, entre los Senadores integrantes de la Comisión. A quien corresponda en reparto se le denominará Senador-instructor.

Artículo 517. *Proyecto de inadmisión de la acusación o formación de la causa.* El Senador-instructor estudiará el asunto y presentará un proyecto de resolución admitiendo o rechazando la acusación. En este último caso deberá proponer la cesación de procedimiento.

Este proyecto se presentará a la comisión de instrucción, la cual, dentro de los dos (2) días siguientes, se reunirá para decidir si acepta o no el proyecto presentado por el ponente.

Artículo 518. *Concepto sobre formación de la causa.* La comisión de instrucción individualizará en su informe las personas acusadas y los cargos que se hagan a cada una de ellas, y emitirá concepto sobre si la acusación es admisible, total o parcialmente.

Artículo 519. *Citación para estudio del informe.* Presentado el informe de la comisión, se señalará día y hora para resolver sobre la admisión de la acusación, dando aviso a la Cámara de Representantes y citando al acusador nombrado por ella.

Artículo 520. *Lectura, discusión y votación del informe.* En la fecha señalada que no podrá exceder de ocho (8) días, se leerá ante el Senado el informe de la comisión y los documentos que el acusador y los Senadores soliciten. El acusador podrá intervenir en la discusión del informe; pero cerrada ésta, se retirará, y el Senado votará las proposiciones de la comisión y las que hayan sido materia de la discusión.

Artículo 521. *Trámite para discusión y votación.* En la discusión y votación de las citadas proposiciones se procederá según lo establecido en el reglamento del Senado adoptándose las decisiones por mayoría absoluta de votos de los Senadores que concurran a la sesión.

Artículo 522. *Resolución sobre resultado de la votación.* El resultado de la votación sobre admisión de la acusación se consignará en el acta de la sesión firmada por el Presidente y el Secretario del Senado, y se expresará contra qué personas y por qué cargos se admite. Esta determinación se comunicará a la Cámara de Representantes y se notificará al acusado personalmente dentro de los diez (10) días siguientes, si no compareciere se notificará por estado.

Artículo 523. *Inadmisión de la acusación.* Cuando la acusación no sea admitida, el Senado ordenará el archivo de la actuación mediante cesación de procedimiento, respecto de las personas y por los cargos que cobijen tal determinación. La decisión mediante la cual se inadmite la acusación y ordena archivo, hace tránsito a cosa juzgada.

Artículo 524. *Suspensión de servidores públicos por acusación admitida.* Siempre que una acusación sea públicamente admitida por el Senado, el acusado queda de hecho suspendido de su empleo.

Si la acusación admitida fuere contra el encargado del poder ejecutivo, el Presidente del Senado le avisará, al que conforme a la Constitución y a la ley, deba entrar en su lugar, si fuere contra otro servidor público se avisará a quien corresponda.

Artículo 525. *Juicio.* Admitida la acusación se inicia el juzgamiento.

Si el Senado admite la acusación por delito común o por delito de responsabilidad que tenga pena diferente a la pérdida del empleo o cargo público, se pondrá al acusado a disposición de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.

Si la acusación admitida fuere exclusivamente por comportamientos indignos o por delito cometido en el ejercicio de funciones públicas cuya pena sea la pérdida del empleo o cargo público e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas, el Senado mediante resolución comunicará a la Cámara de Representantes y notificará personalmente al acusador y al acusado, haciendo saber a éste el derecho que tiene de nombrar un defensor. Si no fuere posible la notificación personal se hará por estado. La actuación quedará en secretaría a disposición de las partes para que soliciten las pruebas que consideren necesarias en el término de cinco (5) días y presenten los escritos a que haya lugar.

Artículo 526. *Fecha para la audiencia y pruebas.* Finalizado el término de traslado el Senado fijará fecha y hora para la audiencia, la cual no podrá ser antes de veinte (20) días ni después de sesenta (60) días, contados a partir de la fecha del auto que la señala.

Las pruebas que deban realizarse fuera de la sede del Senado o requieran de estudios previos, se dispondrán en la misma providencia y se practicarán por sí o por medio de una comisión de su seno, en el término que fijen, que no podrá exceder de quince (15) días hábiles.

Se expedirán las copias, de forma inmediata a los sujetos procesales que lo soliciten.

Artículo 527. *Citación y expedición de copias.* Las órdenes para hacer comparecer a los testigos, para que se alleguen los documentos o se expidan copias que se soliciten las dará el Senado, cuando se haya reservado la instrucción de la actuación y las comunicará el secretario; cuando la actuación se instruyere por comisión, ella expedirá dichas órdenes, que deberá ejecutar el Secretario del Senado.

Artículo 528. *Conducencia de la prueba.* Cuando la comisión instructora niegue alguna de las pruebas que las partes soliciten, podrán éstas concurrir al Senado para que se resuelva si deben o no practicarse.

Artículo 529. *Declaración de testigos.* Los testigos rendirán sus declaraciones ante el Senado o su Presidente, si así lo dispusiere aquél

cuando se haya reservado la instrucción, o ante la comisión instructora que se haya designado.

Artículo 530. *Aplazamiento de la audiencia.* Si las pruebas no pudieren practicarse por circunstancia ocurrida, ajena a quien las hubiere solicitado oportunamente, podrá el Senado, a petición de la misma parte, señalar nueva fecha para la celebración de la audiencia pública que no podrá exceder de veinte (20) días.

Artículo 531. *Celebración de la audiencia.* Llegados el día y la hora para la celebración de la audiencia, el Senado dará inicio a ésta con la lectura de las piezas de la actuación que los Senadores o las partes soliciten.

La audiencia se celebrará aunque el acusado no concurriera a ella.

Artículo 532. *Interrogatorio al acusado.* Los Senadores podrán interrogar al acusado sobre las cuestiones relacionadas con la actuación.

Acto seguido se concederá la palabra al acusador, al acusado y a su defensor, quienes podrán intervenir hasta dos (2) veces, en el mismo orden en desarrollo del debate.

Artículo 533. *Práctica de pruebas en audiencia.* Si de las pruebas practicadas surgieren otras necesarias para el esclarecimiento de los hechos, mientras se celebra la audiencia pública, el Senado o la Comisión podrá ordenar la práctica de las pruebas que considere conducentes y decretará las que las partes soliciten, antes de llevar a cabo la sesión privada del Senado.

Artículo 534. *Sesión privada y cuestionario.* Concluidas las intervenciones previstas en el artículo anterior, se retirarán del recinto del Senado el acusador, el acusado y su defensor y se dará comienzo al debate, durante el cual cualquier Senador podrá solicitar la lectura de la actuación y de las piezas que considere convenientes.

Al iniciarse la sesión privada, el Presidente del Senado someterá al estudio de los Senadores un cuestionario acerca de la responsabilidad del acusado por el cargo o cargos formulados en la resolución de acusación.

Si la resolución de acusación contiene varios cargos, para cada uno de ellos se formularán cuestionarios separados.

Artículo 535. *Decisión del Senado.* Adoptada la decisión del Senado por la mayoría de votos que establece el artículo 175 numeral 4 de la Constitución Política, se continuará la sesión pública para dar a conocer la decisión y se pasará la actuación a la comisión que lo instruyó para que redacte el proyecto de sentencia de conformidad con las respuestas dadas a los cuestionarios, en un término improrrogable de quince (15) días.

Artículo 536. *Proyecto de sentencia.* Vencido el plazo señalado en el artículo anterior la comisión presentará su ponencia al Senado para que la discuta y vote.

Si éste no fuere satisfactorio para el Senado, y no fuere posible modificarlo en la sesión, podrá elegir nueva comisión para que elabore el proyecto de sentencia en un término que no podrá exceder de quince (15) días.

Presentado el proyecto por la nueva comisión, el Senado lo someterá a su consideración aprobándolo o improbandolo.

Artículo 537. *Adopción de la sentencia.* Adoptada la sentencia, será firmada por el Presidente y Secretario del Senado y agregada a la actuación. Copia de la misma será enviada a la Cámara de Representantes y a la rama ejecutiva para los fines legales.

Artículo 538. *Ejecución de la sentencia.* La ejecución de la sentencia condenatoria o destitución del empleo se hará comunicándola a quien tiene la competencia para nombrar o destituir.

La condena a la privación temporal o pérdida absoluta de los derechos políticos, se ejecutará comunicándola al Registrador Nacional del Estado Civil.

Artículo 539. *Intervención del Ministerio Público.* El Procurador General de la Nación, por sí o por medio de sus delegados y agentes, intervendrá en este proceso para cumplir con las funciones señaladas en la Constitución Política.

Artículo 540. *Impedimentos de los Senadores.* Presentada la acusación, el Presidente del Senado advertirá a los Senadores el deber en que están de manifestar si tienen algún impedimento para conocer de dicha acusación.

Si alguno de los Senadores manifestare estar impedido, el Senado tomará en consideración los impedimentos que aleguen y resolverá sobre ellos, con base en las disposiciones previstas en este código.

Artículo 541. *Causales de impedimento.* Se tendrán como impedimentos para conocer de estos juicios:

1. Haber tenido parte en los hechos sobre los cuales versa la acusación.

2. Haber declarado como testigo en el mismo asunto en favor o en contra del acusado.

3. Haber votado en la Cámara de Representantes en favor o en contra de la acusación.

4. Cualquier otra de las causales de impedimento señaladas en este Código para las autoridades judiciales.

Artículo 542. *Recusación de senadores.* Hasta el día en que se inicie la audiencia pública, podrán las partes proponer las recusaciones contra los Senadores.

Los Senadores no son recusables sino por las causales de impedimentos previstas en el artículo precedente.

Artículo 543. *Decisión sobre las recusaciones.* Corresponde al Senado decidir sobre las recusaciones propuestas, para cuya prueba se concederá, a la parte interesada el término de seis (6) días. Si la actuación se instruyere por una comisión, ante ésta se ventilará el incidente; concluido el término previsto en este artículo, la comisión trasladará el asunto al Senado para que resuelva.

Artículo 544. *Medidas de aseguramiento y variación de la calificación jurídica.* Las medidas de aseguramiento sólo podrán ser impuestas por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. El régimen de detención preventiva y libertad provisional se regulará por las disposiciones establecidas en este Código y se impondrán mediante auto interlocutorio.

La variación de la calificación jurídica sólo podrá efectuarse por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.

LIBRO IV

EJECUCION DE SENTENCIAS

TITULO I

EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD

CAPITULO I

Ejecución de penas

Artículo 545. *Ejecución de penas y medidas de seguridad.* La ejecución de la sanción penal impuesta mediante sentencia ejecutoriada, corresponde a las autoridades penitenciarias bajo la supervisión y control del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, en coordinación con el juez de ejecución de penas y medidas de seguridad.

En todo lo relacionado con la ejecución de la pena, el Ministerio Público podrá intervenir e interponer los recursos que sean necesarios.

Artículo 546. *Acumulación jurídica.* Las normas que regulan la dosificación de la pena, en caso de concurso de conductas punibles, se aplicarán también cuando los delitos conexos se hubieren fallado independientemente. Igualmente, cuando se hubieren proferido varias sentencias en diferentes procesos. En estos casos la pena impuesta en la primera decisión se tendrá como parte de la sanción a imponer.

No podrán acumularse penas por delitos cometidos con posterioridad al proferimiento de sentencia de primera o única instancia en cualquiera de los procesos, ni penas ya ejecutadas, ni las impuestas por delitos cometidos durante el tiempo que la persona estuviere privada de la libertad.

Artículo 547. *Sustitución de la ejecución de la pena.* El juez de ejecución de penas y medidas de seguridad podrá ordenar al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario la sustitución de la ejecución de la

pena, previa caución, en los mismos casos de la sustitución de la detención preventiva.

Artículo 548. *Aplicación de las penas accesorias.* Cuando se trate de las penas accesorias establecidas en el Código Penal, se procederá de acuerdo con las siguientes normas:

1. Si se trata de la privación del derecho a residir en determinados lugares o de acudir a ellos, se enviará copia de la sentencia a la autoridad judicial y policiva del lugar en donde la residencia se prohíba o donde el sentenciado debe residir. También se oficiará al agente del Ministerio Público para su control.

2. Cuando se trate de inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas, se remitirán copias de la sentencia ejecutoriada a la Registraduría Nacional del Estado Civil y a la Procuraduría General de la Nación.

3. Si se trata de la pérdida de empleo o cargo público, se comunicará a quien haya hecho el nombramiento, la elección o los cuerpos directivos de la respectiva entidad y a la Procuraduría General de la Nación.

4. Si se trata de la inhabilidad para ejercer industria, comercio, arte, profesión u oficio, se ordenará la cancelación del documento que lo autoriza para ejercerlo y se oficiará a la autoridad que lo expidió.

5. En caso de la expulsión del territorio nacional de extranjeros se procederá así:

a) El juez de ejecución de penas, una vez cumplida la pena privativa de la libertad, lo pondrá a disposición del Departamento Administrativo de Seguridad para que lo expulse del territorio nacional, y

b) En el auto que decrete la libertad definitiva se ordenará poner a la persona a disposición del Departamento Administrativo de Seguridad para su expulsión del territorio nacional.

Cuando la pena fuere inferior a un (1) año de prisión, el juez, si lo considera conveniente, podrá anticipar la expulsión del territorio nacional.

El expulsado, en ningún caso, podrá reingresar al territorio nacional.

6. Si se tratare de la prohibición de consumir bebidas alcohólicas, sustancias estupefacientes o psicotrópicas, se comunicará a las autoridades policivas del lugar de residencia del sentenciado para que tomen las medidas necesarias para el cumplimiento de esta sanción, oficiando al agente del Ministerio Público para su control.

7. Si se tratare de la inhabilidad especial para el ejercicio de la patria potestad, se oficiará al Ministerio Público, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y a la Superintendencia de Notariado y Registro para que haga las anotaciones correspondientes.

8. En los casos de privación del derecho de conducir vehículos y la inhabilitación especial para la tenencia y porte de armas, se oficiará a las autoridades encargadas de expedir las respectivas autorizaciones, para que las cancelen o las nieguen.

Artículo 549. *Informes.* La autoridad encargada de cumplir o vigilar el cumplimiento de estas sanciones informará lo pertinente al juez de ejecución de penas y medidas de seguridad.

Artículo 550. *Remisión.* Los aspectos relacionados con la ejecución de la pena no regulados en este código se regirán por lo dispuesto en el Código Penal y el Código Penitenciario y Carcelario.

CAPITULO II

Ejecución de medidas de seguridad

Artículo 551. *Entidad competente.* El tratamiento de los inimputables por trastorno mental estará a cargo del Sistema General de Seguridad Social en Salud, a quien corresponderá la ejecución de las medidas de protección y seguridad.

Artículo 552. *Internación de inimputables.* El juez de ejecución de penas y medidas de seguridad ordenará a las autoridades competentes del Sistema de Seguridad Social en Salud el traslado del inimputable a un establecimiento psiquiátrico o clínica adecuada para su rehabilitación, de carácter oficial o privado adecuado para el cumplimiento de la medida de seguridad.

Si fuere un establecimiento privado los parientes se comprometerán a ejercer la vigilancia correspondiente y rendir los informes que se

soliciten; su traslado se hará previo el otorgamiento de caución y la suscripción de la respectiva diligencia de compromiso.

La autoridad o el particular, a quienes se haya encomendado el inimputable, trimestralmente rendirán los informes al juez de ejecución de penas y medidas de seguridad.

Artículo 553. *Libertad vigilada.* Impuesta la libertad vigilada, el juez de ejecución de penas y medidas de seguridad comunicará tal medida a las autoridades policivas del lugar, para el cumplimiento de lo dispuesto en el Código Penal, y señalará los controles respectivos.

Artículo 554. *Suspensión, sustitución o cesación de la medida de seguridad.* El juez de ejecución de penas y medidas de seguridad, de oficio o a solicitud de parte y previo concepto de perito oficial y de conformidad con lo dispuesto en el Código Penal, podrá:

1. Suspender condicionalmente la medida de seguridad.
1. Sustituirla por otra más adecuada si así lo estimare conveniente.
2. Ordenar la cesación de tal medida.

En caso de internación en casa de estudio o trabajo el dictamen se sustituirá por concepto escrito y motivado de la junta o consejo directivo del establecimiento en donde se hubiere cumplido esta medida, o de su director a falta de tales organismos.

El beneficiario de la suspensión condicional, o del cambio de la medida de seguridad por una de libertad vigilada, deberá constituir caución, personalmente o por intermedio de su representante legal, en la forma prevista en este código.

Artículo 555. *Revocatoria de la suspensión condicional.* En cualquier momento podrá el juez de ejecución de penas y medidas de seguridad revocar la suspensión condicional de la medida de seguridad o de la medida sustitutiva, cuando se incumplan las obligaciones fijadas en la diligencia de compromiso, o cuando los peritos conceptúen que es necesario la continuación de la medida originaria.

Artículo 556. *Medidas de seguridad para indígenas.* Corresponde a los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad disponer lo necesario para la ejecución de las medidas de seguridad aplicables a los inimputables por diversidad socio-cultural, en coordinación con la máxima autoridad indígena de la comunidad respectiva.

CAPITULO III

Libertad condicional

Artículo 557. *Solicitud.* El condenado que se hallare en las circunstancias previstas en el Código Penal podrá solicitar al juez de ejecución de penas y medidas de seguridad la libertad condicional, acompañando la resolución favorable del consejo de disciplina, o en su defecto del director del respectivo establecimiento carcelario, copia de la cartilla biográfica y los demás documentos que prueben los requisitos exigidos en el Código Penal, los que deberán ser entregados a más tardar dentro de los tres (3) días siguientes.

Si se ha impuesto pena accesoria de multa, su pago es requisito imprescindible para poder otorgar la libertad condicional.

Artículo 558. *Decisión.* Recibida la solicitud, el juez de ejecución de penas y medidas de seguridad resolverá dentro de los ocho (8) días siguientes, mediante providencia motivada en la cual se impondrán las obligaciones a que se refiere el Código Penal, cuyo cumplimiento se garantizará mediante caución.

El tiempo necesario para otorgar la libertad condicional se determinará con base en la pena impuesta en la sentencia.

La reducción de las penas por trabajo y estudio, al igual que cualquier otra rebaja de pena que establezca la ley, se tendrá en cuenta como parte cumplida de la pena impuesta o que pudiere imponerse.

Artículo 559. *Condición para la revocatoria.* La revocatoria se decretará por el juez de ejecución de penas y medidas de seguridad de oficio o a petición de los encargados de la vigilancia, cuando aparezca demostrado que se han violado las obligaciones contraídas.

CAPITULO IV

Suspensión condicional de la ejecución de la pena privativa de la libertad

Artículo 560. *Procedencia.* Para conceder la suspensión condicional de la ejecución de la pena, se dará cumplimiento a lo dispuesto en el

Código Penal y se fijará el término dentro del cual el beneficiado debe reparar los daños ocasionados con el delito, salvo que haya bienes secuestrados, decomisados o embargados, que garanticen íntegramente la indemnización.

Si se ha impuesto pena accesoria de multa, su pago es requisito imprescindible para poder otorgar la libertad condicional.

Artículo 561. *Ejecución de la pena por no reparación de los daños.* Si el beneficiado con la suspensión condicional de la ejecución de la pena, sin justa causa, no reparare los daños dentro del término que le ha fijado el juez, se ordenará inmediatamente el cumplimiento de la pena respectiva y se procederá como si la sentencia no se hubiere suspendido.

Artículo 562. *Extinción de la condena y devolución de la caución.* Cuando se declare la extinción de la condena conforme al Código Penal, se devolverá la caución y se comunicará a las mismas entidades a quienes se comunicó la sentencia o la suspensión condicional de la ejecución de la pena.

CAPITULO V

Disposiciones comunes a los dos capítulos anteriores

Artículo 563. *Negación o revocatoria de los mecanismos sustitutivos de la pena privativa de la libertad.* De existir motivos para negar o revocar los mecanismos sustitutivos de la pena privativa de la libertad, el juez de ejecución de penas y medidas de seguridad los pondrá en conocimiento del condenado para que dentro del término de tres (3) días presente las explicaciones pertinentes. La decisión se adoptará por auto motivado en los diez (10) días siguientes.

Artículo 564. *Decisiones.* Las decisiones que adopte el juez de ejecución de penas y medidas de seguridad en relación con mecanismos sustitutivos de la pena privativa de la libertad y la rehabilitación, son apelables ante el juez que profirió la condena en primera o única instancia.

Artículo 565. *Prórroga para el pago de perjuicios.* Cuando el beneficiado con la condena de ejecución condicional no hubiere cumplido la obligación de indemnizar los perjuicios dentro del término señalado, el juez de ejecución de penas y medidas de seguridad, a petición justificada, podrá prorrogar el plazo por una sola vez. Excepcionalmente podrá conceder un segundo plazo. Si no cumplierse se ejecutará la condena.

CAPITULO VI

De la rehabilitación

Artículo 566. *Concesión.* La rehabilitación de derechos y funciones públicas la concederá el juez de ejecución de penas y medidas de seguridad, previa solicitud del condenado de acuerdo con las normas del presente capítulo y dentro de los plazos determinados por el Código Penal.

La providencia que concede la rehabilitación será publicada en la gaceta oficial del respectivo departamento.

Artículo 567. *Anexos a la solicitud de rehabilitación.* Con la solicitud de rehabilitación se presentarán:

1. Copias de las sentencias de primera, de segunda instancia y de casación si fuere el caso.
2. Copia de la cartilla biográfica.
3. Dos declaraciones, por lo menos, de personas de reconocida honorabilidad, sobre la conducta observada después de la condena.
4. Certificado de la entidad bajo cuya vigilancia hubiere estado el peticionario en el período de prueba de la libertad condicional o vigilada, si fuere el caso.
5. Comprobación del pago de los perjuicios civiles cuando fuere posible.
6. Certificado del Departamento Administrativo de Seguridad y de la Procuraduría General de la Nación.

Artículo 568. *Comunicaciones.* La providencia que concede la rehabilitación de derechos y funciones públicas, se comunicará a las mismas entidades a quienes se comunicó la sentencia y a la Registraduría Nacional del Estado Civil, para que hagan las anotaciones del caso. En los demás eventos se procederá conforme a la naturaleza del derecho restringido.

Artículo 569. *Ampliación de pruebas.* El juez de ejecución de penas y medidas de seguridad que deba resolver la solicitud de rehabilitación puede pedir ampliación o ratificación de las pruebas acompañadas al memorial respectivo y practicar de oficio las pruebas que estime pertinentes, dentro de un plazo no mayor de diez (10) días.

LIBRO V
COOPERACION INTERNACIONAL

CAPITULO I

La extradición

Artículo 570. *La extradición.* La extradición se podrá solicitar, conceder u ofrecer de acuerdo con los tratados públicos y, en su defecto con la ley.

Además, la extradición de los colombianos por nacimiento se concederá por los delitos cometidos en el exterior, considerados como tales en la legislación penal colombiana.

La extradición no procederá por delitos políticos.

No procederá la extradición de colombianos por nacimiento cuando se trate de hechos cometidos con anterioridad al 17 de diciembre de 1997.

Artículo 571. *Concesión u ofrecimiento de la extradición.* Corresponde al gobierno por medio del Ministerio del Interior y de Justicia, ofrecer o conceder la extradición de una persona condenada o procesada en el exterior, salvo en los casos contemplados en el artículo anterior.

Artículo 572. *Extradición facultativa.* La oferta o concesión de la extradición es facultativa del gobierno, previo el trámite previsto en la presente ley.

Artículo 573. *Requisitos para concederla u ofrecerla.* Para que pueda ofrecerse o concederse la extradición se requiere, además:

1. Que el hecho que la motiva también esté previsto como delito en Colombia y reprimido con una sanción privativa de la libertad cuyo mínimo no sea inferior a cuatro (4) años.

2. Que por lo menos se haya dictado en el exterior resolución de acusación o su equivalente.

Artículo 574. *Condiciones para el ofrecimiento o concesión.* El gobierno podrá subordinar el ofrecimiento o la concesión de la extradición a las condiciones que considere oportunas. En todo caso deberá exigir que el solicitado no vaya a ser juzgado por un hecho anterior diverso del que motiva la extradición, ni sometido a sanciones distintas de las que se le hubieren impuesto en la condena.

Si según la legislación del Estado requirente, al delito que motiva la extradición corresponde la pena de muerte, la entrega sólo se hará bajo la condición de la conmutación de tal pena, e igualmente, a condición de que al extraditado no se le someta a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ni a las penas de destierro, prisión perpetua o confiscación.

Artículo 575. *Documentos anexos para la solicitud u ofrecimiento.* La solicitud para que se ofrezca o se conceda la extradición de persona a quien se haya formulado resolución de acusación o su equivalente o condenado en el exterior, deberá hacerse por la vía diplomática, y en casos excepcionales por la consular, o de gobierno a gobierno, con los siguientes documentos:

1. Copia o transcripción auténtica de la sentencia, de la resolución de acusación o su equivalente.

2. Indicación exacta de los actos que determinaron la solicitud de extradición y del lugar y la fecha en que fueron ejecutados.

3. Todos los datos que se posean y que sirvan para establecer la plena identidad de la persona reclamada.

4. Copia auténtica de las disposiciones penales aplicables para el caso.

Los documentos mencionados serán expedidos en la forma prescrita por la legislación del Estado requirente y deberán ser traducidos al castellano, si fuere el caso.

Artículo 576. *Concepto del Ministerio de Relaciones Exteriores.* Recibida la documentación, el Ministerio de Relaciones Exteriores ordenará que pasen las diligencias al Ministerio del Interior y de Justicia junto con el concepto sobre la validez formal de la documentación presentada y que exprese si es del caso proceder con sujeción a convenciones o usos internacionales o si se debe obrar de acuerdo con las normas de este código.

Artículo 577. *Estudio de la documentación.* El Ministerio del Interior y de Justicia examinará la documentación en un término improrrogable de cinco (5) días y si encuentra que faltan piezas sustanciales en el expediente, lo devolverá al Ministerio de Relaciones Exteriores, con indicación detallada de los nuevos elementos de juicio que sean indispensables.

Artículo 578. *Perfeccionamiento de la documentación.* El Ministerio de Relaciones Exteriores adelantará las gestiones que fueren necesarias ante el gobierno extranjero, a fin de que la documentación se complete con los elementos a que se refiere el artículo anterior.

Artículo 579. *Trámite.* Una vez perfeccionado el expediente, el Ministerio del Interior y de Justicia dará traslado a la persona requerida o a su defensor, y al Ministerio Público quien podrá intervenir en cualquier etapa del trámite, por el término de diez (10) días para que soliciten pruebas pertinentes para establecer los fundamentos del otorgamiento de la extradición previstos en el artículo siguiente.

Vencido el término de traslado, se abrirá a pruebas la actuación por el término de diez (10) días, más el de la distancia, dentro del cual se practicarán las pruebas que a juicio del Gobierno Nacional sean indispensables para tomar una decisión.

Practicadas las pruebas, se dará traslado a la persona requerida por cinco (5) días para alegar.

Parágrafo. Si la persona requerida manifiesta su consentimiento en la extradición y el Ministerio Público no objeta esa manifestación, el Gobierno Nacional podrá ordenar su entrega inmediata al país requirente, previa verificación de los fundamentos establecidos en el siguiente artículo.

Artículo 580. *Fundamentos de la Resolución que concede o niega la extradición.* Una vez demostrada plenamente la identidad del solicitado, cumplido el principio de la doble incriminación, verificada la equivalencia de la providencia proferida en el extranjero y, cuando fuere el caso, el cumplimiento de lo previsto en los tratados públicos, el Gobierno Nacional dispondrá de un término de quince (15) días para dictar la resolución en que se conceda o se niegue la extradición solicitada.

Artículo 581. *Entrega diferida.* Cuando con anterioridad al recibo del requerimiento la persona solicitada hubiere delinquirado en Colombia, en la resolución ejecutiva que conceda la extradición, podrá diferir la entrega hasta cuando se le juzgue y cumpla pena, o hasta que por cesación de procedimiento, preclusión de la instrucción o sentencia absolutoria haya terminado el proceso.

En el caso previsto en este artículo, el funcionario judicial de conocimiento o el director del establecimiento donde estuviere recluido el interno, pondrá a órdenes del gobierno al solicitado en extradición, tan pronto como cese el motivo para la reclusión en Colombia.

Artículo 582. *Prelación en la concesión.* Si una misma persona fuere objeto de solicitudes de extradición por parte de dos (2) o más estados, será preferida, tratándose de un mismo hecho, la solicitud del país en cuyo territorio fue cometida la infracción; y si se tratare de hechos diversos la solicitud que versare la infracción más grave. En caso de igual gravedad, será preferido el Estado que presentó la primera solicitud de extradición.

Corresponde al gobierno establecer el orden de precedencia cuando hubiere varias demandas de extradición.

Artículo 583. *Entrega del extraditado.* Si la extradición fuere concedida, el Fiscal General de la Nación ordenará la captura del procesado si no estuviere privado de la libertad, y lo entregará a los agentes del país que lo hubieren solicitado.

Si fuere rechazada la petición, el Fiscal General de la Nación ordenará poner en libertad al detenido.

Artículo 584. *Entrega de objetos.* Junto con la persona reclamada, o posteriormente, se entregarán todos los objetos encontrados en su poder, depositados o escondidos en el país y que estén relacionados con la perpetración de la conducta punible, así como aquellos que puedan servir como elemento de prueba.

Artículo 585. *Gastos.* Los gastos de extradición serán sufragados por cada Estado dentro de los límites de su territorio.

Artículo 586. *Captura.* El Fiscal General de la Nación decretará la captura de la persona requerida tan pronto conozca la solicitud formal de extradición, o antes, si así lo pide el Estado requirente, mediante nota en que exprese la plena identidad de la persona, la circunstancia de haberse proferido en su contra sentencia condenatoria, acusación o su equivalente y la urgencia de tal medida.

Artículo 587. *Derecho de defensa.* Desde el momento en que se inicie el trámite de extradición la persona tendrá derecho a designar un defensor y de no hacerlo se le nombrará de oficio.

Artículo 588. *Causales de libertad.* La persona reclamada será puesta en libertad incondicional por el Fiscal General de la Nación, si dentro de los sesenta (60) días siguientes a la fecha de su captura no se hubiere formalizado la petición de extradición, o si transcurrido el término de treinta (30) días desde cuando fuere puesta a disposición del Estado requirente, éste no procedió a su traslado.

En los casos aquí previstos, la persona podrá ser capturada nuevamente por el mismo motivo, cuando el Estado requirente formalice la petición de extradición u otorgue las condiciones para el traslado.

Artículo 589. *Requisitos para solicitarla.* Sin perjuicio de lo previsto en tratados públicos, cuando contra una persona que se encuentre en el exterior se haya proferido en Colombia resolución que resuelva la situación jurídica, imponiendo medida de aseguramiento, resolución de acusación en firme o sentencia condenatoria por delito que tuviere pena privativa de la libertad no inferior a dos (2) años de prisión, el funcionario que conociere del proceso en primera o única instancia, pedirá al Ministerio del Interior y de Justicia y del Derecho que se solicite la extradición del procesado o condenado, para lo cual remitirá copia de la providencia respectiva y demás documentos que considere conducentes.

La solicitud podrá elevarla el funcionario de segunda instancia cuando sea él quien ha formulado la medida.

Artículo 590. *Examen de la documentación.* El Ministerio del Interior y de Justicia examinará la documentación presentada, y si advirtiere que faltan en ella algunos documentos importantes, la devolverá al funcionario judicial con una nota en que se indiquen los nuevos elementos de juicio que deban allegarse al expediente.

Artículo 591. *Gestiones diplomáticas para obtener la extradición.* Una vez perfeccionado el expediente, el Ministerio del Interior y de Justicia lo remitirá al de Relaciones Exteriores para que éste, sujetándose a los convenios o usos internacionales, adelante las gestiones diplomáticas necesarias para obtener del gobierno extranjero la extradición.

CAPITULO II

Sentencias extranjeras

Artículo 592. *Ejecución en Colombia.* Las sentencias penales proferidas por autoridades de otros países contra extranjeros o nacionales colombianos podrán ejecutarse en Colombia a petición formal de las respectivas autoridades extranjeras, formulada por la vía diplomática.

Artículo 593. *Requisitos.* Para que la sentencia extranjera pueda ser ejecutada en nuestro país deben cumplirse como mínimo los siguientes requisitos:

1. Que no se oponga a los tratados internacionales suscritos por Colombia, o a la Constitución Política o a las leyes de la República.
2. Que la sentencia se encuentre en firme de conformidad con las disposiciones del país extranjero.

3. Que en Colombia no se haya formulado acusación, ni sentencia ejecutoriada de los jueces nacionales, sobre los mismos hechos, salvo lo previsto en el numeral 1 del artículo 16 del Código Penal.

4. Que a falta de tratados públicos, el Estado requirente ofrezca reciprocidad en casos análogos.

Artículo 594. *Trámite.* La solicitud deberá ser tramitada ante el Ministerio de Relaciones Exteriores. Este remitirá el asunto a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, la que decidirá sobre la ejecución de la sentencia extranjera.

No se hará nuevo juzgamiento en Colombia, excepto lo dispuesto en el artículo 16 del Código Penal.

LIBRO VI

JUSTICIA RESTAURATIVA

CAPITULO I

Disposiciones generales

Artículo 595. *Definiciones.* Se entenderá por programa de justicia restaurativa todo proceso en el que la víctima y el infractor, participan conjuntamente de forma activa en la resolución de cuestiones derivadas del delito en busca de un resultado restaurativo, con o sin la participación de un facilitador.

Se entiende por resultado restaurativo, el acuerdo encaminado a atender las necesidades y responsabilidades individuales y colectivas de las partes y a lograr la reintegración de la víctima y del infractor en la comunidad en busca de la reparación, la restitución y el servicio a la comunidad.

Artículo 596. *Reglas Generales.* Los procesos de justicia restaurativa se regirán por los principios generales establecidos en el presente código y en particular por las siguientes reglas:

1. Consentimiento libre y voluntario de la víctima y el infractor de someter el conflicto a un proceso restaurativo. Tanto la víctima como el infractor podrán retirar este consentimiento en cualquier momento del proceso.
2. Los acuerdos que se alcancen deberán contener obligaciones razonables y proporcionadas con el daño ocasionado con el delito.
3. La participación del delincuente no se utilizará como prueba de admisión de culpabilidad en procedimientos jurídicos ulteriores.
4. El incumplimiento de un acuerdo no deberá utilizarse como fundamento para una condena o para la agravación de la pena.
5. Los facilitadores deben desempeñar sus funciones de manera imparcial y velarán por que la víctima y el infractor actúen con mutuo respeto.
6. La víctima y el infractor tendrán derecho a consultar a un abogado.

Artículo 597. *Condiciones para la remisión a los programas de justicia Restaurativa.* El fiscal o el juez, para remitir un caso a los programas de justicia restaurativa, deberá:

1. Informar plenamente a las partes de sus derechos, de la naturaleza del proceso y de las posibles consecuencias de su decisión.
2. Cerciorarse de que no se haya coaccionado a la víctima ni al infractor para que participen en procesos restaurativos o acepten resultados restaurativos, ni se los haya inducido a hacerlo por medios desleales.

Artículo 598. *Mecanismos.* Son mecanismos de justicia restaurativa la conciliación preprocesal, la conciliación en el incidente de reparación integral y la mediación.

CAPITULO II

Conciliación preprocesal

Artículo 599. *La conciliación como requisito de procedibilidad para el ejercicio de la acción penal en los delitos querellables.* La conciliación se surtirá obligatoriamente y como requisito de procedibilidad para el ejercicio de la acción penal cuando se trate de delitos querellables.

En estos casos el fiscal únicamente podrá ejercer la acción penal cuando el querellante haga entrega del acta de conciliación correspondiente.

Acreditado el cumplimiento del acuerdo conciliatorio el fiscal dará aplicación al artículo 334 del presente código.

Artículo 600. *Audiencia de Conciliación.* La audiencia de conciliación preprocesal podrá celebrarse ante un conciliador de la Oficina de Atención a Víctimas, de la Fiscalía, en un centro de conciliación oficialmente reconocido, o ante un conciliador reconocido como tal.

Esta conciliación preprocesal se hará en un todo de acuerdo con el trámite para la conciliación civil establecido en la Ley 640 de 2001.

Si alguno de los citados fuere incapaz, concurrirá su representante legal.

Si se llegare a un acuerdo, el fiscal lo aprobará cuando lo considere ajustado a la ley y se abstendrá de iniciar investigación.

Si el querellante no compareciere se dará por desistida la querrela y quedará obligado al pago de las costas.

No se podrán realizar más de dos (2) audiencias de conciliación preprocesal.

CAPITULO III

La mediación

Artículo 601. *Mediación.* Es un proceso por el que un tercero neutral, designado por el Fiscal General de la Nación o su delegado conforme con el manual expedido para la materia, trata, a través de la organización de intercambios entre la víctima y el imputado o condenado, de permitir a estos confrontar sus puntos de vista y buscar, con su ayuda, una solución al conflicto que les enfrenta.

Artículo 602. *Procedencia.* La mediación procede, para los delitos perseguibles de oficio, desde la formulación de la imputación y hasta la presentación de la acusación, en todos los casos en que la víctima y el victimario acepten expresa y voluntariamente someter su caso a un proceso de justicia restaurativa.

Los resultados de la mediación serán valorados para el ejercicio de la acción penal; la selección de la coerción personal o la individualización de la pena al momento del dictado de la sentencia.

Parágrafo. Sin perjuicio de lo anterior, la mediación procederá para cualquier delito desde que se anuncie el sentido del fallo y hasta antes de la dosificación de la pena.

El informe que rinda el mediador será tenido en cuenta por el juez para la individualización de la pena.

Artículo 603. *Solicitud.* La mediación podrá ser solicitada oralmente por la víctima o por el infractor ante el fiscal o el juez de conocimiento, según el caso.

En los casos de menores, de inimputables y víctimas incapaces, deberán participar en la mediación penal sus representantes legales.

Artículo 604. *Confidencialidad.* El proceso de mediación penal es confidencial y sólo se libraré un informe de sus resultados, que será remitido al fiscal o al juez, según el caso, para que lo valore y determine los efectos que se produzcan en el procedimiento.

Parágrafo. El resultado de la mediación podrá contener un acuerdo sobre la reparación, restitución o el resarcimiento de los daños causados. También se podrá convenir la realización o abstención de determinada conducta, prestación de servicios a la comunidad, pedido de disculpas o perdón.

Artículo 605. *Directrices.* El Fiscal General de la Nación elaborará un manual que fije las directrices de funcionamiento de la mediación, particularmente en aspectos como las calificaciones, la capacitación y la evaluación de los mediadores; la administración y las reglas de conducta que regirán el funcionamiento de los programas de justicia restaurativa.

LIBRO VII

REGIMEN DE IMPLEMENTACION

CAPITULO I

Disposiciones generales

Artículo 606. *Proceso de implementación.* En desarrollo de los artículos 4 y 5 del acto legislativo 03 de 2002, la Comisión Constitucional allí creada será la encargada de determinar las políticas del proceso de implementación gradual y sucesivo del sistema contemplado en este código y supervisar su ejecución.

Artículo 607. *Criterios para la implementación.* La Comisión Constitucional referida en el artículo anterior, para efectos de la implementación del nuevo sistema tendrá en cuenta los siguientes factores:

1. Número de despachos judiciales y procesos en la Fiscalía y en los juzgados penales.
2. Registro de funcionarios capacitados en oralidad y previsión de demanda de capacitación.
3. Proyección sobre el número de salas de audiencia requeridas.
4. Demanda en justicia penal y requerimiento de defensoría pública.
5. Nivel de congestión.

Artículo 608. *Selección de distritos judiciales.* Con base en el análisis de los criterios anteriores, la Comisión Constitucional decidirá en qué periodos y en cuáles distritos judiciales se implementará el sistema contemplado en este código, siempre teniendo como plazo máximo el 31 de diciembre de 2008.

Artículo 609. *Unidad técnica ejecutora del proceso de implementación.* La Comisión Constitucional conformará una unidad técnica que, bajo la coordinación del presidente de aquella, se encargará de la ejecución de las políticas trazadas durante el tiempo de implementación previsto en el artículo anterior.

CAPITULO II

Régimen de transición

Artículo 610. *Proceso de descongestión.* La Comisión de implementación fijará el mecanismo en virtud del cual finalicen los procesos que se encuentren en curso en cada distrito judicial, al momento de iniciar la implementación del sistema. A estos efectos, podrá anticiparse la vigencia del principio de oportunidad.

CAPITULO III

Disposiciones finales

Artículo 611. *Derogatoria y vigencia.* El presente código deroga la legislación sobre la materia y regirá, para los hechos nuevos que ocurran a partir del 1° de enero del año 2005, en aquellos distritos judiciales que se señalarán en forma gradual y sucesiva, de conformidad con el procedimiento aquí establecido y los dispuesto en la ley estatutaria de la administración de justicia.

Los casos de que trata el artículo 235 numeral 3 de la Constitución Política, continuarán su trámite por la Ley 600 de 2000.

Dentro de los tres meses siguientes a la promulgación de este código el Gobierno Nacional podrá hacer las correcciones necesarias para la concordancia de sus disposiciones, en cuanto no afecten la estructura del texto original.

El Fiscal General de la Nación (firmado),

Luis Camilo Osorio.

EXPOSICION DE MOTIVOS

Introducción

Con la expedición del acto legislativo 03 del 20 de diciembre de 2002, el constituyente borró las ataduras normativas que impedían el diseño, construcción e implementación del sistema acusatorio en materia criminal. Por este motivo, se presenta a la consideración de la Honorable

Cámara de Representantes, en cumplimiento del mandato conferido por el constituyente, el proyecto de código de procedimiento penal que adecua el rito procesal a los noveles principios y derroteros normativos plasmados en la Carta Política.

I. Actividad de indagación y ejercicio de la acción penal

En el ordenamiento constitucional previo a la expedición del Acto Legislativo 03, se prohió la existencia de un esquema procesal penal mixto o formal con tendencia acusatoria, en el que las funciones del fiscal se confundían con las de un juez de instrucción típicamente inquisitivo en el cual, el fiscal, tal cual lo regula la Ley 600 de 2000, cuenta con la facultad de practicar por sí mismo y ante sí todo tipo de pruebas, las que utiliza para fundamentar la adopción de sus decisiones judiciales, algunas de ellas restrictivas de derechos fundamentales, como lo puede ser la imposición de la detención preventiva al momento de definir la situación jurídica del sindicado o el ordenar el embargo y secuestro preventivo de bienes.

Las pruebas practicadas durante la etapa de instrucción por el fiscal instructor, tienen vocación de permanencia, esto es, pueden ser tenidas como sustento de la sentencia condenatoria, a pesar de no haber sido presentadas, practicadas y controvertidas ante el juez de la causa.

De acuerdo con lo dicho, en el régimen vigente, como quiera que en la llamada etapa de instrucción se practican pruebas con vocación de permanencia, pudiéndose afectar derechos fundamentales de la persona procesada directamente por el fiscal, se entiende que el acto jurídico procesal a partir del cual se marca el comienzo del ejercicio de la acción penal estriba en la resolución de apertura de instrucción; equivalente histórico del acto procesal inquisitivo denominado autocabeza de proceso.

El constituyente, poniéndose a tono con las exigencias plasmadas en tratados internacionales de Derechos Humanos de universal aceptación, reconoció que la persona solamente puede ser declarada judicialmente culpable, en el marco de un *“juicio público, oral, con inmediación de las pruebas, contradictorio, concentrado y con todas las garantías”*.

La inserción de esta cláusula normativa dentro del texto constitucional, abolió por completo la posibilidad para la Fiscalía de seguir actuando como un juez de instrucción al practicar pruebas con vocación de permanencia. Bien puede decirse que en este aspecto la Carta Política adoptó estrictamente el postulado acusatorio, en la medida en que únicamente podrán ser tenidas como pruebas las que se presenten, practiquen y controviertan en presencia del juez de la causa.

Por esta razón en este proyecto de ley se eleva, por primera vez en la historia del procedimiento penal Colombiano, al rango de principio rector, con carácter perentorio y prevalente, la inmediación probatoria, al disponerse que: *“en el juicio únicamente se estimará como prueba la que haya sido producida o incorporada en forma pública, oral, concentrada, y sujeta a confrontación y contradicción ante el juez de conocimiento. En ningún caso podrá comisionarse para la práctica de pruebas”*.

Entiéndase que el proceso penal acusatorio no se subdivide en dos etapas, como acontece en los esquemas mixtos. La actividad de investigación que adelanta el ministerio fiscal, por no abarcar la práctica de pruebas, ni mucho menos la adopción de decisiones que puedan comprometer derechos fundamentales de la persona investigada, no puede ser tenida como una fase o etapa procesal. En este sistema, el momento que determina el comienzo del ejercicio de la acción penal, en su sentido más puro, se encuentra referido a la presentación de la acusación ante el juez de la causa, puesto que es en ese instante, dada la naturaleza adversarial del mismo, cuando se entabla la relación jurídico procesal entre los tres intervinientes fundamentales: juez, fiscal investigador - acusador y defensa.

Solamente puede calificarse como proceso acusatorio aquel en el que se encuentran perfectamente diferenciadas las funciones de los intervinientes en la actuación: un juez imparcial que a nombre del estado evalúa la responsabilidad del acusado con base en las pruebas que son

presentadas a su conocimiento de manera pública, oral, concentrada, con plena confrontación y contradicción; un fiscal, que a nombre del estado ejerce la acción penal a través de la acusación y que como titular de la pretensión punitiva, tiene la obligación de presentar en el juicio las pruebas de cargo adecuadas para desvirtuar la presunción de inocencia; y, una defensa, que en plena igualdad de condiciones con el acusador, representa los intereses del sujeto pasivo de la acción penal.

Conforme al marco acusatorio delimitado por el constituyente de 2003, ha quedado en claro que la tarea del fiscal no puede extenderse a la práctica de pruebas ante sí y por sí, de manera anticipada, dado que su esfuerzo investigativo se concentra en recolectar los elementos materiales probatorios, que en caso de presentarse una acusación, deberán ser presentados de manera oral y pública en el juicio, para convertirse en la prueba apta y necesaria destinada a desvirtuar la presunción de inocencia. Fiel a este postulado cardinal el proyecto de ley que ahora se presenta, regula de manera clara y novedosa la forma como la fiscalía adelanta sus labores de indagación, tal y como se explicará a continuación.

En efecto, en este se establece que la Fiscalía General de la Nación, es la entidad encargada de realizar pesquisas y acusar a los presuntos infractores de la ley penal. Para que el ente acusador emprenda su tarea, basta que haya tenido conocimiento *“por medio de denuncia, petición especial, querrela o de oficio”* de la presunta existencia de hechos que revistan las características de delito. A partir de este momento el fiscal asume la coordinación, control jurídico y el deber de verificación técnico-científico, de las actividades que desarrollan los funcionarios que desempeñan funciones de policía judicial.

Para satisfacer estos propósitos, el fiscal deberá diseñar un programa metodológico, en el cual se deben señalar los objetivos de la investigación en relación con la hipótesis delictiva; los criterios para evaluar la información; la delimitación funcional de las tareas que se deban adelantar en procura de alcanzar los objetivos trazados; y los procedimientos de control para las labores de los investigadores.

Dada la naturaleza misma del proceso penal acusatorio, los actos de investigación de campo están adscritos a la policía judicial, la que se encarga prioritariamente de recolectar todos los elementos materiales probatorios sobre los cuales, una vez sometidos a la cadena de custodia, se cumplirán los estudios, exámenes o análisis de laboratorio pertinentes.

Con esta previsión normativa, se pretenden aclarar y delimitar los roles funcionales del fiscal y del investigador: el fiscal como coordinador de la actividad investigativa fija el rumbo y el objeto de la indagación, con base en su conocimiento de la teoría jurídica; en tal medida, señala a los investigadores los hechos jurídicamente relevantes para la hipótesis delictiva cuya existencia debe ser verificada, para poder determinar si de los elementos materiales probatorios o de la información legalmente obtenida, se puede afirmar, con probabilidad de verdad, la existencia de la conducta presuntamente delictiva y que el investigado es su autor o partícipe; esto es, concluir si existe el mérito suficiente para formular acusación.

El fiscal, como funcionario judicial de acuerdo con la estructura del poder público prevista en la Carta Magna, se erige en guardián de la legalidad de las actividades desplegadas por la policía judicial y por tanto, está obligado a rechazar los resultados de todas las tareas que se hayan cumplido en desconocimiento de los principios rectores y garantías procesales, puesto que en el juicio solamente podrán aducirse como prueba los elementos materiales probatorios que se hayan recogido u obtenido con sujeción a lo prescrito en el ordenamiento superior, en los tratados internacionales sobre derechos humanos y en la ley.

El investigador, siguiendo el programa metodológico trazado, es quien realiza la investigación de campo, recolecta los elementos materiales probatorios, los somete a la debida cadena de custodia, practica los exámenes y pruebas técnico-científicas sobre los mismos e informa permanentemente al fiscal director de la indagación sobre los resultados de sus hallazgos, para que este pueda valorarlos.

En cumplimiento de sus tareas investigativas, los órganos de policía judicial, bajo las órdenes de la Fiscalía General de la Nación, podrán adelantar los actos correspondientes tales como: entrevistas, reconocimientos, inspección del lugar del hecho; obtención de muestras en la escena del mismo; recolección de aquellas y levantamiento de cadáveres; inspección de lugares diferentes a la escena del hecho; aseguramiento y custodia de los elementos materiales probatorios; exhumación de cadáveres; allanamientos y registros ordinarios y especiales; examen y devolución de correspondencia; interceptación de comunicaciones telefónicas y similares; recuperación de información dejada al navegar por internet; vigilancia de personas; vigilancia de cosas; seguimientos de personas; seguimiento de vehículos; infiltraciones en organizaciones criminales; operaciones con agentes encubiertos; entregas vigiladas; búsquedas selectivas en bases de datos; inspecciones corporales; registros personales; y, en fin todo aquello que sin quebrantar el marco legal sea idóneo y adecuado para establecer la verdad.

En el proyecto, además de regularse detalladamente el procedimiento a seguir para la realización de cualquiera de los actos de indagación mencionados y en acatamiento al acto legislativo, se impone el deber al fiscal de someter ante el juez que ejerce la función de control de garantías para el correspondiente juicio de legalidad, sobre lo actuado en diligencias de registro, allanamiento, incautación e interceptación de comunicaciones, dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes a su práctica y en audiencia de control de legalidad posterior.

Sin perjuicio de lo anterior, el diseño del esquema procesal acusatorio colombiano no puede pasar por alto, que el artículo 29 de la Carta Política prevé el derecho de defensa con carácter de derecho fundamental, el cual podrá ser ejercido tanto en la investigación como en el juzgamiento. Por este motivo, se contempló la existencia de un estadio previo a la acusación llamado formulación de la imputación.

Este se define como *“el acto de comunicar, en audiencia ante el juez que ejerce la función de control de garantías, a la persona, su calidad de imputado”*. Con este acto procesal se pretende única y exclusivamente informar a la persona que existe una investigación en su contra, por hechos que eventualmente pueden comprometer su responsabilidad penal, para que así el imputado en asocio de su defensor técnico, pueda comenzar a preparar de modo eficaz su actividad defensiva respecto de la eventual acusación en ciernes.

En todo caso precítese, dada la naturaleza del proceso acusatorio, regido prioritariamente por los principios de inmediación y concentración, que por el hecho de la formulación de la imputación la Fiscalía no tiene la obligación de revelar los elementos materiales probatorios que haya recolectado, puesto que aquellos solamente serán dados a conocer a partir de la presentación de la acusación, razón por la cual, se entiende e impone que la actividades que puede desplegar la defensa en orden a preparar su estrategia, no se extienden a la contradicción y solicitud de práctica de pruebas, prohibición expresamente consagrada en el proyecto, cerrándose así las puertas para que la formulación de la imputación se convierta en un escenario sumarial o anticipación del juicio.

Ahora bien, la fiscalía debe formular la imputación *“cuando de los elementos materiales probatorios o de la información legalmente obtenida, pueda establecer que el imputado es autor o partícipe del delito que se investiga”*. Como consecuencia lógica de esta cláusula general, también se torna obligatorio para el fiscal formular la imputación, cuando el presunto delincuente hubiere sido capturado en situación de flagrancia o este considere necesario solicitar la imposición de una medida de aseguramiento.

En el esquema procesal planteado se entiende que la acción penal comienza a ejercerse a partir de la formulación de la imputación, momento a partir del cual se interrumpe la prescripción de la acción penal, se activa el breve término de treinta (30) días para presentar la acusación que da lugar al inicio del juicio o, en su defecto, la solicitud de preclusión ante el juez de conocimiento, la que será viable si con base en las labores de indagación adelantadas por la fiscalía se pudo establecer que es imposible iniciar o proseguir la acción penal; que existe una

causal excluyente de responsabilidad; que el hecho investigado no existió; que el mismo es atípico; que el imputado no tuvo ninguna intervención en el mismo; que no existen herramientas convictivas para desvirtuar la presunción de inocencia; o que el fiscal dejó vencer el término de que dispone para presentar la acusación.

Indíquese que la preclusión podrá ser solicitada en cualquier momento a partir de la formulación de la imputación y la decisión preclusiva será adoptada por el juez del conocimiento en audiencia pública durante la cual el fiscal deberá sustentar su petición con fundamento en los elementos materiales probatorios que hubieren sido recolectados y en la que se brinda la posibilidad de intervenir a la víctima, el Ministerio Público y la propia defensa del imputado, si fuere su intención oponerse a la solicitud referida.

Competencia

En el proyecto de Código de Procedimiento Penal que hoy se presenta ante la H. Cámara de Representantes, como resultado de esos esfuerzos legislativos, en materia de competencia para el juzgamiento se conservan los factores territorial, objetivo, subjetivo, funcional y de conexidad que en la tradición jurídica nacional han concurrido a determinarla, distribuyendo entonces el conocimiento de los asuntos entre los jueces y tribunales existentes.

En cuanto al primer factor, se plantea que la competencia básicamente asignada en la actualidad a los jueces penales del circuito especializados, sea asumida en primera y segunda instancias por jueces y tribunales regionales, denominación que si bien coincide con la que existió en pretéritas disposiciones, en manera alguna comporta dentro de la estructura del proceso penal propuesta en el proyecto, el resurgimiento de la extinta justicia regional, menos aún cuando ninguna excepción se contempla respecto de los delitos cuyo conocimiento se les atribuye.

Tal nomenclatura obedece simple y llanamente al factor territorial que los caracteriza, porque a diferencia de lo que ocurre con los demás jueces y tribunales, no queda subordinado a los estrictos lindes de los distritos o circuitos judiciales pues, los jueces y tribunales regionales, tendrán competencia para conocer de los delitos cometidos en la respectiva región, siempre que se trate de aquellos señalados en el listado correspondiente, en concreto, de los que afectan o vulneran intereses jurídicos estimados socialmente relevantes o involucran una particular forma de lesión o peligro para los mismos.

La necesidad de asegurar la eficacia de la administración de justicia frente a cierto tipo de delincuencia, impone no sólo la especialidad de los jueces y tribunales para conocer de estas conductas transgresoras del estatuto punitivo, sino también la asignación de una competencia desligada de los artificiosos límites de los distritos o circuitos judiciales, donde la protección de los funcionarios y de quienes intervienen de la actuación no quede reducida a un mero enunciado teórico, para erigirse entonces en una inconcusa realidad.

No sobra advertir, de otra parte, que tal competencia regional no riñe con el principio de desconcentración en el funcionamiento de la administración de justicia, ni con el derecho fundamental de acceder a esta. Tampoco traduce la creación de una jurisdicción especial con desbordamiento de las limitantes que en dicho ámbito establece la Carta Política, por el contrario, respecto de tal categoría de funcionarios bien puede decirse como lo sostuvo la Corte Constitucional en relación con los actuales jueces penales del circuito especializados, que *“no pueden ser asimilados a jueces extraordinarios pertenecientes a una jurisdicción especial distinta de las autorizadas por la Constitución. La existencia de dichos jueces, por consiguiente, sólo puede admitirse bajo la idea de que se trata de funcionarios judiciales, que hacen parte de la justicia ordinaria y a quienes se les adscribe de manera habitual el conocimiento de ciertas causas en razón de la especificidad o particularidad de la materia, sin que ello implique el desconocimiento de las garantías procesales y sustanciales básicas propias del debido proceso”*.

Resta indicar en este punto, que el proyecto no se ocupa de determinar las regiones donde operarán esos jueces y tribunales regionales, porque

dicho señalamiento al tenor de las disposiciones contenidas en la ley 270 de 1996, es función privativa y excluyente de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, que deberá proceder a lo propio atendidas las necesidades de la justicia.

De otra parte, se elimina la colisión de competencias en la forma como tradicionalmente venía regulándose en la normatividad procesal penal, con miras a tornar efectivo el derecho fundamental a un debido proceso, sin dilaciones injustificadas y para efectos de armonizar el planteamiento y solución de las controversias en dicha materia con las exigencias de un debate oral, público, concentrado, sujeto a confrontación y contradicción ante el juez de conocimiento, se propone su definición mediante un trámite incidental donde su postulación esté regida por el principio de oportunidad o preclusión.

En este orden de ideas, únicamente resultará viable controvertir o discutir la competencia en la audiencia de formulación de acusación, de modo que planteada la incompetencia por el juez o impugnada esta por los intervinientes, será definida de plano, en un término perentorio y a través de decisión que no es susceptible de recurso alguno. Fijada la competencia por el funcionario a quien le corresponde decidir el incidente, sólo podrá discutirse por prueba sobreviviente y siempre que no se produzca la prórroga de la misma.

II. Principio de oportunidad

De acuerdo con el Acto Legislativo 03 de 2002 la Fiscalía General de la Nación, adelanta el ejercicio de la acción penal a través de la investigación de los hechos presuntamente constitutivos de delito, que conozca por denuncia, petición especial, querrela o de oficio, está obligada a realizar la investigación de los hechos que revistan las características de un delito, razón por la cual no podrá suspender, interrumpir, ni renunciar a la persecución penal, “*salvo en los casos que establezca la ley para la aplicación del principio de oportunidad regulado dentro del marco de la política criminal del Estado, el cual estará sometido al control de legalidad por parte del juez que ejerza las funciones de control de garantías...*”¹.

Es decir, la regla en materia de investigación y acusación la determina el *principio de legalidad* y la excepción será el *principio procesal de la oportunidad*. El *principio de legalidad o de obligatoriedad* consiste en que la Fiscalía, ante conductas que se perfilan como delictivas (sospechas verosímiles), tiene la obligación de realizar las indagaciones e investigaciones pertinentes y, culminadas éstas, debe acusar a los presuntos responsables ante los jueces de la República, si a ello hubiere lugar. La antítesis es el *principio de oportunidad o de discrecionalidad*, según el cual se facultaría a la Fiscalía, en casos expresamente determinados en el Código de Procedimiento Penal que se proyecta, para optar entre investigar o dejar de hacerlo, acusar o precluir, de acuerdo con conveniencias político-criminales, así la prueba conduzca a la existencia de la conducta punible y a la responsabilidad del imputado, pero con el requisito adicional de que esa decisión sólo se consuma con el aval del juez que ejerce la función de control de garantías.

La pregunta clave sería: ¿qué debe hacerse ante una *notitia criminis*, esto es, en presencia de indicios racionales sobre la comisión de un delito? La respuesta de los ordenamientos jurídicos fluctúa entre los extremos de la legalidad y la oportunidad.

En el extremo de la legalidad están aquellos ordenamientos que imponen, sin condiciones o excepciones, el deber de ejercer la acción penal, siempre que haya un indicio racional de delito. Como ejemplo, en Italia la obligatoriedad del ejercicio de la acción penal está prevista en la Constitución, porque el artículo 112, sin matices, expresamente dispone que “*el ministerio fiscal está obligado a ejercer la acción penal*”.

Una solución intermedia entregan aquellos ordenamientos jurídicos que, si bien proclaman como regla general la legalidad (u obligatoriedad) del ejercicio de la acción penal, admiten ciertas modulaciones, como en el caso de Alemania. En efecto, el parágrafo 152 de la Ordenanza Procesal Alemana (StPo) define la *autoridad acusadora y el principio*

de legalidad, y señala que “Para el ejercicio de la acción pública se designa a la Fiscalía”; en el inciso 2° dice que “Está obligada, en tanto no haya sido determinada otra cosa legalmente, a proceder judicialmente debido a todos los delitos perseguibles, en tanto que tengan cabida suficientes puntos de apoyo reales”. Los parágrafos 153 y 153A consagran el principio de oportunidad como excepción, unas veces con la anuencia del tribunal competente para la apertura del plenario, otras del acusado o de ambos, para casos en que la culpabilidad del autor es mínima o cuando no exista un verdadero interés público en la persecución.

A partir de la consagración constitucional y legal del *principio de oportunidad*, no se trata de abrir posibilidades incontroladas para que el fiscal deje de investigar o de acusar a su talante, de pronto movido por intereses egoístas o ajenos a la política criminal del Estado, sino de entender que cada conducta delictiva y cada imputado pueden presentar rasgos propios, cuya complejidad psíquica y social exige una valoración, que no puede hacerse mediante una mera interpretación y aplicación de las correspondientes normas jurídicas. Por ello, una respuesta proporcionada a las características de cada caso requeriría un cierto margen de discrecionalidad que obra a favor de la comunidad y de los ciudadanos y no propiamente de quien ostenta el poder punitivo.

Desde luego que la legalidad no sólo es un paradigma del Estado de Derecho sino también un ideal, en cuanto garantiza la igualdad y la seguridad jurídicas, pero, a veces, el celo y el exceso legalista de los jueces, paradójicamente puede generar injusticias en la aplicación del Derecho y hasta amenaza con asfixiar la democracia.

A favor de una legalidad estricta en el ejercicio de la acción penal y, de contera, en contra de la oportunidad se esgrimen los argumentos de la *objetividad de la justicia y autonomía funcional del Derecho*, según los cuales modular la aplicación de la ley debilitaría su propio valor y además que, con motivos económicos, no puede instrumentalizarse una herramienta como el Derecho que cumple una función social específica; sin embargo, resulta necesario llamar la atención frente a argumentos lógicamente sólidos, pero que ignoran, quienes así razonan, que la lucha eficiente contra la criminalidad exige la combinación de recursos diferentes (legislación penal, medios policiales y judiciales, política de prevención, etc.). Así por ejemplo, RALF DAHRENDORF, aunque amigo de la autonomía funcional del derecho, alerta del peligro opuesto: “la aplicación rigurosa de la legalidad no puede resolver, por sí sola, todos los problemas sociales, incluido el de la criminalidad. No dejar espacio alguno a medidas de política económica y social y, por lo tanto, a un uso templado de la discrecionalidad equivale a desconocer las necesidades de los más débiles. El puro legalismo puede verse transformado en ‘*darwinismo social*’”² (aplicación formalmente igual para los desiguales).

De acuerdo con estadísticas de la Dirección Nacional de Fiscalías, en el año 2000 ingresaron a la Fiscalía por asignación 589.403 investigaciones previas, salieron 605.563 y quedó un *acumulado de 308.575* para el mes de enero siguiente; para el año de 2001 ingresaron 747.427 (158.024 más que el año anterior, equivalentes al 26.81%), salieron 659.180 y, a pesar de que se superó el número de asuntos despachados en la antecedente anualidad, quedó un acumulado de 396.396 (87.821 más, equivalentes al 22.15%); para el año 2002 ingresaron 913.911, lo cual significa un aumento de 165.789 (22.18% más), salieron 822.550, es decir, se evacuaron 163.370 asuntos más que el año anterior, pero, a pesar del trabajo significativo, ya se computa un acumulado de 484.651 (88.255 más que el año anterior, que equivale al 22.26%).

Conforme con la misma fuente, las instrucciones tuvieron un comportamiento similar al de las investigaciones previas. Entonces, si fuera posible como solución el incremento de los medios personales y materiales de investigación, al mismo ritmo del crecimiento de la delincuencia, este país no soportaría semejante indexación.

¹ Artículo 2°, que modifica el artículo 250 de la Constitución Política.

² Díez-Picazo, Luis María, *El Poder de Acusar, Ministerio Fiscal y Constitucionalismo, Ariel Derecho, Barcelona, 2000.*

De modo que, frente a la complejidad del problema y el crecimiento desmesurado de la delincuencia, cobra renovado vigor el argumento económico, pues no basta la represión formalmente dispuesta para todos los hechos con trazas de delito, cuando en la realidad no alcanzan las potencialidades físicas ni los recursos para perseguir inclusive conductas de importancia reducida, lo cual significa que “de hecho” muchas investigaciones tengan que esperar un turno en los anaqueles y, a veces, el único que les llega es el de la prescripción de la acción penal, no por negligencia de los funcionarios sino porque a lo imposible nadie está obligado. Por ello, resulta más sensato y realista regular el fenómeno de crecimiento de demanda en materia de justicia penal, que de hecho obliga a que los fiscales establezcan prioridades bienintencionadas y a veces equivocadas, para implantar una fórmula equilibrada de principio de oportunidad, como la que se pretende regular en el nuevo Código de Procedimiento Penal, porque finalmente la discrecionalidad de la Fiscalía queda atemperada por una regulación legal de los casos y el control del juez que ejerce dicha función.

La Recomendación del Comité de Ministros del Consejo de Europa, hecha en un documento denominado “Simplificación de la Justicia Penal”, aprobado el 17 de septiembre de 1987, ante el aumento de la criminalidad y el consiguiente retraso de la justicia penal, entre otras medidas, aconseja definir prioridades en la conducción de la política criminal en relación tanto con la forma como con la sustancia.

Sin duda, escasean los medios personales y materiales para perseguir la criminalidad, pero tal deficiencia se ve agravada por la falta de realismo del legislador. Al legislador le resulta más fácil y, sobre todo, más barato tipificar determinadas conductas como delito y aumentar las penas, en cambio de adoptar medidas eficaces de política social. Pretender que la desviación social puede combatirse únicamente mediante nuevas leyes de creación de delitos y aumento de penas conduce a una sobrecriminalización.

Así pues, para informar una regulación equilibrada del principio de oportunidad se han tenido en cuenta elementos como la readequación social del hecho, la ínfima importancia, la culpabilidad disminuida, la retribución natural (pérdida de un hijo con el que se tiene relación de afecto actual en un siniestro provocado por culpa del imputado) o la revaluación del interés público en la persecución de la conducta; además de la posibilidad de prescindir de la persecución en un hecho de menor importancia, para aplicar los mayores esfuerzos a otros más graves; o la posibilidad de suspender la persecución de una conducta o parte de ella, para orientarse a otra más grave; y la posibilidad de suspender el proceso o la pena para someter a prueba al imputado o acusado.

III. Protección de la víctima y reparación integral de los perjuicios ocasionados con la comisión del delito

El ordenamiento penal -sustantivo y procesal- siempre se ha ocupado de la acción civil encaminada a obtener el restablecimiento del derecho y el resarcimiento de los daños derivados del delito, por ende, de naturaleza esencialmente indemnizatoria y de contenido civil y económico, señalando su finalidad, titulares y formas de ejercerla para lo cual se consagró la institución de la parte civil.

Sin embargo, esta concepción limitada de los derechos de las víctimas, común en los sistemas penales tradicionales en cuanto las relega a una posición marginal de cara al proceso penal, ha venido sufriendo una transformación sustancial al punto que en la actualidad el derecho de las víctimas de los delitos surge como uno de los desafíos de la comunidad jurídica, el cual exige cambios estructurales tales como la implementación de instrumentos que les otorgue espacios dentro y fuera del proceso a través de métodos alternativos para la solución de conflictos como la mediación.

Esta tendencia sin duda tiene acogida en el sistema acusatorio de procesamiento criminal, implantado con el Acto Legislativo 03 de 2002 y desarrollado en el proyecto de Código de Procedimiento Penal que hoy se presenta a consideración de la Cámara de Representantes, a través del tratamiento que aquí se da a las víctimas y perjudicados con miras a

cumplir los estándares internacionales requeridos en materia de eficiencia del sistema penal.

Es así como a la luz de la nueva regulación legal, las víctimas de un delito en garantía de los derechos que les asiste a la verdad, la justicia y la reparación, pueden intervenir en todas las fases de la actuación penal para demandar la adopción de medidas de atención indispensables en orden a garantizar su seguridad personal y familiar, como también las de protección necesarias frente a toda injerencia indebida a su privacidad o dignidad.

Así mismo, pueden acceder a la justicia en condiciones de igualdad para la determinación de sus derechos de carácter civil (restablecimiento del derecho y el resarcimiento de los perjuicios), a través de la solicitud de las medidas patrimoniales instauradas a su favor o del incidente de reparación integral; tienen derecho igualmente, a conocer la realidad de los hechos o a ser debidamente informadas sobre el desarrollo de averiguación, el juicio, la sentencia, la dosificación de la pena y cuanto sea de su interés a efecto de promover el incidente de reparación integral.

Como también están facultadas para intervenir en el programa de justicia restaurativa, entendida ésta como el proceso en el que la víctima y el imputado o acusado participan conjuntamente de forma activa, en la resolución de cuestiones derivadas del delito, en busca de un resultado restaurativo o acuerdo encaminado a atender las necesidades y responsabilidades de las partes y a lograr su reintegro a la comunidad, con o sin participación de un facilitador, mediante mecanismos tales como la conciliación preprocesal, la conciliación en el incidente de reparación integral y la mediación.

De manera que las víctimas y los perjudicados adquieren con el nuevo sistema penal el status de protagonistas activos, acorde con los principios de protección y promoción de los derechos humanos y de la lucha contra la impunidad.

IV. Comiso

En tratándose del comiso se plantea un cambio estructural. En primer término, al hincarse necesaria e indefectiblemente en la imputación penal, lo cual le imprime identidad propia frente a otras figuras jurídicas que conllevan la pérdida del derecho de dominio a favor del estado como acontece con la extinción de dominio, la expropiación o algunas modalidades de decomiso administrativo e incluso, la confiscación proscrita en nuestra legislación. También lo distancia de otros institutos, concretamente, de la afectación de bienes con fines puramente indemnizatorios, conforme se encuentra regulado de manera inapropiada en la normatividad vigente respecto de los delitos culposos.

En el ámbito de esta figura, el proyecto satisface los compromisos adquiridos por Colombia ante la comunidad internacional tanto en la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas, suscrita en Viena el 20 de diciembre de 1998, como en la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, firmada en Palermo, Italia, el 12 de diciembre de 2000. Así mismo, acoge las recomendaciones consignadas en el Convenio de la Unión Europea sobre blanqueo, detección, embargo y confiscación de los productos de un delito, suscrito en Estrasburgo, el 8 de noviembre de 1990.

En efecto, con respeto de los derechos de las víctimas, de los sujetos pasivos o de terceros de buena fe, el proyecto conserva el comiso tradicionalmente recaído sobre los bienes del penalmente responsable que provengan o sean producto directo o indirecto del delito, o sobre los utilizados o destinados a ser utilizados en los delitos dolosos como medio o instrumentos para la ejecución del mismo. Pero también lo extiende a otros supuestos, concreta y específicamente, a los bienes o recursos producto directo o indirecto del delito mezclados o encubiertos con otros de lícita procedencia; y finalmente, a los equivalentes al valor de los bienes producto directo o indirecto del delito, cuando de estos no sea posible su localización, identificación o afectación material o el comiso directo.

Este último, referido a los bienes equivalentes y que comportaría en últimas y esencia la afectación de aquellos de ilícita procedencia, de manera alguna deviene novedosa en la legislación interna como podría pensarse. Por el contrario, encontró consagración similar en la derogada ley 333 de 1996, que en el artículo 3° de la Ley 793 de 2002 de actual vigencia, al igual que en la ley 800 de 2003, aprobatoria de la Convención de la Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (artículo 12, numeral 1°, literal a), sin que esté por demás indicar, por otra parte, que la Corte Constitucional al revisar la ley aprobatoria de la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas, afirmó su conformidad con el ordenamiento superior en términos que conviene transcribir en lo pertinente, desde luego, con exigencias surgidas de la propia naturaleza y comprensión del instituto:

“La novedad que introduce la Convención frente a las formas tradicionales de decomiso reside entonces en que este instrumento internacional no obliga a establecer el ligamen directo entre los bienes decomisados y el producto de la actividad ilícita. Basta que se pruebe el beneficio ilícito por un monto determinado obtenido por la persona para que se le puedan decomisar bienes equivalentes. Es entonces una figura ampliada de decomiso que parece razonable, debido a la dificultad objetiva que existe para comprobar las relaciones entre las actividades delictuales de una persona y la propiedad de bienes determinados. Sin embargo, la Corte considera que esta posibilidad de extinguir el dominio de bienes cuyo valor equivalga al del producto de una actividad ilícita no constituye confiscación, por cuanto deriva de un motivo constitucional legítimo, se fundamenta en una equivalencia objetiva y se protegen los derechos de terceros de buena fe. En efecto, esta forma de decomiso armoniza con las posibilidades establecidas por el inciso segundo del artículo 34, a saber la extinción de dominio no sólo sobre bienes adquiridos mediante enriquecimiento ilícito sino también sobre aquellos que sean obtenidos “en perjuicio del Tesoro Público o con grave deterioro de la moral social”. De otro lado, el decomiso no se extiende a todos los bienes del condenado -como equivocadamente lo consideró el Congreso- sino que afecta sólo bienes con valor equivalente. Y, finalmente, la propia Convención protege los derechos de terceros de buena fe, por cuanto el ordinal 8° del artículo 5° señala que “lo dispuesto en el presente artículo no podrá interpretarse en perjuicio de los derechos de terceros de buena fe”. (sentencia C-176 de 1994, M.P. Dr. Alejandro Martínez Caballero).

Se consagra una definición amplia de bienes que si bien difiere de la clásica establecida en el código civil, pretende recoger todos aquellos susceptibles de comiso teniendo en cuenta los nuevos avances científicos, jurídicos o tecnológicos que pueden estar a disposición de las actividades u organizaciones criminales. Adicionalmente, la alusión a los “recursos” (dinero o divisas), a pesar de estar comprendidos en estricto sentido en el concepto de bienes, busca una precisión orientada a evitar los conflictos de orden administrativo de ocurrencia en la actualidad, como el derivado en relación con las divisas objeto material de los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, a su vez materia de sanciones impuestas por la DIAN como consecuencia de infracciones cambiarias.

El articulado comprende, así mismo, los aspectos adjetivos del comiso. De ahí la propuesta de establecer con carácter taxativo las medidas cautelares materiales de la incautación y la ocupación, así como la jurídica de la suspensión del poder dispositivo de los bienes, orientadas a garantizar la efectividad del comiso en la respectiva sentencia de condena. También se pretende evitar de este modo el decreto de otras carentes de substrato normativo, empero de frecuente práctica por algunos funcionarios judiciales (“congelamiento”, “bloqueo”, “inscripción de oficio”, entre otras), y distinguirlas con nitidez de las procedentes para garantizar el incidente de reparación integral.

Las medidas de afectaciones de bienes con fines de comiso, en armonía con las previsiones del Acto Legislativo 03 de 2002, estarán sujetas en todo caso al control previo o posterior del juez que ejerce la

función de control de garantías, en cuanto comportan la restricción de un derecho.

Las regulaciones propuestas prevén a su vez lo relativo a la administración de los bienes afectados con fines de comiso; la destrucción del que constituye el objeto material, en tratándose de algunos delitos una vez satisfechas las previsiones alusivas a la cadena de custodia; la devolución de los bienes cuando carecen de interés para la indagación o investigación, así como el trámite subsiguiente de no comparecer el interesado a reclamarlos; y se mantienen las medidas de cancelación de la personería jurídica y de los registros obtenidos fraudulentamente, ajustando su decreto a la nueva estructura del proceso penal.

Con la expedición del Acto Legislativo 03, el constituyente borró las ataduras normativas que impedían el diseño, construcción e implementación del sistema acusatorio en materia criminal. Por este motivo, se presenta a la consideración de la Honorable Cámara de Representantes, en cumplimiento del mandato conferido por el constituyente, el proyecto de código de procedimiento penal que adecua el rito procesal a los noveles principios y derroteros normativos plasmados en la Carta Política.

V. Prueba anticipada

Teniendo en cuenta que desde la perspectiva del derecho comparado, incluyendo los sistemas acusatorios más puros, se reconoce la posibilidad de practicar de manera excepcional alguna prueba anticipada a la realización del juicio oral, se consagra el instituto de la prueba anticipada como una excepción al principio de inmediación.

Por consiguiente, podrá solicitarse ante el juez de conocimiento la práctica de una prueba anticipada al juicio oral, siempre y cuando sea indispensable hacerlo de manera inmediata para evitar su pérdida o la alteración misma del medio probatorio.

Para que la prueba anticipada pueda ser tenida en cuenta se requiere como requisito *sine qua non*, so pena de exclusión, que su práctica sea fácticamente imposible de repetir durante la vista pública y se lleve a cabo con intervención del juez, dando plena oportunidad de ser controvertida.

VI. Actuación procesal

Se regula pormenorizadamente la forma como ha de surtir la actuación procesal, destacándose la oralidad como principio rector del procedimiento; por tanto, se ordena que toda esta se adelante oralmente, en audiencias públicas, aboliéndose la utilización de procedimientos escritos. En lo atinente a las constancias y registro de la actuación, el proyecto brinda la posibilidad de utilizar cualquier recurso técnico idóneo para guardar el archivo fidedigno de lo acontecido, registros cuya finalidad es servir como prueba para efectos de los recursos de apelación; así mismo, del juicio oral y público, el secretario levantará un acta en la que simplemente conste: la individualización del acusado, la tipificación dada por la fiscalía a los hechos materia de acusación, la autoridad que profirió la decisión y el sentido del fallo emitido.

Las decisiones judiciales se adoptan oralmente durante la misma audiencia, quedando notificadas las partes en estrados. Acorde con la práctica acusatoria que realza la posición del juez como supremo director del proceso, se otorgan a este amplias facultades para conducir la actuación tales como, la de limitar la intervención de los sujetos procesales de manera proporcional y razonada en relación con el objeto procesal materia de debate, dotándolo con amplias facultades disciplinarias para lo que sea del caso.

Con estas previsiones normativas se pretende erradicar y superar el carácter escriturario de los procedimientos, que tanto atraso y problemas han generado para la pronta administración de justicia.

VII. Función de control de garantías y régimen de la libertad

De cara al nuevo sistema no podría tolerarse que la fiscalía, a la cual se confiere el monopolio de la persecución penal y por ende, con amplios poderes para dirigir y coordinar la investigación criminal, pueda al mismo tiempo restringir, por iniciativa propia, derechos

fundamentales de los ciudadanos o adoptar decisiones en torno de la responsabilidad de los presuntos infractores de la ley penal, pues con ello se convertiría en árbitro de sus propios actos.

Por ello, en el proyecto se instituye un conjunto de actuaciones que la fiscalía debe someter a autorización judicial previa o a revisión posterior, con el fin de establecer límites y controles al ejercicio del monopolio de la persecución penal, mecanismos estos previstos de manera escalonada a lo largo de la actuación y encomendados a los jueces de control de garantías.

Función deferida a los jueces penales municipales, quienes apoyados en las reglas jurídicas hermenéuticas deberán establecer la proporcionalidad, razonabilidad, y necesidad de las medidas restrictivas de los derechos fundamentales solicitadas por la fiscalía, o evaluar la legalidad de las actuaciones objeto de control posterior.

El juez de control de garantías determinará, particularmente, la legalidad de las capturas en flagrancia, las realizadas por la fiscalía de manera excepcional en los casos previstos por la ley, sin previa orden judicial y, en especial, tendrá la facultad de decidir sobre la imposición de las medidas de aseguramiento que demande la fiscalía, cuando de los elementos materiales probatorios o de la información obtenida a través de las pesquisas, aparezcan fundados motivos para inferir que la persona es autora o partícipe de la conducta que se indaga.

De otra parte, armonizando la naturaleza de las medidas de aseguramiento con la filosofía que inspira el sistema acusatorio y acorde con la jurisprudencia constitucional sobre la materia, su imposición queda supeditada a unos fines que justifican la restricción del derecho fundamental de la libertad. En consecuencia, no bastará con evidencias de las cuales se pueda inferir la autoría o participación en la comisión de un delito, sino que se torna indispensable que la privación de la libertad devenga necesaria en razón del pronóstico positivo que se elabore, a partir de tres premisas básicas: que el imputado estando en libertad pueda obstruir el curso de las investigaciones; que pueda darse a la fuga; o que, por la naturaleza del hecho investigado, constituya un peligro para la sociedad o las víctimas del delito.

En punto a las atribuciones que se otorgan a los jueces de control de garantías para disponer medidas de aseguramiento, el proyecto estatuye la detención preventiva sólo como una de sus especies, dando cabida a otra gama importante de medidas que no obstante, implicar una limitación al derecho fundamental de la libertad, resultan menos drásticas que la reclusión en un establecimiento carcelario.

En tal sentido, se contempla la posibilidad de sustituir la detención preventiva por la domiciliaria, cuando la sola restricción en la residencia se revele suficiente para garantizar los fines de la medida de aseguramiento, así como también, por razones de salud o de avanzada edad. Se explora igualmente, la posibilidad de aplicar otros mecanismos de control que permitan al Estado garantizar la comparecencia del imputado al juicio, impedir que emprenda actividades tendientes a deformar la prueba o que realice otras ilícitas, sometiéndolo v.gr. a medios de control electrónico de comprobada eficacia en otros países, a la vigilancia especial de una persona o entidad, restringiendo su locomoción a un espacio geográfico determinado o impidiendo que concurra a ciertos lugares, con el fin de poder controlar de manera eficaz sus actividades.

Igualmente, cuando por los motivos previamente definidos en el anteproyecto se juzgue necesaria la detención preventiva, como en el caso de delitos de competencia de los jueces regionales, los que por su propia naturaleza y razones de política criminal se considera deben estar sujetos a un tratamiento más drástico, la restricción de la libertad será notoriamente breve.

Pues, la adopción del sistema oral conlleva hondas repercusiones en materia de restricción de la libertad, dada la agilización del proceso y la consecuente reducción de los términos. Piénsese que en la actualidad una persona sindicada de la comisión de un delito común, puede estar privada de la libertad en la etapa de la investigación hasta por ciento

veinte (120) días, restricción que puede prolongarse hasta ciento ochenta (180) días más, una vez encausada, en tanto, en el nuevo modelo acusatorio la fiscalía, sólo dispondrá de cuarenta (40) días, a partir de la fecha en que se impone la medida restrictiva de la libertad para acusar al imputado, y el juez de un término máximo de sesenta (60) días para convocarlo a juicio oral, acto donde decidirá sobre su compromiso penal.

Bajo el entendido de que las decisiones que afecten derechos fundamentales, deben ser adoptadas por un órgano diferente al que dirige la indagación criminal, se asigna igualmente al juez de control de garantías, la imposición de medidas cautelares reales sobre bienes del imputado, a solicitud de la fiscalía, en orden a garantizar la reparación del daño causado con el delito, decisión que deberá fundarse en los criterios de razonabilidad y proporcionalidad, así como también la adopción de medidas tendientes a la protección de las víctimas y la restitución en su favor del objeto material del delito.

En la misma serie de controles, se concibe la intervención posterior del juez para pronunciarse sobre la legalidad de registros, allanamientos e interceptación de comunicaciones ordenadas por la fiscalía, con la drástica consecuencia que en caso de no hallarse ajustadas estas actuaciones a los requisitos constitucionales y legales, las evidencias encontradas no podrán ser aducidas como prueba por el ente acusador.

Corresponde así mismo, a los jueces de control de garantías, presidir la audiencia de formulación de imputación, en la que la Fiscalía da a conocer al ciudadano su calidad de investigado y pone en su conocimiento los hechos jurídicamente relevantes a que se contraen las pesquisas, acto del cual debe ser garante dada su trascendencia en la estructura del procedimiento, en cuanto comporta la activación del derecho de defensa e interrumpe el término de prescripción de la acción penal.

VIII. Estructura del juicio

Acorde con las exigencias que devienen del postulado acusatorio, en proyecto se estipula que el juicio comienza con la presentación del escrito de acusación.

Sin adentrarse en el estudio detallado de los requisitos que debe cumplir el escrito de acusación, indíquese que esta entraña una imputación meramente fáctica, razón por la cual, se exige que en escrito breve el fiscal presente *“una relación clara y sucinta de los hechos jurídicamente relevantes, en lenguaje comprensible”*.

Conforme con el texto de la Carta Política, presentada la acusación, la fiscalía está en la obligación de *“suministrar, por conducto del juez de conocimiento, todos los elementos probatorios e información de que tenga noticia incluidos los que sean favorables al procesado”*. Como quiera que la indagación, de acuerdo con lo advertido anteriormente, no es una etapa procesal, las actuaciones de la fiscalía son de carácter reservado, más no secreto y la defensa no tiene acceso a las labores y resultados investigativos del ente acusador. Con la presentación del formato de acusación, para procurar la integración cabal del contradictorio, se activa el derecho de la defensa a conocer cuáles son los elementos materiales probatorios recolectados por la fiscalía, que sustentaron la acusación y que serán presentados como prueba de cargo, habilitándose así el acusado y su defensa para poder afrontar la acusación mediante el diseño la estrategia procesal que considere adecuada y necesaria para sortear la incriminación, permitiendo la confrontación y contradicción de los mismos, dentro del juicio oral y público en los términos exigidos en la Constitución.

Lo fundamental, desde el punto de vista procedimental, consiste en exigir que con la presentación de la acusación debe comenzar a verificarse el descubrimiento de la prueba. Por este motivo, se ordena que con el formato de acusación se acompañe un documento anexo que deberá contener:

- a) Los hechos que no requieren prueba;
- b) La transcripción de las pruebas anticipadas que se requieran aducir al juicio, siempre y cuando su práctica no pueda repetirse en el mismo;

c) El nombre, dirección y datos personales de los testigos o peritos cuya declaración se solicite en el juicio;

d) Los documentos, objetos u otros elementos que quieran aducirse, junto con los respectivos testigos de acreditación;

e) La indicación de los testigos o peritos de descargo indicando su nombre, dirección y datos personales;

f) Los demás elementos favorables al acusado en poder de la fiscalía.

Resáltese que en Colombia, en los términos planteados por la Carta Constitucional, la fiscalía, como órgano del poder judicial, tiene un deber de objetividad, razón por la cual sus actividades de averiguación pueden orientarse exclusivamente a la consecución de los fundamentos materiales probatorios necesarios para sustentar la acusación, su norte tiene que ser la búsqueda de la verdad, entendiéndose como exigencia íntimamente relacionada con el principio de buena fe, que está en la obligación de presentar todos y cada uno de los resultados de sus pesquisas, incluidos los que eventualmente sean favorables para la suerte del procesado.

Radicada la acusación en el despacho del juez del conocimiento, este funcionario, dentro de los tres (3) días siguientes deberá convocar audiencia para la formulación de la acusación, en la cual el fiscal de manera oral y pública presentará el formato respectivo y solicitará las medidas de protección para la víctima, todo ello con apego al numeral 6 del artículo 250 de la Carta Superior. En este estadio procesal el juez y los intervinientes deberán plantear los impedimentos, recusaciones, observaciones sobre el formato escrito de acusación y solicitudes de nulidades. En lo referente al trámite de los impedimentos, recusaciones, nulidades e impugnación de la competencia, las diligencias serán remitidas de inmediato al superior jerárquico, quien de plano, dentro de los tres (3) días siguientes, deberá resolver lo pertinente, sin que su decisión admita recurso alguno.

El derecho al descubrimiento de la prueba en cabeza de la defensa, procesalmente se activa durante la audiencia en cuestión, en curso de la cual, *“podrá solicitar al juez de conocimiento que ordene a la Fiscalía, o a quien corresponda, el descubrimiento de un elemento material probatorio específico de que tenga conocimiento, y el juez ordenará, si es pertinente, descubrir, exhibir o entregar copia según se solicite, con un plazo de tres (3) días para su cumplimiento”*.

En el esquema acusatorio la actividad investigativa no se interrumpe por el hecho de ser presentada la acusación, pues de acuerdo con la dinámica procesal generada por el continuo descubrimiento de pruebas (de la fiscalía en la audiencia de formulación de acusación – de la defensa en la audiencia preparatoria), se prevé la posibilidad para que cualquiera de las partes si *“encuentra un elemento material probatorio muy significativo que debería ser descubierto, lo pondrá en conocimiento del juez quien, oídas las partes y considerado el perjuicio que podría producirse para el derecho de defensa y la integridad del juicio, decidirá si es excepcionalmente admisible o si debe excluirse esa prueba”*.

La consecuencia por la omisión del deber de descubrimiento es categórica: los elementos materiales probatorios que no sean descubiertos, aún con orden específica del juez, no podrán aducirse al proceso ni convertirse en prueba dentro del mismo.

Antes de terminar la audiencia de formulación de acusación el juez fijará fecha y hora, en un término no inferior a quince (15) días ni superior a treinta (30), para llevar a cabo audiencia preparatoria. En esta diligencia las partes presentaran sus observaciones relacionadas con el descubrimiento de la prueba, bajo el entendido que el juez rechazará como pruebas las que no hubiesen sido descubiertas; la defensa descubrirá sus elementos materiales probatorios; manifestarán su interés en presentar estipulaciones probatorias o acuerdos a que pueden llegar la fiscalía y la defensa sobre hechos y circunstancias que se aceptan como probadas y sobre las cuales se excluye toda posibilidad de controversia probatoria; y presentarán las solicitudes referidas a las pruebas que fiscalía y

defensa pretenden que sean practicadas, durante el juicio en sustento de su pretensión.

Concluida la intervención de las partes *“el juez decretará la práctica de las pruebas solicitadas cuando ellas se refieran a los hechos de la acusación que requieran prueba, de acuerdo con las reglas de pertinencia y admisibilidad”* previstas en el proyecto, reconociendo en todo caso que el juez, dada su imparcialidad y teniendo en cuenta el carácter adversarial de la controversia, no puede decretar oficiosamente la práctica de ninguna prueba; señalará el orden en que deban presentarse las pruebas en desarrollo del juicio, en todo caso disponiendo que primero se presenten las pruebas de cargo de la fiscalía y luego las de la defensa; restringirá, de oficio o a petición de la fiscalía, si fuere del caso, la publicidad de los procedimientos por motivos de orden público, moral pública, seguridad nacional, de las víctimas, de los menores de edad o por interés de la justicia.

Cuando el juez rechace la admisión de alguna prueba solicitada por las partes, oralmente expresará su decisión, contra la cual procede el recurso de apelación.

El juicio oral deberá iniciarse dentro de los quince (15) días siguientes a la conclusión de la audiencia preparatoria. Instalado el mismo, el juez tomará el uso de la palabra, informará al acusado sobre su derecho a no inculparse, le preguntará si acepta los cargos presentados en la acusación o si se considera inocente. Si el enjuiciado fuere contumaz o no reconociere su responsabilidad, el juez le dará el uso de la palabra al fiscal, quien antes de proceder a la práctica de las pruebas, presentará la teoría del caso, igualmente lo podrá hacer la defensa si a bien lo tuviere.

Las pruebas se presentarán en el orden previsto en la audiencia preparatoria, se practicarán por las partes de acuerdo con las reglas establecidas bajo el control del juez, quien por regla general no está facultado para interrogar a los testigos, salvo que después del interrogatorio y contrainterrogatorio respectivo, sea necesario aclarar algún aspecto sustancial.

Agotada la práctica de las pruebas se presentan las alegaciones de los intervinientes. Tomará el uso de la palabra, en su orden, el fiscal, quien obligatoriamente deberá intervenir, el representante legal de las víctimas, el Ministerio Público y por último, la defensa, quienes presentarán sus conclusiones solo si lo consideran pertinente. Si la defensa estratégicamente decidiere presentar alegaciones conclusivas, sus argumentos podrán ser controvertidos por la fiscalía, otorgándole así mismo a la defensa la posibilidad de controvertir, siempre en el último turno de intervención los temas abordados por la fiscalía.

Finalizadas las intervenciones el juez dará por concluido el debate, podrá ordenar un receso hasta por una (1) hora y anunciará el sentido del fallo.

En cuanto concierne a la congruencia entre acusación y condena, el proyecto establece claramente los criterios de congruencia objetiva y subjetiva señalando que: *“el acusado no podrá ser declarado culpable por hechos no formulados en la acusación, ni por delitos por los cuales no se ha solicitado condena”*. Entiéndase que la oportunidad dentro de la cual el fiscal concreta su pretensión jurídica es durante la audiencia del juicio oral al exponer la teoría del caso o al momento de presentar sus alegaciones de conclusión.

El Fiscal General de la Nación,

Luis Camilo Osorio Isaza.

CAMARA DE REPRESENTANTES

SECRETARIA GENERAL

El día 20 de julio del año 2003 ha sido presentado en este despacho el Proyecto de ley estatutaria número 01 de 2003 Cámara, con su correspondiente exposición de motivos por el doctor *Luis Camilo Osorio*, Fiscal General de la Nación.

El Secretario General,

Agelino Lizcano Rivera.